

revista *cidob d'*
afers
internacionals

RESURGIMIENTO DE LA DERECHA EN AMÉRICA LATINA **126** NUEVAS COALICIONES Y AGENDAS

Barry Cannon y Patricia Rangel

Coordinadores científicos

Los grandes propietarios transnacionales
en América Latina

*Julián Cárdenas,
Francisco Robles-Rivera
y Diego Martínez-Vallejo*

Derechas neopatriotas y contestación
al orden liberal

*José Antonio Sanahuja
y Camilo López*

La derecha chilena en la encrucijada: la contrahegemonía
de los liderazgos subnacionales y solidarios

*Stéphanie Alenda,
Julieta Suárez-Cao
y Carmen Le Foulon*

La élite neoliberal del poder y del conocimiento (Guatemala)

*Karin Fischer
y Harold Waxenecker*

La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis

Democracia y poder de las élites: en Bolivia y en Perú

Nicolás Lynch

La democracia como estrategia política
de la derecha venezolana

John Crabtree

Ybiskay González

El ascenso neopentecostal y securitario en Brasil

*Kristina Hinz, Juliana Vinuto
y Aline Beatriz Coutinho*

Las mujeres de las derechas latinoamericanas
del siglo XXI

*Verónica Giordano
y Gina Paola Rodríguez*

Tribunales supremos, neogolpismo
y la nueva derecha en Brasil

*André Coelho
y Mayra Goulart*

La cultura pasa por aquí



arce

ASOCIACIÓN
DE **REVISTAS
CULTURALES**
DE ESPAÑA

C/ Orfila, 3 - 2º Izquierda. 28010 Madrid | Tel.: 91 308 60 66 | Fax: 91 310 55 07 | E-mail: info@arce.es | www.arce.es

www.revistasculturales.com | www.quioscocultural.com



App «ARCE» disponible para iPhone/iPad y dispositivos Android

RESURGIMIENTO
DE LA DERECHA
EN AMÉRICA LATINA **126**
NUEVAS COALICIONES Y AGENDAS

Nueva época
Diciembre 2020

Coordinadores científicos:
Barry Cannon y Patricia Rangel

Director/Editor-in-chief: Pol Morillas
Editora/Managing Editor: Elisabet Mañé
Editora de sección/Section Editor: Isabel Verdet

Consejo editorial/Editorial Board:

Anna Ayuso (CIDOB), Oriol Costa (UAB), Blanca Garcés (CIDOB), Robert Kissack (IBEI),
Marga León (UAB), Salvador Martí Puig (UdG), Àlex Ruiz (UOC), Jordi Vaquer (OSIFE).

Consejo asesor/Advisory Board: Sergio Aguayo, El Colegio de México, A.C.; Manuel Alcántara, Universidad de Salamanca; José Antonio Alonso, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Columbia; Esther Barbé Izuel, Universitat Autònoma de Barcelona; Adrián Bonilla, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Alison Brysk, University of California, Santa Barbara; Miguel Ángel Centeno, Princeton University; Noe Cornago, Universidad del País Vasco; Rafael Fernández de Castro, Center for U.S.-Mexican Studies, UC San Diego; Caterina García Segura, Universitat Pompeu Fabra; Jean Grugel, University of Sheffield; Fernando Guirao, Universitat Pompeu Fabra; Daniel Innerarity, Instituto de Gobernanza Democrática (Globerance); Jacint Jordana, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI); Gemma Martín Muñoz, Universidad Autónoma de Madrid; Diego Muro, University of St Andrews; Ludolfo Paramio, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC; José Antonio Sanahuja, Universidad Complutense de Madrid; Maria Regina Soares da Lima, Universidad Estatal de Rio de Janeiro; Max Spoor, International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam; Juan Gabriel Tokatlian, Universidad Di Tella, Buenos Aires; Fidel Tubino, Pontificia Universidad Católica del Perú; Pere Vilanova i Trias, Universitat de Barcelona.

CIDOB

Elisabets 12, 08001 Barcelona, Spain
T. (34) 93 302 64 95 / F. (34) 93 302 21 18
publicacions@cidob.org / www.cidob.org

Precio de este ejemplar: 11€

Suscripción anual: España: 31€ (Europa: 39€) (Resto países: 44€)

Impresión: BookPrint Digital, S.A.

ISBN: ISBN 978-84-92511-87-7 • **ISSN:** 1133-6595 • **E-ISSN:** 2013-035X

DOI: doi.org/10.24241/rcai

Dep. Legal: B. 17.645-1983

Distribuye: Edicions Bellaterra, S.L. Navas de Tolosa, 289 bis, 08026 Barcelona www.ed-bellaterra.com

Diseño y maquetación: Joan Antoni Balcells

Revisión por expertos: Héctor Sánchez Margalef

Web y soporte técnico: Silvia Serrano

Suscripciones y envíos: Héctor Pérez

Esta revista es miembro de:



Esta revista ha recibido una ayuda a la edición,
del Ministerio de Cultura y Deporte, para su difusión
en las bibliotecas públicas del Estado, para la totalidad
de los números del año



Patronos de CIDOB



Los artículos expresan las opiniones de los autores.

"Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra".



126
Nueva época
Diciembre 2020

ISSN: 1133-6595
ISBN: ISBN 978-84-92511-87-7
www.cidob.org

©CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)

Creada en 1982, *Revista CIDOB d'afers internacionals* es una publicación cultural/ académica cuatrimestral de relaciones internacionales y desarrollo. Pionera en el ámbito hispanohablante, ofrece al lector un análisis en profundidad de los temas internacionales desde diferentes puntos de vista y perspectivas, combinando información y análisis. La publicación está dirigida a la comunidad académica y al público interesado y/o implicado en general. Se edita en formato impreso y digital.

Los artículos publicados pasan por un proceso de evaluación externa por pares de anonimato doble y están indexados y resumidos en las siguientes bases de datos:

Academic Search Complete-EBSCO
CAHRUS Plus+ (Base de datos de revistas científicas de los ámbitos de las Ciencias Sociales y las Humanidades)
Dialnet (Portal de difusión de la producción científica hispana)
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DULCINEA (Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas)
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)
ESCI-Web of Science (Clarivate Analytics)
IPSA (International Political Science Abstracts)
ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades (CSIC)
Latindex (Sistema regional de información en línea sobre revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes)
PIO (Periodicals Index Online)
REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas)
Scopus
ULRICH'S (Global serials directory)

Indexada en:
Scopus®



Certificada por la FECYT:



SUMARIO

Resurgimiento de la derecha en América Latina: nuevas coaliciones y agendas

Barry Cannon y Patricia Rangel	7
Introducción: resurgimiento de la derecha en América Latina	
Julián Cárdenas, Francisco Robles-Rivera y Diego Martínez-Vallejo	17
Los dueños de América Latina: las redes entre los grandes propietarios transnacionales	
José Antonio Sanahuja y Camilo López Burian	41
Las derechas neopatriotas en América Latina: contestación al orden liberal internacional	
Stéphanie Alenda, Julieta Suárez-Cao y Carmen Le Foulon	65
La derecha chilena en la encrucijada: la contrahegemonía de los liderazgos subnacionales y solidarios	
Karin Fischer y Harald Waxenecker	89
Redes de poder: consideraciones sobre la élite neoliberal de poder y conocimiento en Guatemala	
Nicolás Lynch	117
La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)	
John Crabtree	139
Democracia, poder de las élites y sociedad civil: una comparativa entre Bolivia y el Perú	
Ybiskay González	163
La democracia como estrategia política de la derecha venezolana	
Kristina Hinz, Juliana Vinuto y Aline Beatriz Coutinho	185
Por Dios y por las armas: el ascenso neopentecostal y securitario en Brasil (2003-2019)	
Verónica Giordano y Gina Paola Rodríguez	215
Las mujeres de las derechas latinoamericanas del siglo XXI	
Mayra Goulart y André Luiz Coelho	239
El papel de los tribunales supremos y la nueva derecha: el neogolpismo en Brasil	

Reseñas de libros (temas)

Elías Chavarría-Mora	261
La(s) derecha(s): ¿ayer, hoy y siempre?	
Nerea C. Palma, Gonzalo Parra Coray y Jesirell Turell	265
¿Una nueva ola de derecha radical?	
Belén Díaz	268
La derecha latinoamericana contraataca: más allá de los partidos políticos	
Salvador Martí i Puig	272
América Latina: votos y democracia	
Alfredo Crespo Alcázar	275
Acotando el fascismo como fenómeno histórico	

Listado de revisores 2020	279
---------------------------------	-----

La cultura pasa por aquí



arce

ASOCIACIÓN
DE **REVISTAS**
CULTURALES
DE ESPAÑA

C/ Orfila, 3 - 2º Izquierda. 28010 Madrid | Tel.: 91 308 60 66 | Fax: 91 310 55 07 | E-mail: info@arce.es | www.arce.es

www.revistasculturales.com | www.quioscocultural.com



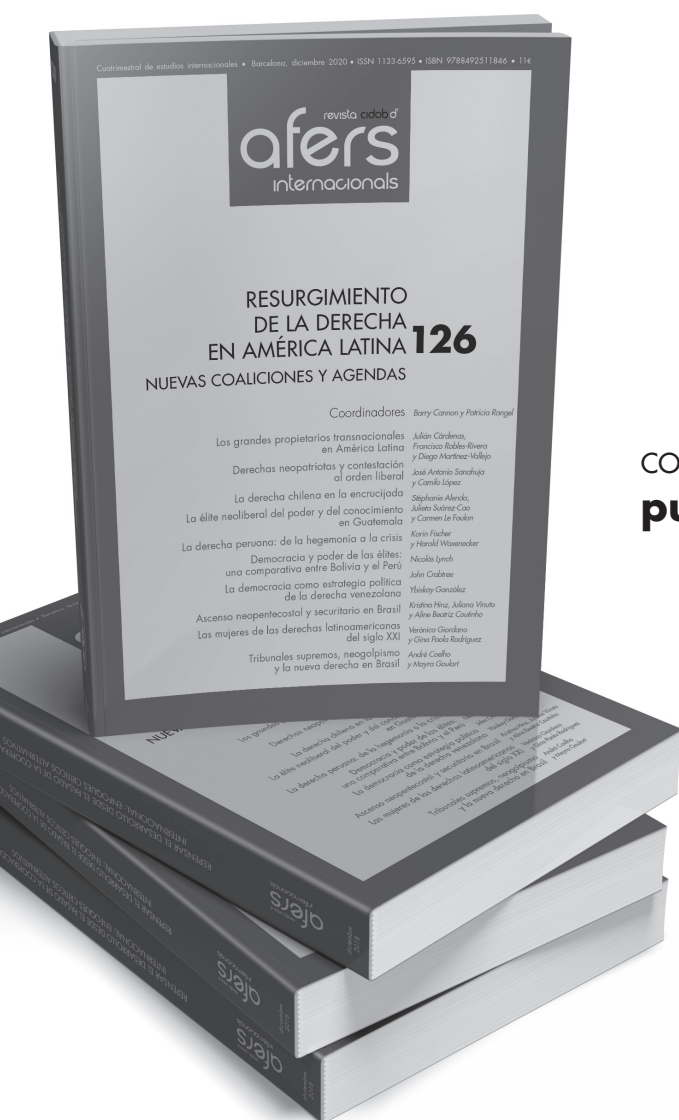
App «ARCE» disponible para iPhone/iPad y dispositivos Android

CONTENTS

The resurgence of the right in Latin America: new coalitions and agendas

Barry Cannon y Patricia Rangel	7
Introduction: the resurgence of the right in Latin America	
Julián Cárdenas, Francisco Robles-Rivera and Diego Martínez-Vallejo	17
The owners of Latin America: the networks linking major transnational business owners	
José Antonio Sanahuja and Camilo López Burian	41
Neo-patriotic far-right forces in Latin America: contesting the international liberal order	
Stéphanie Alenda, Julieta Suárez-Cao and Carmen Le Foulon	65
The Chilean right at the crossroads: counter-hegemony of subnational and solidary leaderships	
Karin Fischer y Harald Waxenecker	89
Networks of power: insights into Guatemala's neoliberal power and knowledge elite	
Nicolás Lynch	117
The Peruvian right: from hegemony to crisis (1990-2020)	
John Crabtree	139
Democracy, elite power and civil society: Bolivia and Peru compared	
Ybiskay González	163
Democracy as political strategy of the Venezuelan right	
Kristina Hinz, Juliana Vinuto and Aline Beatriz Coutinho	185
In the name of God and rifles: the Neo-Pentecostal and securitarian rise in Brazil (2003-2019)	
Verónica Giordano y Gina Paola Rodríguez	215
Latin American women of the right in the 21st century	
Mayra Goulart and André Luiz Coelho	239
The role of supreme courts and the new right: neo-coups in Brazil	
Book reviews (subjects)	
Elías Chavarría-Mora	261
The right(s): yesterday, today and forever?	
Nerea C. Palma, Gonzalo Parra Coray and Jesirell Turell	265
A new radical right wave?	
Belén Díaz	268
The Latin American right strikes back: beyond political parties	
Salvador Martí i Puig	272
Latin America: votes and democracy	
Alfredo Crespo Alcázar	275
Delimiting fascism as a historical phenomenon	
List of reviewers 2020	279

revista cidob d' afers internacionals



Hazte Suscriptor

RECIBIRÁS 3 NÚMEROS AL AÑO
EN LA DIRECCIÓN QUE NOS
INDIQUES

TARIFAS: 31 € ESPAÑA
39 € EUROPA
44 € OTROS PAÍSES

CONTACTA CON:
publicaciones@cidob.org

PRÓXIMOS NÚMEROS

- 127: Mujeres y poder: de la representación descriptiva a la sustantiva
- 128: Prevenir el extremismo violento en Europa: aproximaciones, métodos y estrategias
- 129 El asilo confinado: el acceso a la protección internacional y la acogida en tiempos de COVID-19

Introducción: resurgimiento de la derecha en América Latina

Introduction: the resurgence of the right in Latin America

Barry Cannon

Profesor asistente de Ciencia Política, Universidad de Maynooth, Irlanda.
Barry.Cannon@mu.ie. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5205-6634>

Patrícia Rangel

Doctora en Ciencia Política, Universidad de Brasilia, y posdoctora en Sociología, Universidad de São Paulo, Brasil. pdrangel@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3093-8011>

Cómo citar este artículo: Cannon, Barry y Rangel, Patrícia. «Introducción: resurgimiento de la derecha en América Latina». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 7-15. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.7

Con la investidura de Mauricio Macri como presidente de Argentina en 2015, se inició un ciclo electoral en América Latina que parecía poner fin a la llamada «marea rosa» de gobiernos progresistas de izquierdas que habían dominado la región desde principios del nuevo milenio. Hasta entonces, la izquierda había centrado mayoritariamente la atención académica, por lo que apenas existían trabajos sobre la derecha (algunas excepciones son Palau, 2010; Domínguez *et al.*, 2011; Vonmaro y Moressi, 2015). Ha sido a partir de este giro electoral que han ido apareciendo trabajos con la derecha como objeto de estudio (véanse, por ejemplo, López Sagrera, 2016; Colombia Internacional, 2019 Luna y Rovira Kaltwasser, 2014; y, reseñados en este volumen, Cannon, 2016; Bohoslavsky *et al.*, 2019). Sin embargo, la mayor parte de esta literatura adopta o bien una perspectiva principalmente política, centrándose sobre todo en las instituciones y los partidos políticos (a saber, Luna y Rovira Kaltwasser, 2014; Vonmaro y Moressi, 2015; Colombia Internacional, 2019), o bien sigue un enfoque más sociológico o histórico, enfatizando el papel de las autoridades de facto —la Iglesia, los medios de comunicación, las empresas (agrícolas e industriales) y el Ejército—, así como las influencias transnacionales, especialmente de los Estados Unidos (Domínguez *et al.*, 2011; Cannon, 2016; Bohoslavsky *et al.*, 2019).

Este número de *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* sobre la derecha en América Latina busca una perspectiva más integral, es decir, adopta un enfoque sociológico/histórico y transnacional, sin dejar de lado el político. Siguiendo a Cannon (2016), se enmarca en la teoría del sociólogo Michael Mann (1986) sobre el poder. Este autor identifica cuatro fuentes o redes de poder que han apuntalado sistemáticamente la mayoría de los gobiernos organizados desde que se tiene constancia histórica, esto es: el poder ideológico, el poder económico, el poder militar y el poder político, todos ellos entrelazados con factores transnacionales. Este enfoque pretende aportar una imagen más amplia de una ecología cultural, intelectual e ideológica que asegura la persistencia y la reproducción de las ideas de derechas en la vida social –incluida la política– en la región. En este sentido, consideramos que «la derecha» no solo es un conjunto de parti-

«La derecha» no solo es un conjunto de partidos políticos, sino que integra unas clases sociales e instituciones relacionadas que brindan apoyo electoral, logístico, estratégico, financiero e intelectual a las ideas de derechas.

dos políticos, sino que integra unas clases sociales e instituciones relacionadas que brindan apoyo electoral, logístico, estratégico, financiero e intelectual a las ideas de derechas. Así pues, nuestro enfoque sigue más bien una visión metapolítica gramsciana de la derecha, que incluye no

solo la táctica de la política electoral de la «guerra de maniobras», sino también las estrategias de la «guerra de posiciones» en el terreno cultural. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, la «guerra de posiciones» de la derecha tiene su paralelismo en las observaciones de Karl Ekeman (2018) sobre la nueva derecha francesa pos-1968, es decir, se trata de «una lucha cultural encaminada a cambiar percepciones, afectos y visiones del mundo, para naturalizar una política de derechas».

Cuando preparábamos este número, pedimos a los autores que consideraran la derecha latinoamericana desde algunas de estas perspectivas –o desde todas ellas a la vez– o que se centraran en algún aspecto particular. Pensamos que una estructura estricta de estudios de caso por países no era viable puesto que, por un lado, no podrían abarcarse todos los países y, por otro, el foco de atención buscado era lo que hemos denominado estrategias de «guerra de posiciones». A grandes rasgos, pedimos a los autores que consideraran la siguiente pregunta clave de investigación: ¿Qué es nuevo y qué no en la actual generación de actores de la derecha en la región? Se trata, sin duda alguna, de un objetivo ambicioso, y el resultado ha sido una recopilación de artículos heterogéneos que pueden dividirse, en líneas generales, en tres bloques: panorámicas regionales, estudios sobre algún país en contexto y análisis temáticos. Creemos que, en conjunto, son contribuciones que aportan una perspectiva amplia sobre una derecha regional en transición, en la que muchos de los antiguos centros de poder siguen

siendo importantes (el Ejército, por ejemplo, o la religión), pero que asumen identidades y papeles transformados, y en la que también han emergido nuevos actores y medios de comunicación que van redefiniendo la derecha latinoamericana del siglo XXI.

De esta forma, los artículos presentan, en primer lugar, dos panorámicas regionales. La aportación de Cardenas *et al.* sobre las redes entre los propietarios transnacionales de las grandes empresas latinoamericanas demuestra el poder del capital transnacional para establecer los límites de lo políticamente posible en la región; así como que la transnacionalización de las economías latinoamericanas no está provocada por élites empresariales regionales, sino por inversores extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Europa y de los sectores financiero y bancario. Esta inversión –detectada en y entre algunas de las empresas más grandes de las economías más potentes de la región– influye en el éxito económico de estas empresas y, por ende, en el contexto en el que se llevan cabo los negocios en cada uno de estos países. Ello refuerza la dependencia de las élites locales hacia actores externos, así como la centralidad de estas élites para garantizar que las condiciones empresariales siguen siendo las óptimas para sus propios intereses. Como consecuencia, se observa la creación de una codependencia entre ambos actores que va en contra del cambio favorable a los intereses de las mayorías nacionales, reforzando el statu quo neoliberal.

Por su parte, el artículo Sanahuja y Lopéz Burian aborda la nueva hornada de líderes radicales de derechas de la región –cuyo máximo exponente es Jair Bolsonaro en Brasil– y rehúye del concepto de populismo, prefiriendo el término «nueva derecha neopatriótica». Estos líderes se diferencian de la derecha liberal conservadora tradicional, así como de la izquierda plural, por su cuestionamiento u oposición a la democracia liberal y al orden internacional liberal vigente, es decir, el regionalismo y el multilateralismo. Según los autores, estos líderes de ultraderecha neopatriota han aparecido a consecuencia de una coyuntura de bajo crecimiento económico (fin del ciclo de las materias primas) –y la consecuente frustración de sectores sociales hasta entonces emergentes–, de unos medios de comunicación cada vez más polarizados, de la explosión del uso de nuevas redes sociales y del poder cada vez mayor de las iglesias evangélicas. Dichos líderes, si bien rechazan los discursos de las élites que consideran dominantes sobre diversidad, pluralismo, cosmopolitismo, globalización y multilateralismo, acogen con entusiasmo el modelo económico neoliberal liberalizador y privatizador, aunque prefieren un enfoque bilateral en vez de multilateral para su difu-

Pedimos a los autores que consideraran la siguiente pregunta clave de investigación: ¿Qué es nuevo y qué no en la actual generación de actores de la derecha en América Latina?

sión. Por consiguiente, se está dibujando un nuevo mapa geopolítico regional, que rechaza los modelos multilaterales en favor de un nuevo «internacionalismo reaccionario» basado en los principios transaccionales del poder y la identidad, con Estados Unidos como actor central en este diseño geopolítico emergente.

En segundo lugar, este monográfico ofrece algunos estudios de caso por países que, en sus análisis, tienen en cuenta el marco general propuesto. Abren el bloque Alenda *et al.*, quienes abordan la pregunta de investigación clave antes mencionada para el caso de Chile, contraponiendo la *vieja* derecha del país y la *nueva* emergente. Los autores observan que, mientras que la nueva derecha chilena busca distanciarse de las antiguas expresiones de la derecha (la mayoría, en referencia a la dictadura militar), para posicionarse como un movimiento político competitivo y legítimo desde el punto de vista democrático, la *vieja* derecha chilena sigue activa en el corazón de esta nueva derecha, con un núcleo doctrinal arraigado en una visión del mundo tradicionalista y/o religiosa, pero que es compatible con la doctrina neoliberal.

De modo similar, la aportación de Fischer y Waxenecker pretende mostrar que la dicotomía entre *lo nuevo* y *lo viejo* es insuficiente para capturar las continuidades y las rupturas entre las nuevas y las viejas formaciones políticas de derechas en Guatemala. Más allá del discurso, esta renovación se refleja en la fundación de nuevos partidos y, quizá más importante, nuevos *think tanks* que buscan revitalizar las ideas de la derecha, especialmente respecto al neoliberalismo y el libertarismo. En su estudio de caso, exploran cómo los vínculos entre diferentes campos (intelectual, empresarial, religioso e, incluso, militar) pueden imbricarse en una forma de pensamiento general ideológico dominante y sólido sobre el neoliberalismo, lo que dificulta que prosperen incluso las agendas progresistas más moderadas. Este hallazgo tiene implicaciones generales para la teoría sobre la derecha, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, puesto que va hasta el quid de los debates sobre la centralidad de la ideología y el papel de la *sociedad civil* (en este caso, *think tanks*, instituciones educativas privadas y grupos religiosos evangélicos) en proyectos hegemónicos de la derecha.

A continuación, tanto Lynch como Crabtree examinan, en sus respectivos artículos, el caso de Perú. Pero mientras que Lynch lo analiza como un único caso de estudio, Crabtree realiza una comparativa con Bolivia. Con todo, ambos autores comparten un marco teórico basado en la «captura del Estado», por el que las fuerzas sociales asociadas con la derecha pretenden controlar y guiar la acción del Estado con principios políticos neoliberales para así excluir a las fuerzas populares, de un modo similar al caso analizado por Fischer y Waxenecker en referencia a Guatemala. En este sentido, Lynch aporta tres motivos para explicar por qué la derecha peruana ha tenido tanto éxito en esta iniciativa y Crabtree añade el argumento de por qué no han corrido la misma suerte las

élites bolivianas. Para Lynch, los tres motivos del éxito de la derecha peruana son los siguientes: a) la oligarquía de ascendencia europea de Perú siempre ha dominado la vida política, económica, social y cultural del país, y ha usado este poder para asegurar que, al menos en el contexto contemporáneo, el neoliberalismo siga siendo el pensamiento único del país; b) la lealtad de la élite peruana a los principios neoliberales ha asegurado el apoyo internacional de naciones poderosas, como Estados Unidos, de las instituciones financieras internacionales y de empresas internacionales, a pesar de la naturaleza claramente criminal de cada uno de los sucesivos gobiernos; y c) la larga guerra con Sendero Luminoso y el consiguiente ataque violento de Alberto Fujimori contra las instituciones democráticas del país desarticularon los movimientos sociales y la izquierda, de lo que estos nunca se han recuperado por completo. El resultado de todo ello es lo que este autor denomina «democracia sin democratización»: descrédito total de los partidos políticos y las instituciones democráticas; desarticulación y debilitamiento de la oposición; división de la derecha política, y situación de grave peligro para la economía, situación que ha empeorado por la aparición del COVID-19 en el año 2020. Precisamente, en su análisis, Crabtree subraya la importancia de unos movimientos sociales fuertes para contrarrestar el poder del capital y sus élites asociadas. Así, coincide con Lynch en que las élites han tenido más éxito en la captura del Estado en Perú, pero lo atribuye en gran parte a la debilidad de los movimientos sociales en ese país; contrariamente al caso de Bolivia, donde las élites no han conseguido ese mismo hito por la fortaleza de sus movimientos sociales. Ello recientemente se ha visto reforzado por la aplastante victoria electoral del MAS en las elecciones bolivianas de octubre de 2020, que ha acabado con el régimen golpista de derechas apoyado por Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) instaurado en noviembre de 2019, con la presidenta evangélica Jeanine Añez.

Ybiskay González, por su parte, examina el caso venezolano recalcando la importancia del discurso sobre la democracia como herramienta estratégica para forjar la unidad de la oposición venezolana y, a la vez, encubrir su orientación política ideológica de derechas. Siguiendo la teoría de Foucault sobre la gubernamentalidad, esta autora enfatiza que, con ello, se pretende crear identidades subjetivas entre los opositores que pueden parecer ideológicamente neutras, pero que de hecho ayudan a evitar que se revierta un orden social desigual. El trabajo de González sobre Venezuela tiene una relevancia universal para la derecha en la región de América Latina y fuera de sus fronteras, puesto que la derecha justifica cada vez más sus acciones apelando a la democracia y la defensa de la libertad, contra una amenaza percibida de índole «socialista» o incluso «comunista», ocultando así un proyecto fundamentalmente neoliberal, de libre mercado, socialmente conservador y, en última instancia, autoritario, estrategia que también

señalan Sanahuja y López Burian en su contribución. De nuevo, la referencia al régimen del reciente golpe de Estado de derechas en Bolivia confirma la veracidad de esta afirmación.

Finalmente, los tres últimos artículos examinan las identidades y los actores concretos de la derecha latinoamericana. Hinz *et al.*, usando el caso de Brasil, analizan la penetración de los actores políticos relacionados con los sectores de la seguridad –sobre todo el Ejército y Policía Civil y Federal– y del cristianismo neopentecostal en los poderes Legislativo y Ejecutivo de dicho país durante el período comprendido entre 2010 hasta la investidura de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en 2019. Analizando las actas de gobierno, los proyectos de ley y la cobertura mediática, trazan los perfiles de los principales grupos religiosos y del ámbito securitario de la actual Legislatura,

concluyendo que la Presidencia de Bolsonaro es la culminación de un poder cada vez mayor de dichos sectores en las instituciones democráticas del país, y no a la inversa.

El trabajo de Giordano y Rodríguez se centra en un aspecto poco estudiado de la derecha: concretamente, en el liderazgo político de las mujeres en movimientos y partidos de derechas. A partir de una revisión de fuentes periodísticas y discursos

Los artículos señalan la complejidad de la derecha en la región, la cual no solo está formada por partidos políticos, sino también por tupidas redes de movimientos e instituciones –fundamentalmente privadas pero también públicas– que ayudan a crear un clima ideológico más propicio para la propagación de ideas de derechas, al penetrar profundamente en las estructuras y las instituciones democráticas.

de mujeres de derechas, el artículo explora la trayectoria de mujeres que ostentan los puestos más altos del poder Ejecutivo o que aspiran a ellos –Mireya Moscoso (Panamá), Laura Chinchilla (Costa Rica), Gabriela Michetti (Argentina), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fornet (Chile)–, examinando las perspectivas de género que se despliegan en sus discursos y agendas políticas. Su conclusión es que las posturas políticas de estas mujeres en los ámbitos económico y de género apenas difieren de las que defienden sus partidos, a pesar de que algunas adoptan una postura discursiva supuestamente feminista en sus declaraciones públicas. Además, si bien no es infrecuente que presenten una ideología económica favorable a los mercados, casi todas están a favor de la religión, apoyan el modelo de familia patriarcal y rechazan el derecho al aborto (con alguna excepción en los casos más extremos, como las violaciones), el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Estas posturas, señalan las autoras, chocan frontalmente con las que aceptan la mayoría de los movimientos feministas en los ámbitos objeto de análisis.

El monográfico se cierra con el artículo de Coelho y Goulart, quienes examinan el papel de los tribunales supremos en la remoción de presidentes y gobiernos progresistas en ejercicio en América Latina y, para ello, también se centran en el caso de Brasil durante el proceso de destitución de Luís Inácio «Lula» da Silva y Dilma Rousseff. Su hipótesis es que el Poder Judicial actúa como un ente legitimizador para los procesos de impugnación y destitución dirigidos por el poder legislativo en contextos de parálisis institucional (en casos de conflicto con el Ejecutivo). Sin embargo, en lugar de culpar únicamente a la judicatura por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, los autores sostienen que ello estuvo motivado por un consorcio de actores estatales y no estatales, tanto de la *vieja* derecha como de la *nueva*, junto con la erosión de la base parlamentaria del Gobierno. Mientras que grupos pertenecientes a las élites brasileñas tradicionales perseguían diferentes estrategias, legales o no, para recuperar el control del país, los miembros de la *nueva* derecha parece que tuvieron más éxito, al alcanzar la Presidencia de la República con Jair Bolsonaro y, a la vez, ganar la batalla del relato, incluyendo, además de su tan conocida ortodoxia neoliberal, temas de índole moral o religiosa. Dichos temas están adquiriendo cada vez más importancia no solo en Brasil, sino en todo el ámbito regional y mundial (véanse las reseñas de las obras de Mudde, 2019; Robin, 2020 y Sánchez Rodríguez, 2019 en este volumen).

¿Qué conclusiones podemos extraer de los artículos que se presentan aquí sobre la trayectoria de la derecha en América Latina? En primer lugar, la mayoría señalan la complejidad de la derecha en la región, la cual está formada no solo por partidos políticos, sino también por tupidas redes de movimientos e instituciones, fundamentalmente de índole privada pero también pública, que ayudan a crear un clima ideológico más propicio para la propagación de ideas de derechas, al penetrar profundamente en las estructuras y las instituciones democráticas. Esta complejidad es la seña de identidad de la «nueva derecha» de la región, en la que los elementos que un día fueron dominantes –la Iglesia católica, el Ejército y el capital local– ahora deben pelear por la influencia y el poder con actores emergentes como *think tanks*, iglesias evangélicas, nuevas redes sociales y multitud de movimientos que aquellos contribuyeron a crear. En segundo lugar, estas redes son especialmente importantes en regiones como América Latina, con una institucionalidad precaria, pero también con una derecha parlamentaria débil a la que le resulta difícil alcanzar el Poder Legislativo, debido al contexto abrumadoramente desigual en el que se enmarcan, como señalan Luna y Rovira Kaltwasser (2014). Esto les confiere un importante poder, especialmente en momentos cruciales –como en períodos electorales o en campañas de destitución–, que también puede llevar a la división y la acritud entre la derecha parlamentaria, debilitándola estratégicamente. En tercer lugar, como demuestran los casos de Perú y Guatemala, estas redes pueden aportar un cierto nivel de estabilidad social que las instituciones democráticas establecidas no son

capaces de proporcionar, con lo que pueden terminar reemplazándolas en cierta medida, especialmente si se benefician del poder económico transnacional. Sin embargo, como advierte Lynch, este arreglo puede no ser estable a medio y largo plazo, puesto que excluye el poder popular, la supuesta base moral de estas democracias. Por último, Coelho y Goulart, Giordano y Rodríguez, y González señalan que la derecha puede usar estratégicamente entidades, identidades y valores concretos –como el poder judicial, la igualdad de género y la democracia, respectivamente– y despojarlos de los valores que se dice que encarnan: imparcialidad, progresismo en materia de género y mayor poder popular, respectivamente. De esta manera, en general, los artículos señalan la capacidad de la derecha para transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos, mientras se mantiene fiel a sus valores históricos, lo cual Robin (2019) nos recuerda que es una visión del mundo

En general, los artículos señalan la capacidad de la derecha para transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos, mientras se mantiene fiel a sus valores históricos (una visión del mundo fundamentalmente jerárquica en términos sociales, atendiendo a distinciones de clase, género y etnia).

fundamentalmente jerárquica en términos sociales, atendiendo a distinciones de clase, género y etnia.

Los acontecimientos recientes apuntan a un futuro incierto para la derecha en la región. Las fuerzas de derechas fueron derrotadas en Argentina en 2019 y, como ya se ha mencionado, en Bolivia en 2020, lo

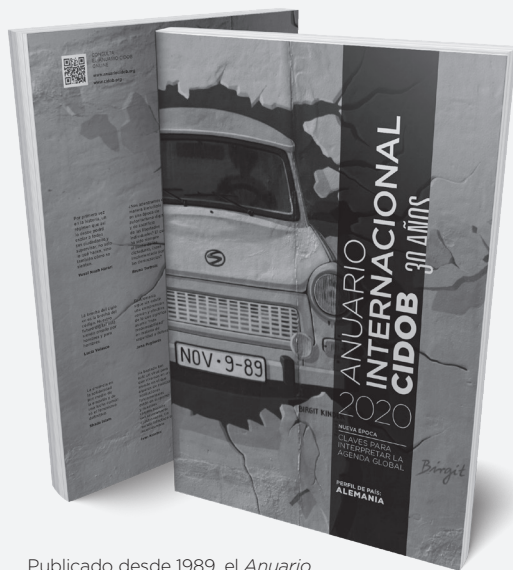
cual sugiere que les resulta complicado atraer a los votantes. La pandemia del COVID-19 pone a estos nuevos gobiernos de derecha y su electorado principal en aprietos, al encabezar, en octubre de 2020, ambas Américas –la del norte y la del sur– las listas mundiales de contagios y fallecimientos por el coronavirus. La desigualdad social y los impactos negativos de sus políticas de privatización y recortes en el sector público, sobre todo en sanidad, políticas laborales y bienestar, han adquirido mayor visibilidad durante esta crisis, que se ha cobrado la vida de muchos millares de personas. Este lamentable resultado ha puesto de manifiesto la cobertura desigual de los sistemas sanitarios de la región y ha devuelto, en el ámbito mundial, al Estado el papel de garante último del bienestar público. En consecuencia, la pandemia ha acentuado más las ya de por sí acusadas desigualdades inherentes a las propias políticas neoliberales apoyadas de manera más enérgica por la derecha. En el contexto de pandemia, los gobiernos de derechas se han visto forzados a traicionar sus principios e intervenir a gran escala para respaldar los servicios sanitarios y de bienestar social –una medida hasta ahora sin precedentes–, irónicamente instados por los propios actores transnacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que previamente les habían exigido recortes en dichos servicios para pagar los intereses de la deuda. Esta intervención fiscal tan acusada provocará incrementos igualmente acusados en la deuda pública y en el

déficit de los estados y los municipios. Está por ver el impacto futuro que tendrá esta coyuntura económica y fiscal sobre las ideas de la «nueva derecha» en estos ámbitos y el efecto que podría tener dicho replanteamiento sobre su éxito electoral.

Referencias bibliográficas

- Bohoslavsky, Ernesto; Jorge David y Lida, Clara E. (coord.). *Las Derechas Iberoamericanas: Desde el final de la Primera Guerra hasta la Gran Depresión*. Ciudad de México: Colegio de México, 2019.
- Cannon, Barry. *The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State* Londres: Routledge, 2016.
- Colombia Internacional. «La derecha en América Latina». *Colombia Internacional*, n.º 99 (julio de 2019). Bogotá: Universidad de los Andes.
- Domínguez, Francisco; Lievesley, Geraldine y Ludlam, Steve (ed.). *Right-wing Politics in the New Latin America: Reaction and Revolt*. Londres: Zed, 2011.
- Ekeman, Karl. «On Gramscianism of the Right». *Critique and Praxis*, 13/13 (noviembre de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.10.2020] <http://blogs.law.columbia.edu/praxis1313/karl-ekeman-on-gramscianism-of-the-right/>
- López Segrera, Francisco. *América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha*. Buenos Aires: Ciccus-CLACSO, 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 20.10.2020] <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdll/collect/clacso/index/assoc/D11890.dir/America-Latina-Crisis-del-neoliberalismo.pdf>
- Luna, Jean Paul y Rovira Kaltwasser, Cristobal (ed.). *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: John Hopkins University Press, 2014.
- Mann, Michael. *A History of Power from the Beginning to AD 1760*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Mudde, Cas. *The Far Right Today*. Cambridge: Polity, 2019.
- Palau, Marielle (comp.). *La ofensiva de las derechas en el Cono Sur*. Asunción: Fundación Rosa Luxemburgo, 2010 (en línea) [Fecha de consulta: 20.10.2020] http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/base-is/20170403044458/pdf_1249.pdf
- Robin, Corey. *La mente reaccionaria*. Madrid: Capitan Swing, 2019.
- Sánchez Rodríguez, Jesús. *Derecha radical. Auge de una ola reaccionaria mundial*. Madrid: Editorial Popular, 2019.
- Vommaro, Gabriel y Morresi, Sergio (comp.). *Hagamos equipo. PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2015.

Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.



ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB

30 Edición

2020

NUEVA ÉPOCA

CLAVES PARA
INTERPRETAR LA
AGENDA GLOBAL

PERFIL DE PAÍS:
ALEMANIA

Publicado desde 1989, el *Anuario Internacional CIDOB* es una obra de referencia que ofrece claves para interpretar la agenda global. A través de varios artículos realizados por prestigiosos académicos y *policymakers*, la publicación ofrece una visión multidisciplinar de la política, la economía y la sociedad internacionales.

Los artículos se presentan con numerosos elementos infográficos, mapas y gráficos que ayudan a contextualizar los textos, a la vez que incluye el análisis de los investigadores de CIDOB dedicados a sus respectivas regiones y áreas de investigación.

Más de 100 Artículos
117 Autores
15 Gráficos

AUTORES DE EDICIONES RECIENTES:

Anne-Marie Slaughter
John Ikenberry
Amitav Acharya
Kishore Mahbubani
Judy Dempsey
Joseph Nye
Richard Haas
Saskia Sassen
Shashi Tharoor
Jeremy Rifkin
Gilles Babinet
Bertrand Badie
Hans Kundnani
Lina Khan
Erik Solkheim
Hossein Moussavian
Mahmood Sariolghalam
Leonardo Padura
Umut Özkirimli

AUTORES DE LA EDICIÓN 2020:

Bruno Tertrais, Subdirector de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS)
Yuval Noah Harari, Catedrático de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén
Quinn Slobodian, Profesor Asociado de Historia, Wellesley College, Massachusetts
Ivan Krastev, Presidente del Centre for Liberal Strategies (Sofía), e investigador del Institute for Human Sciences, IWM Viena
Thomas Carothers, Vicepresidente de Estudios del Carnegie Endowment for International Peace
Jana Puglierin, Directora de la Oficina en Berlín del European Council on Foreign Relations (ECFR)
Barbara Lippert, Directora de investigación, German Institute for International and Security Affairs (SWP)
Franziska Brantner, Portavoz de Asuntos Europeos del Partido Verde en el Bundestag
Naika Foroutan, Directora del Berlin Institute for Integration and Migration Research (BIM), Humboldt University-Berlin
James K. Galbraith, Presidente de la cátedra Lloyd M. Bentsen de Gobierno y Relaciones Comerciales y profesor de Gobernabilidad, University of Texas
Pascal Lamy, Ex director general de la OMC y presidente honorario del Institut Jacques Delors
Andrey Kortunov, Director del Russian International Affairs Council
Javier Solana, Presidente del Center for Global Economy and Geopolitics de Esade (EsadeGeo) y Presidente de Honor del CIDOB
Ezio Mauro, Periodista, La Repubblica
Daniel Susskind, Profesor de Economía en el Balliol College de la University of Oxford
Georg Diez, Escritor y periodista
Mary E. Lovely, Profesora de Economía en la Syracuse University e investigadora sénior del Peterson Institute for International Economics
Sunita Narain, Directora general del Center for Sustainable Development (CSE) y editora del boletín Down to Earth
William Davies, Profesor de Economía Política en Goldsmiths, University of London
Dmitri Trenin, Director del Carnegie Moscow Center
Ellie Geranmayeh, Subdirectora del programa MENA (Middle East and North African Studies), European Council on Foreign Relations (ECFR)
Eckart Woertz, Director del Instituto de Estudios de Oriente Medio del German Institute for Global and Area Studies (GIGA)
Jay Naidoo, Exministro en el gabinete de Nelson Mandela. Secretario General fundador del Congreso de Sindicatos Sudafricanos
Kristian Coates, Investigador asociado para Oriente Medio del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Rice University
Stephan Lessenich, Profesor de Sociología, Ludwig Maximilian University, Múnich

Los dueños de América Latina: las redes entre los grandes propietarios transnacionales

The owners of Latin America: the networks linking major transnational business owners

Julián Cárdenas, Francisco Robles-Rivera y Diego Martínez-Vallejo*

Cómo citar este artículo: Cárdenas, Julián; Robles-Rivera, Francisco y Martínez-Vallejo, Diego. «Los dueños de América Latina: las redes entre los grandes propietarios transnacionales». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 17-40.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.17

Resumen: El análisis de quiénes son los propietarios de las grandes empresas y cómo se organizan ha sido una asignatura pendiente en los estudios sobre las élites en América Latina, principalmente a nivel transnacional. Esta limitación había impedido resolver debates en torno a la emergencia de élites empresariales transnacionales en la región. Este artículo identifica a los propietarios de las empresas más grandes de América Latina y analiza las redes que forman entre ellos. Los resultados muestran la formación de una red conectada entre un reducido número de propietarios transnacionales, los cuales son, en su mayoría, corporaciones financieras de Estados Unidos y Europa. Estos hallazgos permiten discutir sobre la integración regional y el dominio de modelos económicos importados de esos territorios.

Palabras clave: élites económicas, empresas, interlocking ownership, América Latina, análisis de redes, integración regional

Abstract: An analysis of who owns large companies and how they are organised is overdue in the study of Latin American elites, especially at transnational level. It is a limitation that has hampered debates on the emergence of transnational business elites in the region. This paper identifies the owners of the largest companies in Latin America and analyses the networks they form. The results reveal the formation of an interlocking ownership network between a small number of transnational owners, most of whom are financial corporations in the United States and Europe. These findings allow us to discuss regional integration and the dominance of economic models imported from those territories.

Key words: economic elites, companies, interlocking ownership, Latin America, network analysis, regional integration

* **Julián Cárdenas**, profesor, Departamento de Sociología y Antropología Social, Universitat de València (julian.cardenas@uv.es), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0584-5603>; **Francisco Robles-Rivera**, investigador, Instituto de Investigaciones Sociales, y profesor en la Escuela de Comunicación, Universidad de Costa Rica (francisco.robles@ucr.ac.cr), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0117-3515>; **Diego Martínez-Vallejo**, profesor asociado, Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda, Colombia (diego.martinez@usa.edu.co), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8598-6013>.

Las redes transnacionales entre grandes empresas, *think tanks* y políticos han servido para promover e implementar modelos económicos en varios países de América Latina. La adopción por parte de partidos políticos latinoamericanos de centroderecha de ideas similares de liberalismo de mercado y baja fiscalidad se debe especialmente a procesos orquestados transnacionalmente. Así, se ha podido evidenciar gran parte de la ruta de dichas ideas: el papel dominante de instituciones de Estados Unidos y Europa en la exportación de preceptos políticos a estados latinoamericanos (Stone *et al.*, 2020; Weyland, 2006); la existencia de redes transnacionales de *think tanks* en América Latina promotoras de ideas neoliberales (Fischer y Plehwe, 2017); el vínculo entre grandes empresas y *think tanks* (Luna, 2020), así como la conexión entre *think tanks* y políticos en los países latinoamericanos (Salas-Porras, 2017). Muchos de estos estudios enfatizan que las ideas neoliberales responden a los intereses de las grandes corporaciones que operan en la región. Sin embargo, queda la duda de cómo estas grandes empresas se organizan y cómo coordinan sus intereses e ideas a nivel transnacional: ¿están las élites empresariales en América Latina conectadas a nivel transnacional formando una red unida? En caso de que lo estén, ¿integran a la mayoría de los países de la región? ¿Qué papel juegan los inversores norteamericanos y europeos en la formación de redes transnacionales en América Latina?

El surgimiento de élites empresariales a escala transnacional en América Latina ha atraído la atención de académicos, periodistas y activistas, al mismo tiempo que ha generado debates y desacuerdos. Una línea de investigación ha mostrado la formación de una clase capitalista global basada en un conjunto cohesionado de propietarios y directivos transnacionales (Heemskerk y Takes, 2016; Sklair, 2001; Vitali *et al.*, 2011). Sin embargo, estudios sobre América Latina han evidenciado que casi no existen conexiones entre los directivos de las grandes empresas latinoamericanas (Cárdenas, 2015). Otra disputa se encuentra en el grado de apertura internacional de las élites empresariales. Mientras algunos muestran el aumento de la inversión extranjera de los empresarios latinoamericanos y la emergencia de *multilatinas* –empresas de origen latinoamericano que ejercen su actividad económica priorizando la inversión en el extranjero sobre la reinversión en el país de origen– (América Economía, 2015; Casanova *et al.*, 2009), otros indican que la propiedad de las empresas sigue sin internacionalizarse y permanece en manos de inversores domésticos (Lefort, 2005). La investigación previa ha sido incapaz de resolver estos debates, en parte debido a la falta de datos sobre la propiedad de las grandes empresas y los escasos estudios transnacionales sobre las élites empresariales en América Latina.

Este artículo contribuye a resolver estos debates mediante el análisis de la propiedad de las grandes empresas en América Latina y de las relaciones resultantes entre sus accionistas. Específicamente, el objetivo del estudio es doble: identificar

los propietarios transnacionales de las grandes empresas de América Latina (los accionistas que invierten en las grandes empresas de varios países de la región) y analizar sus redes. El análisis de las redes entre propietarios permite comprobar hasta qué punto están conectados entre sí, qué perfil (origen y sector) tienen los propietarios transnacionales, qué propiedades comparten, y qué relaciones internacionales generan. Por ejemplo, la empresa financiera Blackrock se puede definir como un propietario transnacional, ya que es accionista del 7% de América Móvil (México), del 3% del Banco Itaú (Brasil) y del 1% de Ecopetrol (Colombia), entre otras empresas. Y es un propietario transnacional porque posee acciones en varios países de América Latina.

Este artículo pretende ser una aportación a los estudios de las élites empresariales en América Latina en varios aspectos: en primer lugar, a diferencia de investigaciones previas que se han centrado en el estudio de los directivos de las grandes empresas, esta investigación concibe a las élites empresariales como los propietarios de las grandes empresas. El hecho de centrarse solo en los directivos tiene el problema de omitir a los propietarios de partes pequeñas de la empresa con una incidencia significativa en el devenir de la corporación. Así, el análisis de los propietarios permite identificar y enfocarse en quiénes controlan los designios de las empresas y, por lo tanto, el nombramiento de los directivos, además de la venta o la disolución de la sociedad. En segundo lugar, esta investigación tiene una naturaleza transnacional, es decir, analiza las relaciones entre actores que tienen conexiones más allá de su lugar de origen. Hasta ahora, el estudio de las élites empresariales en América Latina ha estado excesivamente centrado en el ámbito nacional (Cárdenas, 2020; Salvaj y Couyoumdjian, 2016), lo que ha impedido resolver inquietudes sobre fenómenos a escala transnacional o regionales como la formación de élites empresariales transnacionales en la región.

Finalmente, al examinar los dueños de las grandes corporaciones que operan en América Latina, se contribuye a visibilizar las relaciones entre países derivadas de la acción de sus élites empresariales, lo que permite discutir el futuro de proyectos de integración regional y la geopolítica. Algunos sostienen que existe una clase transnacional originaria de Estados Unidos y Europa que incide enormemente en la toma de decisiones públicas en los estados periféricos, al cooptar a los gobiernos para que legislen a favor de sus intereses. Ello ha fomentado el fortalecimiento de la asimetría en la integración transnacional y el mantenimiento del poder de los estados hegemónicos sobre los periféricos (Van der Pijl, 1998), por ejemplo, a tra-

El análisis de los dueños de las grandes corporaciones que operan en América Latina visibiliza las relaciones entre países derivadas de la acción de sus élites empresariales, lo que permite discutir el futuro de proyectos de integración regional y la geopolítica latinoamericana.

vés de pactos continentales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Ahora bien, ¿es verdad que las economías latinoamericanas dependen de Europa y los Estados Unidos para su integración? Diversas iniciativas de integración regional en América Latina han buscado contrarrestar el dominio norteamericano, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), principalmente también como una respuesta al modelo neoliberal (Cannon, 2016). Conocer el grado de transnacionalización de las élites empresariales en América Latina y sus redes, incluso desde un punto de vista meramente descriptivo, puede ayudar a entender el tipo de integración regional posible.

Élites empresariales transnacionales en el mundo

Los partidos de centroderecha en América Latina siguen apegados a un modelo económico neoliberal importado de Estados Unidos y Europa: liberalización comercial, desregularización para las inversiones, contención del gasto social e impuestos regresivos. Ni el crecimiento del comercio con China –que ha desplazado a Estados Unidos como principal socio comercial en varios países– ha cambiado esta pauta. Tampoco el auge de las ideas proteccionistas o nacionalistas parece haber llegado a los partidos de centroderecha latinoamericanos, como sí lo ha hecho a los de Europa. ¿Por qué los partidos de centroderecha latinoamericanos, a pesar de que han adoptado discursos más nacionalistas en lo social, siguen apostando por el neoliberalismo en lo económico? Según las teorías de la clase capitalista transnacional (Carroll y Sapinski, 2016; Sklair, 2001; Robinson y Harris, 2000), el triunfo y permanencia del neoliberalismo en el mundo por encima de otras ideologías se ha debido a la capacidad de las grandes empresas de influir globalmente, para lo cual han necesitado construir redes transnacionales, especialmente una red formada por grandes empresas con directivos y propietarios compartidos. Las redes entre élites empresariales se convierten así en canales de exportación de cosmovisiones de hacer negocios y, por lo tanto, de cómo debe estar organizada la economía.

Las teorías sobre la existencia de una clase capitalista transnacional arguyen que un conjunto de personas y organizaciones, desarraigadas de los estados-nación, buscan reproducir el capital transnacional, controlan organismos supranacionales y son el estrato social más alto a nivel global (Carroll y Sapinski, 2016; Sklair, 2001; Robinson y Harris, 2000). Para Carroll y Sapinski (2016), la globalización del capitalismo, el derribo de las fronteras a la movilidad del capital, y su expansión geográ-

fica, han generado las bases estructurales para la emergencia de una clase capitalista transnacional. Sklair (2001) señala que no solo grandes empresarios transnacionales son parte de esta clase capitalista, sino también miembros de organizaciones burocráticas globales, así como profesionales, comerciantes y medios de comunicación cuyo espacio de acción va más allá de países y regiones concretas. Estas teorías sobre la formación de élites transnacionales han sido tomadas como referencia por muchos estudios, pero también han sido criticadas por la falta de evidencia empírica que les dé soporte.

Fue a partir de esta voluntad de comprobar las teorías sobre la clase capitalista transnacional que surgió el análisis de redes de empresas (o redes corporativas) a nivel global. Mediante el estudio de los *interlocking directorates* –relaciones entre empresas por compartir directivos– se trató de evidenciar que las empresas más grandes del mundo se conectaban a través de sus ejecutivos y, por consiguiente, podían compartir información, conocimiento, intereses y cosmovisiones. Los estudios iniciales de estas redes a escala global mostraron que, en la década de 2000, existía una comunidad cohesionada de empresarios europeos y norteamericanos (Carroll y Fennema, 2002; Kentor y Jang, 2004); más adelante, en la década de 2010, otros análisis evidenciaron el fortalecimiento de esta red de empresas y directivos, a la que se fueron incorporando corporaciones de otras regiones, tanto de Asia como de América Latina (Heemskerk *et al.*, 2016; Heemskerk y Takes, 2016). Dichos trabajos, sin embargo, usaron los *interlocking directorates* como proxy o indicador para estudiar la conexión entre grandes empresas en el mundo, pero no la propiedad de las empresas. Otros estudios que sí lo hicieron, mostraron la alta concentración de la propiedad en un conjunto reducido de fondos de inversión y bancos. Así, Vitali, Glattfelder y Battiston (2011) demostraron que un grupo de 147 empresas, la mayoría financieras norteamericanas, controla el 40% del valor económico de 600.000 empresas transnacionales a través de una compleja red de relaciones de propiedad. Sin estudiar los enlaces de propiedad, pero sí identificando quiénes son los propietarios de las 500 mayores empresas del mundo, Peetz y Murray (2012) señalaron el poder que detentan un conjunto de accionistas internacionales, como Blackrock, AXA, JP Morgan Chase, Capital Group y Fidelity Investments, entre otros. Resultados similares se encontraron en Europa, donde un reducido número de propietarios poseen acciones en muchas grandes empresas, por lo que crean redes transnacionales de propiedad (Rodríguez *et al.*, 2006).

De hecho, los estudios de redes de élites empresariales a nivel continental o regional han estado principalmente centrados en Europa, poniendo en evidencia la consolidación de una red europea de empresarios, incluso después de la crisis financiera de 2008 (Van Veen, 2018). En América Latina, en cambio, se puso de manifiesto la fragmentación de los grandes empresarios a nivel regional mediante

el análisis de *interlocking directorates*, así como la resistencia de las empresas latinoamericanas a incorporar directivos extranjeros a sus juntas (Cárdenas, 2015). Aunque ello puede sugerir la inexistencia de élites empresariales transnacionales en la región, cabe analizar otras formas de conexión, como los enlaces de propiedad debido al aumento de la actividad inversora internacional y comercial de los países de América Latina.

La transnacionalización de las economías de América Latina

Antes de indagar sobre los propietarios transnacionales de América Latina y sus redes, cabe conocer el grado de transnacionalización de las economías latinoamericanas. Aunque se trata de una unidad de análisis distinta, los tratados de libre comercio (TLC), la existencia de foros de empresarios, la inversión extranjera directa (IED) y el comercio exterior de los países latinoamericanos pueden ser indicadores de las oportunidades que tienen las élites empresariales para crear redes transnacionales.

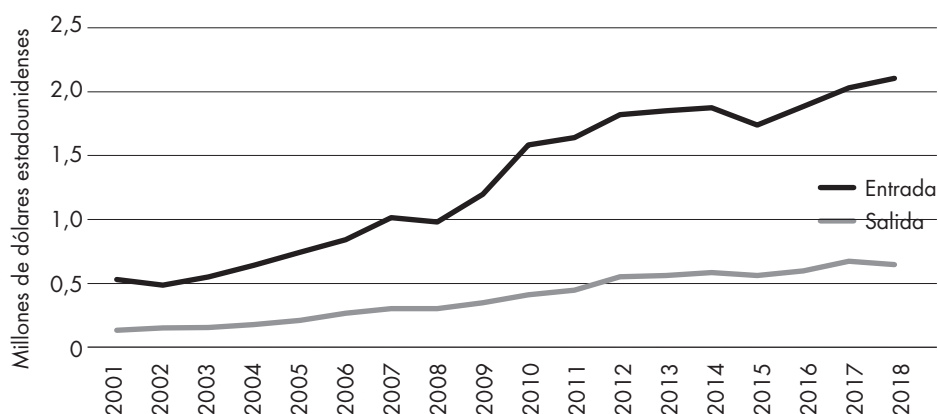
Los TLC han proliferado en América Latina, pasando de 12 antes del año 2000, a 79 después de 2000. Sin embargo, la mayoría de estos tratados comerciales son bilaterales. Solo se han constituido cuatro acuerdos aduaneros multilaterales entre países de América Latina: Comunidad Andina (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), Mercado Común Centroamericano (MCCA), Alianza del Pacífico (AP), y Mercado Común del Sur (Mercosur). Estos acuerdos han formado bloques comerciales, los cuales solo se han consolidado entre países con cercanía geográfica: los andinos, los caribeños, los centroamericanos y una parte de los suramericanos. Los países de un bloque comercian poco con los de otro bloque, por lo que la región se mantiene dividida comercialmente. En América Latina sigue sin existir un mercado común al estilo europeo, ni tampoco ningún pacto comercial que aglutine a la mayoría de los países de la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó en 2018 una propuesta para crear un tratado de libre comercio para toda la región, ya que el mercado se encontraba fragmentado en 33 acuerdos comerciales (Mesquita Moreira, 2018), pero de momento es solo una hoja de ruta sin ninguna implementación.

Por su parte, los foros empresariales transnacionales, que reúnen a ejecutivos y empresarios de América Latina –como el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), fundado en 1990, y el American Business Forum, fundado en 2017 a imagen y semejanza del Foro de Davos–, tienen un alcance limitado, ya que la

participación de los grandes empresarios de las principales economías de la región es escasa. Estos han tendido a participar más en organismos nacionales que en espacios continentales, como en el Consejo Mexicano de Negocios, la Confederación de la Producción y del Comercio en Chile, o el Consejo para el Crecimiento en El Salvador, posiblemente, porque sus intereses principales siguen dentro de las fronteras nacionales.

Respecto a la IED, en América Latina esta ha mostrado una tendencia al alza sobre todo a partir del año 2002. El valor de los stocks de IED entrante (la recibida en un país) entre 2002 y 2012 creció más de un 400% en la región, pasando de 473.406 millones de dólares en 2002 a 2,1 billones de dólares en 2012. A partir de 2013 y hasta 2018, debido a la crisis en la región, la IED ralentizó su crecimiento (véase la figura 1 sobre la evolución de la IED en la región). El valor de los stocks de IED saliente (la que se realiza en el extranjero) también creció desde inicio de la década de 2000, aunque en menor medida y a menor ritmo que la IED entrante (UNCTAD, 2020). Es decir, son mucho más las inversiones que llegan a los países de América Latina que las que salen, al contrario que en Europa, Estados Unidos, Canadá o Asia, donde el valor de los stocks de salida y entrada de IED son similares o incluso la IED saliente es más alta que la IED entrante en algunos años. Esto indica que las grandes empresas latinoamericanas siguen sin ser protagonistas en la inversión fuera de sus países.

Figura 1. Evolución del stock de la IED de entrada y de salida en América Latina



Fuente: Elaboración propia a partir de UNCTAD (2020).

A pesar de la alta apertura comercial de las economías de América Latina desde inicios de 2000, el comercio intrarregional en América Latina se mantiene en niveles bajos. En 2018, menos de una quinta parte (17,2%) de las exportaciones tuvo como destino otro país de la región (CEPAL, 2018). En otras regiones del mundo, el comercio intrarregional es mucho mayor: entre los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) –Canadá, Estados Unidos y México–, las exportaciones intrarregionales suponen el 49,6% del total de exportaciones, en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) el 49,8%, y en la Unión Europea el 59,1% (CEPAL, 2014). Pese a la proliferación de tratados de libre comercio y acuerdos aduaneros de integración regional, los productos de América Latina tienen como destino principal países de fuera de la región. Una de las posibles razones de ello es la ausencia de producciones compartidas entre dos o más países de la región, y la baja diversificación de la producción.

Si bien América Latina se muestra abierta a la transnacionalización, las relaciones de inversión y comerciales se concentran principalmente con China y Estados Unidos. El bajo grado de relacionamiento comercial entre los diferentes países de la región parece sugerir también poca interacción entre los grandes empresarios de la región, un punto que abordaremos mediante el análisis de las redes de propiedad.

Aproximación metodológica y datos del estudio

Para el análisis de las redes de propiedad, se ha empleado el análisis de redes, una aproximación metodológica que se enfoca en analizar las relaciones entre un conjunto de actores. De esta manera, es posible identificar el nivel de cohesión de los actores, los nodos que ocupan una posición central y los espacios que se encuentran no conectados. Esta metodología ha sido ampliamente usada para el estudio de las redes de las élites empresariales (Knoke, 2018), incluyendo las relaciones de propiedad (Cárdenas, 2016; Vitali *et al.*, 2011). Las dos principales ventajas del análisis de redes en este campo es que este permite analizar todas las relaciones simultáneamente, no solo las relaciones bilaterales, además de estudiar las relaciones resultantes entre accionistas por el control compartido de empresas.

El procesamiento de los datos tuvo dos grandes fases:

a) *Identificación de los propietarios y construcción de una base de datos* en cuatro etapas. En primer lugar, se seleccionaron las 300 mayores empresas de América Latina en base a dos rankings de la revista *América Economía*: las 500 mayores empresas de la región según ventas y los 250 mayores bancos según monto de los activos totales. Varias empresas no ofrecieron datos sobre quiénes son sus accionistas mayoritarios, por lo que se descartaron. Si alguna de las empresas listadas en el ranking de las mayores de América Latina no tenía información disponible o confiable sobre sus accionistas, se seleccionaba otra empresa siguiendo los rankings. Tras depurar la información no fidedigna, se obtuvo una muestra de 286 compañías, compuesta por 212 empresas no financieras (74%) y 74 empresas financieras (26%). La mayoría son empresas originarias de América Latina, pero también hay algunas multinacionales que operan en los países de la región y tienen sede y junta directiva propia en el país latinoamericano, por lo que no son una simple sucursal. En segundo lugar, se identificaron los propietarios de las empresas con un mínimo del 1% del total de acciones. Para la obtención de esta información, se consultaron como primera fuente los informes anuales de las empresas y, a continuación, si no estaba disponible la información en las webs de las empresas, se revisaban las páginas web de las superintendencias de valores, especialmente en Perú, Chile y Colombia, así como la base de datos *Económica* durante el año 2014. En tercer lugar, se construyó una matriz de 2-modos (o de afiliación) donde se colocó a las empresas en columnas y a los propietarios de dichas empresas en filas. Las celdas indicaron el porcentaje de acciones de cada propietario sobre el total del capital accionario de la empresa. Finalmente, se transformó esta matriz de 2-modos en una matriz de 1-modo (o adyacente) donde los propietarios iban ubicados en filas y columnas. Las celdas indicaban la suma de los porcentajes de acciones.

b) *Análisis de la red de propietarios de las grandes empresas de América Latina*. Esta parte se realizó en dos etapas. En primer lugar, se analizó la red de propietarios transnacionales, que incluye los accionistas con acciones en empresas de diversos países y los enlaces entre ellos por tener acciones en una misma empresa. Es decir, dos propietarios están relacionados entre sí si tienen acciones en la misma empresa. La red se puede graficar a partir de nodos y líneas, donde los nodos son los propietarios y las líneas son las empresas que controlan en común. Para esta fase se emplearon los indicadores de cohesión de la red completa. En segundo lugar, se describió el perfil de los propietarios transnacionales según los siguientes atributos: origen o nacionalidad (en base a la localización de la sede central de la corporación propietaria o nacionalidad de la familia o Estado); tipo de propietario

(corporación, familia o Estado); sector de actividad principal de la empresa propietaria en caso de ser corporación; número de empresas controladas de la muestra de las 286 mayores de América Latina, y media del porcentaje de propiedad controlada.

Las redes entre propietarios transnacionales en América Latina

Antes de entrar en el análisis de las redes de propietarios, presentamos el origen de las 286 mayores empresas de la región. La mayoría de las grandes empresas en América Latina son de Brasil (30,4%), México (17,5%), Chile (16,1%), Perú (9,8%), Argentina (9,4%), Colombia (7%) y Venezuela (3,5%), así como de economías de menor tamaño como Panamá, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Bolivia (véase la tabla 1). Como era de esperar, la mayoría de las grandes empresas de América Latina están ubicadas en las economías de mayor tamaño.

Tabla 1. Distribución de grandes empresas de América Latina por país de origen

Año del estudio: 2015	Núm. de empresas	Porcentaje	PIB *
Brasil	87	30,4	1.802.214
México	50	17,5	1.170.564
Chile	46	16,1	243.919
Perú	28	9,8	189.805
Argentina	27	9,4	594.749
Colombia	20	7,0	293.481
Venezuela	10	3,5	482.359
Panamá	6	2,1	54.091
Uruguay	4	1,4	53.274
Costa Rica	3	1	54.776
Ecuador	2	0,7	99.290
República Dominicana	2	0,7	71.164
Bolivia	1	0,3	33.000
Total	286		

* PIB (millones de dólares de 2015)

Fuente: Elaboración propia, según datos de World Bank (2018).

De estas 286 empresas, se identificaron 1.109 propietarios, de los cuales solo 31 (el 2,8% del total) son propietarios transnacionales, es decir, accionistas con acciones en grandes empresas de dos o más países. Este conjunto de propietarios transnacionales son dueños de 103 de las 286 mayores empresas de América Latina, por lo que el 36% de las grandes empresas latinoamericanas tienen a alguno de los 31 propietarios transnacionales en su accionariado. Ello indica un alto alcance de un reducido número de propietarios. El análisis de estos propietarios transnacionales se presenta en tres secciones: análisis de la red de los propietarios transnacionales para saber en qué grado están cohesionados; perfil o atributos de los propietarios transnacionales para saber qué perfil tienen, y la red de países para conocer las relaciones internacionales que se forman en América Latina debido dichos propietarios.

De las 286 empresas analizadas, se identificaron 1.109 propietarios, de los cuales solo 31 son propietarios transnacionales, es decir, accionistas con acciones en grandes empresas de dos o más países. Estos 31 son dueños de 103 de las 286 mayores empresas de América Latina, por lo que el 36% de las grandes empresas latinoamericanas tienen a alguno de los 31 propietarios transnacionales en su accionariado. Ello indica un alto alcance de un reducido número de propietarios.

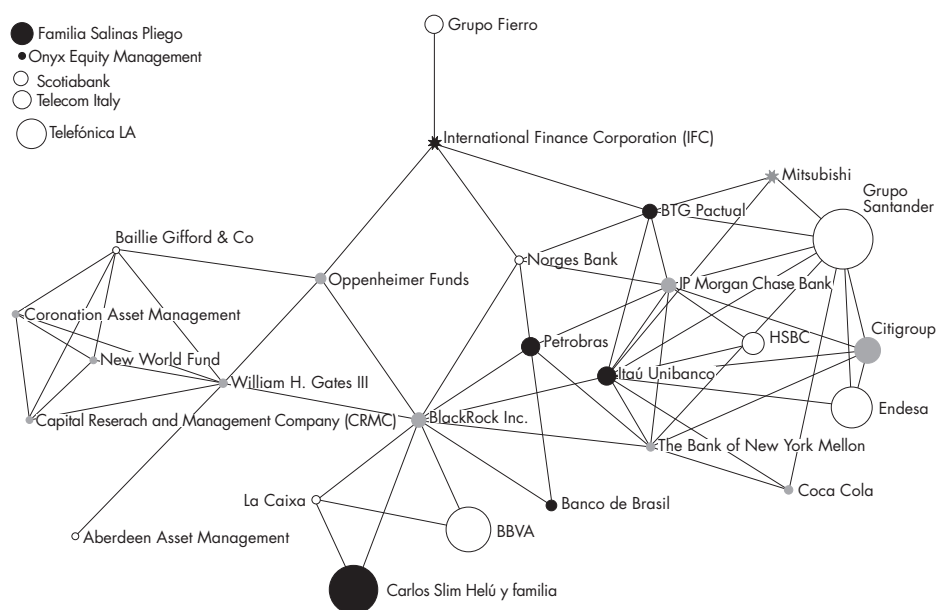
Análisis de la red de propietarios transnacionales

Los 31 propietarios transnacionales forman una red con un nivel de conexión elevado. La figura 2 muestra la red entre los propietarios transnacionales donde los nodos son los propietarios con acciones en empresas de diversos países y las líneas indican que comparten propiedad en las mismas empresas.

De los 31 propietarios transnacionales en América Latina, 26 están conectados entre sí. Es decir, controlan empresas en común, por lo que comparten intereses en la revalorización de esas empresas. La red está compuesta de 118 enlaces, lo que significa que cada propietario se conecta en promedio con otros 4 propietarios (grado medio = 3,81 enlaces). La densidad de la red de propietarios transnacionales es de 0,13, es decir, existe el 13% del total de enlaces posibles. La conectividad es 0,70, lo que indica una alta probabilidad de conexión entre todos los propietarios transnacionales. La distancia media es de 2,48 (desviación estándar = 0,97), lo cual señala que los propietarios podrían conectarse en 2 pasos y medio en promedio. El diámetro, la mayor distancia entre dos nodos, es de 4. La compacidad es de 0,35, lo que indica que las distancias entre los actores no forman una red compacta totalmente. El coeficiente de agrupamiento global, que oscila entre 0 y 1, es 0,47, señala

que hay agrupamiento, aunque sin ser muy alto. Todos los propietarios que tienen algún enlace forman un único componente, es decir, un conjunto de nodos donde todos están vinculados por algún camino. Aunque no disponemos de un punto de comparación real para señalar si se trata de una red cohesionada o dispersa, se interpreta que es una red conectada pero extensa. Es decir, hay conexión entre casi todos los actores (solo hay cinco nodos aislados de los 31 que componen la red), pero no están totalmente agrupados, sino a cierta distancia unos de otros.

Figura 2. Red de propietarios transnacionales de grandes empresas en América Latina



Nodo: propietario transnacional; *línea:* compartir propiedad en una misma empresa; *tamaño del nodo:* número de empresas (de las 286) en las que son propietarios; *el color y forma del nodo indica la región de origen del propietario:* círculo gris para Estados Unidos y Canadá, círculo blanco para Europa, círculo negro para América Latina, estrella gris para Asia, y estrella negra para África.
Fuente: Elaboración propia.

Perfil o atributos de los propietarios transnacionales

Los propietarios transnacionales son, en su mayoría, corporaciones privadas de fuera de América Latina. De los 31 propietarios transnacionales, diez son empresas

con sede en Estados Unidos, seis en España, cuatro en el Reino Unido, una en Japón y una en Sudáfrica. Solo siete de los 31 propietarios transnacionales son de origen latinoamericano, específicamente cinco de Brasil y dos de México. Estos propietarios transnacionales latinoamericanos no ocupan posiciones centrales en la red de propietarios transnacionales: dos de ellos están aislados y el resto tienen una posición periférica.

Los propietarios transnacionales que más propiedades tienen son el Grupo Santander, Itaú Unibanco y BlackRock. El Grupo Santander es dueño de 29 grandes empresas en Argentina, Uruguay, Perú, Chile, México y Brasil, tanto por controlar sus filiales como otras empresas, sobre todo en Chile. La corporación brasileña Itaú Unibanco controla 19 empresas en dos países, Brasil y Chile, por lo que se concentra en solo dos economías. BlackRock tiene acciones en 14 empresas con origen en Venezuela, Argentina, Perú, México y Brasil, pero no en Chile. Aunque BlackRock comenzó sus negocios en Chile a inicios de 2010, sobre todo en la comercialización de activos, es posible que su entrada en el capital accionario de las grandes empresas de ese país sea difícil debido a la amplia y cohesionada red de propietarios chilenos dentro del país (Guzmán-Concha y Cárdenas, 2019).

De los 31 propietarios transnacionales identificados, diez son empresas con sede en Estados Unidos, seis en España, cuatro en el Reino Unido, una en Japón y una en Sudáfrica; solo siete son de origen latinoamericano, específicamente, cinco de Brasil y dos de México. La mayoría son empresas financieras, bancos y grupos de inversión, lo que evidencia la fuerte presencia del sector financiero.

Los propietarios transnacionales son principalmente empresas financieras, bancos y grupos de inversión, lo que evidencia la fuerte presencia del sector financiero. De los 31 propietarios transnacionales, 22 son entidades financieras. Excepcionalmente encontramos a dos familias: Slim y Salinas, ambos grupos económicos mexicanos, y un individuo, Bill Gates, que controla el 7% de Televisa, el 7% de Fomento Económico Mexicano, ambas empresas con sede en México, y el 2% de Arcos Dorados, con sede en Argentina. Estos resultados evidencian que no son los grupos económicos familiares el tipo de propietario dominante a nivel transnacional, sino bancos y fondos de inversión extranjeros. Es decir, los grupos económicos familiares no invierten en acciones de empresas de otros países.

Otra de las características o atributos analizados de los propietarios transnacionales es el porcentaje de capital controlado en cada empresa, lo que nos señala si los propietarios transnacionales son grandes accionistas de control o accionistas minoritarios. Para ello, calculamos la media del porcentaje de acciones controlada por cada propietario. Los propietarios invierten de media en 5,4 grandes empresas (desviación estándar = 5,3) y controlan de media el 28,4% de

las acciones (desviación estándar = 29,2). Hay alta variabilidad en el porcentaje de acciones controladas.

Se distinguen dos pautas diferentes en la inversión de los propietarios transnacionales. Por un lado, hay propietarios que invierten en pocas empresas, pero son el accionista principal y controlan un gran porcentaje del total de acciones. Por ejemplo, el grupo Fierro, originario de España, tiene acciones en dos empresas de América Latina: el 50% del Banco Exterior de Venezuela y el 88% de las acciones del Banco Interamericano de Finanzas de Perú. Su promedio de acciones en propiedad es 69%. Por otro lado, hay propietarios que invierten en muchas empresas mediante el control de una parte pequeña del capital accionario de la empresa. Por ejemplo, la corporación financiera J. P. Morgan Chase de Estados Unidos tiene en promedio el 10,9% de las

Si se analiza conjuntamente el origen de las empresas y la media de acciones controladas por los propietarios transnacionales, se observa una diferencia entre las empresas de capital latino y las de capital anglosajón. Las primeras utilizan un tipo de inversión extranjera de control mayoritario de la empresa (bancos y empresas latinas) y las segundas de control minoritario (financieras anglosajonas).

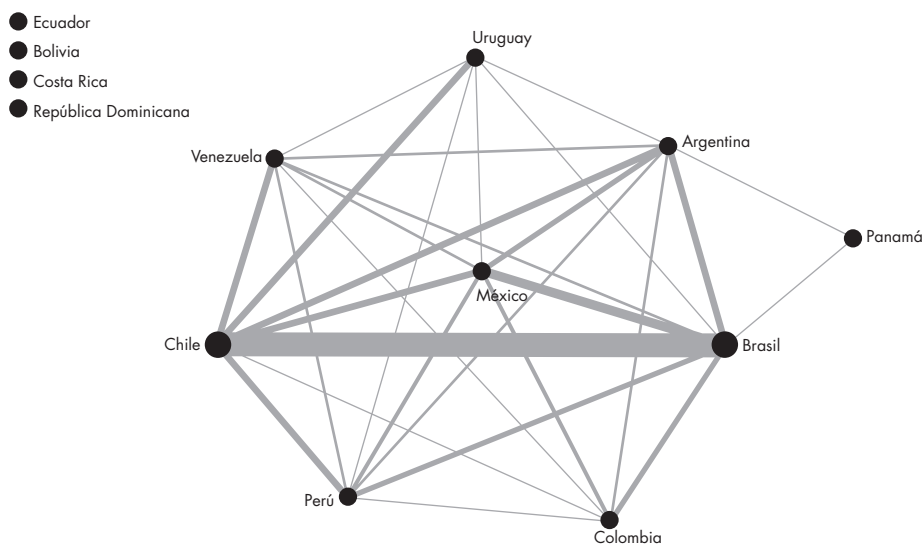
acciones en las ocho grandes empresas en las que invierte: Graña Montero de Perú (38%), Cervecerías Unidas de Chile (13%), Banco de Santander de Chile (17%), Grupo Financiero Banorte de México (1%), Grupo México (4%), Iochpe Maxion de Brasil (6%), Marcopolo de Brasil (5%) y Randon de Brasil (3%). Otro ejemplo es Blackrock, este fondo de inversión con sede en Estados Unidos controla un porcentaje del capital accionario relativamente pequeño en las empresas, siempre menor al 11% (media = 5,4; desviación estándar = 3,1).

Si se analiza conjuntamente el origen de las empresas y la media de acciones controladas por los propietarios transnacionales, se observa una diferencia entre las empresas originarias de un capitalismo latino y las empresas originarias de un capitalismo anglosajón. Los propietarios que controlan un alto porcentaje de las empresas son de origen español y latinoamericano –Telefónica, BBVA, Endesa, Telecom Italia, Grupo Fierro, Grupo Santander, Banco de Brasil, Petrobras–. En cambio, los propietarios transnacionales que controlan un pequeño porcentaje de las empresas suelen ser de Estados Unidos y Reino Unido –Capital Research and Management Company, Baillie Gifford & Co, Blackrock, The Bank of New York Mellon, Oppenheimer Funds, Aberdeen Asset Management–. Hay excepciones a estas pautas, pero es llamativo cómo los dos tipos de inversión extranjera, una de control mayoritario de la empresa y otra de control minoritario, son reproducidos por empresas de diverso origen, la primera por bancos y empresas latinas, y la segunda por financieras anglosajonas.

Red entre países

Si se examinan las empresas conectadas por tener propietarios transnacionales en común, se pueden analizar las relaciones internacionales en América Latina basadas en la propiedad. Los países se conectan unos con otros por tener empresas que comparten propietarios. Ello ayuda a valorar el grado de transnacionalización de los países a partir de los enlaces de propiedad. La figura 3 muestra las relaciones entre países por tener empresas conectadas debido a compartir propietarios. Las líneas indican el número de empresas conectadas por compartir accionistas entre cada país. El resultado evidencia una alta cohesión entre las principales economías de América Latina. Casi todos los países con grandes empresas están vinculados entre sí por la acción de un pequeño conjunto de 31 propietarios transnacionales. Las siete mayores economías de la región –Brasil, México, Venezuela, Chile, Colombia, Argentina y Perú– están todas conectadas con todas, lo que sugiere cierta integración regional, aunque ello es debido a propietarios transnacionales mayoritariamente norteamericanos y europeos.

Figura 3. Red entre países por relaciones entre grandes empresas de América Latina por compartir propietarios



Nodos: países; *líneas:* empresas conectadas por compartir propietarios; *tamaño de la línea:* número de empresas conectadas.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones y reflexiones finales

Del análisis de la red y atributos de los propietarios transnacionales, aquellos que tienen acciones en empresas de varios países, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Primero, hay pocos propietarios transnacionales en América Latina, solo 31 sobre un total de 1.109 accionistas (menos del 3%). Segundo, este reducido número de accionistas son dueños de un alto número de grandes empresas en América Latina, 103 de las 286 muestreadas. Tercero, este conjunto de propietarios transnacionales forma una red conectada debido a que comparten propiedad en las mismas empresas. Cuarto, la actividad inversora de estos propietarios transnacionales conecta a empresas de casi todos los países de América Latina, lo que genera relaciones internacionales intensas dentro de la región, sobre todo entre las mayores economías. Quinto, la mayoría de estos propietarios transnacionales no son originarios de América Latina, sino de Europa y América del Norte. Sexto, casi todos los propietarios transnacionales son empresas financieras. Séptimo, los grupos económicos familiares latinoamericanos no suelen comprar acciones de empresas de otros países. Octavo, se distinguen dos formas diferentes de control corporativo: una basada en el control de gran parte de la empresa, característico de los propietarios con origen español o latino; y otra basada en el control de pequeños porcentajes de la empresa, característico de los propietarios de origen anglosajón. La acción de ambos tipos de propietarios crea una red de propietarios en América Latina.

La red conectada de propietarios transnacionales se forma por la diversificación de inversiones de un conjunto de corporaciones financieras que en muchos casos no buscan controlar mayoritariamente las empresas. Más de la mitad de los propietarios transnacionales (17 de 31) controlan de media menos del 20% de las acciones de las empresas y de media invierten en 5,4 empresas. Así, se podría afirmar que más de la mitad de los propietarios transnacionales son accionistas *minoritarios*. Mediante *pequeñas* inversiones en varias de las grandes empresas de América Latina, estos propietarios construyen una red transnacional generando enlaces corporativos y formando una clase *capitalista* con intereses regionales. Estos propietarios transnacionales, la mayoría de origen estadounidense y europeo, no intervienen directamente en la dirección de la empresa, sino en la creación de los mercados internacionales. Las juntas directivas o consejos de administración de las grandes empresas siguen estando principalmente compuestos por personas del país (Cárdenas, 2015). Los propietarios transnacionales de fuera de América Latina no cambian las juntas directivas incluyendo ejecutivos norteamericanos o europeos, sino que conservan la dirección y gestión autóctona, tal vez por los estrechos vínculos de los directivos nacionales con las élites políticas del país. De esta manera, se benefician de la buena marcha de las empresas latinoamericanas y pueden condicionar la forma en que se conciben los negocios.

China ha aumentado su inversión en América Latina, lo cual implica un contrapeso al poder hegemónico de Estados Unidos. Sin embargo, al contrario de la relación que América Latina tiene con Estados Unidos, cuya dependencia económica y comercial se refleja en una red de propietarios norteamericanos conectados que invierten en la región, la dependencia comercial de China no se traduce en una presencia de propietarios o inversores chinos en las grandes empresas latinoamericanas. La intensa relación comercial de América Latina con China no ha generado vínculos entre las élites empresariales latinoamericanas y chinas. Aunque se han formado enlaces entre las élites empresariales chinas y las estadounidenses y europeas, como lo evidenciaron estudios previos (Graaff, 2020), esta transnacionalización de las élites empresariales chinas no ha alcanzado a América Latina. Ello tal vez porque China aplica una estrategia más extractivista en la región, sin implicación local: compran, explotan los recursos, venden, y se van (Sassen, 2014). Sea como fuere, es posible que se reconfiguren estas relaciones tras el estallido de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que afrontan los países latinoamericanos.

¿Posibilidad de un mercado intrarregional?

Los empresarios transnacionales podrían condicionar transformaciones institucionales que sean proclives a un mercado común si consideran que este puede ser beneficioso para ellos; por ejemplo, si dicha institucionalización reduce los costos de información e incertidumbre. Una red cohesionada de empresarios transnacionales también sería crucial para producir discursos y visiones colectivas que tengan impacto en la toma de decisiones públicas (Pattberg, 2005). En Europa, el mercado común europeo tuvo el apoyo de las élites empresariales europeas, las cuales ya habían formado foros y mesas redondas de empresarios desde inicios de los años ochenta del siglo pasado, como European Roundtable of Industrialists. Sin embargo, en América Latina, la red de empresarios transnacionales no es de origen latinoamericano, lo que podría dificultar la generación de visiones y proyectos propios.

Llama la atención la baja transnacionalización de los grupos económicos latinoamericanos, muy poco presentes en la red de propietarios transnacionales, lo que es un impedimento para formar un mercado intrarregional con reglas propias y comunes. Diversas razones pueden explicar esta orientación nacional de los grupos económicos latinoamericanos. En primer lugar, tienen una alta dependencia del Estado para hacer rentables sus operaciones (Khanna y Palepu, 2000). Debido al limitado acceso e influencia sobre otros gobiernos extranjeros, los grupos económicos latinoamericanos pueden haber

descartado la opción de invertir en otras empresas del continente. El caso de Oderbrecht, empresa constructora multilatina de origen brasileño que pagó coimas y sobornos a diversos gobiernos latinoamericanos, evidencia que la captura de gobiernos y políticos fue necesaria para su expansión regional (Durand, 2018). En segundo lugar, los grupos económicos dominantes en América Latina siguen estando mayoritariamente controlados por familias (Bull *et al.*, 2014; Chardavoine, 2020), y las empresas familiares pueden haber desincentivado el reclutamiento de directivos externos con visiones más cosmopolitas, priorizando el control familiar sobre la transnacionalización de activos.

En tercer lugar, si bien muchos grupos económicos latinoamericanos son *big players* en sus países, no lo son en mercados internacionales. La disposición de

Llama la atención la baja transnacionalización de los grupos económicos latinoamericanos, muy poco presentes en la red de propietarios transnacionales, lo que es un impedimento para formar un mercado intrarregional con reglas propias y comunes.

capital inversor de los grupos económicos latinoamericanos es menor que la de bancos o fondos de inversión norteamericanos y europeos. Aunque las empresas multilatinas han crecido en la región, son escasas las que tienen un dominio o relevancia mundial. De las 100 empresas no

financieras más internacionalizadas de los países en desarrollo o economías en transición, clasificadas por activos extrajeros, solo el 16% son de América Latina (siete de México, cinco de Brasil, tres de Chile y una de Argentina). Sin embargo, ninguna de ellas está en el top 10 de las 100 más internacionalizadas (UNCTAD, 2020). Economías como Brasil y México, con un PIB de más de 1 billón de dólares en 2019, tienen menos empresas grandes internacionalizadas que economías con un tamaño mucho menor como Hong Kong (con 12 empresas entre las 100 más internacionalizadas), Singapur (8 empresas) o Taiwán (6 empresas).

Estos resultados reafirman que la transnacionalización de las economías de América Latina no se produce por élites empresariales de origen latinoamericano. A pesar de que exista un consenso regional en materia de libre comercio, como lo demuestra la multiplicidad de tratados firmados en la región con el apoyo de los grupos económicos, no siempre los intereses de las élites empresariales coinciden. La discusión sobre los tratados de libre comercio en ocasiones ha dividido a las élites empresariales de corte más industrial *versus* élites con una base más financiera o dedicadas a sectores de exportación. Por ejemplo, en la discusión del TLC entre Colombia y Costa Rica, parte de la oposición al tratado provino de las élites industriales costarricenses que aseguraban no poder competir con sus contrapartes colombianas. Las propuestas de creación de un

tratado de libre comercio regional del BID, a imagen y semejanza del mercado común europeo, parece una utopía debido a la falta de enlaces entre los grupos económicos dominantes en los diversos países de América Latina.

Implicaciones geopolíticas y modelos económicos

La conexión de los propietarios transnacionales en América Latina sugiere la formación de una clase capitalista transnacional, un conjunto de propietarios que poseen acciones en grandes empresas de diversos países de América Latina. Mientras estudios previos mostraron la falta de conexión entre los directivos de las grandes empresas latinoamericanas (Cárdenas, 2015), la presente investigación evidencia que sí hay relación entre grandes empresas, pero esta se desarrolla a través de sus propietarios. Concretamente, de un conjunto de propietarios de origen mayoritariamente anglosajón y europeo. Por tanto, la formación de élites empresariales transnacionales se produce en América Latina por la inversión extranjera de bancos y fondos de inversión no latinoamericanos.

Una red de propietarios cohesionada a nivel transnacional les asegura a sus miembros una mayor capacidad de coordinación de intereses y, por lo tanto, de presión sobre los gobiernos de varios países simultáneamente. Aunque la red de propietarios transnacionales está compuesta solo de 31 accionistas, no sorprende que pueda jugar un papel esencial en las relaciones político-económicas que se establecen entre América Latina y Estados Unidos, y entre América Latina y Europa. Los TLC de Estados Unidos con países de América Latina, como el TLCAN con México, o el firmado con Colombia, han privilegiado las facciones dominantes del capital transnacional de empresas estadounidenses, antes que los intereses de sus contrapartes latinoamericanas (Cox, 2008). En otras ocasiones, las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero han favorecido los intereses de las multinacionales norteamericanas (Gibbs, 2012). Los grupos económicos latinoamericanos, al no estar conectados entre sí a nivel transnacional, tienen menos capacidad de coordinar acciones conjuntas y, por consiguiente, de influir fuera de sus países.

Existen resistencias desde muchos lugares del mundo para contrarrestar el poder hegemónico de las clases transnacionales creando bloques regionales. En América Latina, el bloque contrahegemónico más conocido es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), cuya creación tuvo entre sus objetivos denunciar el impacto de los tratados de libre comercio de Estados Unidos sobre América Latina (De la Torre, 2011). Este bloque bolivariano se enfocó en las relaciones comerciales entre empresas estatales, particularmente de energía y petróleo, poniendo al sector privado en un segundo plano. De hecho, su idea

era impulsar un modelo socialista productivo que no pudiera ser sacrificado a expensas del sector privado (Cusack, 2018; Muhr, 2013). Tal vez, el hecho de no involucrar a las élites empresariales en la formación de bloques regionales llevó al debilitamiento de estos proyectos y a su ocaso. El desarrollo de modelos económicos de libre mercado alternativos al neoliberalismo anglosajón parece difícil a nivel regional debido al papel central que tienen los bancos y fondos de inversión norteamericanos y europeos en América Latina. Los países de la región pueden cambiar de gobiernos –de la «marea rosa» al resurgimiento de la derecha– y los partidos de centroderecha pueden adoptar un discurso más social y nacionalista, pero el modelo económico neoliberal sigue siendo el dominante en sus políticas.

En conclusión, la presente investigación contribuye a los debates abiertos sobre la transnacionalización de las élites empresariales en América Latina. Mues-

Se evidencia que la relación que se desarrolla entre grandes empresas latinoamericanas se hace a través de sus propietarios. Concretamente, de un conjunto de propietarios de origen mayoritariamente anglosajón y europeo. Por tanto, la formación de élites empresariales transnacionales se produce en América Latina por la inversión extranjera de bancos y fondos de inversión no latinoamericanos.

tra que sí se forma una red conectada de propietarios transnacionales, aunque gracias al papel inversor de empresas financieras anglosajonas y europeas. Los dueños de las grandes empresas de América Latina no son solo grandes familias latinoamericanas, sino también bancos y fondos de inversión no latinoamericanos. Y aunque los grupos económicos familiares de América Latina pueden seguir manteniendo el dominio en

sus países, no son protagonistas de la transnacionalización de sus economías, lo que debilita la posición de América Latina en el mundo y la construcción de modelos económicos alternativos a los importados de Estados Unidos y Europa.

Por último, cabe destacar que una posible limitación de este estudio es que se basa solo en el análisis de las 286 mayores empresas de la región, dejando fuera grandes corporaciones de países más pequeños. Futuros trabajos deberían ampliar este número de empresas para incluir grandes firmas de América Central o el Caribe, donde se ubican sociedades *offshore* y grandes bancos. Otra vía de investigación futura será la reacción de las élites empresariales a la crisis generada por el COVID-19. Los grandes empresarios de América Latina se enfrentan a una caída de las exportaciones de materias primas, depreciación de las divisas latinoamericanas y demandas de mayor redistribución de la riqueza por una parte de la población y algunas élites políticas. El papel que los inversores norteamericanos y europeos jueguen en esta situación, tal vez comprando más acciones a un precio bajo, puede cambiar la configuración de las élites económicas latinoamericanas.

Referencias bibliográficas

- América Economía. «Multilatinas 2014». *América Economía*, (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 31.07.2015] <http://rankings.americaeconomia.com/multilatinas-2014/>
- Bull, Benedicte; Castellacci, Fulvio y Kasahara, Yuri. *Business Groups and Transnational Capitalism in Central America: Economic and Political Strategies*. Nueva York: Springer, 2014.
- Cannon, Barry. *The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State*. Nueva York: Routledge, 2016.
- Cárdenas, Julián. «Are Latin America's corporate elites transnationally interconnected? A network analysis of interlocking directorates». *Global Networks*, vol. 15, n.º 4 (2015), p. 424-445. <https://doi.org/10.1111/glob.12070>
- Cárdenas, Julián. «Enredando a las elites empresariales en América Latina: análisis de redes de interlocking directorates y propiedad en México, Chile, Perú y Brasil». *América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales*, vol. 73, (2016), p. 15-44. <https://doi.org/10.14201/alh2016731544>
- Cárdenas, Julián. «Exploring the Relationship between Business Elite Networks and Redistributive Social Policies in Latin American Countries». *Sustainability*, vol. 12, n.º 1 (2020), p. 13. <https://doi.org/10.3390/su12010013>
- Carroll, William K. y Fennema, Meindert. «Is there a transnational business community?». *International Sociology*, vol. 17, n.º 3 (2002), p. 393-419. <https://doi.org/10.1177/0268580902017003003>
- Carroll, William K. y Sapinski, Jean Philippe. «Neoliberalism and the transnational capitalist class». En: Springer, Simon, Birch, Kean y Macleavy, Julie (eds.). *The Handbook of Neoliberalism*. Nueva York: Routledge, 2016, p. 25-35.
- Casanova, Lourdes; Fraser, Matthew; Hoerber, Henning; Golstein, Andrea; Molina, Ramón; Arruda, Carlos y Almeida, André. *From Multilatinas to Global Latinas: The New Latin American Multinationals*. Washington, DC: Inter-American Development Bank, 2009.
- CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2014: integración regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante* Santiago de Chile: CEPAL, 2014.
- CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018*. Santiago de Chile: CEPAL, 2018.
- Chardavoine, Julia. «Las élites corporativas de México (2000-2015): dinámicas del capitalismo familiar». *Revista Española de Sociología*, vol. 29, n.º 3 (2020), p. 579-593. <http://dx.doi.org/10.22325/fes/res.2020.36>

- Cox, Ronald W. «Transnational Capital, the US State and Latin American Trade Agreements». *Third World Quarterly*, vol. 29, n.º 8 (2008), p. 1.527-1.544. <https://doi.org/10.1080/01436590802528598>
- Cusack, Asa K. *Venezuela, ALBA, and the Limits of Postneoliberal Regionalism in Latin America and the Caribbean*. Londres: Springer, 2018.
- De la Torre, Verónica. «La acción colectiva transnacional en la acción colectiva de los movimientos sociales y de las Relaciones Internacionales». *CONfines de relaciones internacionales y ciencia política*, vol. 7, n.º 14 (2011), p. 45-72.
- Durand, Francisco. *Odebrecht: La empresa que capturaba gobiernos*. Lima: Oxfam, 2018.
- Fischer, Karin y Plehwe, Dieter. «Neoliberal Think Tank Networks in Latin America and Europe: Strategic Replication and Cross-National Organizing». En: Salas-Porras, Alejandra y Murray, Georgina (eds.). *Think Tanks and Global Politics: Key Spaces in the Structure of Power*. Nueva York: Palgrave Macmillan US, 2017, p. 159-186.
- Gibbs, David. «The military-industrial complex in a globalized context». En: Cox, Ronald W. (ed.). *Corporate Power and Globalization in US Foreign Policy*. Nueva York: Routledge, 2012, p. 95-113.
- Graaff, Nana de. «China Inc. goes global. Transnational and national networks of China's globalizing business elite». *Review of International Political Economy*, vol. 27, n.º 2 (2020), p. 208-233. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1675741>
- Guzmán-Concha, César y Cárdenas, Julián. «Captura del Estado y Redes Empresariales en Chile». *Poderes fácticos, corrupción y control en la sociedad digital*. Santiago de Chile: Heinrich Böll Stiftung, 2019, p. 13-39 (en línea) [Fecha de consulta: 11.11.2019] https://cl.boell.org/sites/default/files/poderes_facticos_2019.pdf
- Heemskerk, Eelke M.; Fennema, Meindert y Carroll, William K. «The global corporate elite after the financial crisis: evidence from the transnational network of interlocking directorates». *Global Networks*, vol. 16, n.º 1, (2016), p. 68-88. <https://doi.org/10.1111/glob.12098>
- Heemskerk, Eelke M. y Takes, Frank W. «The Corporate Elite Community Structure of Global Capitalism». *New Political Economy*, vol. 21, n.º 1 (2016), p. 90-118. <https://doi.org/10.1080/13563467.2015.1041483>
- Kentor, Jeffrey y Jang, Yong Suk. «Yes, There is a (Growing) Transnational Business Community: A Study of Global Interlocking Directorates 1983-98». *International Sociology*, vol. 19, n.º 3 (2004), p. 355-368. <https://doi.org/10.1177/0268580904045345>
- Khanna, Tarun y Palepu, Krishna. «Emerging market business groups, foreign intermediaries, and corporate governance». En: Morck, Randall K. (ed.). *Concentrated Corporate Ownership*. Chicago: University of Chicago Press, 2000, p. 265-294.

- Knoke, David. «Power Networks». En: Best, Heinrich y Higley, John (eds.). *The Palgrave Handbook of Political Elites*. Londres: Palgrave Macmillan, 2018, p. 539-561.
- Lefort, Fernando. «Ownership structure and corporate governance in Latin America». *Revista Abante*, vol. 8, n.º 1 (2005), p. 55-84.
- Luna, Matilde. «El vínculo entre las élites empresariales mexicanas y los expertos: expandiendo las fronteras del mercado». *Revista Española de Sociología*, vol. 29, n.º 3 (2020), p. 487-501. <http://dx.doi.org/10.22325/fes/res.2020.31>
- Mesquita Moreira, Mauricio. *Connecting the Dots: A Road Map for Better Integration in Latin America and the Caribbean*. Nueva York: Inter-American Development Bank, 2018.
- Muhr, Thomas. «Counter-globalization and a revolutionary politics of place, space and scale: the transnational construction of the ALBA-TCP in Nicaragua, El Salvador and the USA». En: Muhr, Thomas (ed.). *Counter-Globalization and Socialism in the 21st Century: The Bolivarian Alliance for the People of Our America*. Nueva York: Routledge, 2013, p. 46-62.
- Pattberg, Philipp. «The Institutionalization of Private Governance: How Business and Nonprofit Organizations Agree on Transnational Rules». *Governance*, vol. 18, n.º 4 (2005), p. 589-610. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2005.00293.x>
- Petz, David y Murray, Georgina. «The financialization of global ownership». En: Murray, Georgina y Scott, John (eds.). *Financial Elites and Transnational Business: Who Rules the World?* Northampton: Edward Elgar, 2012, p. 24-53.
- Robinson, William I. y Harris, Jerry. «Towards a Global Ruling Class? Globalization and the Transnational Capitalist Class». *Science and Society*, vol. 64, n.º 1 (2000), p. 11-54.
- Rodríguez, José A., Cárdenas, Julián y Oltra, Christian. «Redes de Poder Económico en Europa». *Sistema*, n.º 194 (2006), p. 3-44.
- Salas-Porras, Alejandra. *La Economía Política Neoliberal en México ¿Quién la diseñó y cómo lo hizo?* México: Foca Ediciones y Distribuciones Generales, 2017.
- Salvaj, Erica y Couyoumdjian, Juan Pablo. «‘Interlocked’ business groups and the state in Chile (1970–2010)». *Business History*, vol. 58, n.º 1 (2016), p. 129-148. <https://doi.org/10.1080/00076791.2015.1044517>
- Sassen, Saskia. *Expulsions: Brutality & Complexity in the Global Economy*. Cambridge: Belknap Press, 2014.
- Sklair, Leslie. *The transnational capitalist class*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2001
- Stone, Diane; Oliveira, Osmany Porto de y Pal, Leslie A. «Transnational policy transfer: the circulation of ideas, power and development models». *Policy and*

- Society*, vol. 39, n.º 1 (2020), p. 1-18. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1619325>
- UNCTAD-United Nations Conference on Trade and Development. «World Investment Report». *UNCTAD*, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 03.07.2020] <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020>
- Van der Pijl, Kees. *Transnational Classes and International Relations*. Londres: Routledge, 1998.
- Van Veen, Kees. «How did the financial crisis affect the transnationality of the global financial elite? One step forward and one step back». *Global Networks*, vol. 18, n.º 1 (2018), p. 105-126. <https://doi.org/10.1111/glob.12182>
- Vitali, Stefania; Glattfelder, James B. y Battiston, Stefano. «The Network of Global Corporate Control». *PLoS ONE*, vol. 6, n.º 10, (2011), p. 1-6. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025995>
- Weyland, Kurt. *Bounded Rationality and Policy Diffusion: Social Sector Reform in Latin America*. Princeton: Princeton University Press, 2006
- World Bank. «World Bank Open Data». *World Bank*, (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 08.08.2019] <http://data.worldbank.org/>

Las derechas neopatriotas en América Latina: contestación al orden liberal internacional

Neo-patriotic far-right forces in Latin America: contesting the international liberal order

José Antonio Sanahuja

Catedrático de relaciones internacionales, Universidad Complutense de Madrid. Director de la Fundación Carolina. sanahuja@cps.ucm.es.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6806-5498>

Camilo López Burian

Profesor adjunto, Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República de Uruguay. camilo.lopez@cienciassociales.edu.uy.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1185-854X>

Cómo citar este artículo: Sanahuja, José Antonio y López Burian, Camilo. «Las derechas neopatriotas en América Latina: contestación al orden liberal internacional». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 41-63. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.41

Resumen: La crisis de 2008 marca el fin de la globalización como etapa histórica y orden hegemónico. El fin del ciclo de las materias primas, que expresa ese cambio en América Latina, es el marco del ascenso de nuevas fuerzas de ultraderecha neopatriotas, de perfil nacionalista y soberanista, con fuertes retóricas antiglobalistas. Examinando factores de estructura y de agencia globales y nacionales, este artículo parte del ascenso de las derechas latinoamericanas neopatriotas para analizar sus matrices de política exterior e inserción internacional, mostrando como elementos comunes el alineamiento con Estados Unidos y la contestación a las normas y las instituciones regionales y al multilateralismo. Finalmente, examina en qué medida el ascenso de las nuevas derechas latinoamericanas forma parte de una tendencia o ciclo global de contestación al orden internacional liberal y la globalización.

Palabras clave: América Latina, derecha, crisis, globalización, antiglobalismo, contestación, orden liberal internacional

Abstract: The 2008 crisis marked the end of globalisation as a historical phase and hegemonic order. The end of the commodities cycle, an expression of that change in Latin America, is the context for the rise of new neo-patriotic far-right forces – nationalist, sovereigntist movements deploying distinctly anti-globalist rhetoric. Global and national structural and agency factors are examined and the paper begins with the rise of Latin American neo-patriotic right-wing movements. Analysing their foreign policy and international integration matrices shows that common elements include alignment with the United States and the contestation of multilateralism and regional institutions and norms. Finally, consideration is given to the extent to which the rise of new Latin American right-wing movements form part of a global trend or cycle of contesting the liberal international order and globalisation.

Key words: Latin America, right wing, crisis, globalisation, anti-globalism, contestation, international liberal order

La crisis de 2008 marca el fin de la globalización, entendida como estructura histórica y orden internacional hegemónico. Ello comporta cambios estructurales en los modelos productivos –la división internacional del trabajo– y, tanto por razones de estructura como de agencia, pone en cuestión las instituciones, normas e ideas en las que se basó el orden liberal internacional de las tres décadas anteriores¹. Ese cambio, de naturaleza estructural, tiene en América Latina rasgos propios: supone el fin del ciclo de las materias primas, con el que se insertó en la globalización, y su dinámica de expansión económica y avances sociales (Sanahuja, 2017b), situando a la región en un escenario más adverso en el comercio y las finanzas internacionales, de mayor vulnerabilidad externa y menor crecimiento. Como consecuencia, los avances sociales de ese ciclo expansivo –mejoras en el empleo y reducción de la pobreza, leve descenso de la desigualdad,

Las derechas neopatriotas latinoamericanas son parte de una tendencia o ciclo global de ascenso de la ultraderecha y el nacionalismo extremo que cuestiona la democracia liberal, la globalización y el orden internacional liberal internacional.

mayor inclusión social y expansión de las clases medias– se estancan o retroceden. Ello conforma un escenario de demandas sociales insatisfechas, menor capacidad de los estados para afrontarlas, descontento social y reclamos de cambio político que han llevado, a lo largo del «super-

periciclo» electoral 2017-2019, a la derrota del oficialismo en la mayoría de los países de la región y al ascenso de nuevas fuerzas de derecha «neopatriota», cuyo principal exponente es Jair Bolsonaro en Brasil. Se trata de un fenómeno distintivo respecto a etapas anteriores, ya que estas nuevas fuerzas de derecha se distinguen con claridad de la derecha liberal-conservadora presente hasta el momento en la región. Por otro lado, son la expresión latinoamericana –con sus características particulares– de la derecha y ultraderecha neopatriota en ascenso a escala global, representada por Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en el Reino Unido, Vladimir Putin en la Federación Rusa, Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, o Narendra Modi en la India, entre otros. Con ello, América Latina también es parte de un fenómeno global asociado a esas nuevas derechas: el cuestionamiento o contestación del orden liberal internacional, el regionalismo, y el multilateralismo (Önis y Kutlay, 2020).

Considerando factores de estructura y de agencia, este artículo aborda el surgimiento de las nuevas derechas neopatriotas en América Latina, teniendo en cuenta tanto sus dinámicas nacionales como su relación con la crisis de la

1. Para la caracterización detallada de la crisis de la globalización, véase Sanahuja (2017a y 2019b).

globalización. Se argumenta que existen factores causales de orden estructural imputables a esa crisis, así como factores de agencia presentes en cada país. Unos y otros, en conjunto, explican el ascenso electoral y en la esfera pública de estas nuevas derechas neopatriotas en el marco de los procesos de cambio político presentes en la región. El artículo señala sus características distintivas respecto a la más tradicional derecha liberal-conservadora. Y, a partir del caso brasileño, plantea algunas ideas sobre las visiones del mundo y las matrices de política exterior de estas derechas neopatriotas latinoamericanas y sus rasgos comunes, como el alineamiento con Estados Unidos y la contestación al regionalismo y al multilateralismo. En conclusión, más allá de los actores, mediaciones y especificidades nacionales y regionales, se sitúa a estas fuerzas dentro de una tendencia o ciclo global de ascenso de la ultraderecha y el nacionalismo extremo y, con ello, de cuestionamiento de la democracia liberal y de contestación a la globalización y al orden internacional vigentes.

Las nuevas derechas neopatriotas y sus rasgos distintivos

El ascenso de las derechas neopatriotas en América Latina no es solo una reacción contestataria al anterior ciclo de gobiernos progresistas enmarcada en el tradicional clivaje izquierda-derecha. En esas nuevas derechas se expresa también el nuevo clivaje normativo entre nacionalismo y cosmopolitismo presente en otras latitudes y, en particular, entre una posición favorable o contraria frente a la globalización y el orden liberal internacional. Por un lado, existen derechas liberal-conservadoras «globalistas» y cosmopolitas y, por otro, nuevas fuerzas de derecha y ultraderecha, que aquí denominamos «neopatriotas», que son marcadamente nacionalistas, contrarias a la globalización, e impugnan ese orden. Así, aunque unas y otras cuestionan el legado de organización regional de la etapa anterior, las segundas tienen como elemento diferenciador el nacionalismo extremo y el rechazo al globalismo, al orden liberal internacional y al multilateralismo, en cuanto a sus visiones de la política exterior.

En cambio, las fuerzas de derecha liberal-conservadora –identificadas con la visión del mundo de inspiración neoliberal del Foro Económico Mundial de Davos– son favorables a la democracia liberal y al libre comercio; asumen el *globalismo* como ideología y su institucionalización normativa u *ordoglobalismo* (Slobodian, 2018). Es decir, defienden la integración económica global y se alinean con las visiones de la tecnocracia de los organismos económicos multilaterales. En América Lati-

na, como ha señalado Cannon (2016), esta tendencia, que cuenta con una mayor trayectoria, agrupa gobiernos como los de Sebastián Piñera en Chile (2010-2014 y 2018 hasta el presente), Mauricio Macri en Argentina (2015-2019), Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2016-2018), Enrique Peña Nieto en México (2012-2018) o Michael Temer en Brasil (2016-2018). Esa visión, marcadamente ideologizada, impidió observar que la globalización ya se encontraba en crisis y en retroceso, que el sistema internacional se tornaba más cerrado y proteccionista de la mano de nuevos gobiernos de ultraderecha –en particular, el de los Estados Unidos de Donald Trump– y no iba a atender sus reclamos de apertura (Sanahuja y Comini, 2018).

Las nuevas derechas neopatriotas se caracterizan por mostrar un perfil ultranacionalista y soberanista, así como una fuerte retórica antiglobalista. Y más que a los sectores medios y altos, que se sienten más cómodos con la apertura económica y cultural, logran movilizar a quienes se sienten amenazados por la globalización, sea por razones socioeconómicas o por sus implicaciones socioculturales –rechazo a las sociedades abiertas y a la diversidad cultural, étnica o de orientación sexual–, especialmente a clases medias y medias bajas. Recurre a un discurso nacionalista y populista y, en algunos casos, se asocia a actores religiosos que reivindican valores tradicionales y un discurso de «ley y orden» relacionado con la remilitarización de la política (Verdes-Montenegro, 2019). Lo ilustran, sobre todo, la coalición que llevó al Gobierno de Brasil a Jair Bolsonaro en 2018, la que impulsó el golpe de Estado en Bolivia en 2019 o nuevas fuerzas como el Partido Republicano en Chile o Restauración Nacional en Costa Rica. En el ámbito económico, estas derechas tienen una relación ambivalente con el mercado global, como en el caso de Brasil, en el que mantienen el enfoque neoliberal arraigado en las derechas latinoamericanas (Cannon, 2016) coexistiendo con el rechazo, en clave nacionalista, a las instituciones regionales o globales de las que dependen los mercados abiertos.

De esta forma, el clivaje nacionalismo versus cosmopolitismo que se plantea en torno a la globalización –eminentemente ideológico– es el más relevante para caracterizar a estas nuevas derechas neopatriotas, que así se distinguen de las otras derechas más asentadas y abiertamente globalistas. En el marco analítico planteado por Luna y Rovira (2014: 3), respecto a la cuestión de la desigualdad, los posicionamientos políticos y el elemento sociológico (base electoral) serían los elementos distintivos en el tradicional clivaje o eje izquierda-derecha. Aquí se observa que unas y otras derechas comparten posiciones en torno a la cuestión de la desigualdad, sobre la que tienen posiciones muy similares; sin embargo, la hostilidad a la globalización y el multilateralismo, así como los sectores sociales a los que movilizan, son los elementos, en este caso, sobre los que descansa esa distinción. Ellos permiten diferenciar unas y otras derechas y, en particular, a la nueva ultraderecha representada por líderes como Trump y Bolsonaro, construida a partir del clivaje patriotas versus globalistas (Mudde, 2019: 20).

Asimismo, es importante señalar que, aun teniendo en algunos casos rasgos populistas, estas nuevas derechas neopatriotas no pueden ser subsumidas dentro de esa categorización, cuya definición, además, es contestada y poco precisa. En el contexto de América Latina, como subrayan Mudde y Rovira (2017: 3), el término *populismo* se ha utilizado de manera muy distinta: puede aludir al planteamiento emancipatorio y de democracia radical de Laclau y Mouffe, o al utilizado por economistas liberales, de manera peyorativa, para cuestionar políticas redistributivas que suponen una gestión macroeconómica «irresponsable». También se utiliza, a menudo, de forma poco precisa y con connotaciones negativas para cuestionar liderazgos personalistas y estrategias políticas de movilización basadas en la apelación directa al pueblo, sin mediaciones institucionales propias de la democracia representativa. Más allá de estos usos politizados e inadecuados, desde el punto de vista analítico, Mudde y Rovira (2017: 6 y 27-29) abogan por una definición ideacional del término populismo: más que una ideología «gruesa» o «densa» (*thick ideology*), se trataría de una ideología «delgada» o «tenue» (*thin ideology*), eminentemente discursiva, que contrapone, de manera dualista, al pueblo y la élite, que niega el pluralismo y que puede asociarse tanto a elementos ideológicos de derechas como de izquierdas.

El clivaje nacionalismo versus cosmopolitismo que se plantea en torno a la globalización –eminentemente ideológico– es el más relevante para caracterizar a estas nuevas derechas neopatriotas.

En este sentido, aunque comparten algunos de sus rasgos característicos, y es parte de su origen, las nuevas derechas neopatriotas tampoco responden bien a lo que Cas Mudde (2007 y 2017) define como la «derecha populista radical», que cuenta con una larga trayectoria en los países avanzados. Según este autor, para que una fuerza política pueda ser encuadrada dentro de esa categoría, debe contar necesariamente con estos tres elementos definitorios: a) el nativismo, entendido como combinación de nacionalismo y xenofobia, orientado a una suerte de *etnocracia*, de base étnica, cultural y/o religiosa, en la que se contrapone a los autóctonos con la inmigración o el *otro*, y que niega la diversidad; b) el autoritarismo, que securitiza y criminaliza a quien no responde a un concepto conservador y restringido de *ley* y *orden* marcadamente tradicional y patriarcal, y c) el populismo, al contraponer al *pueblo* con la élite o la clase política. De hecho, en materia económica, estas fuerzas de derecha populista radical oscilan entre el neoliberalismo y planteamientos más estatistas o *welfaristas*, en respuesta a demandas de protección social frente al mercado o a las élites económicas. Contrarias, por lo general, a la globalización, la definen más en clave sociocultural –como rechazo a la inmigración, al pluralismo y a la diversidad cultural–, que en términos económicos. Si bien esta derecha ha sido tradicionalmente hostil a

la globalización y al multilateralismo, así definida (Mudde, 2007: 187 y 193), esa oposición no ha sido uno de sus rasgos definitorios, como sí lo es en el caso de las nuevas derechas neopatriotas.

Finalmente, es necesario precisar qué se entiende por emergencia o ascenso de la nueva derecha neopatriota en cuanto actores políticos. Esta última noción alude tanto a la identidad e intereses desde los que un actor proyecta su estrategia, como a los recursos que utiliza para implementarla (Acuña y Chudnovsky, 2013: 36-49). En cuanto al carácter emergente, se refiere a su irrupción como novedad y actitud desafiante, así como al papel que adquieren en el sistema político, el cual puede definirse a partir de su labor en la oposición, su capacidad de veto, de forjar una coalición o de formar Gobierno (Sartori, 1980). Sin embargo, no se limita a esa dimensión: también se refiere a su capacidad de construcción discursiva y de agenda, que obliga a otros actores a reajustar sus posiciones. Al respecto, la derecha liberal-conservadora, en particular, se ve forzada por razones de competencia electoral a tomar distancia, o bien a asumir posiciones y agendas de estas nuevas derechas neopatriotas.

La crisis de la globalización como *gran transformación*: expresiones latinoamericanas

Tal como argumenta John Ikenberry (2018: 10), la crisis del orden liberal internacional es la expresión de una *gran transformación* de sus bases económicas y sociales que, en términos de Karl Polanyi (2007), pone en cuestión las asunciones colectivas sobre la democracia social y la legitimidad de todo el sistema. El cuestionamiento de la democracia liberal, de las relaciones de mercado, así como del orden liberal internacional, que plantea la ultraderecha a escala global puede verse como un «doble movimiento» o «contramovimiento» por el que las sociedades reclaman la protección del Estado frente al impacto, riesgos e incertidumbres de una globalización en crisis (ibídem).

Desde el método de las estructuras históricas de Robert W. Cox (1981), la globalización se puede considerar como una estructura hegemónica que conforma un sistema de dominación a través de un orden internacional hegemónico. Por ende, la crisis de la globalización se puede entender como «crisis orgánica» de ese sistema y, por ello, como crisis de hegemonía (Sanahuja, 2017a y 2019b). Los acontecimientos que marcan la crisis de la globalización —como la crisis financiera de 2008 o, para América Latina, el fin del ciclo de las materias primas— se pueden percibir, en ese contexto de crisis de hegemonía, como *coyunturas críticas*. A partir de un

shock exógeno que afecta a las estructuras históricas y genera una *encrucijada*, se abren o cierran opciones en términos de agencia para los actores sociales. Tiene un carácter fundacional o *fundante*—o, en su caso, *refundante*— en términos de ascenso de nuevos actores políticos, de nueva correlación de fuerzas, de cuestionamiento y redefinición de las normas e instituciones en las que se basa una estructura histórica, y de oportunidades clave para construir discursivamente nuevas narraciones y sentido y, con ello, nuevos principios y criterios de legitimidad².

Estas dinámicas tienen factores causales locales, nacionales y en cada región, pero son parte de una dinámica global que vincula la crisis de la globalización con el «malestar en la democracia» (Sanahuja, 2019a). En los países avanzados, ese malestar responde a expectativas en descenso ante la erosión de los derechos sociales, la pérdida de ingresos, la precarización del trabajo y las relaciones sociales, así como la tendencia a una mayor desigualdad, que empieza a abrir brechas entre ganadores y perdedores de la globalización, o que se perciben como tales (Lakner y Milanovic, 2016). Además, las transformaciones económicas que se han acelerado tras la crisis de 2008 —en parte impulsadas por el cambio tecnológico— son un factor añadido que pone en cuestión el relato tecnooptimista de la globalización y las certezas sobre las que se ha basado el *contrato social* básico del que depende la legitimidad del orden social y político, tanto en el plano doméstico como en el internacional.

Con esta lente deben señalarse los profundos cambios sociales que ha experimentado América Latina: al calor de la globalización y del auge de las materias primas, se produjo una notable expansión de las clases medias, surgiendo una amplia franja de población *no pobre* pero vulnerable que, como la anterior, ha estado expuesta a los riesgos de una recesión económica que ya está presente. Este escenario supone una difícil combinación de desigualdad persistente y crecientes expectativas sociales en materia de consumo —acceso a servicios públicos, movilidad social ascendente y buen gobierno—, y también de frustración y descontento, al comprobarse que aquellas no se pueden materializar por varios factores interrelacionados: la recesión económica, la baja calidad de las políticas públicas y/o la persistente discriminación

La crisis del orden liberal internacional es expresión de una gran transformación de sus bases económicas y sociales que pone en cuestión las asunciones colectivas sobre la democracia social y la legitimidad del sistema. Los neopatriotas encabezan un «contramovimiento» frente al impacto, riesgos e incertidumbres de una globalización en crisis.

2. Sobre este concepto véase, por ejemplo, Capoccia y Kelemen (2007).

o segmentación en su acceso o provisión, la corrupción y la falta de transparencia, así como la resistencia de las élites a ceder privilegios o abrirse al cambio social. Estos sectores medios, junto con otros sectores más populares, fueron activados políticamente durante el ciclo del giro a la izquierda, pero ello no significa que hayan seguido apoyando a esas fuerzas sin una respuesta a sus expectativas y, aún más, incluso pueden empezar a cuestionar el conjunto del sistema político.

De hecho, desde 2014, con el fin de ciclo de las materias primas, la actividad económica se ha desacelerado y, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019: 11), incluso antes del choque económico de la COVID-19, el período 2014-2020 ha sido el de menor crecimiento de los últimos 70 años. Como consecuencia, los avances sociales se han detenido, las sociedades son más vulnerables y ha vuelto a aumentar la pobreza, afectando especialmente a las nuevas clases medias y de la franja de personas que, no siendo pobres, son aún vulnerables, con empleos precarios, de bajos ingresos, y escasa o ninguna protección social. Todo esto ocurre en la región con los peores índices de desigualdad de renta a nivel mundial, a la que se suma la arraigada desigualdad generada por mecanismos de exclusión basados en el género o la etnia.

Crisis de la globalización, *malestar en la democracia*, *voto indignado* y aumento de la protesta social van de la mano. El resultado es una tendencia global de creciente desafección política y crisis de representación, que erosiona los sistemas de partidos y la legitimidad de la democracia liberal. Ello supone un amplio cuestionamiento de las élites, pone en cuestión las sociedades abiertas y el reconocimiento de la diversidad y, finalmente, se traduce en la aparición de líderes y fuerzas políticas que, sea en la oposición o en el Gobierno, impugnan la globalización y el orden liberal internacional.

El ciclo electoral 2017-2019 mostró un escenario más fragmentado y polarizado, y la gran mayoría de fuerzas y líderes políticos no renovaron su mandato. En parte, esto responde a una amplia crisis de representación y al voto de protesta contra las élites y la mayor desconfianza en partidos e instituciones (Zovatto, 2019). Factores importantes son la corrupción y falta de transparencia y rendición de cuentas, así como la baja calidad de los servicios públicos y el aumento de la violencia y la inseguridad. Como se indicó, el ascenso de las clases medias, junto a la presencia de sectores vulnerables, suponen demandas crecientes sobre gobiernos débiles para proveer bienes públicos, afrontar conflictos distributivos, regular los mercados protegiendo a la ciudadanía, a los consumidores y al territorio y el medio ambiente, así como gestionar las políticas públicas.

La creciente insatisfacción de la ciudadanía de la región con la forma en la que funcionan las democracias muestra los peores resultados de la serie histórica del Latinobarómetro desde 1995. La proporción de personas insatisfechas pasó de 51% a 71% de 2009 a 2018 (Latinobarómetro, 2018). Un factor importante

es la «captura de políticas» por parte de las élites (Oxfam, 2018). Entre 2006 y 2018, la proporción de personas que pensaba que se gobernaba «para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio» pasó del 61% al 79%, y las cifras más elevadas se encontraban en Brasil (90%) y México (88%). En ambos países, el «voto indignado» explicaría la elección de presidentes que se perciben como ajenos al *establishment* tradicional (Latinobarómetro, 2018: 38-39).

En este sentido, aunque con rasgos propios, América Latina se sincroniza con una tendencia global de desafección democrática y de cuestionamiento del orden liberal internacional. El «voto indignado», cuando no la protesta social directa, expresa la «rebelión contra las élites» de la que se nutre y, a la vez, retroalimenta el discurso «pueblo versus élites» también presente en América Latina. En la propagación de estas narrativas y discursos tienen un papel clave unos medios de comunicación más polarizados e ideologizados que nunca. Incide también el manejo de las emociones colectivas a través de las redes sociales, cuyos algoritmos –basados en las preferencias personales– generan bucles cognitivos autorreferenciales que potencian esos discursos y transforman la arena política en muchos países, tornándola más polarizada e ideologizada. Capaces de responder con mucha rapidez, dichas redes también fragmentan la esfera pública frente a unos mecanismos de deliberación, representación y mediación política de la democracia liberal en franco retroceso, rezagados respecto a los cambios socioeconómicos y tecnológicos actuales. El «malestar en la democracia» que caracteriza a la región conduce así al cuestionamiento de las élites, las normas y las instituciones, así como de los mecanismos de gobernanza tanto en el plano nacional como transnacional. En la región, fueron ejemplos de esto las izquierdas cosmopolitas y globalistas representadas por el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, o las izquierdas antiglobalistas del Movimiento al Socialismo boliviano o el chavismo venezolano. Posteriormente, ese cuestionamiento ha alcanzado a las derechas globalistas, como el Gobierno de Michel Temer, también en Brasil, el de Mauricio Macri en Argentina, o el de Peña Nieto en México.

A lo anterior se suman las tensiones sociales que han irrumpido en América Latina a lo largo de 2019. En un plazo breve, un buen número de países (Honduras, Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia) se han visto sacudidos por amplias protestas sociales. Perú también vivió una crisis política relacionada con la corrupción vinculada al caso Odebrecht. A ello se suma la crisis de Venezuela, que ha generado un éxodo poblacional masivo. Con ello, el panorama de relativa estabilidad que ofrecía América Latina de la mano de un ciclo de gobiernos liberal-conservadores se evaporó en pocos meses. Sin embargo, en tanto factores causales de carácter estructural, la crisis de globalización y el malestar en la democracia no presuponen que emerja una respuesta política predeterminada. Vista en términos de *coyuntura crítica*, esta situación amplía las posibilidades para la agencia y el cambio; pero, que la respuesta se encamine por vías electo-

rales o irrumpa a través de la protesta social, o que sea inducida, capitalizada o encauzada por fuerzas políticas progresistas, de ultraderecha, o tenga carácter anómico, dependerá de la mediación de actores y de circunstancias o especificidades tanto globales como regionales y nacionales. La emergencia de una nueva derecha antiglobalista o neopatriota en la región debe entenderse en ese contexto de cambio, e integra tanto factores causales de estructura como de agencia que exigen, en cada caso, el correspondiente esfuerzo de análisis e interpretación.

En suma, la crisis de la globalización define, de esta manera, un escenario más propicio para la contestación al orden internacional vigente por parte de nuevos actores políticos y sociales. Esta *contestación* se refiere a «la gama de prácticas sociales que expresan discursivamente la desaprobación de las normas» (Wiener, 2017: 112). De manera más específica, Hooghe *et al.* (2019) analizan la contestación a las organizaciones internacionales como la disputa ideologizada en torno a las normas y mecanismos que les brindan legitimidad de origen, proceso y resultados. Se trata, en suma, de un proceso de repolitización y cuestionamiento del orden liberal internacional, en sus dimensiones nacional, regional y global –y de sus discursos universalistas y cosmopolitas– y, en particular, de las teleologías de progreso humano de la globalización en términos de inclusión, seguridad y certeza. Ese cuestionamiento se dirige tanto a la derecha globalista como a la izquierda cosmopolita, y encuentra un eco favorable en gran parte de los perdedores o autopercebidos perdedores de este proceso, sea en términos materiales o simbólicos (Grande y Kriesi, 2012; Grande y Hutter, 2016; Höglinger, 2016). Ello comporta un «retorno de la política» o repolitización que, en este caso, adopta un tono marcadamente populista, nacionalista y anticosmopolita, con un discurso de protección que la ultraderecha invoca con éxito (Zürn, 2014; Mudde y Rovira, 2017) tanto en su dimensión económica, como sociocultural (Kriesi *et al.*, 2012). Forma parte de un movimiento reaccionario o *backlash* sociocultural (Norris e Inglehart, 2019) que alientan nuevos líderes y partidos que logran definir la agenda política y movilizar a sectores desafectos (Kriesi, 2012; Dolezal, 2012).

En América Latina, el ascenso de los sectores sociales subalternos y/o excluidos generó también un movimiento de rechazo que aparece, en particular, en el discurso punitivista que marcó los ciclos electorales brasileño y costarricense en 2018 (Natanson, 2018) y uruguayo en 2019, junto a la reivindicación –a menudo alentada por las iglesias evangélicas– de los valores tradicionales de un pasado imaginario donde la patria, la cultura, la comunidad, la familia y el orden tradicional no eran subvertidos o corrompidos por las demandas de reconocimiento de los derechos de sectores subalternos en ascenso, de la diversidad social o de los valores de apertura del cosmopolitismo globalizador. Un ejemplo claro es el rechazo virulento a la agenda de derechos de las mujeres o de los colectivos LGBTIQ, con el cuestionamiento de una supuesta «ideología de género».

La emergencia de «neopatriotas» en América Latina

En diferentes países de la América Latina, las derechas neopatriotas aparecen como actores emergentes que impactan en el sistema a partir de su ideología y el efecto de su acción política y discursiva, llegando su ascenso, en algunos casos, a que lideren el Gobierno o formen parte de las coaliciones de gobierno. Como se verá a continuación, varios ejemplos ilustran la emergencia y el ascenso de estos actores en la región. Se seleccionaron casos para ilustrar las diferentes formas en que los neopatriotas influyen en la toma de decisiones y, en concreto, se toma Brasil como caso típico para profundizar y mostrar en la siguiente sección el vínculo entre las categorías conceptuales que se proponen en este artículo y sus premisas teóricas, además de la plausibilidad de la inferencia descriptiva que planteamos.

Así, establecemos los siguientes grupos de países: un primer grupo, con los casos de Costa Rica y Chile como ejemplos, muestra a actores políticos emergentes que logran impactar discursivamente en el sistema y la agenda política, generando reacciones en otros actores; un segundo grupo lo constituye Uruguay, donde la derecha neopatriota integra la coalición de gobierno; y, por último, un tercer grupo, integrado por Brasil y Colombia, presenta a las derechas neopatriotas en el Gobierno.

En Costa Rica, la candidatura ultraconservadora del pastor evangélico Fabrizio Alvarado, líder de Restauración Nacional (RN), se impuso en las elecciones presidenciales de 2018 en la primera vuelta, y cerca estuvo de lograr el triunfo en la segunda al quedar a corta distancia de Carlos Alvarado, candidato progresista del Partido de Acción Ciudadana. Con el respaldo evangélico, Fabrizio Alvarado polarizó la campaña con su rechazo al matrimonio igualitario, como respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a petición del Gobierno costarricense, había declarado su constitucionalidad. RN utilizó esta circunstancia para cuestionar, en clave soberanista, la sujeción de Costa Rica a las organizaciones y normas internacionales. El rápido ascenso de RN dislocó el tradicional sistema de partidos en el país, y mostró que las democracias más asentadas —en las que se dan por hechos ciertos consensos políticos— y las sociedades relativamente más cohesionadas también se ven afectadas por

En América Latina las derechas neopatriotas impactan en el sistema a partir de su ideología y acción política y discursiva: en Costa Rica y Chile influyen discursivamente en el sistema y la agenda política, en Uruguay integran la coalición de gobierno y en Brasil y Colombia encabezan el Gobierno.

los cambios estructurales –la creciente desintegración social– y por factores de agencia como la aparición de actores políticos que se presentan como *outsiders* del sistema, con planteamientos soberanistas, retórica reaccionaria y, en ocasiones, con tintes religiosos y discursos y prácticas de polarización. El ascenso de RN evidencia, en concreto, que esos cambios generan espacios más favorables a «emprendedores políticos» y a dinámicas de polarización, en las que se cruzan factores socioeconómicos y las «guerras culturales» en torno a los valores y la identidad (Fuentes, 2018).

En Chile, por su parte, la derecha adoptó un programa más liberal y moderado a fin de ganar competitividad electoral, dejando «huérfana» a una parte de su electorado (Rovira, 2019) potencialmente *movilizable* por un emprendedor político neopatriota frente al desgaste de la matriz globalista. En 2019, José Antonio Kast, exdiputado de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), fundó el Partido Republicano (PR) que logró el 8% de los votos en las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Este partido tiene un discurso excluyente, autoritario, punitivista y securitario, y es abiertamente reaccionario en materia de aborto e igualdad de género. Reivindica el legado del pinochetismo y defiende propuestas ultraconservadoras, que han sido secundadas por las iglesias evangélicas, frente a las demandas para reformar la Constitución de 1980. En este sentido, apela a un marco religioso, moral e ideológico que afirma la desigualdad *natural* entre los seres humanos, hace apología a la propiedad privada y reivindica a las Fuerzas Armadas como reserva moral de la nación (Bustamante Olguín, 2019). Su líder, quien se vincula con el ideólogo de la ultraderecha global, Steve Bannon, y con la nueva ultraderecha española de Vox, ha endurecido su discurso sobre el Gobierno de Piñera, al que rotula como «derecha cobarde» (Soto, 2019), logrando definir su agenda y que sus planteamientos sean *naturalizados* e incorporados al discurso de las derechas tradicionales. Al respecto, por ejemplo, Piñera ha adoptado en materia de seguridad pública un discurso y práctica crecientemente punitivista frente a la protesta social, con el fin de no ser calificado como «débil» o «cobarde» por la ultraderecha. Pero, en este país, el PR no es el único caso de derecha neopatriota, ya que el Movimiento Social Patriota está camino de constituirse como partido, reivindicando a Orban, Salvini, Trump y Putin y, al igual que Bolsonaro, oponiéndose a lo que denominan «ideología globalista» y afirmando la existencia de una supuesta conspiración global contra lo nacional.

En el ámbito de política exterior, en 2018 el Gobierno de Piñera comenzó a mostrar posiciones soberanistas más conservadoras, en contraste con su Presidencia anterior (2010-2014), impugnando el orden liberal internacional, entre otros aspectos, debido a los incentivos que generaba la presencia de un competidor por la derecha. Así lo evidencia la abrupta retirada de Chile del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones

Unidas –Acuerdo de Marrakech– de diciembre de 2018, acompañando en estas posiciones a Estados Unidos, Hungría, Israel, Italia y República Dominicana. En materia de derechos humanos, en abril de 2019 Chile se alineó con otros países con gobiernos de derecha para dirigirse a la OEA, cuestionando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tuviera presente los «valores culturales» de cada país, en alusión a sus resoluciones –relativamente avanzadas–, en materia de igualdad de género, matrimonio igualitario y derechos LGTBIQ. Respecto a la cuestión ambiental, Chile rechaza el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

En Uruguay, las elecciones de 2019 marcaron el fin de 15 años de gobierno del Frente Amplio, un partido encuadrable en la izquierda cosmopolita. El vencedor Partido Nacional responde a un tipo de derecha globalista, como es también el caso del segundo socio de la coalición, el Partido Colorado. La novedad la aporta el tercer partido socio, Cabildo Abierto (CA), una fuerza política encuadrable en la derecha neopatriota que, liderada por el excomandante en jefe del Ejército, el general retirado Guido Manini Ríos, controla una porción relevante del Parlamento y del gabinete ministerial. Presenta un discurso punitivista y securitario, conservador y refractario a la agenda de nuevos derechos impulsados por la izquierda cosmopolita. En su ideario, propone un retorno a las «tradiciones nacionales», se centra en la familia y rechaza la inmigración y la «ideología de género», además de cuestionar el papel de algunas instituciones internacionales en clave soberanista. Asimismo, de forma cada vez más visible y sostenida, crece también el papel político de los evangélicos, pese a que Uruguay es un país de larga tradición laica.

En cuanto a Colombia, en 2018 Iván Duque triunfó en las elecciones presidenciales, en el marco de la consolidación del uribismo y, en parte, como reacción frente a los cambios inducidos por los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo (FARC-EP) (Gamboa, 2019). Tauss *et al.* (2019) interpretan a la derecha colombiana como líder de un bloque de poder contrainsurgente de alcance regional. Este bloque, liderado por Duque, se desplaza más a la derecha estrechando lazos con Estados Unidos, por ejemplo, al manifestar su apoyo al candidato de Trump para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone³, o endureciendo la posición hacia Venezuela y frenando los procesos de integración que buscaban

3. Hasta agosto de 2020, Brasil y Bolivia también manifestaron su apoyo a este candidato.

mayor autonomía regional frente a la influencia estadounidense. El crecimiento de la extrema derecha colombiana también se nutre del rechazo, por parte de grupos ultraconservadores e iglesias evangélicas de cuño neopentecostal, a las demandas de igualdad de género. Aunque, como señala Gil (2018), esta cuestión –que siguió activa en los círculos pentecostales y más conservadores– tuvo menos prominencia en el debate público de los candidatos a la Presidencia en 2018, donde se recurrió, en cambio, al recurso retórico del «castro-chavismo» y Venezuela para estigmatizar a la izquierda.

Por último, el ejemplo más notorio de derecha neopatriota en la región lo representa el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que capitalizó el descontento activando aspectos latentes en la desigual sociedad brasileña, como son las tendencias autoritarias y conservadoras. Con mensajes adaptados a los perfiles de sus potenciales votantes, por primera vez, fue clave el papel de las redes sociales, más que la televisión, difundiendo desinformación y *fake news* (Chagas-Bastos, 2019: 95); aunque debe señalarse que también contó con el apoyo de *Rede Record*, segundo canal más importante del país, propiedad de Edir Macedo, fundador, líder y obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ello evidencia la creciente influencia política de las iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales. El propio Bolsonaro, evangélico sin dejar de ser católico, es el primer presidente brasileño con un discurso claramente pentecostal. Su primer acto público tras ser electo fue una oración dirigida por un pastor, y su lema de campaña: «Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos». Ese discurso, cercano a la derecha religiosa de Estados Unidos, se opone a la «ideología de género» y al «comunismo», como marcador estigmatizante de cualquier expresión de izquierda. De esta forma, Bolsonaro se erige en representante de un fuerte conservadurismo de base religiosa que busca rescatar «valores tradicionales» y la familia, supuestamente amenazados por la delincuencia, la corrupción, el feminismo y la homosexualidad (Oliveira y Veronese, 2019), así como por la agenda de derechos de colectivos LGTBIQ. En este sentido, sería también el defensor de un «orden natural» de la sociedad amenazado por las demandas de igualdad de los afrodescendientes y de los pueblos originarios, así como por las políticas para los sectores subalternos por razones de etnia, género o clase. Bolsonaro polarizó el discurso en la campaña presentándose como un *outsider*, sin serlo. En clave populista, invoca al «hombre común» que «toma el control» de la nación frente a las élites, al *establishment* político (Norris e Inglehart, 2019) y, en particular, al PT. En suma, la derecha neopatriota, en su versión brasileña, se encuentra liderando un Gobierno. En la siguiente sección se examinan sus acciones en el ámbito internacional, donde protagoniza una fuerte contestación al orden liberal internacional.

El caso de Brasil: los neopatriotas latinoamericanos y su proyección regional y global

El Gobierno de Jair Bolsonaro es la expresión latinoamericana más clara del *backlash* iliberal (Hunter y Power, 2019) que analizamos en este artículo. En su accionar se visibilizan las formas de contestación al orden liberal internacional y regional de las derechas neopatriotas latinoamericanas, así como su conexión con dinámicas de contestación más amplias que esas fuerzas protagonizan a escala global.

En el seno del Gobierno brasileño pueden identificarse distintas preferencias de política exterior (Caetano *et al.*, 2019). Los denominados «cruza-

dos», entre los que se encuentra el canciller Ernesto Araújo (Frenkel, 2019), muestran el perfil más ideologizado, en el que el alineamiento con Estados Unidos parece constituirse como un vector claro. Desde una posición marcadamente antiglobalista, Araújo sostuvo que Trump

El Gobierno de Bolsonaro es la expresión latinoamericana más clara del *backlash* iliberal analizado. Su accionar muestra las formas de contestación al orden liberal internacional y regional de las derechas neopatriotas latinoamericanas y su conexión con dinámicas más amplias que esas fuerzas protagonizan a escala global.

«puede salvar a Occidente» (Rodrigues, 2019: 3). En consecuencia, Brasil ha abandonado la búsqueda de la autonomía en su política exterior, una de las ideas centrales en sus tradiciones diplomáticas. Se trataría de una estrategia de «contestación subordinada», lo que quedaría ilustrado por el apresurado anuncio – luego matizado– de trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén o por el endurecimiento del discurso frente a Cuba y Venezuela. A este alineamiento se sumaron otros gobiernos de derecha, como los de Colombia, Hungría, Israel, Italia y Polonia. Con ello, se abandona la autonomía de Brasil y América del Sur como objetivo de la política exterior, pero no para adoptar una política exterior pragmática o «realista», sino una visión muy ideologizada basada en narrativas religiosas y/o mitológicas a fin de interpretar los problemas internacionales contemporáneos tales como el cambio climático, la migración, la intervención militar o el papel de Naciones Unidas (Milani, 2019). En este sentido, el canciller Ernesto Araújo rechaza expresamente la «ideología globalista», afirma que Europa es un «espacio culturalmente vacío», desconfía del multilateralismo –el propio Bolsonaro señaló la posibilidad de abandonar Naciones Unidas (En Órbita, 2019)– y desprecia la fundamentación científica del cambio climático, a la que calificó de «complot marxista» (Actis, 2019: 56-57).

En términos generales, los neopatriotas latinoamericanos convergen con las derechas globalistas en la entonación neoliberal, privatizadora y aperturista de la política económica. Sin embargo, la gran diferencia es su cuestionamiento al multilateralismo y el fuerte énfasis en la bilateralización de la agenda económico-comercial, con un discurso que apela a un supuesto pragmatismo, pero que es acorde a la estrategia que impulsa Washington de volver a acuerdos bilaterales de *comercio administrado*. El cuestionamiento que hacen al orden liberal internacional se dirige, en particular, a las organizaciones internacionales y de integración y cooperación regional. Estas derechas confrontan la institucionalidad y la autoridad internacional que regula temas como la migración y el libre comercio, y ponen en tela de juicio la legitimidad del Estado de derecho entre los estados (Hooghe *et al.*, 2019).

En un claro viraje de la política exterior, Bolsonaro rechazó acoger la sede de la Conferencia de Cambio Climático-COP25 de 2019; ha hecho amago de retirarse del Acuerdo de París, siguiendo la estela de Estados Unidos, lo que ha provocado que la UE advierta de que ello impediría la ratificación del acuerdo UE-Mercosur; se ha retirado del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas (Rodrigues, 2019: 6); y ha vetado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, desde una retórica soberanista, que además ha eliminado del Plan Plurianual 2020-2023 del Gobierno de Brasil. En el plano bilateral, Alemania y Francia cuestionaron la política de Bolsonaro frente a los incendios en la Amazonia (Casarões y Flandes, 2019) y, al respecto, el mandatario brasileño desplegó un discurso soberanista en Naciones Unidas señalando: «Quiero reafirmar mi posición de que cualquier iniciativa de ayuda o apoyo a la preservación de la selva amazónica, o de otros biomas, debe ser tratada en pleno respeto a la soberanía brasileña»⁴.

Si bien la posición brasileña respecto a las organizaciones internacionales es claramente confrontativa, en el ámbito regional en cambio es más ambivalente. Aquí, mientras coincide con las derechas globalistas en el enfoque eminentemente comercial y liberalizador hacia Mercosur, al mismo tiempo plantea dudas sobre su compromiso real con esta organización, al abandonar cualquier pretensión de liderazgo regional y sin tener una estrategia clara ni para América del Sur ni para el Mercosur. Este hecho hace que la región no sepa cómo responder a la posición brasileña, lo que genera un vacío de lide-

4. Véase: Discurso do Presidente da República, Jair Bolsonaro, na abertura da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) – Português (Brasil) (www.gov.br). Nueva York, 24 de septiembre de 2019.

razgo en América del Sur. Su vinculación al Grupo de Lima, creado en 2017 para presionar al régimen venezolano de Nicolás Maduro, es sobre todo una expresión de su alineamiento con Trump (Tokatlían, 2019). Brasil se sumó pronto al grupo de gobiernos de derecha que en abril de 2018 suspendieron su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), alegando su sesgo «bolivariano», para posteriormente anunciar su salida definitiva. Asimismo, se sumó a la iniciativa liderada por los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, para crear el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) en marzo de 2019. Presentada como una alternativa «pragmática» y «desideologizada» a Unasur, en realidad esta nueva plataforma ha nacido fuertemente marcada por la debilidad institucional y la afinidad ideológica de sus miembros (Sanahuja, 2019c). Finalmente, en enero de 2020 Brasil también impugnó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por su supuesto sesgo «bolivariano».

Estos acontecimientos muestran que las derechas globalistas y neopatriotas han coincidido en un proceso de contestación institucional y normativa –altamente ideologizada– a la integración regional y al regionalismo. Ello ha llevado a la crisis de las organizaciones regionales del llamado «regionalismo posliberal», cuya consecuencia más directa ha sido el desmantelamiento de las capacidades existentes para la gobernanza regional y la pérdida de la limitada condición de actor que esas organizaciones habían conferido a la región en el plano internacional. Estas prácticas y discursos de contestación normativa e institucional, aunque a veces se justifican en nombre del pragmatismo, están cargadas de contenido ideológico. La impugnación del regionalismo latinoamericano es, por lo tanto, parte del cuestionamiento del orden liberal internacional que protagonizan estas derechas neopatriotas. Una contestación discursiva –pero también de las instituciones y la política– legitimada desde narrativas conservadoras, nacionalistas y/o de extrema derecha, acompañada de prácticas que, en tanto factores de agencia, convergen, junto con los aspectos estructurales antes señalados, para explicar la crisis actual de la cooperación y la integración regional latinoamericana. De esta forma, la región también se acompasa, con mediaciones y lógicas particulares, a un ciclo global de ascenso del nacionalismo y la extrema derecha y de contestación material y normativa al regionalismo y la integración (Sanahuja, 2019c).

Finalmente, un factor de agencia relevante es el relacionamiento internacional que estas derechas prefieren y pueden impulsar. Orellana y Michelsen (2019) señalan que no deberíamos esperar de parte de las derechas neopatriotas una mera negación del internacionalismo, sino una nueva definición de lo internacional desde discursos y acciones que impugnan el orden vigente. En la elaboración de una nueva arquitectura normativa, la clave sería la

confrontación de identidades diferenciadas. Para ello, el desmantelamiento de las normas liberales es fundamental, a fin de poder reelaborar la institucionalidad sobre principios transaccionales, de poder e identitarios. Según estos autores, esto daría lugar a un «internacionalismo reaccionario». Como señala Gilberto Rodrigues (2019: 2), Bolsonaro contactó en su campaña con Bannon, cuyo proyecto principal, tras ser expulsado del Gobierno de Trump, ha sido construir una internacional de ultraderecha. En dicho proyecto, el Brasil de Bolsonaro tendría un papel crucial en América Latina como *pivotal state* (ibídem: 2), y similares contactos se han producido con Kast en Chile. Defender la civilización frente al globalismo parece ser la consigna, aunque según Bannon la inmigración debiera ser el elemento más destacado para la estrategia de polarización que es funcional al ascenso de la ultraderecha «neopatriota». Como señaló el canciller Araújo, se trata de «desacralizar la inmigración, combatiendo la ideología del “inmigrante intocable”, del derecho universal a la migración sobreponiéndose a la soberanía nacional» (Bilenky, 2018).

Como marco discursivo, este internacionalismo reaccionario de la extrema derecha neopatriota también da forma a las respuestas políticas a la pandemia de coronavirus. Sus líderes despliegan una vez más la retórica nacionalista y populista con cálculos políticos a corto plazo, cuestionando el conocimiento científico, en una lógica de confrontación con los países vecinos, con China, Europa u otros. De alguna manera, la cooperación internacional, así como sus instituciones y sistema de gobernanza, están siendo sometidos a una prueba sustancial. Esta crisis de salud global también se convierte, de esta forma, en el escenario del conflicto entre las instituciones y las normas de una globalización en crisis y los desafiantes discursos nacionalistas de un nuevo internacionalismo reaccionario.

Conclusiones y reflexiones finales

El surgimiento de las derechas neopatriotas es parte del «contramovimiento» que opera dentro de la *gran transformación* que significa la crisis de globalización. Ese proceso combina factores causales de estructura y de agencia. Los cambios en las fuerzas productivas que definen esa crisis suponen un freno a certidumbres, expectativas y demandas sociales, lo que alienta reclamos a la protección del Estado y abre opciones para la aparición y ascenso de fuerzas políticas que definen nuevos clivajes que trascienden el eje izquierda-derecha: homogeneidad versus diversidad social, cultural y de identidad de género; sobre los derechos de las mujeres, o la aceptación de la inmigración, y, en particular, nacionalismo

versus cosmopolitismo/globalismo. El cuestionamiento a la globalización y sus instituciones y reglas es el elemento común que caracteriza, de manera distintiva, a estas nuevas derechas como «neopatriotas» —más que su carácter populista o nativista— y las distingue, en el contexto latinoamericano, de la más tradicional derecha liberal-conservadora. El caso brasileño, en particular, es una muestra de las visiones del mundo y las matrices de política exterior de estas derechas neopatriotas latinoamericanas y de sus rasgos comunes, como el alineamiento con Estados Unidos y la contestación al regionalismo y al multilateralismo. Con ello, América Latina se inscribe en una dinámica ya verdaderamente global de contestación al orden liberal internacional, al regionalismo y al multilateralismo.

La crisis de la globalización es una coyuntura crítica, y la configuración política resultante seguramente condicionará la trayectoria global y regional futura. Por ello, si la contestación al orden liberal internacional y regional encierra el germen de un nuevo internacionalismo reaccionario, también podría hacer que estemos frente a la posibilidad latente de procesos políticos alternativos, desde valores y posiciones progresistas a partir de esos mismos condicionantes estructurales, con la emergencia de otros actores y haciendo presentes otros factores de agencia.

La crisis de la globalización es una coyuntura crítica y la configuración resultante condicionará la trayectoria global y regional futura. La contestación al orden liberal internacional y regional encierra el germen de un nuevo internacionalismo reaccionario, pero también podría dar lugar a procesos políticos alternativos, desde valores y posiciones progresistas.

Referencias bibliográficas

- Actis, Esteban. «La visión del mundo de Jair Bolsonaro. De la periferia perimida a la periferia tradicionalista». *Foreign Affairs Latinoamérica*, vol. 19, n.º 1 (2011), p. 51-57.
- Acuña, Carlos y Chudnovsky, Mariana. «Cómo entender las instituciones y su relación con la política: lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los institucionalismos». En: Acuña, Carlos (comp.). ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política argentina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2013, p. 13-67.
- Bilenky, Thais. «Chanceler propôs a Bolsonaro pacto cristão com EUA e Rússia». *Valor*, (16 de diciembre de 18) (en línea) <https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/12/16/chanceler-propos-a-bolsonaro-pacto-cristao-com-eua-e-russia.ghml>

- Bustamante Olguín, Fabián. «Debería preocuparnos el regreso de la extrema derecha con José Antonio Kast?». *Elciudadano.com*, (2019) (en línea) <https://www.elciudadano.com/columnas/deberia-preocuparnos-regreso-la-extrema-derecha-joseantonio-kast/01/15/>
- Caetano, Gerardo; López Burian, Camilo y Luján, Carlos. «El Brasil de Bolsonaro, las orientaciones posibles de su política exterior y el futuro del regionalismo en Sudamérica». *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, vol. 28, n.º 1 (2019), p. 95-130.
- Cannon, Barry. *The Right in Latin America. Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State*. Londres: Routledge, 2016.
- Capoccia, Giovanni y Kelemen, Daniel. «The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative and Counterfactuals in Institutional Theory». *World Politics*, vol. 59, n.º 3 (2007), p. 341-369.
- Casarões, Guilherme y Flesmes, Daniel. «Brazil First, Climate Last: Bolsonaro's Foreign Policy». *GIGA Focus Latin America*, n.º 5 (2019), p. 1-13.
- CEPAL-Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL, 2019.
- Chagas-Bastos, Fabrício. «Political Realignment in Brazil: Jair Bolsonaro and the Right Turn». *Revista de Estudos Sociais*, n.º 69 (2019), p. 92-100.
- Cox, Robert W. «Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory». *Millennium: Journal of International Studies*, vol. 10, n.º 2 (1981), 126-155.
- Dolezal, Martin. «Restructuring the national political space: the supply side of European electoral politics». En: Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar; Dolezal, Martin; Helbling, Marc; Hoglinger, Dominic; Hutter, Swen y Wüest, Bruno (ed.). *Political Conflict in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 127-150.
- En Órbita. «Para Brasil, “el cambio climático es una estrategia del marxismo cultural para dominar la economía global”». *Sputnik*, (20de septiembre de 2019) (en línea) https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/201909201088734765-para-brasil-el-cambio-climatico-es-una-estrategia-del-marxismo-cultural-para-dominar-la-economia/
- Frenkel, Alejandro. «Un “cruzado” en la cancillería brasileña. Ernesto Araújo y la política exterior bolsonarista». *Nueva Sociedad*, (febrero de 2019) (en línea) <https://www.nuso.org/articulo/araujo-brasil-derecha-cancilleria-bolsonaro/>
- Fuentes, Laura. «Politización evangélica en Costa Rica en torno a la agenda “Provida”: ¿Obra y gracia del Espíritu Santo?». *Revista Rupturas*, vol. 9, n.º 1 (2018), p. 85-106.
- Gamboa, Laura. «El reajuste de la derecha colombiana. El éxito electoral del uribismo». *Colombia Internacional*, n.º 99 (2019), p. 187-214.

- Gil, Franklin. «El gobierno Duque en Colombia: una visión sobre género y sexualidad». *Sexuality Policy Watch*, (2018) (en línea) <https://sxpolitics.org/es/3981-2/3981>
- Grande, Edgar y Hutter, Swen. «Introduction: European integration and the challenge of politicisation». En: Hutter, Swen; Grande, Edgar y Kriesi, Hanspeter (ed.). *Politicising Europe. Integration and Mass Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 3-31.
- Grande, Edgar y Kriesi, Hanspeter (2012). «The transformative power of globalization and the structure of political conflict in Western Europe». En: Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar; Dolezal, Martin; Helbling, Marc; Hoglinger, Dominic; Hutter, Swen y Wüest, Bruno (ed.). *Political Conflict in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 3-35.
- Höglinger, Dominic. *Politicizing European Integration. Struggling with the Awakening Giant*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
- Hooghe, Liesbet; Lenz, Tobias y Marks, Gary. «Contested world order: The delegitimation of international governance». *The Review of International Organizations*, vol. 14, n.º 1 (2019), p. 731-743.
- Hunter, Wendy y Power, Timothy. «Bolsonaro and Brazil's Illiberal Backlash». *Journal of Democracy*, vol. 30, n.º 1 (2019), p. 68-82.
- Ikenberry, John. «The End of the Liberal International Order». *International Affairs*, vol. 24, n.º 1 (2018), p. 7-23.
- Kriesi, Hanspeter. «Restructuring the national political space: the supply side of national electoral politics». En: Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar; Dolezal, Martin; Helbling, Marc; Hoglinger, Dominic; Hutter, Swen y Wüest, Bruno (ed.). *Political Conflict in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 96-126.
- Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar; Dolezal, Martin; Helbling, Marc; Hoglinger, Dominic; Hutter, Swen y Wüest, Bruno (ed.). *Political Conflict in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Lakner, Christoph y Milanovic, Branko. «Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession». *The World Bank Economic Review*, vol. 30, n.º 2 (2016), p. 203-232.
- Latinobarómetro. *Informe 2018*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2018.
- Luna, Juan Pablo y Rovira, Cristóbal. «The Right in Contemporary Latin America: A Framework for Analysis». En: Luna, Juan Pablo y Rovira, Cristóbal (eds.). *The Resilience of the Latin America Right*. Baltimore: John Hopkins University Press, 2014, p. 1-24.
- Milani, Carlos. «La política exterior brasileña en el diván». *El Observador*, (8 de agosto de 2019) (en línea) <https://www.elobservador.com.uy/nota/la-politica-exterior-brasilena-en-el-divan-201987144521>

- Mudde, Cas. *Populist Radical Right Parties in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Mudde, Cas. «Introduction to the Populist Radical Right». En: Mudde, Cas (ed.). *The Populist Radical Right: A Reader*. Londres: Routledge, 2017, p. 1-10.
- Mudde, Cas. *The Far Right Today*. Cambridge: Polity, 2019.
- Mudde, Cas y Rovira, Cristóbal. *Populism. A very short introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Natanson, José. «Brasil: la nueva potencia de la derecha mutante». *Nueva Sociedad*, (octubre de 2018) (en línea) <https://nuso.org/articulo/brasil-la-nueva-potencia-de-la-derecha-mutante/>
- Norris, Pippa y Inglehart, Ronald. *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Nueva York: Cambridge University Press, 2019.
- Oliveira, Gustavo M. de y Veronese, Marília. «Brasil y el “fenómeno Bolsonaro”: un análisis preliminar». *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, vol. 64, n.º 237 (2019), p. 245-267.
- Önis, Ziya y Kutlay, Mustafa. «The Global Political Economy of Right-Wing Populism: Deconstructing the Paradox». *The International Spectator*, vol. 55, n.º 2 (2020), p. 108-126.
- Orellana, Pablo de y Michelsen, Nicholas. «Reactionary Internationalism: the philosophy of the New Right». *Review of International Studies*, vol. 45, n.º 5 (2019), p. 748-767.
- Oxfam. *Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos*. Oxford: Oxfam y CLACSO, 2018.
- Polanyi, Karl. *La Gran Transformación. Los orígenes económicos y sociales de nuestro tiempo*. Madrid: FCE, 2007 [1944].
- Rodrigues, Gilberto M. A. «¿El Trump del trópico? Política exterior de ultraderecha en Brasil». *Análisis Carolina*, n.º 6 (2019), p. 1-11.
- Rovira, Cristóbal. «La (sobre)adaptación programática de la derecha chilena y la irrupción de la derecha populista radical». *Colombia Internacional*, n.º 99 (2019), p. 29-61.
- Sanahuja, José Antonio. «Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis de hegemonía y riesgos sistémicos». En: Mesa, Manuela (coord.). *Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Anuario CEI-PAZ 2016-17*. Madrid: CEIPAZ, 2017a, p. 35-71.
- Sanahuja, José Antonio. «Introducción: América Latina en un cambio de escenario. De la bonanza de las *commodities* a la crisis de la globalización». *Pensamiento Propio*, vol. 44, n.º 21 (2017b), p. 13-25.
- Sanahuja, José Antonio. «América Latina: malestar democrático y retos de la crisis de la globalización». En: Sahagún, Felipe y Pardo de Santayana, José

- Ramón (coords.). *Panorama Estratégico 2019*. Madrid: Instituto Español de estudios estratégicos, Ministerio de Defensa, 2019a, p. 205-246.
- Sanahuja, José Antonio. «Crisis de la globalización, el regionalismo y el orden liberal: el ascenso mundial del nacionalismo y la extrema derecha». *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, vol. 28, n.º 1 (2019b), p. 59-94.
- Sanahuja, José Antonio. «La crisis de la integración y el regionalismo en América Latina: giro liberal-conservador y contestación normativa». En: Mesa. Manuela (coord.). *Ascenso del nacionalismo y el autoritarismo en el sistema internacional. Anuario 2018-2019*. Madrid: CEIPAZ, 2019c, p. 107-127.
- Sanahuja, José Antonio y Comini, Nicolás. «Las nuevas derechas latinoamericanas frente a una globalización en crisis». *Nueva Sociedad*, n.º 275 (2018), p. 32-46.
- Sartori, Giovanni. *Partidos y Sistemas de Partidos*. Madrid: Alianza Editorial, 1980.
- Slobodian, Quinn. *Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism*. Cambridge: Harvard University Press, 2018.
- Soto, Ximena. «José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano: “Piñera es una especie de fantasma presidencial”». *La Tercera*, (28 de diciembre de 2019) (en línea) <https://www.latercera.com/politica/noticia/jose-antonio-kast-fundador-del-partido-republicano-pinera-una-especie-fantasma-presidencial/954556/>
- Tauss, Aaron; Pardo, Daniel y Graaff, David. «El bloque de poder contrainsurgente en Colombia y su papel en el resurgimiento de la derecha en América Latina». *Colombia Internacional*, n.º 99 (2019), p. 63-90.
- Tokatlian, Juan Gabriel. «Las siete cajas de pandora de la derecha suramericana». *Crisis*, n.º 39 (19 de junio de 2019) (en línea) <https://revistacrisis.com.ar/notas/las-siete-cajas-de-pandora-de-la-derecha-suramericana>
- Verdes-Montenegro, Francisco Javier. *La (re)militarización de la política latinoamericana. Origen y consecuencias para las democracias de la región*. Madrid: Fundación Carolina, Documento de trabajo n.º 14, 2019.
- Wiener, Antje. «A Theory of Contestation. A Concise Summary of Its Argument and Concepts». *Polity*, vol. 49, n.º 1 (2017), p. 109-125.
- Zovatto, Daniel. *Latin America: political change in volatile and uncertain times*. Estocolmo: International IDEA, 2019 (en línea) <https://www.idea.int/news-media/news/latin-america-political-change-volatile-and-uncertain-times>
- Zürn, Michael. «The politicization of world politics and its effects: Eight propositions». *European Political Science Review*, vol. 6, n.º 1 (2014), p. 47-71.

**AHORA MISMO,
SEGURAMENTE
ESTÉS PENSANDO.**



**ENCANTADOS
DE RECONOCERTE.**

CLAVES

**LA REVISTA DE PENSAMIENTO CRÍTICO
Y AGITACIÓN CULTURAL**

A la venta en quioscos, librerías, Claves.kioskoymas.com
Suscripciones: 914 400 499 / suscripciones@prisarevistas.com

La derecha chilena en la encrucijada: la contrahegemonía de los liderazgos subnacionales y solidarios

The Chilean right at the crossroads: counter-hegemony of subnational and solidary leaderships

Stéphanie Alenda, Julieta Suárez-Cao y Carmen Le Foulon*

Cómo citar este artículo: Alenda, Stéphanie; Suárez-Cao, Julieta y Le Foulon, Carmen. «La derecha chilena en la encrucijada: la contrahegemonía de los liderazgos subnacionales y solidarios». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 65-87. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.65

Resumen: Este artículo muestra que la dicotomía «lo nuevo» versus «lo viejo» resulta insuficiente para aprehender las continuidades y rupturas entre las viejas y nuevas formaciones políticas de derecha en Chile. La actual centroderecha chilena es más compleja, sus adaptaciones ideológicas recientes revelan una mayor diversificación de sus sensibilidades internas. Una encuesta representativa de los estratos dirigentes de la actual coalición gobernante Chile Vamos da cuenta de ello. Hoy, la sensibilidad mayoritaria del sector es puesta en tela de juicio por quienes sustentan posiciones más afines a una mayor intervención del Estado; y algunos de los principales protagonistas de esta batalla son las autoridades subnacionales, lo que traslada la disputa territorial al interior de la coalición de gobierno.

Palabras clave: Chile, derecha, Chile Vamos, élites, líderes subnacionales, contrahegemonía

Abstract: This paper shows that the “new” versus “old” dichotomy cannot explain the continuities and breaks between old and new right-wing political formations in Chile. The current Chilean centre-right is more complex, and its recent ideological adaptations reveal greater diversification of its internal sensibilities. A representative survey of the ruling strata of the current Chile Vamos governmental coalition reflects this. The sector’s dominant sensibilities are being challenged by those who favour greater state intervention. Some of the key players in this battle are subnational authorities, which brings the territorial dispute inside the governing coalition. The novelties of this centre right is thus double-edged: from the renewal of certain value positions to a pro-state sensibility being revitalised by subnational leaders.

Key words: Chile, right wing, Chile Vamos, elites, subnational leaders, counter-hegemony

* **Stéphanie Alenda**, profesora asociada, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Andres Bello (salenda@unab.cl), ORCID: 0000-0003-0185-7615; **Julieta Suárez-Cao**, profesora asociada, Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile (julieta.suarez@uc.cl), ORCID: 0000-0001-5278-5151; **Carmen Le Foulon**, investigadora, Centro de Estudios Públicos (clefoulon@cepchile.cl), ORCID: 0000-0002-0127-8157.

Las autoras agradecen a los proyectos Fondecyt Regular n.º 1191083 y n.º 1151503 por su aporte para llevar adelante la investigación.

Plantear la pregunta de investigación sobre los cambios, o «lo nuevo», en la centroderecha chilena –que llegó por segunda vez al poder en las elecciones de 2017– obliga, en primer lugar, a tomar en cuenta una dimensión coyuntural que ha alterado la agenda pública y el programa de gobierno de la coalición *Chile Vamos*¹, en un contexto de fuerte desconfianza en las instituciones políticas: el estallido social que tuvo como fecha de inicio el 18 de octubre de 2019 y, a partir del mes de marzo de 2020, los avances de la pandemia del COVID-19 que han puesto entre paréntesis la protesta social. De manera incremental, las transformaciones estructurales anheladas por los manifestantes del estallido, pero también la puesta en evidencia de la cobertura desigual de los sistemas de salud en el mundo y la presión de la pandemia sobre las arcas fiscales, han puesto en el centro de la atención el rol fundamental del Estado en la disminución de las desigualdades y el fortalecimiento de la democracia². En segundo lugar, además de este foco en el eje redistributivo, la pregunta invita a examinar el perfil de la coalición de gobierno –sus características sociológicas e ideológicas– tomando como momento bisagra el ánimo refundacional con el que se inició el primer Gobierno de Sebastián Piñera en 2010, en el que se planteó institucionalizar una «nueva derecha» que tomara distancia de la herencia pinochetista y fuese susceptible de convertirse en un referente mayoritario, competitivo y legítimo. Más allá del discurso, esta renovación se plasmó en la fundación de nuevos partidos como Evolución Política (Evópoli), que nació como movimiento en 2012, y en la aparición de nuevos *think tanks* que buscaron revigorizar las ideas de la centroderecha (Alenda *et al.*, 2020a).

Una de las formas de poner en evidencia los cambios en la actual coalición de gobierno consiste en comparar los posicionamientos de sus cuadros dirigentes, respecto al eje Estado-mercado, con el perfil ideológico de la derecha que se reconfigura al alero del régimen de Pinochet. Otra forma reside en atribuir esta

-
1. Coalición compuesta por tres referentes principales: la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli).
 2. Los tiempos de reconstrucción suelen entregar protagonismo al aparato estatal, fenómeno al que la derecha no ha sido ajena como evidencian, por ejemplo, las reformas emprendidas por Bismarck a fines del siglo XIX, que convirtieron a Alemania en una gran precursora en materia de protección social; o mediante los estados de bienestar que se edificaron en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, basándose en acuerdos políticos amplios y transversales.

renovación a los partidos nuevos, bajo el supuesto de que, desde los años setenta del siglo pasado, dichos partidos son un producto posindustrial y reflejan la disminución del impacto de la clase social y la ideología en la política (Harmel y Gibson, 1995). En *Chile Vamos*, esta hipótesis implica indagar sobre el carácter posideológico de Evópoli en relación con la derecha tradicional representada por Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), a partir de las tipologías existentes sobre los nuevos partidos. Estas ponen el acento en su condición posprogramática de tipo *catch-all* y su preocupación por la forma más que por la sustancia de la política (Sikk, 2012).

Este artículo busca mostrar que la dicotomía «lo nuevo» versus «lo viejo», cuando toma en cuenta únicamente la antigüedad de los partidos, resulta insuficiente para aprehender las continuidades y rupturas entre las viejas y nuevas formaciones políticas de derecha en Chile. La centroderecha chilena actual debe ser comprendida a partir de sus transformaciones sociológicas y adaptaciones ideológicas recientes que revelan una mayor diversificación de sus sensibilidades internas. Al respecto, se concluye que tanto el estallido social como la crisis sanitaria del COVID-19 han dado una mayor visibilidad a quienes aquí identificamos como «solidarios», en el interior de *Chile Vamos*, así como a los liderazgos locales por encima de los nacionales, lo que ha desatado una batalla de ideas en el seno de la coalición.

La centroderecha chilena actual debe ser comprendida a partir de sus transformaciones sociológicas y adaptaciones ideológicas recientes que revelan una mayor diversificación de sus sensibilidades internas.

El análisis se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se presentan los rasgos adquiridos por la derecha chilena desde sus orígenes, su reconfiguración durante el régimen militar, así como su progresiva adopción de una estrategia adaptativa mediante la cual ha buscado acercarse al centro político. En segundo lugar, se explora empíricamente lo anterior, considerando la irrupción en 2015 de un nuevo partido en el sector y sobre la base de un doble eje: la comparación del rol que los tres partidos de la coalición gubernamental atribuyen al Estado y al mercado, y sus posiciones sobre temas llamados «posmateriales» (Inglehart, 1977 y 1990) o coyunturales. Se pone en evidencia que lo «nuevo» en *Chile Vamos* tiene raíces tanto en términos partidarios como de sensibilidades políticas. En tercer lugar, se bucea en las disputas recientes de la coalición a partir de la crisis social y política de 2019, seguida de la pandemia del COVID-19 hasta la actualidad. Se explora la contraofensiva de las élites «solidarias» que desafían la hegemonía de la derecha tradicional y las estrategias del Gobierno para lidiar con esas discrepancias. Por último, en las conclusiones se delinea el futuro probable de la derecha en Chile.

Orígenes y transformaciones recientes de la derecha chilena

En los estudios contemporáneos sobre la derecha latinoamericana (Gibson, 1996; Chalmers, *et al.*, 1992; Middlebrook, 2000) prevalece una definición sociológica de los partidos conservadores inspirada en el estudio de Edward Gibson (1996) sobre el conservadurismo en Argentina. En ella, los sectores altos de la sociedad son presentados como «el núcleo central y perdurable de apoyo» (*core constituency*) de aquellos partidos que, para ser electoralmente exitosos, han de movilizar un electorado multclasista en torno a un proyecto político común.

Un libro reciente sobre la derecha chilena (Alenda, 2020a), sin embargo, ha dado un respaldo empírico a una definición ideológica de la derecha³, al poner en evidencia que ese núcleo central era susceptible de evolucionar bajo efectos cruzados, como una mayor diversificación de sus relaciones sociales (Pelfini y Rueda, 2020) o la disolución de los clivajes tradicionales. Así, la derecha chilena mantendría un núcleo duro doctrinario enraizado en una visión tradicionalista y/o religiosa del mundo – compatible con la doctrina neoliberal, como veremos más adelante –, lo que explica que permanezcan en el tiempo ciertos principios claves tales como el culto a la familia, depositaria de los valores morales, o la defensa de la vida desde el momento de la concepción. El estudio repara, no obstante, en la evolución y adaptación de estos principios, lo que ejemplifican en particular las visiones contrastadas que las derechas tienen respecto a las desigualdades. Mientras las posiciones más ortodoxas defienden la existencia de jerarquías naturales, el liberalismo, por el contrario, pone el foco en los logros más que en las posiciones heredadas, según lo cual las desigualdades derivarían del mérito. Una vertiente del socialcristianismo – expresada a través de una derecha intelectual, heterodoxa, centrada en la defensa de los valores tradicionales amenazados por la mundialización a ultranza y el apego irrestricto al mercado – ha reparado, por su lado, en los efectos nefastos de un capitalismo desenfrenado (Mansuy, 2019). En este sentido, resulta cuestionable la definición de Bobbio (1995), retomada por Luna y Rovira (2014: 3), la cual establece como diferencia fundamental entre derecha e izquierda el hecho de concebir, la primera, las desigualdades como naturales y difíciles de erradicar y, la segunda, como construcciones sociales «superables en una agenda propicia al cambio social». Según los autores, esta «definición ideológica mínima» definiría principalmente a la derecha por su posición sobre el

3. En la línea de otros estudios que devolvieron a la ideología cierta primacía para definir a la derecha (Borón, 2000; Cannon, 2016; Luna y Rovira, 2014).

eje Estado-mercado y sus reticencias a promover políticas redistributivas tendientes a corregir niveles extremos de desigualdad. Alenda *et al.* (2020a: 96), en cambio, invitan a complejizar la mirada sobre «la» derecha chilena tomando en cuenta sus tres tradiciones de pensamiento (Rémond, 1982 [1954]): a) el conservadurismo valórico que se opone al cambio de las costumbres y convierte a la familia en su base primordial (Pereira, 1994); b) una noción del papel del Estado basada en el «equilibrio justo» de raigambre socialcristiana que lo habilita para subsanar las falencias del mercado con miras a mejorar la justicia social⁴, y c) el liberalismo económico que asume en Chile posiciones ortodoxas.

A partir de los años cincuenta y sesenta⁵, el corporativismo y el nacionalismo se van a combinar con estas tradiciones, contribuyendo a la emergencia de una «nueva derecha», pero sin alcanzar a constituirse en una de ellas a la par del conservadurismo, el liberalismo y el socialcristianismo. Aunque el corporativismo remite al fascismo europeo de entreguerras, se plasmó en Chile a través de la influencia de los teóricos tradicionalistas españoles (Moulian y Torres, 1988). Esta ideología pretende organizar la economía, en particular, y la sociedad, en general, en asociaciones intermedias –las corporaciones–, con miras a restablecer un ordenamiento católico tradicionalista. Asimismo, el corporativismo no es propio de ninguna tradición partidista, sino que puede verse desde la democracia cristiana chilena, en el mismo gremialismo⁶ (Alenda, *et al.*, 2020a), pero también en los principios fundantes del Gobierno militar (Cristi y Ruiz, 1992: 13). Durante la dictadura, el corporativismo converge con las enseñanzas de Hayek y la Escuela de Economía de Chicago. El principio de *subsidiariedad* expresa cabalmente esta confluencia, ya que posee una doble vertiente: por un lado, la línea corporativista heredera del franquismo español y recelosa de los partidos⁷ y, por el otro, una línea neoliberal que busca circunscribir

-
4. El filósofo Hugo Herrera (2014) distingue una «tradición nacional-popular» que incluimos en esta segunda concepción por su carácter estatista y porque no reúne las condiciones para constituirse en familia de pensamiento siguiendo la definición de Rémond: no tiene suficiente duración histórica ni la coherencia que le permita subsistir. Como muestran Fernández y Rumié (2020), el «intento de renovación nacionalista de la derecha» fue una empresa más bien intelectual.
 5. Esta etapa histórica es vista por la historiografía como un momento de «ruptura» (Benavente y Araya, 1981) o «discontinuidad histórica» (Moulian y Torres, 1988) porque termina con la predominancia de los partidos de derecha decimonónicos.
 6. Corriente de pensamiento inspirada en el corporativismo franquista que fue, desde fines de los años sesenta, el sustento doctrinario de un movimiento conservador que dará nacimiento a la UDI (Alenda, 2014). La UDI nace como partido en 1988 tras abandonar el conglomerado de unidad entre partidos y movimientos de derecha, Renovación Nacional, a raíz de divergencias estratégicas y de liderazgos.
 7. Como explica Ruiz (1992: 120), «lo que constituye propiamente la cabeza del cuerpo socio-político, el poder político, no debe intervenir en la sociedad sino en “subsidio” de las debilidades o de las incapacidades de los cuerpos intermedios, ya que cada uno de ellos tiene fines naturales que cumplir».

la intervención estatal en el mercado a las situaciones en las que las personas o grupos no pueden ser autosuficientes.

La hegemonía neoliberal terminó así generando un consenso en la derecha que oscureció las divisiones tradicionales, puesto que el principio de subsidiariedad se apropió de la discusión Estado-mercado, y generó políticas que focalizaron el gasto público en los grupos más vulnerables⁸. Durante los años ochenta, se instaló un acuerdo sobre «la defensa de la sociedad libre», expresado en particular por un sector de RN, que buscó dar impulso a una democracia de los acuerdos, corriéndose hacia el centro político (Cañas, 1992; Godoy, 2005; Mackinnon, 2005). Esa relativa apertura se caracterizó al mismo tiempo por una fuerte identificación con el legado económico del régimen de Pinochet. Por su parte, la UDI, más doctrinaria y monolítica (Alenda, 2014), recién adoptó a principios de este siglo una estrategia de moderación programática.

La derecha chilena sigue un patrón de adaptación basado en dos aspectos distinguibles: una mayor apertura a cuestiones de orden moral, expresada en particular por Evópoli, y la contraofensiva de las élites solidarias quienes –en medio del estallido social de 2019 y la pandemia del COVID-19– disputan a la hegemonía de la derecha tradicional ciertas estrategias de gobierno para lidiar con la crisis.

Finalmente, la primera elección de Sebastián Piñera en 2010 consagró ese ímpetu posideológico al abogar por una «nueva derecha» en el marco de un proyecto político que «expandía el abanico de temas a derechos humanos, protección del medioambiente, justicia social, seguridad laboral y pueblos originarios» (Alenda *et al.*, 2020b: 130-131; véase también Hinzpeter, 2010).

Más allá del discurso, la idea de una «nueva derecha» se encarnó en cierta renovación ideológica del sector en reacción a las movilizaciones estudiantiles de 2011, la cual desembocó en la creación de nuevos referentes partidarios de corte liberal como Evópoli, fundado como partido en 2014, o Amplitud, fruto efímero de una escisión del ala liberal de RN el mismo año⁹. En Evópoli se asentó también, progresivamente, un discurso liberal cultural que reorientó las diferencias entre «conservadores» y «liberales» hacia aspectos de orden moral (divorcio, matrimonio igualitario, etc.) (Díaz, 2016: 489). Estas tradiciones de pensamiento, junto con las ideologías que vieron la luz a partir de los años cin-

8. La figura del Chicago Boy Miguel Kast es sintomática de esta visión del rol deseable del Estado en la economía (Lavín, 1988).

9. Vio también la luz una nueva generación de *think tanks* representantes de diferentes sensibilidades: Horizontal (liberalismo cultural), la Fundación para el Progreso (libertarianismo) y el Instituto de Estudios de la Sociedad (socialcristianismo).

cuenta y sesenta y formatearon a la derecha chilena durante el régimen militar, se actualizan hoy en «sensibilidades políticas» (Ansart, 1982: 143) que podemos distinguir empíricamente. Así, tres sensibilidades se encuentran presentes en la dirigencia actual de *Chile Vamos*, plasmando visiones distintas sobre el rol deseable del Estado en la economía (Alenda *et al.*, 2019). La sensibilidad *subsidiaria*, mayoritaria, es heredera del «Chicago-gremialismo» que marca la confluencia entre liberales y católicos en dictadura; la *ultraliberal*, minoritaria, se origina en un liberalismo económico más ortodoxo, y la *solidaria* es la que más se vincula con las tradiciones históricas de pensamiento mencionadas (ibídem, 2019), dado su carácter estatista-conservador y de raíz socialcristiana. Estas sensibilidades presentan la característica llamativa de distribuirse de manera análoga al interior de los partidos, aun en Evópoli, de creación más reciente.

En suma, la derecha chilena sigue un patrón de adaptación basado en dos aspectos distinguibles: una mayor apertura a cuestiones de orden moral, expresada en particular por Evópoli, y la contraofensiva de las élites solidarias quienes –en medio del estallido social de 2019 y la pandemia del COVID-19 en 2020– disputan a la hegemonía subsidiaria ciertas estrategias de gobierno para lidiar con la crisis.

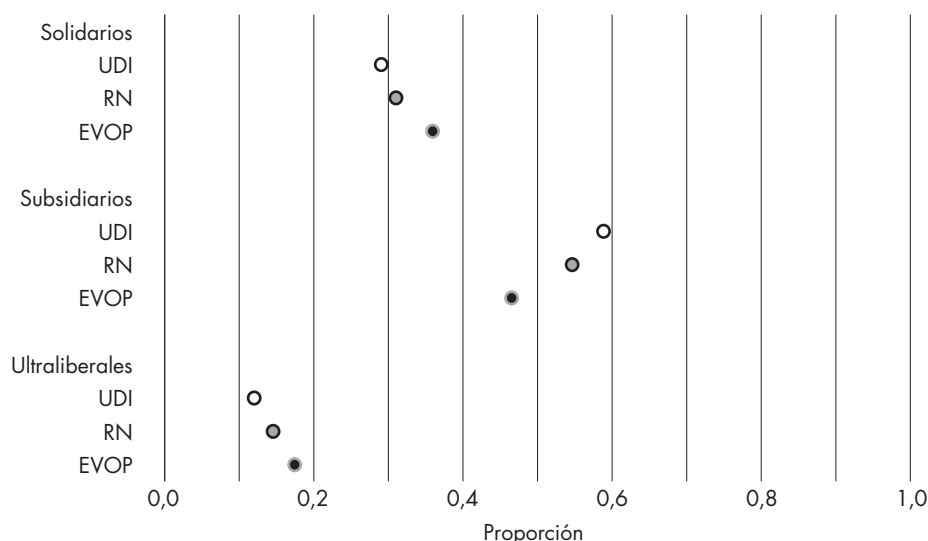
La nueva cara de la derecha chilena: posmaterialismo y sensibilidades en disputa¹⁰

Dentro de la coalición *Chile Vamos* conviven tres sensibilidades. En términos operacionales, a diferencia de las categorías partidarias que son autoreportadas, dichas sensibilidades fueron construidas a partir de las respuestas de los y las dirigentes a dos preguntas relacionadas con el rol deseable del Estado en la

10. Esta sección se basa en los resultados de una encuesta representativa a dirigentes de la coalición *Chile Vamos*. Para construir la muestra se utilizó el registro de dirigentes proporcionado por cada directiva. Una vez validado, para RN y la UDI se generó una muestra en base a un diseño estratificado por cargos y, dentro de cada estrato, se procedió a un muestreo aleatorio sin reemplazo. En cambio, se realizó un censo en Evópoli, dado el tamaño reducido del universo de dirigentes (N=114). La encuesta se aplicó desde mediados de noviembre 2015 hasta finales de octubre de 2016, logrando una alta tasa de respuesta (91% en Evópoli; 65% en la UDI y 47% en RN). Se abarcaron diferentes aspectos relativos a las características y a la vida interna de los partidos: el perfil socioeconómico de la dirigencia, sus trayectorias políticas, sus percepciones sobre el funcionamiento interno de cada organización y sus idearios respectivos. Este artículo se centra en los posicionamientos ideológicos de la dirigencia tanto en el eje redistributivo como sobre cuestiones posmateriales o coyunturales.

economía¹¹. Si bien la mayoría de la dirigencia sigue siendo de sensibilidad subsidiaria, es posible observar cómo, en segundo lugar, destaca la sensibilidad solidaria, y que existe una minoría de dirigentes ultraliberales. Desde el punto de vista de los partidos, y como muestra la figura 1, este patrón se repite con unas pocas salvedades (Alenda *et al.*, 2020a)¹².

Figura 1. Distribución de sensibilidades por partido dentro de la coalición *Chile Vamos*



Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2015-2016) a la dirigencia de *Chile Vamos*.

Resulta sorprendente que las tres sensibilidades se repliquen en el interior de los partidos, puesto que la emergencia de un nuevo partido como Evópoli podría haber

11. Así, los ultraliberales son los que se mostraron en desacuerdo con que: «El Estado debe implementar políticas redistributivas para los grupos vulnerables» (13% de la muestra); los subsidiarios estuvieron de acuerdo con esto, pero mostraron su desaprobación con que el Estado deba «aumentar la carga tributaria personal para financiar políticas del ámbito de la protección social» (55,5%); y los solidarios se mostraron a favor de ambas afirmaciones (31,5%).

12. Las figuras muestran la proporción estimada y el intervalo de confianza al 95%.

conllevado la expresión de posturas más heterodoxas en lo que atañe al rol del Estado en la economía. Sin embargo, las tipologías existentes sobre los nuevos partidos muestran que no todos ellos son ideológicos ni desarrollan una relación conflictiva con los partidos tradicionales (Lucardie, 2000). De hecho, Evópoli integra una coalición de gobierno en la que intenta ocupar un espacio relevante. Al mismo tiempo, realiza un *aggiornamento* ideológico del sector (Alenda *et al.*, 2020c)¹³. En los datos recogidos, entonces, las mayores diferencias entre partidos no se observan en el eje Estado-mercado –el cual define las sensibilidades–, sino en relación con los valores posmateriales. Este resultado es coincidente con la literatura especializada que sostiene que las nuevas organizaciones partidarias suelen surgir para articular demandas en torno a nuevos problemas o a cuestiones desatendidas por los partidos tradicionales, estando al mismo tiempo inmersas en las interacciones estratégicas y coacciones institucionales propias de los sistemas políticos (Harmel y Robertson, 1985; Inglehart y Adeweg, 1993; Hug, 2001; Sikk, 2012)¹⁴.

En la figura 2 se puede observar dentro de cada partido el porcentaje que está de acuerdo o muy de acuerdo con las siguientes políticas públicas cercanas al ideario posmaterial alrededor del mundo: la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del consumo de marihuana. En el caso específico de Chile, la controversia sobre la reforma constitucional, aunque coyuntural, también puede incluirse en este espectro por tratarse de un asunto no material. La Constitución vigente, si bien reformada varias veces, data de la dictadura y su cambio constituye una reivindicación histórica de la agenda de izquierdas. La derecha ha tendido a defender el legado de Pinochet y, con ello, la legitimidad de la actual ley fundamental, por lo cual resulta interesante observar cómo se posiciona Evópoli en calidad de partido nuevo vis a vis sus socios de coalición. En todos estos temas, se puede corroborar que este partido presenta diferencias sustantivas y estadísticamente significativas con los demás integrantes de *Chile Vamos*¹⁵.

13. En este sentido, Evópoli se aparta en particular de la tipología de Sikk (2012) en no ser una organización que solo busque un cambio de formas más que de sustancia, lo que Sikk denomina partidos «de lo nuevo».

14. En perspectiva comparada, las nuevas cuestiones que han dado origen a las nuevas organizaciones partidarias han sido generalmente del orden de lo posmaterial, ligadas a temas medioambientales o identitarios que surgieron con el paso a las sociedades posindustriales (Inglehart, 1977 y 1990). Sin embargo, el clivaje posmaterial no siempre se ha visto activado a través de la emergencia de nuevos partidos (Hug, 2001; Harmel y Robertson 1985) y los casos en que esto sí sucedía han coincidido con ventanas de oportunidad institucionales que facilitaran la emergencia de organizaciones nuevas y su éxito (Rüdiger, 1990; Hauss y Rayside, 1978).

15. En todos los casos, los intervalos de confianza y los test estadísticos están calculados utilizando la corrección por muestra finita (Lohr, 2009).

Los datos evidencian dos resultados interesantes. Por un lado, el alto grado de desacuerdo con la despenalización del aborto de la derecha chilena en general; un tema que sigue uniendo a los partidos de *Chile Vamos* más allá de su fecha de creación. Por otro lado, la claridad con la que Evópoli se distingue de sus socios en temas cercanos a la moral religiosa –como el matrimonio igualitario– y al legado de Pinochet –como el apoyo a una nueva Constitución–. De hecho, este último asunto cobra una relevancia mayor con posterioridad a la crisis social y política de 2019. Ante el escenario del plebiscito por la nueva Constitución, reprogramado el 25 de octubre de 2020¹⁶ debido a la pandemia del COVID-19, fue Evópoli el único de los tres principales partidos de *Chile Vamos* que se encolumnó inicialmente a favor del cambio (Rivas, 2020), mientras que la UDI se decidió por apoyar al rechazo (El Mostrador, 2020a) y RN dejó en libertad de acción a sus militantes¹⁷. Se puede asimismo considerar que Evópoli renueva hasta cierto punto a la derecha, acercándose al tipo ideal del partido «purificador» (Lucardie, 2000), pues solo moderniza a la centroderecha mediante la liberalización de su apoyo a cuestiones morales y posmateriales, en la línea del «nuevo» Partido Conservador británico y su giro «pragmático» (Norman, 2014: 222)¹⁸. Si esta nueva cara de la derecha ha sido posible gracias a Evópoli, es porque este logró irrumpir en el coto de caza de los partidos tradicionales de derecha, manteniéndose a la vez dentro de la coalición de gobierno. Ello le ha permitido traer cierto aire fresco sobre algunos temas sin revisitar de manera profunda las posiciones de la coalición, en particular en lo tocante a la dicotomía Estado-mercado. Esta formación activa además un clivaje posmaterial reflejado en el perfil tanto etario como religioso de su dirigencia, lo que permite entender el mayor liberalismo moral del partido, en sintonía con las transformaciones culturales recientes de la sociedad chilena¹⁹.

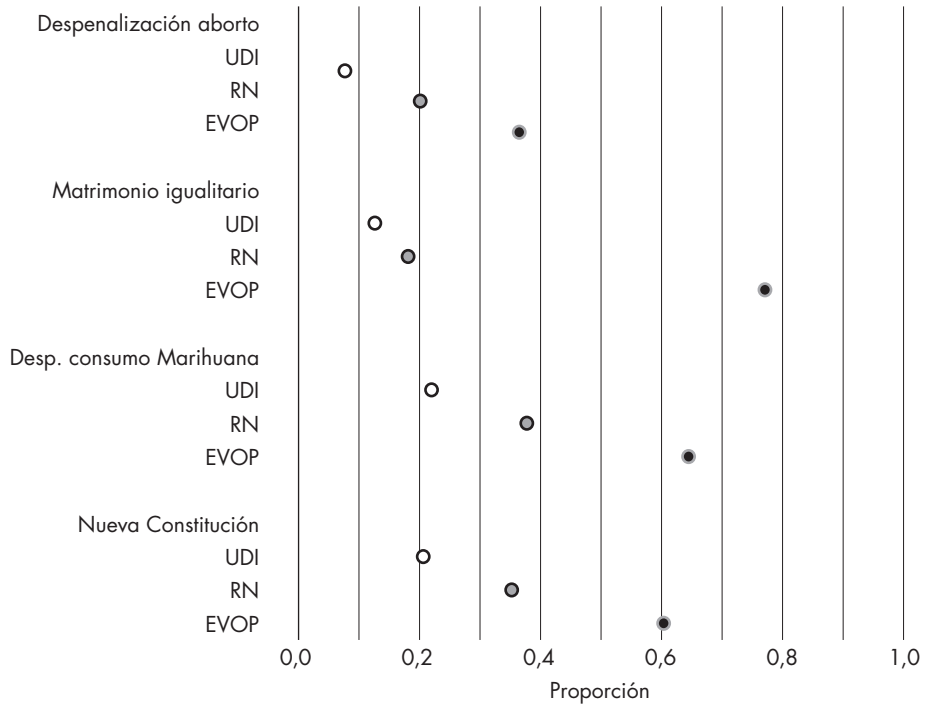
16. Al cierre de este artículo (noviembre de 2020) ya se ha celebrado el plebiscito, con unos resultados que dieron ganadora a la opción de cambio constitucional de manera contundente. Su aprobación arrasó con un 78% de los votos, mientras la convención constitucional, que era uno de los dos órganos elegibles para redactar el texto de la nueva Constitución se impuso con un 79%. Según la encuesta Cadem del 25 de octubre de 2020, aproximadamente un tercio del electorado de derecha optó por el «Apruebo».

17. Según el presidente de RN, el diputado Mario Desbordes (citado en El Mostrador, 2020b): «Una mayoría está por la opción rechazo, no sé cuánto, un 60 por ciento (de militantes) por lo menos. Pero hay una minoría importante, que no es del 10 por ciento, no es del 5 por ciento (...) La mayoría o muchos de nuestros alcaldes están por el “apruebo”. Hay diferentes puntos de vista». Con respecto a Evópoli, después de un apoyo inicial al Apruebo decidieron con posterioridad dejar en libertad de acción a su militancia.

18. Sin embargo, otros analistas relevaron que dicho giro no puso en cuestión los principios fundamentales de la herencia de Margaret Thatcher (Hayton, 2016: 54).

19. Una de las características diferenciadoras de Evópoli es ser el partido más joven de *Chile Vamos*. Resaltan en él los menores de 45 años, mientras los mayores de 65 solo alcanzan al 4%, versus el 18% en la UDI y el 31% en RN. Los niveles de religiosidad diferencian también a Evópoli de sus

Figura 2. Proporción de acuerdo o muy de acuerdo según partido dentro de la coalición *Chile Vamos*

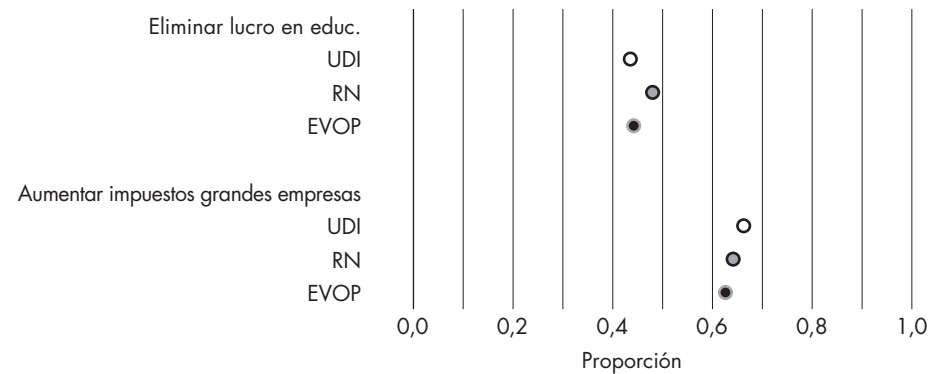


Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2015-2016) a la dirigencia de *Chile Vamos*.

Esta renovación tiene, sin embargo, sus límites. Si se observan las reformas asociadas al eje Estado-mercado, se repite el patrón constatado al mirar las sensibilidades. La figura 3 muestra así que no existen diferencias en la proporción de dirigentes que está de acuerdo con eliminar el lucro en la educación, o bien aumentar los impuestos a las grandes empresas, lo que vuelve a los partidos de *Chile Vamos* indistinguibles respecto a políticas públicas en el ámbito de la economía.

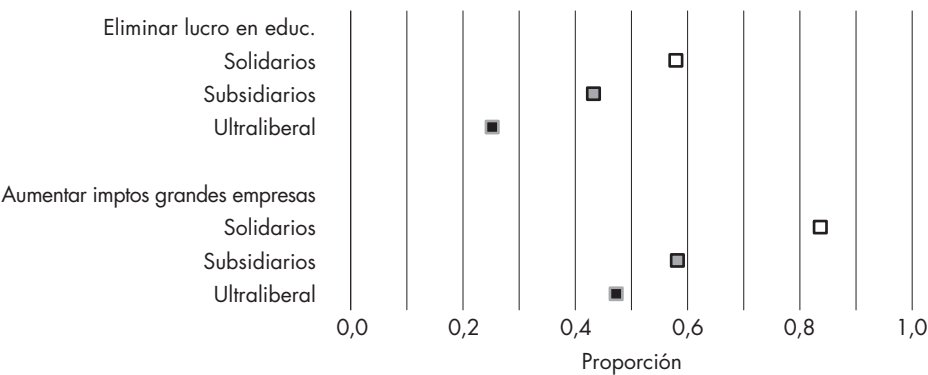
socios de coalición, pues el partido concentra el mayor porcentaje de los que no se identifican con una religión (35% versus 7% y 12% en la UDI y RN, respectivamente) (Alenda *et al.*, 2020b: 181 y 184).

Figura 3. Proporción de acuerdo o muy de acuerdo según partido dentro de la coalición *Chile Vamos*



Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2015-2016) a la dirigencia de *Chile Vamos*.

Figura 4. Proporción de acuerdo o muy de acuerdo según la sensibilidad dentro de la coalición *Chile Vamos*



Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2015-2016) a la dirigencia de *Chile Vamos*.

Las diferencias de actitudes en la élite dirigente de la coalición pueden ser entendidas tanto a través de un efecto de partido, como de un efecto de sensibilidad. Si los partidos dividen la coalición a lo largo de líneas organizacionales, las sensibili-

dades cortan a estos de manera homogénea, expresando las diferentes visiones de la dirigencia con respecto al rol deseable del Estado en la economía. En este sentido, el potencial de renovación de la derecha chilena radica también en las diversas sensibilidades presentes en ella. Como se observa en la figura 4, existen importantes diferencias –sustantivas y estadísticamente significativas– en el grado de acuerdo según la sensibilidad a las políticas públicas relativas a la economía.

Tanto en la deseabilidad de eliminar el lucro en la educación como en la de aumentar los impuestos a las grandes empresas, las élites solidarias presentan actitudes distinguibles de las élites subsidiarias o ultraliberales y son más favorables a una intervención mayor de Estado en la economía. La encuesta muestra que, en el seno de la coalición, ya existía en 2016 un núcleo de dirigentes que apoyaban una agenda más alejada de la zona de confort tradicional de la derecha en Chile. Estas posiciones, que han adquirido mayor visibilidad en el marco de la crisis social, política y sanitaria, vienen a cuestionar la hegemonía neoliberal forjada en la dictadura. En la próxima sección se ahonda sobre dichas crisis y sus efectos acumulativos sobre el fortalecimiento de los liderazgos solidarios.

Las tensiones en el interior de la coalición *Chile Vamos*

La segunda Administración de Sebastián Piñera (iniciada en marzo de 2018) ha enfrentado circunstancias extraordinarias marcadas por las crisis social y política que comenzaron el 18 de octubre de 2019²⁰, a las que se sumó la pandemia del COVID-19 unos meses más tarde. En su transcurso, el Ejecutivo se vio desbordado por diferentes tipos de actores (ediles, pero también una institución policial demasiado autónoma, expertos que fiscalizaron el actuar del Gobierno

20. La crisis estalló a raíz de un anuncio del Gobierno Piñera de subir las tarifas del metro, lo que desencadenó la protesta de centenares de escolares que invitaron a eludir el pago del pasaje. La represión de los intentos de saltar los torniquetes condujo a una espiral de evasión-represión que fue in crescendo hasta el enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden. El 18 de octubre de 2019, se añadió a los disturbios el incendio simultáneo de nueve estaciones del metro en Santiago, tras lo cual fue decretado el estado de emergencia. En pocos días, las movilizaciones se masificaron a nivel nacional. Aunque mayoritariamente pacíficas, fueron acompañadas de saqueos y ataques incendiarios a 25 estaciones de metro. Las protestas mantuvieron su intensidad (el 26 de octubre dio lugar a la marcha más masiva desde el retorno de la democracia, de más de un millón de manifestantes), al igual que la inusitada violencia, hasta el estallido de la crisis del coronavirus.

en materia de control de la pandemia o un «parlamentarismo de facto» percibido como disruptivo en relación con un régimen presidencial exacerbado)²¹. Se vio también presionado a apoyar políticas fuera de la zona de confort de la derecha, entre las cuales cambiar la Constitución y aumentar la intervención del Estado en la economía. Como se mostró en la sección anterior, en la coalición ya existían voces a favor de estas medidas. Tanto el respaldo de Evópoli a una reforma constitucional instalada por el Gobierno de la presidenta Bachelet en 2016, como el apoyo de los solidarios a una mayor injerencia estatal, son ejemplos de sectores de derecha que han logrado sintonizar con la nueva agenda política que emergió de las diferentes crisis²². Las políticas relacionadas con una mayor intervención del Estado en la economía pueden entonces vincularse con esta sensibilidad solidaria distribuida de manera relativamente homogénea en los partidos.

Aunque esta última no represente a la mayoría de las élites de la coalición, es posible argumentar que la influencia de estas ideas no depende linealmente de la proporción de dirigentes que las profesan, siendo relevante el factor del liderazgo entendido en cuanto protagonismo de figuras individuales que puedan instalar exitosamente su visión del mundo. La disputa sobre cómo salir de la crisis se ha trasladado así en el interior de la coalición de gobierno, tensionando a las élites tanto entre partidos, por el cambio de la Constitución, como entre sensibilidades, por el mayor rol que le corresponde jugar al Estado. Esta última tensión ha llegado a su paroxismo con la pandemia, que plantea desafíos a la vez sanitarios y económicos, y pone en el banquillo de acusados a un Gobierno que debe al mismo tiempo cuidar la salud física de sus habitantes frente al COVID-19 y el tejido socioeconómico del país.

En este contexto, este artículo muestra que la confluencia de estas crisis ha fortalecido a los liderazgos solidarios. De hecho, las figuras más prominentes de la coalición que se han enfrentado al Gobierno central mostrándose a favor de medidas intervencionistas son ejemplos de líderes solidarios. El exalcalde de

21. Sobre la gestión del estallido social, véase Alenda (2020b).

22. Por supuesto, estos no son los únicos temas que tensionan a la coalición. La temática de género venía ganando especial relevancia en Chile con las tomas feministas de las universidades en 2018, que generaron un amplio respaldo a las demandas feministas (Reyes-Housholder y Roque, 2019), también de parte de figuras de la centroderecha. De hecho, algunas de las propulsoras de la paridad de género en la próxima convención constitucional y de la extensión del posnatal de emergencia fueron diputadas de *Chile Vamos*. En el interior de la coalición, coexisten con figuras más cercanas a los movimientos conservadores, algunos cercanos al evangelismo, que están vehementemente en contra de derechos como la identidad de género, el matrimonio igualitario y la educación sexual integral. Cabe subrayar que estas temáticas, aunque alejadas del foco de este artículo, representan una línea de diferenciación en el seno de la centroderecha.

Puente Alto y actual senador, Manuel José Ossandón (RN), y el excandidato presidencial y actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), han sido las personalidades mejor evaluadas por la opinión pública en medio del estallido social. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de diciembre de 2019, los políticos de la coalición que ocupaban las posiciones más destacadas eran Joaquín Lavín, Manuel José Ossandón y Cathy Barriga con el 20% o más de valoración positiva. Por su parte, el expresidente de RN –actual ministro de Defensa–, Mario Desbordes, que en la encuesta CEP de mayo de 2019 tenía una valoración similar a la del exsenador de RN –actual ministro de Relaciones Exteriores–, Andrés Allamand, subió en diciembre en su posición relativa²³. Si el Gobierno había priorizado una agenda ortodoxa en relación con el rol del Estado, el estallido social, primero, y la pandemia, después, pusieron en cuestionamiento la capacidad de esa agenda para dar respuesta a los trances actuales.

Estos liderazgos solidarios de derecha comparten en su mayoría otra característica que es interesante recalcar en un sistema de gobierno tan centralizado como el chileno. Las primeras voces que se alzaron en el interior de la coalición, criticando las decisiones del Gobierno durante el estallido social y posteriormente durante la pandemia, fueron las autoridades locales, alcaldes y alcaldesas y senadores y diputados con una trayectoria ligada a la política local. Son los alcaldes quienes gozan de un mayor respaldo de parte de la opinión pública. En la misma encuesta CEP de diciembre de 2019, mientras un 81% consideraba que el Gobierno de Sebastián Piñera había actuado mal o muy mal, y un 80% opinaba lo mismo del Congreso y un 72% de la oposición, ese porcentaje caía a 50% en el caso de los alcaldes. Según la encuesta Cadem del 13 de abril de 2020, un 77% evaluaba muy positivamente su gestión ante la crisis del COVID-19, versus un 28% que aprobaba la gestión presidencial de la pandemia. Así, los solidarios en general, pero también en particular quienes tienen una relación de mayor cercanía con la ciudadanía, levantaron su parecer

Este artículo muestra que la confluencia de estas crisis ha fortalecido a los liderazgos solidarios. De hecho, las figuras más prominentes de la coalición que se han enfrentado al Gobierno central mostrándose a favor de medidas intervencionistas son ejemplos de líderes solidarios.

23. Es importante notar que todos los personajes políticos caen en valoración positiva, pero algunos caen más que otros por lo que las posiciones relativas cambian. Así, Mario Desbordes que pasa de un 22% de valoración positiva a un 18%, sube en términos relativos, mientras que Lavín, Ossandón y Barriga se mantienen como los mejor evaluados de la coalición.

disidente respecto al rumbo económico y también político del Gobierno, proponiendo medidas alternativas.

Dos ejemplos dan cuenta de esta tendencia protagónica de las autoridades locales: uno relacionado con la crisis social y el otro con la pandemia del COVID-19. En las primeras semanas posteriores al estallido social, cuando el Gobierno no podía controlar la violencia de la revuelta y la represión ya había conseguido titulares en la prensa mundial, fueron los y las alcaldes quienes impulsaron una consulta a la ciudadanía sobre la posibilidad de cambiar la Constitución, viendo en ello una potencial salida política a la crisis social. «Aquí estamos poniendo una primera piedra para que a través de los municipios se propongan soluciones para resolver las justas demandas sociales, y así recuperar la paz, la tranquilidad y honrar la institucionalidad del país», dijo a la prensa Raúl Torrealba (RN), alcalde histórico de la comuna de Vitacura, la más rica de Chile (Saleh, 2019). La consulta ciudadana concitó un apoyo transversal y ejerció presión sobre el Gobierno y los actores nacionales quienes, semanas después, acordaron llamar a un plebiscito vinculante sobre el cambio a la Constitución.

De hecho, las figuras más prominentes de la coalición a escala local declararon su apoyo al cambio de la ley fundamental, aún en contra de sus partidos, como fue el caso de los ediles ligados a la UDI –Joaquín Lavín (Las Condes) y Rodolfo Carter (La Florida)²⁴–, o pertenecientes a RN –Felipe Alessandri (Santiago) y Luis Sanhueza (San Miguel)–. Como se ha mencionado anteriormente, es el alcalde de Las Condes quien tiene una mejor imagen en la ciudadanía y se perfila como el principal presidenciable de la centroderecha, a pesar de tener una posición contraria a la mayoría de la coalición en lo relativo al cambio constitucional y al modelo económico vigente. En una columna de opinión publicada en *El Mercurio*, realizó una defensa del cambio de la ley fundamental, usando la analogía de que la actual Constitución es como un «traje» que se lleva puesto y ya no queda bien. Criticó también mordazmente a la élite: «El club cerrado le hace daño a Chile. Nos limita. Nos pone techo al impedir que todos los talentos puedan ser aprovechados al máximo» (Lavín, 2020; véase también Muñoz, 2020).

Durante la pandemia, los alcaldes de la coalición impugnaron también al exministro de Salud, Jaime Mañalich (Neira, 2020). Destacando el protagonismo del alcalde de Puente Alto Germán Codina (RN y delfín político del senador Ossandón) y de la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga (Independiente

24. Rodolfo Carter militó en la UDI hasta el año 2014.

pro-UDI y nuera de Joaquín Lavín), algunos de los alcaldes adoptaron posturas cercanas a la sensibilidad solidaria y se volvieron los principales opositores al manejo de la crisis sanitaria por el Gobierno nacional. El alcalde Codina denunció que «el principal problema de los municipios es que las medidas económicas de La Moneda no se concretan» (citado en Becerra, 2020), impidiendo que los gobiernos locales puedan intervenir en el manejo de la emergencia sanitaria. Por su parte, la alcaldesa de Maipú, que lideraba junto con su suegro la aprobación de la ciudadanía en medio de la pandemia, según la encuesta Cadem del 13 de abril, no ha ocultado su molestia a raíz de que su comuna no fuera declarada en cuarentena en medio de la estrategia gubernamental de contención de los contagios (Ilustrado.cl, 2020). Escaramuzas similares se replicaron en diferentes comunas –por ejemplo, de parte del alcalde Claudio Radonich (RN) de Punta Arenas (La Prensa Austral, 2020)–, evidenciando que la pandemia vino a profundizar la tendencia a convertir a las autoridades locales en portavoces privilegiados de las preocupaciones ciudadanas, más allá de las líneas partidistas.

Conclusiones: ¿el camino doble de la renovación en *Chile Vamos*?

En este artículo se ha argumentado que dos elementos centrales dan cuenta de una potencial renovación de la derecha. Por un lado, la emergencia de una nueva organización política a través de Evópoli trajo aire fresco sobre ciertas ideas, despegando a la coalición de su identificación con la dictadura de Augusto Pinochet y actualizando sus posiciones con respecto a temas posmateriales. Por otro lado, se observa un fortalecimiento del protagonismo de los liderazgos solidarios que tensionan a la coalición con respecto a lo que fuera la amalgama más fuerte de *Chile Vamos*, que no había siquiera cuestionado la irrupción de Evópoli: la convicción de que el Estado solo debía intervenir de manera subsidiaria.

Mientras el estallido social y la esperanza de una convención constituyente reactivaron el debate ideológico sobre el tipo de Estado que surgiría del conflicto, la crisis del COVID-19 dio un paso más al rehabilitar el rol del Estado a través de los millonarios paquetes que fueron adoptados para rescatar las economías mundiales (Castillo, 2020). La crisis actual constituye una ventana de oportunidad para cambiar en el largo plazo la percepción del Estado, cuyo papel se encuentra revalorizado en el marco de la pandemia. Esta valoración toca tanto el ámbito de la protección social a través de la relevancia atribuida al sistema

sanitario y a los hospitales públicos²⁵, como del orden y seguridad a través de un repunte en la aprobación de la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército, instituciones que venían muy deslegitimadas por las denuncias de violación a los derechos humanos durante el estallido social²⁶.

Así, mientras la crisis social y política impulsó el tema constitucional, la crisis del coronavirus entrega a los liderazgos solidarios la posibilidad de hacer valer sus ideas en un contexto de nuevo protagonismo del Estado. Con ello, la renovación de la derecha podría consolidarse más allá de la defensa de valores posmateriales. Si bien la fluidez del momento dificulta establecer predicciones acabadas, las encuestas más recientes y el reciente nombramiento del exalcalde de la comuna Estación Central como Ministro del Interior, siguen confirmando el protagonismo de los liderazgos solidarios y subnacionales en la política chilena.

Referencias bibliográficas

- Alenda, Stéphanie. «*Les avatars de la 'nouvelle droite' chilienne: la fabrique d'une institution partisane (1967-2010)*», *POLITIX. Revue des sciences sociales du politique*, n°106 (27), 2014, p.135-161.
- Alenda, Stéphanie (ed.). *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2020a, p. 43-85.
- Alenda, Stéphanie. «Las ambivalencias de la derecha en la gestión de la Primavera Chilena de 2019-2020». *RELASP*, año 1, n.º 1, 2020b, p. 199-205.
- Alenda, Stéphanie; Le Foulon, Carmen; Suárez-Cao, Julieta, «La batalla por las ideas en tiempos posideológicos: Adaptaciones y permanencias ideológicas en la nueva centroderecha chilena», *Revista de Sociología e Política*, vol. 27, n.º 70 (junio de 2019).
- Alenda, Stéphanie; Le Foulon, Carmen; Suárez-Cao, Julieta. «Evolución de las sensibilidades políticas: hacia una nueva centroderecha en Chile». En: *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2020a, p. 87-118.

25. En la encuesta Critería de marzo de 2020, un 85% estimaba que los hospitales públicos son la institución cuyo rol es el más relevante para superar la crisis del coronavirus.

26. Según la encuesta Cadem del 6 de abril de 2020, la aprobación de su trabajo registró un alza significativa respecto al mes de marzo, ubicándose a la par de las municipalidades.

- Alenda, Stéphanie; Gartenlaub, Andrea; Fischer, Karin. «Ganar la batalla de las ideas»: el rol de los *think tanks* en la configuración de la nueva centroderecha chilena». En: *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2020b, p. 119-156.
- Alenda, Stéphanie; Le Foulon, Carmen; Del Hoyo, Sebastián. «Evolución Política y la renovación liberal en Chile». En: *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2020c, p. 157-189.
- Ansart, Pierre. «Pour l'analyse des sensibilités politiques». En: Études dédiées à Madeleine Grawitz: *liber amicorum*. París: Dalloz, 1982, p. 141-152.
- Becerra, Alejandra. «Alcalde Codina: “La burocracia se está transformando en parte de la pandemia”». *Pauta*, (13 de abril de 2020). Disponible en línea en: <https://www.pauta.cl/politica/alcalde-puente-alto-german-codina-critica-falta-transparencia-por-covid-19>
- Benavente, Andrés y Araya, Eduardo. *La derecha política chilena y el régimen militar 1973-1981*. Santiago: ILADES, 1981.
- Bobbio, Norberto. *Derecha e Izquierda. Razones y significados de una distinción política*. Roma: Donzelli Editore, 1995.
- Borón, Atilio A. «Ruling without a Party: Argentine Dominant Classes in the Twentieth Century». En: Middlebrook, Kevin (ed.). *Conservative Parties, the Right, and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000, p. 139-163.
- Cannon, Barry. *The Right in Latin America*. Nueva York: Routledge, 2016.
- Cañas, Enrique. «Los Partidos Políticos». En: Toloza, Cristián y Lahera, Eugenio (eds.). *Chile en los Noventa*. Santiago: Ed. Dolmen, 1992, p. 53-90.
- Castillo, Daniel. «Keynes contra el coronavirus». *The Conversation*, (23 de marzo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2020] <https://theconversation.com/keynes-contra-el-coronavirus-134303>
- Chalmers, Douglas A.; Campello de Souza, Maria do Carmo y Borón, Atilio. *The Right and Democracy in Latin America*. Nueva York: Praeger Publishers, 1992.
- CNN Chile, «Germán Codina: “Esta crisis hay que pagarla con contracción económica, no con vidas”». *CNN Chile*, (23 de marzo 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2020] https://www.cnnchile.com/coronavirus/german-codina-gobierno-entender-contraccion-economica_20200323/
- Cooperativa. «Los rostros del “Sí” en RN para el plebiscito por la nueva Constitución». *Cooperativa*, (26 de diciembre 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2020] <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/reformas-constitucionales/los-rostros-del-si-en-rn-para-el-plebiscito-por-la-nueva-constitucion/2019-12-26/085059.html>

- Cristi, Renato y Ruiz, Carlos. *El pensamiento conservador en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria, 1992.
- Díaz, Nicolás. «Una travesía inconclusa: Divisiones en Renovación Nacional durante el gobierno de Sebastián Piñera». *Revista de Ciencia Política*, vol. 36, n.º 2 (2016), p. 481-502.
- El Mostrador. «La advertencia de Van Rysselberghe: “Queremos ser el partido eje de la derecha, que defienda sus principios, porque tenemos los pantalones y polleras para hacerlo”». *El Mostrador*, (10 de enero 2020a) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2020] <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/10/la-advertencia-de-van-rysselberghe-queremos-ser-el-partido-eje-de-la-derecha-que-defienda-sus-principios-porque-tenemos-los-pantalones-y-polleras-para-hacerlo/>
- El Mostrador. «Plebiscito: Desbordes asegura que hay una “minoría importante” en RN que está por aprobar la nueva Constitución». *El Mostrador*, (11 de enero de 2020b) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2020] <https://www.elmostrador.cl/dia/2020/01/11/plebiscito-desbordes-asegura-que-hay-una-minoria-importante-en-rn-que-esta-por-aprobar-la-nueva-constitucion/>
- Emol. «Briones y aumento de 50% de aporte solidario: “En este momento no es factible, pero queremos ir hacia allá”». *Emol* (17 de noviembre de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2020] <https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/11/17/967490/Briones-Hacienda-pensiones-aporte-solidario.html>
- Fernández, Joaquín y Rumié, Sebastián. «Las transformaciones de la derecha chilena: Desafíos, adaptaciones y renovaciones (1932-2010)». En: Alenda, Stéphanie (ed.). *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2020, p. 43-85.
- Gibson, Edward L. *Class and Conservative Parties: Argentina in Comparative Perspective*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
- Godoy, Oscar. «Horizontes futuros de la derecha chilena». *Revista Política*, vol. 45, (2005), p. 207-214.
- Harmel, Robert y Gibson, Rachel K. «Right-Libertarian Parties and the “New Values”: A Re-examination». *Scandinavian Political Studies*, vol. 18, (1995), p. 97-118.
- Harmel, Robert y Robertson, John D. «Formation and Success of New Parties». *International Political Science Review*, vol. 6, n.º 4 (1985), p. 501-523.
- Hauss, Charles y Rayside, David. «The Development of New Parties in Western Democracies since 1945». En: Maisel, Louis y Cooper, Joseph (eds.). *Political Parties: Development and Decay*. Beverly Hills: Sage, 1978, p. 31-54.
- Hayton, Richard. «Constructing a new conservatism? Ideology and values». En: Peele, Gillian y Francis, John (eds.). *David Cameron and Conservative Renewal: The Limits of Modernisation? New Perspectives on the Right MUP*. Manchester: Manchester University Press, 2016, p. 1-24.

- Herrera, Hugo. *La Derecha en la Crisis del Bicentenario*. Santiago: UDP, 2014.
- Hinzpeter, Rodrigo. «Sus definiciones y la nueva derecha». *Capital*, n.º 288, (5-8 de noviembre de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 15.04.2020] <https://www.capital.cl/hinzpeter-sus-definiciones-y-la-nueva-derecha/>
- Hug, Simon. *Altering Party Systems. Strategic Behavior and the Emergence of New Political Parties in Western Democracies*. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 2001.
- Ilustrado.cl. «Cathy Barriga nuevamente se lanza contra Mañalich por no decretar cuarentena total en Maipú». *Ilustrado.cl*, (14 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 05.04.2020] <https://www.ilustrado.cl/2020/04/14/cathy-barriga-jaime-manalich-maipu/>
- Inglehart, Ronald. *The Silent Revolution*. Princeton: Princeton University Press, 1977.
- Inglehart, Ronald. *Culture Shift in Advanced Industrial Societies*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- Inglehart, Ronald y Andeweg, Rudy B. «Change in Dutch Political Culture: A Silent or a Silenced Revolution». *West European Politics*, vol. 16, n.º 3 (1993), p. 345-361.
- La Prensa Austral. «Al igual que Cathy Barriga, el alcalde Radonich se adelantó y confirmó tercer fallecido por Covid-19». *La Prensa Austral*, (8 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 05.04.2020] <https://laprensaaustral.cl/titular1/al-igual-que-cathy-barriga-el-alcalde-radonich-se-adelanto-y-confir-mo-tercer-fallecido-por-covid-19/>
- Lavín, Joaquín. *Miguel Kast. Pasión de vivir*. Santiago: Zig-Zag, 1988.
- Lavín, Joaquín. «La reunificación de Chile y el cambio de modelo». *El Mercurio*, (12 de enero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 05.04.2020] <https://www.elmercurio.com/blogs/2020/01/12/75470/La-reunificacion-de-Chile-y-el-cambio-de-modelo.aspx>
- Lohr, Sharon L. *Sampling: Design and Analysis*. 2nd ed. Boston: Cengage Learning, 2009.
- Lucardie, Paul. «Prophets, Purifiers and Prolocutors: Towards a Theory on the Emergence of New Parties». *Party Politics*, vol. 6, (2000), p. 175-185.
- Luna, Juan Pablo y Rovira Kaltwasser, Cristóbal (eds.). *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.
- Mackinnon, Ian. *Renovación Nacional: entre conservadores y reformistas*. Tesis de Licenciatura en Ciencia Política, Instituto de Ciencia Política, Universidad Católica de Chile, 2005.
- Mansuy, Daniel. «Una derecha heterodoxa». *Revista Santiago*, (30 de julio de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 05.04.2020] <http://revistasantiago.cl/politica/una-derecha-heterodoxa/>

- Middlebrook, Kevin. *Conservative Parties, the Right, and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000.
- Moulian, Tomás y Torres, Isabel. *La reorganización de los partidos de la derecha entre 1983 y 1988* [documento de trabajo]. Santiago: Flacso, n.º 388, 1988.
- Muñoz, Andrés. «Lavín, el único que flota en la CEP: El lío en Chile Vamos por su participación en la franja». *La Tercera*, (17 de enero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 05.04.2020] <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/lavin-unico-flota-la-cep-rn-no-descarta-incluirlo-la-franja-apruebo/977469/>
- Neira, Cristian. «La ironía de Jaime Mañalich por su pugna contra los alcaldes en medio de la pandemia del COVID-19». *El Desconcierto*, (17 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 05.04.2020] <https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/17/la-ironia-de-jaime-manalich-por-su-pugna-contra-los-alcaldes-en-medio-de-la-pandemia-del-covid-19/>
- Norman, Jesse. *La gran sociedad. Anatomía de la nueva política*. Santiago: Instituto de Estudios de la Sociedad, Fundación Cientochoenta, 2014.
- Pelfini, Alejandro y Rueda, Vicente. «Las dos caras del entorno social de la nueva centroderecha en Chile». En: Alenda, Stéphanie (ed.). *Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio*. Santiago: FCE, 2020, p. 269-293.
- Pereira, Teresa. *El Partido Conservador 1930-1965*. Santiago: Fundación Mario Góngora, 1994.
- Rémond, René. *Les Droites en France*. Paris: Aubier, 1982 [1954].
- Reyes-Housholder, Catherine y Roque, Beatriz. «Chile 2018: desafíos al poder de género desde la calle hasta La Moneda». *Revista de Ciencia Política*, vol. 39, n.º 2 (2019), p. 191-215.
- Rivas, Sebastián. «Evópoli vota por respaldar la opción “Apruebo” en el plebiscito, pero deja libertad de acción». *La Tercera*, (25 de enero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2020] <https://www.latercera.com/politica/noticia/evopoli-vota-respaldar-la-opcion-apruebo-plebiscito-deja-libertad-accion-afirma-podria-revisar-la-decision-no-existir-condiciones/987025/>
- Rüdig, Wolfgang. *Explaining Green Party Development. Reflections on a Theoretical Framework*. Glasgow: Strathclyde Papers on Government and Politics, 1990.
- Ruiz, Carlos. «Corporativismo e hispanismo en la obra de Jaime Eyzaguirre». En: Cristi, Renato y Ruiz, Carlos. *El pensamiento conservador en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria, 1992, p. 67-102.

- Saleh, Felipe. «La rebelión municipal: el plebiscito que busca dar participación a la ciudadanía ante la crisis social». *El Mostrador*, (11 de noviembre de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2020] <https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/11/11/la-rebelion-municipal-el-plebiscito-que-busca-dar-participacion-a-la-ciudadania-ante-la-crisis-social/>
- Sikk, Allan. «Newness as a winning formula for new political parties». *Party Politics*, vol. 18, n.º 4 (2012), p. 465-486.

FOREIGN AFFAIRS

LATINOAMÉRICA

Porque somos Latinoamérica

En Foreign Affairs Latinoamérica nos renovamos para ofrecerle toda la información sobre América Latina y el mundo en un espacio más dinámico, de fácil acceso y con contenidos exclusivos. Visite fal.itam.mx y comparta con nosotros una nueva forma de vivir las Relaciones Internacionales.



Versión impresa y digital de la revista disponibles en

www.fal.itam.mx



Contenido gratuito y noticias en

f Foreign Affairs Latinoamérica

@ForeignAffairsL



Redes de poder: consideraciones sobre la élite neoliberal de poder y conocimiento en Guatemala

Networks of power: insights into Guatemala's neoliberal power and knowledge elite

Karin Fischer

Profesora asociada, Instituto de Sociología, Universidad Johannes Kepler Linz, Austria.
Karin.Fischer@jku.at. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9307-3051>

Harald Waxenecker

Investigador, Departamento de Estudios Ambientales, Facultad de Estudios Sociales, Universidad Masaryk, República Checa. waxenecker@fss.muni.cz.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8361-2760>

Cómo citar este artículo: Fischer, Karin y Waxenecker, Harald. «Redes de poder: consideraciones sobre la élite neoliberal de poder y conocimiento en Guatemala». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 89-115. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.89

Resumen: Este artículo toma Guatemala como caso de estudio a fin de aportar consideraciones sobre la élite neoliberal de poder y conocimiento. Partiendo de la investigación sobre la estructura del poder y la teoría del poder social de Michael Mann, así como el análisis de redes, el estudio explora la red nacional de *think tanks* de derechas/neoliberales en Guatemala y detecta los enlaces clave o núcleo central dentro de dicha red. Basándose en datos reales, el análisis revela las conexiones empresariales del personal de estos *think tanks* neoliberales. Así pues, el artículo presenta las primeras consideraciones sobre aquellos que ocupan posiciones privilegiadas de poder dentro de la red de *think tanks* y, por lo tanto, tienen capacidades para el establecimiento de contactos y la transferencia de conocimiento en el ámbito del poder económico e ideológico.

Abstract: Taking Guatemala as a case study, this paper reflects on the neoliberal power and knowledge elite. Based on Michael Mann's theory of social power and research on power structure, as well as network analysis, the study explores Guatemala's domestic network of right-wing/neoliberal think tanks and detects the key links and core nuclei within it. Using real data, the analysis reveals the business connections between the staff of these neoliberal think tanks. The paper is thus the first reflection on those in privileged positions of power within the think tank network and the capacity this gives them to establish contacts and transfer knowledge to the fields of economic and ideological power.

Palabras clave: neoliberalismo, *think tanks*, Guatemala, élite de poder y conocimiento

Key words: neoliberalism, think tanks, Guatemala, power and knowledge elite

Basándose en las transformaciones estructurales, se puede encontrar una pauta general en la aplicación del neoliberalismo en América Latina, esto es: el desmantelamiento de la industrialización por sustitución de importaciones y el Estado desarrollista, así como la proliferación de políticas de ajuste estructural y las prescripciones políticas del Consenso de Washington (p. ej. liberalización financiera y del comercio exterior). Para obtener una mejor comprensión de la historia social de este neoliberalismo, es una buena opción observar la transformación institucional de la estructura del poder y del conocimiento. Ello incluye, también, dar cuenta del surgimiento de los *think tanks* (o tanques de pensamiento) privados.

En América Latina, la historia de los *think tanks* neoliberales se remonta a la década de 1950 (Fischer y Plehwe, 2017) y, en muchos casos, surgieron

Este artículo pretende ofrecer un esbozo de la estructura del poder nacional –usando Guatemala como caso de estudio–, a partir de la investigación de las interconexiones entre el poder económico y el ideológico.

a partir de alianzas entre empresarios y emprendedores políticos que tenían como objetivo crear una infraestructura intelectual independiente de las agencias estatales, los profesionales que ostentaban el poder y las universidades públicas.

Estos centros neoliberales ganaron fuerza en el transcurso de la aplicación del Consenso de Washington, es decir, a partir de la década de 1980, cuando se implicaron directamente en el asesoramiento, el diseño y la implementación de dichas políticas. En este sentido, Guatemala es un buen ejemplo de ello, ya que, aunque es un país pequeño, presenta una arquitectura robusta de *think tanks* neoliberales/derechas¹.

Este artículo pretende, así, ofrecer un esbozo de la estructura del poder nacional –usando Guatemala como caso de estudio–, a partir de la investigación de las interconexiones entre el poder económico y el ideológico, próximo a las organizaciones como las corporaciones y, específicamente, los *think tanks*. Para ello, el análisis de redes ayuda a arrojar luz sobre la integración organizativa de la red nacional de *think tanks* neoliberales, lo que permite

1. En este artículo, se usan ambos términos de manera intercambiable. Aquellos que se sitúan en la *derecha* del espectro político, comparten principios y doctrinas neoliberales como: libre empresa y limitada capacidad del Gobierno, regulación favorable al mercado, bajos impuestos, derechos de propiedad privada y estado de derecho.

explorar la existencia de un *núcleo central*, a saber, personas con puestos en dos o más *think tanks*. Debido a sus capacidades de transferencia de conocimiento y del establecimiento de contactos o *networking*, puede darse por sentado que los *linkers* (intermediarios, enlaces) constituyen una parte especialmente importante de la población de emprendedores de este tipo de centros. Siguiendo a Charles Wright Mills (2000 [1956]), consideramos a estos como una élite neoliberal de conocimiento y, a fin de encontrar sus *linkers* clave, buscamos e incorporamos información biográfica procedente de un amplio abanico de fuentes disponibles en Internet. Asimismo, investigamos los vínculos del personal de los *think tanks* con la esfera económica, es decir, sus relaciones empresariales, interpretando nuestros hallazgos en relación con las características básicas de las corporaciones: el sector, el tamaño de la empresa y la propiedad. De esta forma, llevamos a cabo un «triple análisis de redes» para presentar un panorama empírico de las interconexiones entre personas, organizaciones (*think tanks*) y corporaciones.

En nuestro intento por esbozar una estructura de poder, somos muy conscientes de que el núcleo o grupo central –que conecta los *think tanks* y, a estos, con las corporaciones– no determina el desarrollo histórico (Domhoff y Dye, 1987: 9). Las redes partidistas forman parte de los procesos de formación de clases y, en este sentido, deben ser observadas en términos relacionales, de acuerdo con las dimensiones del movimiento y contramovimiento. Una segunda observación preliminar concierne el alcance y la escala de nuestro estudio, ya que, aunque se fundamenta en datos reales –y no tenemos constancia de que se haya realizado ninguna otra investigación de este tipo– tiene una naturaleza exploratoria, por lo que deja mucho espacio para investigaciones futuras. Además, nos hemos limitado a las redes al ámbito nacional, teniendo presente que las actividades de los *think tanks* y sus enlaces pueden estudiarse mejor como redes transnacionales (Fischer y Plehwe, 2017).

El análisis se organiza de la siguiente forma: en primer lugar, se desarrolla el marco teórico y la metodología que guían el estudio; en segundo lugar, a partir del caso de estudio de Guatemala, se presentan los cinco *think tanks* de la muestra, sus interconexiones y enlaces clave, lo que se confirma con información cualitativa; en tercer lugar, se investigan los vínculos entre el personal más destacado de los *think tanks* y el mundo corporativo, donde se detectan quiénes ostentan la mayoría de los puestos gerenciales y directivos en las corporaciones; por último, en la conclusión se recalcan resultados importantes y se perfilan líneas de investigación futuras necesarias para profundizar en nuestra concepción sobre la élite neoliberal de poder y conocimiento, así como sus relaciones con otras fuentes del poder.

Redes, organizaciones y poder ideológico: teoría y métodos

Los *think tanks* son importantes agentes de conocimiento y presentan una multitud de formas y tamaños. Debido a la diversidad de organizaciones existentes, no hay una definición universal y satisfactoria del concepto². En términos generales, los *think tanks* se sitúan en la intersección entre el mundo académico, los medios de comunicación, los intereses económicos y la política. Entre sus principales funciones, posiblemente las más destacadas sean las siguientes: análisis político, consultoría y apoyo activo. Más allá de esto, las entidades financiadas con fondos privados participan también en la difusión y el *networking* (Medvetz, 2012). Si bien una concepción tradicional de los *think tanks* destaca el conocimiento independiente y el interés público (véase, por ejemplo, McGann y Weaver, 2005), aquí se consideran estos centros como importantes agentes de poder, principalmente de naturaleza elitista.

Con el fin de captar las dimensiones política e ideológica, además del carácter social, de la producción de conocimiento, los *think tanks* se pueden estudiar mejor como redes de individuos (profesionales e intelectuales), organizaciones (*think tanks* y universidades privadas) e ideas (cosmovisiones y argumentarios) relacionados (Plehwe, 2015: 359 y 361). Así, estudiar estos tanques de pensamiento como agentes y agencias relacionados que operan en un campo político, implica contemplar los *think tanks* no solo como organizaciones, sino también como individuos y sus visiones del mundo. En este sentido, las categorías de «colectivo de pensamiento» y «estilo de pensamiento» de Karl Mannheim (1927) nos parecen muy útiles. Un estilo de pensamiento —en nuestro caso, el neoliberalismo— admite una amplia variedad de colectivos de pensamiento, siempre y cuando estos encajen en una visión compartida del mundo, a saber, una línea interpretativa común. Esto nos permite analizar diferentes colectivos de pensamiento —que operan en un ámbito político— situándolos en un estilo de pensamiento más amplio. Por ejemplo, los seguidores de la Escuela Austríaca de Economía o los de la Escuela de Chicago son colectivos de pensamiento que en ocasiones pueden ser acomodaticios o competir, pero colectivamente están unidos por una visión del mundo común basada en creencias sólidamente fundamentadas y normas compartidas (Plehwe, 2018). En el caso del neoliberalismo, se trata de la propiedad privada y la libre empresa, la libertad individual, la limitada capacidad gubernamental y el estado de derecho. Contrariamente

2. Para profundizar, véase Plehwe (2015: 361-366).

a la ecuación generalizada del neoliberalismo y el fundamentalismo de mercado, es importante reconocer los enfrentamientos binarios que radican en la cuna del neoliberalismo: la oposición a los enfoques «colectivistas» y el reconocimiento de la necesidad de superar las ideas de no intervención (*laissez faire*) dominantes en el liberalismo económico tradicional, (re)estableciendo las reglas del mercado mediante la intervención estatal (Mirowski y Plehwe, 2009; Slobodian, 2018).

La segunda corriente teórica en la que se apoya este estudio es la investigación sobre la estructura del poder. Según la tradición de Charles Wright Mills (2000 [1956]), esta se centra en los líderes o en los *linkers* de las organizaciones que se unen para formar una estructura de poder (nacional) o élite del poder, actuando a través de organizaciones y redes sociales. Compartimos el punto de partida teórico de la investigación sobre la estructura del poder que sostiene que las organizaciones —en nuestro caso los *think tanks*— son clave para el poder, y estudiamos la imbricación basada en dos «redes socioespaciales de poder que se superponen y se intersectan» (Mann, 1991 [1986]: 14), esto es, la ideológica y la económica³. La teoría del poder de las cuatro redes de Michael Mann —quien, más allá de las relaciones ideológicas y económicas, también menciona las instituciones militares y políticas— y su sofisticada visión de la ideología y del poder ideológico son especialmente importantes. La ideología trasciende las otras fuentes del poder y crea relaciones sociales, en lugar de servir simplemente para integrar a la sociedad. Según Mann (ibídem), las ideas hacen las veces de vías que orientan y guían (*track laying function*). Aquellos que han desarrollado la capacidad de construir infraestructuras en el terreno de las ideas, el conocimiento y la experiencia parecen tener una ventaja decisiva en las luchas sociales, que al fin y al cabo siempre son luchas por la interpretación de perspectivas y situaciones sociales. Así pues, por lo que respecta a los estudios sobre neoliberalismo en América Latina, al igual que en otros lugares, hay que prestar una atención especial a las fuentes nacionales y transnacionales del poder ideológico, así como a las capacidades más o menos afianzadas de *track laying* (Plehwe y Fischer, 2019).

Los fundamentos empíricos para el análisis de la intersección de las redes de ideas y económicas los aportan en este estudio cinco *think tanks* neoliberales de Guatemala y su personal de nivel superior (directores y miembros de consejos directivos), la información sobre los cuales ha sido recopilada de las respectivas páginas web. También se han investigado sus vínculos con el mundo corporativo a partir de datos del Registro Mercantil de Guatemala, dependiente del Ministerio de Economía. Este registro facilita la lista de los nombres de ejecutivos y miembros

3. Al respecto, véase el excelente estudio de Cannon (2016) sobre la derecha latinoamericana, fundamentado en la teoría del poder social de Mann.

de las directivas de todas las corporaciones registradas públicamente en Guatemala. Así, por medio del análisis de redes, medimos y representamos gráficamente las propiedades de los vínculos que conectan a los *think tanks*, las personas y las corporaciones. Las conexiones indican una posición privilegiada en la red. En la investigación sobre la estructura del poder, el análisis de las conexiones entre directorios (*interlocking directorates*) se ha empleado principalmente para estudiar las redes corporativas y la estructura social y la cohesión de la élite corporativa (véanse, por ejemplo, Mintz y Schwartz, 1985; Scott, 1991; Cárdenas, 2016 para América Latina). Como complemento a las conexiones corporativas, se examinan otras formas de integración de las élites, por ejemplo, las conexiones entre directorios de grupos de élites de planificación de políticas transnacionales (Carroll y Sapinski, 2010)⁴. A continuación, se proporcionará información detallada sobre la terminología y las representaciones gráficas al discutir los resultados del análisis de redes (Scott, 2013 [1991]).

El panorama de los *think tanks* neoliberales/de derechas en Guatemala y su núcleo central

Nuestra muestra consta de cinco *think tanks* neoliberales que forman —teniendo en cuenta que Guatemala es un país relativamente pequeño— una infraestructura robusta y bien dotada para el neoliberalismo institucionalizado (Valdez, 2015; véanse Barreto, 2013 y Fonseca, 2018 para contribuciones periodísticas). Ello fue posible, en buena parte, gracias a Manuel Ayau (1925-2010), un emprendedor e hijo de una familia distinguida de El Salvador. Con la ayuda de colegas empresarios y fondos de Estados Unidos, Ayau fundó el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) en 1959 y la Universidad Francisco Marroquín (UFM) a principios de la década de 1970 (Fischer, en preparación). Aquí consideraremos la UFM como un *think tank* académico, no solo porque fue fundada por un emprendedor de un *think tank*, sino porque esta universidad privada tiene una misión clara y un perfil alto: su personal lleva a cabo investigación relacionada con políticas y realiza funciones de transferencia de conocimiento del mundo académico a las esferas de la política, los medios de comunicación y la empresa.

4. Para una perspectiva general de la literatura, las teorías y los métodos de las conexiones entre directorios, véase Sapinski y Carroll (2018).

El CEES se convirtió en un primer punto de encuentro de liberales procedentes de Estados Unidos y Europa, entre los que destacaban personalidades como Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises y Leonard Read. Su actividad se centraba, particularmente, en el «trabajo de base», manteniendo una cierta distancia del proceso político⁵. Por su parte, la UFM⁶ tenía como objetivo primordial formar a la futura élite del país y, según su fundador, estaba llamada a ser un baluarte contra la «avalancha socialista» y la concepción sobre el desarrollo imperante en esa época, por lo que debía enseñar «economía real» en lugar de ideología marxista (Ayau, 1990: 138)⁷. Ayau era miembro de la Sociedad Mont Pelerin (SMP) –la red internacional del neoliberalismo organizado fundada por Hayek, Mises y Milton Friedman, entre otros, en 1947– y fue su primer presidente latinoamericano (1978-1980).

A principios de la década de 1980, se fundó el tercer *think tank* neoliberal de esta muestra, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)⁸. Si bien surgió como una escisión del CEES, sus fundadores –procedentes de la UFM– tenían la intención de crear un *do tank* («tanque de acciones»), centrado en el asesoramiento político y en cuestiones de políticas públicas. Esta organización se adaptó perfectamente a los nuevos tiempos y su personal respaldó la agenda del Consenso de Washington, contribuyendo a su implementación. Durante esa década, y especialmente en la de 1990, grandes sectores de la derecha, percatándose de que era necesaria mayor institucionalidad democrática, disminuyeron su confianza en el Ejército como aliado efectivo o fiable para garantizar la «política de derechas». Para esta élite, acoger el neoliberalismo y la democracia como algo *moderno* y signo de mayor integración a *Occidente* también se antojaba conveniente, con miras a Estados Unidos que, cada vez más, era partidario de la democracia (Cannon, 2016). Comparativamente, mientras que el CEES y la UFM aportan «doctrina pura», el CIEN es más cercano a la política y la consultoría. Para aquel entonces, su personal orientó sobre la privatización de los servicios públicos en Guatemala, como la re-regulación de las telecomunicaciones y del sector energético –favorable al capital privado– que, aunque topó con algunas dificultades, finalmente tuvo éxito. Así, gracias a la colaboración de *think tanks* del país e internacionales, Guatemala consiguió aprobar la ley de telecomunicaciones más liberal del mundo (Bull, 2008: 61 y ss., 85 y 103).

5. Entrevista con Edgar Ortiz Romero, director ejecutivo del CEES en aquel entonces, realizada por Karin Fischer en Ciudad de Guatemala el 16 de febrero de 2017.

6. Para un análisis más detallado de la historia y las actividades de la UFM, véase Fischer (en preparación).

7. Para más información, véanse <https://www.cees.org.gt/> y <https://www.ufm.edu/Portal> [Fecha de consulta: 20.03.2020].

8. Para más información, véase <https://cien.org.gt/> [Fecha de consulta: 20.03.2020].

El cuarto *think tank* analizado es el Instituto Fe y Libertad⁹. Desde su fundación en 2014, es un punto de encuentro para cristianos católicos y evangélicos de extrema derecha, así como para miembros de la Iglesia ortodoxa y de la comunidad judía. Su Consejo Consultivo está formado por empresarios, líderes religiosos e intelectuales neoliberales de Guatemala y otros países (Estados Unidos, Italia, Lituania y Argentina, entre otros). Según su página web, su público objetivo son los jóvenes, los empresarios y los líderes religiosos. El Instituto participa y organiza actividades propias de los *think tanks* «tradicionales», como publicaciones y difusión, así como seminarios y eventos, con el fin de promover las ideas neoliberales/de derechas entre grupos importantes del país.

El último *think tank* examinado es la Fundación Libertad y Desarrollo (FLD), fundada en 2012 por el empresario Dionisio Gutiérrez¹⁰, uno de los hombres más ricos del país y expresidente de la Corporación Multi Inversiones (CMI), que se dedica a la alimentación, la energía, las finanzas, las propiedades inmobiliarias y las telecomunicaciones, entre otros sectores. Mediante un gran evento anual y publicidad en la radio y la televisión, donde el propio Gutiérrez ha sido un pilar destacado durante décadas, la FLD pretende llegar a un público amplio. Actualmente, Gutiérrez no ocupa ningún cargo en la CMI, debido a disputas familiares y fraude empresarial, pero el *think tank* le sirve de plataforma para que él mismo y sus seguidores intervengan activamente en debates públicos.

Los tres primeros *think tanks* neoliberales/de derechas que hemos mencionado son miembros de la red Atlas, una organización paraguas con sede en Virginia que proporciona financiación, personal y otros recursos a más de 500 *think tanks* de todo el planeta (Fischer, 2018; Fonseca, 2018). Tras esta breve descripción, observamos claramente la existencia de lo que Mannheim (1927) denominó «estilo de pensamiento». Sin duda alguna, la UFM es un ejemplo paradigmático de ello, ya que discípulos de la Escuela Austríaca de Economía y de la teoría de la elección pública, partidarios del neoliberalismo, pero muy opuestos —como Ayn Rand, atea declarada, o neoliberales religiosos como Murray Rothbard y Michael Nowak, economistas de Chicago y ordoliberales—, se encuentran todos bajo un mismo techo. Mientras que el CEES se inclina hacia la economía austríaca, el CIEN es ordoliberal «en la práctica»¹¹, lo que implica la intervención estatal para asegurar o «blindar» los derechos de capital privado

9. Para más información, véase <https://feylibertad.org/> [Fecha de consulta: 20.03.2020].

10. Para más información, véase <https://www.fundacionlibertad.com/> [Fecha de consulta: 20.03.2020].

11. Entrevista con María Isabel Bonilla y Hugo Maul (CIEN), realizada por Karin Fischer en Ciudad de Guatemala el 23 de febrero de 2017.

y el funcionamiento del mercado (Slobodian, 2018). Pese a disputas internas, realmente los diferentes colectivos de pensamiento comparten un estilo de pensamiento común –libre empresa, libertad individual e intervención estatal en favor de los mercados– aunque formen un coro con múltiples voces, lo que se convierte un recurso fundamental para ejercer influencia sobre importantes grupos de la sociedad, las políticas públicas y la opinión pública.

A continuación, vamos a analizar las redes de los cinco *think tanks* y su personal más destacado (un total de 89 personas, entre personal directivo, miembros de las juntas directivas o consejeros y, en el caso de la UFM, también directores académicos y decanos). La figura 1 muestra cómo están conectados los cinco *think tanks* y quiénes son los *linkers* clave. Los vínculos representan conexiones entre directivas (Waxenecker, 2017): una persona puede estar en la directiva de más de un *think tank*, de modo

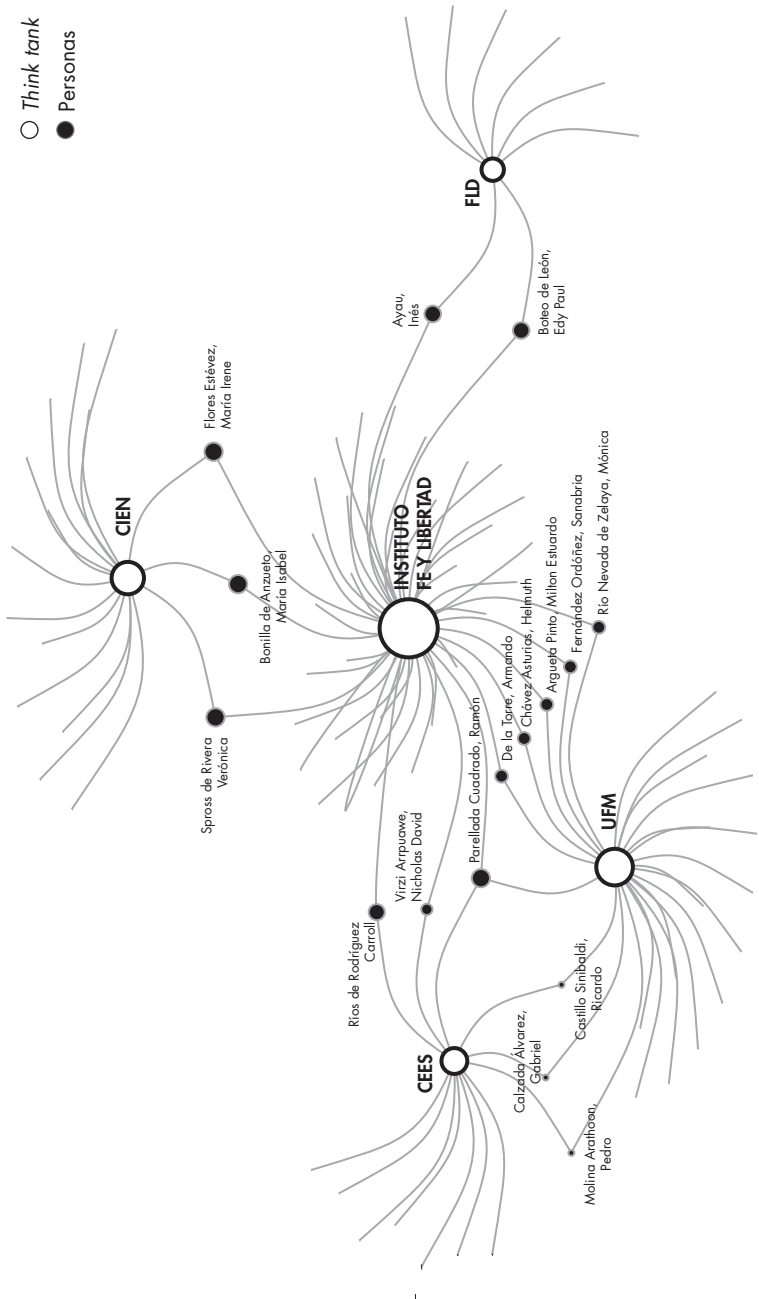
que se construye una red con dos tipos de nodos (89 personas y 5 *think tanks*). La posición de estos nodos en la red se muestra mediante medidas de centralidad local (grado) y centralidad global (centralidad de intermediación)¹². Por ejemplo, el Instituto Fe y Libertad tiene 45

El estudio muestra cómo están conectados los cinco *think tanks* analizados y quiénes son los *linkers* (intermediarios, enlaces) clave. El núcleo central está formado por 16 *linkers* clave (de 89), a saber, personas que ocupan puestos en al menos dos *think tanks*.

miembros y, por lo tanto, un grado total de 45, mientras que su centralidad de intermediación es 0,83411. Este último valor representa en qué medida (en una escala de 0 a 1) este nodo está «en medio de» los otros nodos de la figura (Scott, 2013 [1991]: 87). En consecuencia, el Instituto Fe y Libertad es la entidad mejor conectada de todos los *think tanks* de la red o, en otras palabras, sus directivos son los que tienen más vínculos o «camino más cortos» con los otros *think tanks* de la muestra. Le siguen en este orden la UFM, el CIEN, el CEES y la FLD (véase la tabla 1). El Instituto Fe y Libertad, de fundación relativamente reciente, ha conseguido atraer a bastantes afiliados que eran socios de la UFM e incluso hace las veces de puente con la FLD, un tanto aislada, que no es una iniciativa unipersonal, aunque sí muy centrada en Dionisio Gutiérrez.

12. «Un punto es central localmente si presenta un gran número de conexiones con otros puntos de su entorno inmediato: por ejemplo, si presenta numerosos vecinos directos. Por otra parte, un punto es central globalmente cuando ocupa una posición estratégica significativa en la estructura global de la red. La centralidad local tiene que ver con la prominencia relativa de un punto local respecto a sus vecinos, mientras que la centralidad global tiene que ver con la prominencia respecto a toda la red» (Scott 2013 [1991]: 83, traducción de autores).

Figura 1. Red con 95 nodos: vínculos entre *think tanks* de Guatemala y *linkers* clave



Nota: El tamaño de los nodos representa su índice de centralidad de intermediación.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los sitios web de los *think tanks*, recogidos entre enero y febrero de 2020.

Tabla 1. Red bimodal con 94 nodos: 5 *think tanks* de Guatemala

<i>Think tanks</i>	Centralidad de intermediación en N1 (94)	Grado total de N1 (94)
Instituto Fe y Libertad	0,83411	45
Universidad Francisco Marroquín (UFM)	0,33692	24
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)	0,26169	16
Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES)	0,16487	13
Fundación Libertad y Desarrollo (FLD)	0,12564	8

Fuente: Elaboración propia.

El núcleo central consiste en 16 *linkers* clave (de 89), a saber, personas que ocupan puestos en al menos dos *think tanks* (véase la tabla 2)¹³. Ramón Parellada destaca por su alto grado (3), lo que significa que conecta tres organizaciones. También presenta el grado más alto de intermediación (0,0944) de todos los enlaces clave, seguido por Bonilla de Anzueto, Flores y Spross de Rivera y, a cierta distancia, Inés Ayau y Edy Boteo de León. Su alta centralidad de intermediación, que mide y muestra los «camino más cortos» entre todos los nodos (personas y *think tanks*), indica que estos cumplen una función de puente dentro de la red. En palabras de Scott (2013 [1991]: 87), «pueden desempeñar el papel de *intermediario* o *portero*, con un potencial de control sobre los demás».

Ramón Paradella es miembro de la SMP, lo que confirma los estudios previos¹⁴. Los miembros de la SMP claramente superan en número a los demás por lo que respecta al desempeño de múltiples puestos en los *think tanks*. Por lo tanto, los consideramos un elemento clave de las élites neoliberales de poder y conocimiento en el sentido que promulga C. Wright Mills de que ocupan puestos de liderazgo en las organizaciones. Parellada (CEES, Fe y Libertad, y UFM), formado en la UFM, es columnista (*Siglo XXI*, *El Periódico* y *Prensa Libre*, entre otros) y directivo de empresas. Hay dos miembros más de la red de la élite transnacional entre los enlaces clave: Gabriel Calzada Álvarez y Carroll Ríos de Rodríguez. El primero, actual rector de la UFM, es economista, discípulo de la Escuela Austríaca de Econo-

13. Todas las demás personas solo tienen una única conexión, por lo que no enlazan *think tanks* (centralidad de intermediación = 0).

14. Véanse Fischer y Plehwe (2013 y 2017) sobre las conexiones transnacionales entre *think tanks* y *linkers* clave.

mía y seguidor de Ludwig von Mises. Nacido en España, Calzada es el presidente fundador del Instituto Juan de Mariana de Madrid y es un representante de perfil alto del escepticismo del cambio climático y el ecologismo de libre mercado, quien presume de que uno de sus estudios ayudó a enterrar una iniciativa de empleo verde en Estados Unidos. Por su parte, Carroll Ríos de Rodríguez, economista del desarrollo y columnista empedernida, conecta el CEES y el Instituto Fe y Libertad, pero también está cerca de la UFM. Fue presidenta de su Comité de Fiduciarios¹⁵ y ha impartido docencia allí desde 1994. Todos son miembros del Consejo Directivo del CEES (donde coinciden con sus colegas de la SMP Federico Bauer, Fernando Monterroso y Roberto Ríos).

Tabla 2. Red bimodal con 94 nodos: 89 personas (Guatemala)

Enlaces de los <i>think tanks</i>	Centralidad de intermediación en N1 (94)	Grado total de N1 (94)
Parellada Cuadrado, Ramon	0,09440	3
Bonilla de Anzueto, Maria Isabel	0,08400	2
Flores Estevez, Maria Irene	0,08400	2
Spross de Rivera, Veronica	0,08400	2
Ayau Garcia, Ines	0,06954	2
Boteo de Leon, Edy Paul	0,06954	2
Rios de Rodriguez, Carroll	0,04271	2
Virzi Arroyave, Nicholas David	0,04271	2
Argueta Pinto, Milton Estuardo	0,04212	2
Chavez Asturias, Helmuth	0,04212	2
De La Torre, Armando	0,04212	2
Fernandez Ordoñez, Sanabria	0,04212	2
Rio Nevada de Zelaya, Monica	0,04212	2
Calzada Alvarez, Gabriel	0,00956	2
Castillo Sinibaldi, Ricardo	0,00956	2
Molina Arathoon, Pedro	0,00956	2

Fuente: Elaboración propia.

15. El Comité de Fiduciarios es un órgano importante, cuya finalidad es garantizar que se lleva a cabo la misión de la universidad y que la UFM es solvente. Los miembros del Comité eligen seis de los nueve miembros de la Junta Directiva, incluyendo al tesorero (Ayau, 1992: 24).

De esta forma, no es arriesgado afirmar que la UFM está mejor conectada de lo que muestra la figura 1, debido a que solo hemos incluido en la muestra a sus figuras más destacadas. Sin embargo, la universidad es un semillero de personalidades pertenecientes a la élite neoliberal *de* conocimiento del país: la mayoría de ellas se formaron allí y desempeñan de manera continuada diferentes tareas o cargos a lo largo de su carrera profesional, por ejemplo, como profesores universitarios, miembros del Comité de Fiduciarios de la Universidad o conferenciantes. Nicholas Virzi, que conecta Fe y Libertad con el CEES, por ejemplo, es profesor de Economía en la UFM. Lo mismo ocurre en el caso de los tres *linkers* entre el CIEN y Fe y Libertad. Verónica Spross de Rivera, miembro del consejo directivo del CIEN, estudió administración de empresas y economía en la UFM y es profesora allí. María Flores ocupa el cargo de directora ejecutiva de la Facultad de Administración de Empresas y María Isabel Bonilla de Anzueto es graduada por la Escuela de Derecho de la UFM. En general, los *linkers* del CIEN representan el perfil de su «casa matriz», es decir, son profesionales de *think tanks* orientados a las políticas con experiencia en consultoría; mientras que los enlaces entre la UFM y el CEES presentan un perfil marcadamente ideológico. Aunque los miembros de los *think tanks* realizan diferentes labores en sus respectivas instituciones de origen, los *think tanks* son un punto de encuentro para la élite de conocimiento de derechas/neoliberal de todo el espectro. De hecho, este es el propósito de dichas redes.

Respecto al Instituto Fe y Libertad, el *think tank* mejor conectado de la red, difunde intervenciones políticas con inspiración teológica en los ámbitos de la economía y el bienestar, y se ocupa de las sinergias entre el capitalismo y la religión (cristianismo y judaísmo). El *think tank* más joven de esta muestra ha conseguido bastantes afiliados desde su creación: reclutando a miembros de la UFM e incluso conectando con Libertad y Desarrollo. América Latina, en general, y Guatemala, en particular, son terrenos fértiles para el neoliberalismo de inspiración bíblica, en un contexto de auge del cristianismo evangélico o movimiento pentecostal en todo el continente. Según esta línea de pensamiento, «Dios no solo quiere que seas rico. Por supuesto, quiere impuestos bajos para los acaudalados, un poco o nada del estado del bienestar y unas políticas económicas que potencien el libre comercio» (Hackworth, 2013: 92, traducción de autores). Este *think tank* es un ejemplo de perfil alto de alianza entre fundamentalistas religiosos y neoliberales de todas las comunidades religiosas, incluyendo representantes de las iglesias católica, ortodoxa y evangélica, además de rabinos. Inés Ayau, la hija de Manuel Ayau, el fundador del CEES y de la UFM, que conecta con la FLD, es monja ortodoxa. En su Consejo Consultivo internacional, encontramos a miembros destacados del colectivo del pensamiento neoliberal, como el miembro de la

SMP Alejandro Chafuen, presidente de la red Atlas durante años y perteneciente al Opus Dei, y el padre Robert Sirico, un sacerdote católico fundador del Instituto Acton para el Estudio de la Religión y la Libertad, que «conecta las buenas intenciones con la economía sólida», según reza el lema del Instituto¹⁶. Chafuen y Sirico son miembros ambos de la SMP, a los que se han sumado a este consejo sus colegas de la SMP Peter J. Boettke (George Mason University) y Samuel Gregg (Acton).

Un representante destacado del neoliberalismo religioso en Guatemala es Armando de la Torre, filósofo y exjesuita nacido en Cuba. De la Torre conecta Fe y Libertad con la UFM, donde trabaja desde hace más de tres décadas. Allí fundó la Escuela de Ciencia Política e introdujo la teoría de la elección pública en los planes de estudio. Además de ser columnista y decano de la Escuela de Ciencias Sociales, preside el Centro de Análisis de las Decisiones Públicas (CADEP) de la UFM. Documentos de primera mano subrayan su éxito en la promoción de los valores liberales entre importantes sectores del país como, entre otros, el Ejército (Marroquín y Thomas, 2015: 465).

La conexión entre los *think tanks* y el mundo empresarial

Los esfuerzos de los *think tanks* neoliberales de América Latina (y más allá) siempre han estado estrechamente ligados a los intereses empresariales (Fischer y Plehwe, 2017), lo cual sucede también en Guatemala. Los representantes de los grupos empresariales más poderosos del país, como los hermanos Novella y Castillo, Ramón Campollo y Rudy Weissenberg, fueron algunos de los financiadores del CEES y de la UFM y participaron en sus órganos directivos (Ayau 1992: 19, 21 y 37; Fischer, en preparación). Así, ¿qué relaciones directas se detectan hoy en día entre miembros de los *think tanks* y el sector económico? Para responder a esta pregunta, investigamos los asientos registrales de los 89 miembros de los *think tanks* en el Registro Mercantil de Guatemala¹⁷ y, de

16. Para más información, véase <https://university.acton.org/front> [Fecha de consulta: 20.03.2020].

17. Las consultas al Registro Mercantil se realizaron entre el 20 de enero y el 11 de marzo de 2020, y se solicitó información sobre las empresas y los cargos (directores ejecutivos, miembros de los consejos de administración) de las personas de nuestra muestra.

ellos, hallamos que 34 nombres ocupan puestos directivos o gerenciales en 345 empresas. La figura 2 muestra cómo están conectados los *think tanks*, las personas y las empresas¹⁸. La tabla 3 enumera todas las personas con enlaces con corporaciones.

Los resultados muestran que las empresas no enlazan personas. En otras palabras, aunque aparece un gran número y un amplio abanico de corporaciones donde miembros de los *think tanks* ocupan un puesto, solo cuatro empresas registran un índice de centralidad de intermediación mayor que cero: Servicios Internacionales de Inversión, CATO, INVESTERRA y SURSUM. En los consejos directivos de estas corporaciones encontramos más de uno de los miembros de nuestros *think tanks* ocupando altos cargos de gerencia o dirección, a saber, Federico Bauer (CEES) y Pedro Molina Arathoon (CEES y UFM) en el de Servicios Internacionales de Inversión; y Carroll Ríos de Rodríguez (CEES) y Tomas José Rodríguez Schlesinger (Fe y Libertad) en los de los demás¹⁹.

Alrededor del 80% de las empresas en las que los emprendedores miembros de los *think tanks* ocupan algún puesto tienen su sede en Guatemala.

Más de la mitad de los vínculos empresariales se concentran en los sectores de servicios empresariales (32%), inmobiliario (17%) y financiero (5%); la otra mitad corresponde a la agroindustria, el turismo (hoteles y cadenas de comida rápida) y el comercio (importaciones y exportaciones)²⁰. Los enlaces empresariales transnacionalizados son Alfredo Rodríguez Mahuad (en una posición muy destacada, con vínculos con 37 empresas transnacionales), seguido por Eduardo Mayora Alvarado, Milton Argueta Pinto, Francisco Quezada y, a mayor distancia, Fernando Linares Beltranena. El sector dominante entre los vínculos transnacionales es el de banca y las finanzas (38%), seguido por el de servicios empresariales avanzados (18%).

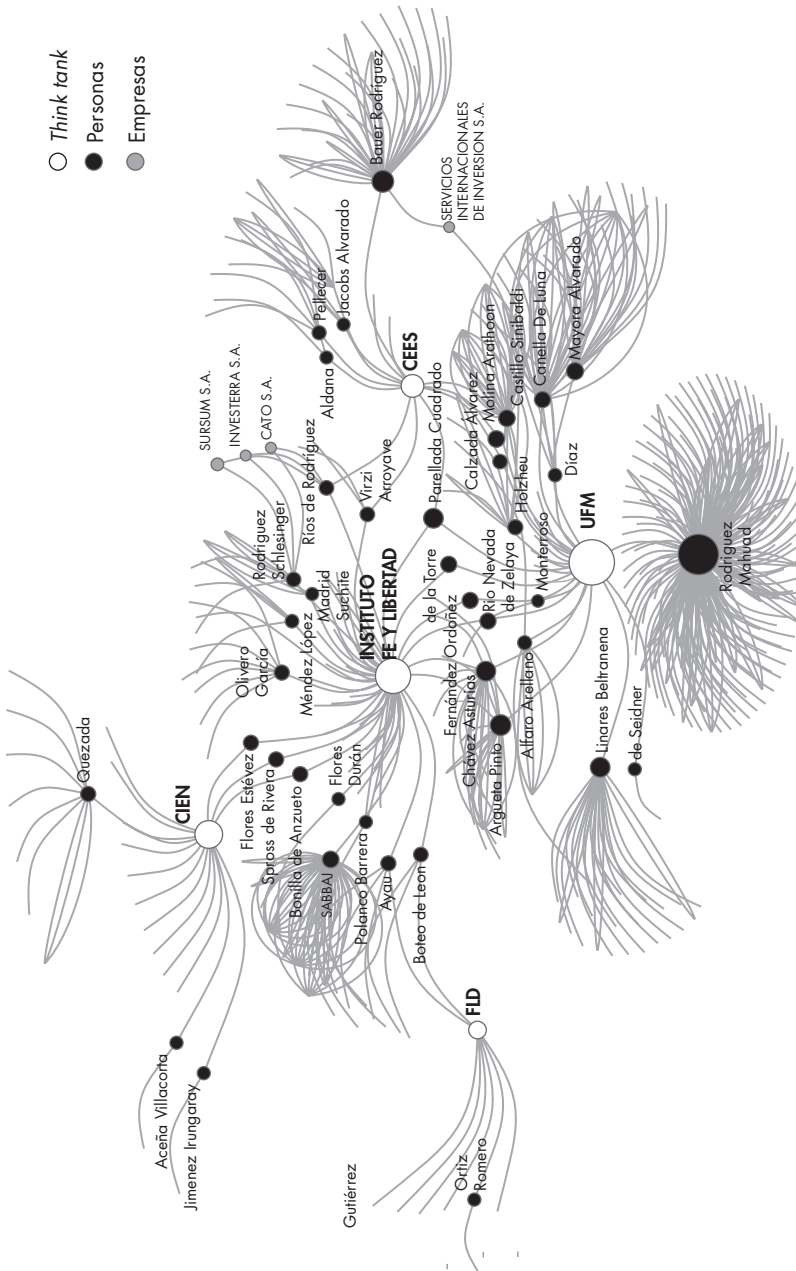
Investigamos los asientos registrales de los 89 miembros de los *think tanks* en el Registro Mercantil de Guatemala y, de ellos, hallamos que 34 nombres ocupan puestos directivos o gerenciales en 345 empresas.

18. Algunos de los miembros de consejos de administración o directores ejecutivos presentan varios asientos registrales vigentes en la misma empresa, lo cual se representa en la figura 2 por medio de varias líneas (relaciones) entre la persona y la empresa, y se incluye en la medida de centralidad de grado total en la tabla 3. El grado total también incluye los vínculos de los *think tanks*.

19. Las firmas pertenecen a los sectores de servicios al productor, inversiones y sector inmobiliario. No encontramos información sobre SURSUM.

20. La información sobre las firmas (sector, ventas, sede) fue recabada de la base de datos Dun y Bradstreet (D&B) <https://www.dnb.com>. No había información disponible sobre 101 empresas. Nuestras interpretaciones se refieren a 244 empresas.

Figura 2. Red con 439 nodos: conexiones entre *think tanks*, sus miembros y las corporaciones (Guatemala)



Nota: El tamaño de los nodos representa su índice de centralidad de intermediación.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los sitios web de los *think tanks*, recogidos entre enero y febrero de 2020, y del Registro Mercantil de Guatemala.

Tabla 3. Red bimodal con 439 nodos y 34 *linkers* clave con empresas (Guatemala)

Enlaces clave con empresas	Centralidad de intermediación en N2 (439)	Grado total del N2 (439)	Número de empresas
Rodriguez Mahuad, Alfredo	0,61489	212	166
Bauer Rodriguez, Federico	0,12005	36	28
Argueta Pinto, Milton Estuardo	0,10519	18	13
Chavez Asturias, Helmuth	0,09629	19	11
Linares Beltranena, Fernando	0,09370	25	21
Mayora Alvarado, Eduardo	0,06298	17	14
Castillo Sinibaldi, Ricardo	0,05611	22	6
Sabbaj, Moises	0,05410	49	12
Molina Arathoon, Pedro	0,05248	4	2
Canella de Luna, Diana	0,04519	27	10
Holzheu, Max	0,03174	11	7
Quezada, Francisco	0,03174	10	7
Olivero Garcia, Lucia	0,03174	8	7
Ayau Garcia, Ines	0,03139	5	3
Rios de Rodriguez, Carroll	0,02910	5	3
Virzi Arroyave, Nicholas David	0,02851	5	2
Boteo de Leon, Edy Paul	0,02684	4	2
Rodriguez Schlesinger, Tomas Jose	0,01858	9	6
Pellecer, Luis Rene	0,01820	5	4
Alfaro Arellano, Federico Guillermo	0,01367	8	3
Rios Rodriguez, Manuel Roberto	0,01367	8	3
Diaz, Hugo R.	0,01367	6	3
Mendez Lopez, Guillermo Waldemar	0,01367	5	3
Jacobs Alvarado, Jorge	0,00912	4	2
Aldana, Juan Fernando	0,00912	3	2
Madrid Suchite, Rony David	0,00457	4	1
Aceña Villacorta, Maria Del Carmen	0,00457	2	1
De Seidner, Siang	0,00457	2	1
Flores Duran, Elder Francisco	0,00457	2	1
Foronda Popol, Miguel Edmundo	0,00457	2	1
Jimenez Irungaray, Francisco	0,00457	2	1
Monterroso V., Fernando	0,00457	2	1
Ortiz Romero, Edgar Rene	0,00457	2	1
Polanco Barrera, Moris Alberto	0,00457	2	1

Fuente: Elaboración propia.

La figura 2 muestra grupos marcados alrededor de Rodríguez Mahuad, Bauer Rodríguez, Linares Beltranena, Mayora Alvarado, Castillo Sinibaldi y Moises Sabbaj (véase también la tabla 3). Destaca Rodríguez Mahuad, abogado mercantil y profesor de derecho y consejero de la UFM: es directivo o mandatario registrado en 166 compañías nacionales e internacionales, principalmente de los sectores financiero, agroindustrial (azúcar, bebidas, aceite de palma) y extractivo (minería, energía)²¹. Federico Bauer, por su parte, quien pertenece a una familia de caficultores que amplió su negocio en el conglomerado de los sectores agroalimentario-inmobiliario-financiero, tiene vínculos con 28 compañías, de las cuales cerca de la mitad están relacionadas con el sector inmobiliario y de las inversiones. Este miembro de la SMP participa activamente en el consejo directivo del CEES y fue miembro del Comité de Fiduciarios de la UFM. Respecto a Fernando Linares Beltranena, este tiene conexiones con la producción y la agroindustria, así como con el comercio. Abogado de profesión, este miembro de la SMP respaldó activamente la fundación del CEES, del que fue exgerente, y de la UFM, además de haber sido decano de la Facultad de Economía de la UFM. Linares Beltranena ha representado legalmente a varios clientes transnacionales de «grandes empresas», incluyendo Texaco, Shell, Cargill, BellSouth y Chevron Guatemala Inc²². Eduardo Mayora, también abogado mercantil, es miembro y exvicepresidente de la SMP y fue decano de la Escuela de Derecho de la UFM. Su participación empresarial muestra, más allá de su cargo en dos grupos de la industria química, un fuerte vínculo con la industria transnacional de los servicios bancarios y financieros, entre otros con Société Générale, Atlantic Security Bank Panama, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft y J.P. Morgan Australia. En referencia a Ricardo Castillo Sinibaldi, uno de los primeros donantes y fiduciarios de la UFM, sus vínculos empresariales van desde la energía y restaurantes hasta el sector inmobiliario. Similares nexos *diversificados* se observan en el caso de Diana Canella de Luna, quien también se encuentra en el segmento superior de los *linkers* empresariales. Sus conexiones corporativas se encuentran en el acero, la alimentación y la bebida, así como en los sectores de la energía, la inmobiliaria y la banca, con una fuerte presencia en compañías comerciales.

Los apellidos indican que los *linkers* empresariales clave en la red pertenecen a núcleos oligárquicos tradicionales de Guatemala, es decir, nombres vinculados a

21. Véase también Waxenecker (2018: 12-14), sobre su posición en la red de empresas extractivas.

22. Como diputado del Congreso de la República, Linares Beltranena ejerció presión para poner fin al mandato de una comisión de la ONU que investigaba más de un centenar de casos de corrupción desde 2007 (Waxenecker, 2019a: 17 y sig.). También es un abogado criminalista polémico desde que defendió a varios militares de alto rango acusados de crímenes de lesa humanidad durante la guerra (1960-1996) y a miembros de organizaciones narcotraficantes.

los grupos económicos más poderosos del país. La investigación muestra que el control y la propiedad de índole intercorporativa de múltiples empresas potencian la cohesión entre la élite corporativa y aporta a sus miembros el poder de configurar directa o indirectamente las estructuras del poder de Guatemala (Casaús Arzú, 2018 [1992]; Díaz, 2016; Bull *et al.*, 2014: 8-11, 181-185; estudios de caso sobre El Salvador y Honduras en Waxenecker, 2017 y 2019b).

Un segundo grupo importante de *linkers* empresariales está formado por personal universitario de alto rango de la UFM. Milton Argueta Pinto, decano de la Facultad de Derecho de la UFM, presenta una estrecha relación con el sector bancario guatemalteco (Banco de Antigua, Banco G&T Continental, Financiera G&T Continental, Financiera Industrial y Agropecuaria) y con empresas de inversión situadas en paraísos fiscales. Helmuth Chávez Asturias, decano de la Escuela de Negocios de la UFM, está vinculado con empresas de un amplio abanico de sectores, desde la producción alimentaria hasta el sector inmobiliario y de servicios empresariales. Federico Alfaro, por su parte, decano de la Escuela de Medicina, está registrado en empresas privadas de servicios de salud y en una inmobiliaria, y Max Holzheu –arquitecto, expresidente del Comité de Fiduciarios de la UFM (1979-1987) y vicerrector de esta universidad (1999-2006)– en empresas inmobiliarias y constructoras.

Los resultados muestran claramente que los miembros de la UFM tienen vínculos muy estrechos con el ámbito económico, lo cual se pone de manifiesto en el aumento del índice de centralidad de intermediación al comparar la tabla 1 y la tabla 4. A pesar de no presentar el grado total más alto, la UFM se encuentra ahora en la mejor posición de intermediación, al superar al Instituto Fe y Libertad. De un modo similar, el CEES adelanta al CIEN. La posición prominente de la UFM se ve más reforzada por el hecho de que los enlaces empresariales no forman parte del personal más destacado de la UFM (y de nuestra muestra), pero llevan a cabo tareas asociadas a la universidad.

El personal más destacado del Instituto Fe y Libertad tiene menos conexiones con empresas y, por lo tanto, pierde peso como puente en la red. Los vínculos empresariales que hemos distinguido sitúan a nuevas figuras en el mapa: estas se agrupan alrededor de personalidades religiosas que no se vinculan directamente a los *think tanks* de nuestra muestra, pero crean conexiones con empresas y organizaciones religiosas. Aquí el ex presidente de la Comunidad Judía de Guatemala, Moises Sabbaj, emprendedor (textiles, sector inmobiliario) formado en la UFM, destaca con 12 registros empresariales en la industria productiva y los sectores inmobiliario y de servicios. El teólogo Guillermo Méndez presenta vínculos con empresas de consultoría empresarial, lo que es un reflejo de su profesión como consultor para los sectores público y privado. Inés Ayau, por su parte, está registrada en tres empresas (servicios educativos, sanidad).

Tabla 4. Red bimodal con 439 nodos: 5 conexiones entre *think tanks* y empresas (Guatemala)

<i>Think tanks</i> y corporaciones	Centralidad de intermediación en N2 (439)	Grado total de N2 (439)
Universidad Francisco Marroquín (UFM)	0,66996	24
Instituto Fe y Libertad	0,42598	45
Centro de Estudios Económico y Sociales (CEES)	0,18641	13
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)	0,09775	16
Fundación Libertad y Desarrollo (FLD)	0,03180	8

Fuente: Elaboración propia.

Subrayando la naturaleza de *do tank* del CIEN, las relaciones empresariales de sus profesionales asociados se deben principalmente a sus propias empresas consultoras. Sin embargo, Francisco Quezada está registrado como miembro de la junta o director ejecutivo de siete empresas (financieras y aseguradoras, distribuidoras de combustible, aseguradoras, entre otros sectores). Y Dionisio Gutiérrez constituye un caso aparte, ya que está relacionado con los propietarios del conglomerado CMI. Como ya se ha mencionado, debido a disputas familiares y acusaciones de corrupción, todos sus asientos en el Registro Mercantil de Guatemala han sido eliminados.

Los resultados principales de nuestra investigación muestran que, a escala nacional, las conexiones con el sector de servicios ocupan la primera posición con un amplio margen (derecho, consultoría, investigación de mercados), seguidas por los sectores inmobiliario, comercial y agroindustrial. Por lo que respecta a los vínculos transnacionales, destacan banca y finanzas, seguidas por servicios empresariales. Los vínculos nacionales superan con creces los vínculos transnacionales (80/20), pero este resultado puede ser debido a nuestra única base de datos: no hemos buscado específicamente vínculos transnacionales del personal de los *think tanks*. Los miembros de la UFM constituyen el grupo más grande entre los *linkers* empresariales clave y pueden considerarse parte de la élite económica; están conectados con grandes corporaciones de sectores importantes desde el punto de vista económico del país: empresas agropecuarias, comercio, turismo y finanzas. El personal más destacado del *do tank* CIEN es el grupo menos conectado de nuestra muestra, y el único *linker* empresarial significativo es Francisco Quezada; otros profesionales del CIEN están únicamente conectados con sus propias empresas consultoras. Lo mismo ocurre en el caso del teólogo Guillermo Méndez y de Rony Madrid Suchité, fundador de la Iglesia evangélica Vida Real, quien está vinculado con una compañía relacionada con su iglesia.

En algunos casos, los vínculos empresariales de los miembros de los *think tanks* parecen ser principalmente actividades generadoras de ingresos (como en el caso de los decanos de la UFM y sus cargos en empresas de servicio de salud o empresas constructoras). Esto también se aplica, claro está, a la participación en los sectores inmobiliario y financiero y podría ser el caso también para el *linker máximo* de nuestra muestra: el abogado mercantil Rodríguez Mahuad. Sin embargo, los individuos con un alto número de enlaces, una medida de centralidad alta y una *cartera* diversificada que incluye grandes compañías y/o instituciones financieras, pueden categorizarse como un núcleo central, puesto que ocupan una posición privilegiada, debido a sus destacadas capacidades de transferencia en términos de conocimiento e información.

Si observamos la superposición entre los *linkers* de los *think tanks* (16) y los de las empresas (34), detectamos 8 personas: Milton Argueta, Inés Ayau, Edy Boteo de León, Ricardo Castillo Sinibaldi, Helmuth Chávez, Pedro Molina Arathoon, Carroll Ríos de Rodríguez y Nicholas Virzi. Partiendo de nuestra muestra de datos, los integrantes de este pequeño grupo pueden considerarse enlaces entre la esfera del poder ideológico y el económico. La UFM es claramente el *semillero* de esta élite de poder interconectada. Aunque estos *linkers* no ocupen puestos destacados en la UFM, sí están asociados de algún otro modo con la universidad neoliberal. En este caso, el CIEN no está presente en el grupo.

Si observamos la superposición entre los *linkers* de los *think tanks* (16) y los de las empresas (34), detectamos 8 personas clave. Los integrantes de este pequeño grupo pueden considerarse enlaces entre la esfera del poder ideológico y el económico. Asimismo, la Universidad Francisco Marroquín (UFM) destaca claramente como el semillero de esta élite de poder interconectada.

Conclusiones

Nuestro análisis muestra que en Guatemala existe una infraestructura robusta de neoliberalismo organizado. El panorama de los *think tanks* representa una variedad de colectivos de pensamiento neoliberal, cuyas inclinaciones ideológicas van desde la Escuela Austríaca de Economía, a través de enfoques ecuménicos que confieren a las políticas neoliberales una base religiosa, hasta la «economía política» de la Escuela de Chicago y la teoría de la elección pública. En consecuencia, su razón de ser y sus actividades también difieren; desde *think tanks* que defienden la «doctrina pura» hasta el asesoramiento

en materia de políticas públicas y el establecimiento de contactos y enlaces entre la élite. Si bien en la red de *think tanks* existe una forma de división del trabajo entre sus partes individuales, al mismo tiempo, la propia red une a colectivos de pensamiento diversos. Nuestro estudio exploratorio muestra que el Instituto Fe y Libertad, a pesar de ser el *think tank* neoliberal más joven de la muestra (y de toda Guatemala), ocupa una posición destacada en el establecimiento de contactos.

Asimismo, la investigación evidencia que lo que se sostiene para los *think tanks*, también se aplica a sus miembros. Hemos detectado 16 *linkers* clave de los *think tanks*, es decir, individuos que ocupan puestos en al menos dos *think tanks*. Entre el núcleo central, los líderes del Instituto Fe y Libertad son la facción más numerosa. Esta institución relativamente nueva proporciona una base de poder ideológico que abre un campo importante en la «batalla de las ideas» entrelazando la religión con el pensamiento neoliberal/de derechas. Sin embargo, la posición de la UFM resulta en cierto modo subestimada. Dicha universidad desempeña una destacada función de red global, ya que la mayoría de los individuos de los *think tanks* de Guatemala recibieron su formación allí donde han seguido desempeñando diferentes cargos a lo largo del tiempo. Si se consideran los vínculos actuales y pasados del personal de los *think tanks*, en general, y de los *linkers*, en particular, resulta evidente que la UFM es el semillero para los emprendedores de estos tanques de pensamiento. Además, el estudio revela la sólida posición en la red de los miembros de la SMP, que proceden principalmente del CEES, una organización fundada en 1959 por Manuel Ayau que es una de las más antiguas de este tipo, con un marcado perfil ideológico. Los miembros de la SMP están conectados con la UFM y con Fe y Libertad; esta última también ha sido capaz de atraer a miembros de la SMP del extranjero para formar parte de su consejo consultivo.

Consideramos que el núcleo central de esta red es una élite neoliberal de poder y conocimiento, en el sentido de C. Wright Mills (2000 [1956]), es decir, que ocupa puestos de liderazgo organizacional. Fundamentándonos en la teoría del poder de Michael Mann (1991 [1986]), cabe partir de la premisa de que una élite del conocimiento es particularmente importante, ya que la producción y difusión del conocimiento posicionado (no neutral) trasciende las otras esferas del poder social, a saber, las fuentes del poder político, económico y militar. En otras palabras: las organizaciones ideológicas sientan las bases para la búsqueda colectiva de significados (Domhoff, 2005).

Al explorar los vínculos de la élite neoliberal de conocimiento con otra esfera del poder, como la economía, investigamos las conexiones corporativas de los miembros de los *think tanks* de nuestra muestra y detectamos que 34 individuos

ocupan puestos directivos o gerenciales en empresas. Ello revela la *centralidad* de los miembros de la UFM por lo que respecta a las conexiones corporativas; más concretamente, los *linkers* empresariales forman parte de la red de *veteranos* de la generación fundadora del CEES y de la UFM y de la alta gerencia académica (decanos). El primer grupo está formado por la élite corporativa *oligárquica* establecida en el país y, entre ellos, de nuevo encontramos a miembros de la SMP. Nuestra conclusión es que los miembros de la SMP no son solo una facción importante de la familia de las interrelaciones entre los *think tanks*, sino, en el caso de Guatemala, también son *linkers* entre los campos intelectual y económico. Respecto al CIEN, este ocupa una posición subordinada en la red; los vínculos corporativos de sus *linkers* se relacionan con sus propias empresas profesionales del sector de las consultorías. Según nuestros datos, quedan al margen de la red elitista de *veteranos*. Por otra parte, el análisis de los vínculos empresariales revela que las actividades económicas de los *linkers* clave se concentran en los servicios y el sector financiero (servicios empresariales, sector inmobiliario y banca). Los *linkers* que son miembros de la élite corporativa expanden sus vínculos en otros sectores estratégicos como la industria agropecuaria o la energía.

América Latina proporciona un campo de investigación crucial para estudiar el movimiento productor de significado de los «linkers religiosos neoliberales» y su influencia sobre los procesos políticos y la población en general.

Nuestro estudio deja mucho sitio para futuras investigaciones, en relación con cuestiones tanto teóricas como empíricas, ya que nos hemos restringido al ámbito nacional. Sin embargo, las ideas traspasan las fronteras y el neoliberalismo organizado ha sido transnacional desde sus orígenes. Por ello, consideramos especialmente importante integrar los vínculos transnacionales en un análisis futuro de redes de este tipo, prestando atención a las conexiones con la empresa y los *think tanks* posicionados. En términos empíricos, es necesario adquirir más conocimiento sobre los vínculos entre los *think tanks* de derechas/neoliberales —o más bien su personal— y otras esferas del poder social, sobre todo la esfera política. Esto incluye, en primer lugar, estudios cualitativos en profundidad sobre cómo los *think tanks* movilizan las ideas (en determinados campos políticos), qué estrategias buscan para influir a las partes interesadas clave de la sociedad y los medios de comunicación, así como los efectos que producen. En segundo lugar, nuevos estudios deberán centrarse en las interconexiones con las asociaciones empresariales, como el CACIF, la potente organización paraguas del empresariado guatemalteco, y otras asociaciones del sector privado, partidos políticos y comisiones parlamentarias, así como empresas informales y grupos políticos de Guatemala.

Un análisis de redes exhaustivo, fundamentado en preguntas de investigación sólidas y datos de calidad y que tenga en cuenta la dimensión temporal de las redes y la investigación de grupos comparativos, puede arrojar luz sobre las estructuras del poder y los procesos de formación de clases. En términos teóricos, nuestro estudio revela la importancia del neoliberalismo religioso organizado. La «teología neoliberal» todavía es un terreno poco investigado. América Latina proporciona un campo de investigación crucial para estudiar el movimiento productor de significado de los «*linkers* religiosos neoliberales» y su influencia sobre los procesos políticos y la población en general.

Referencias bibliográficas

- Ayau, Manuel F. «The role of higher education in Guatemala». En: Goodman, John C. y Marotz-Baden, Ramona (eds.). *Fighting the war of ideas in Latin America*. Dallas: National Center for Policy Analysis, 1990, p. 138-145.
- Ayau, Manuel F. *Memoirs and comments on the founding of universidad francisco marroquín and its antecedents*. Guatemala: Universidad Francisco Marroquín, 1992.
- Barreto, Bill. «“Think tanks”: la batalla por las ideas para moldear la sociedad». *Plaza Pública*, (3 de septiembre de 2013) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.plazapublica.com.gt/content/think-tanks-la-batalla-por-las-ideas-para-moldear-la-sociedad>
- Bull, Benedicte. *Globalización, Estado y Privatización. Proceso político de las reformas de telecomunicaciones en Centroamérica*. San José, C.R.: FLACSO, 2008.
- Bull, Benedicte; Castellacci Fulvio y Kasahara Yuri. *Business Groups and Transnational Capitalism in Central America. Economic and Political Strategies*. Basingstoke/Nueva York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Cannon, Barry. *The Right in Latin America. Elite Power, Hegemony and the struggle for the State*. Londres: Routledge, 2016.
- Cárdenas, Julián. «Enredando a las Elites Empresariales en América Latina: Análisis de Redes de *Interlocking Directorates* y Propiedad en México, Chile, Perú y Brasil». *América Latina Hoy*, n.º 73 (2016), p. 15-44.
- Carroll, William K. y Sapinski, Jean Philippe. «The Global Corporate Elite and the Transnational Policy-Planning Network, 1996-2006: A Structural Analysis». *International Sociology*, vol. 25, n.º 4 (2010), p. 501-38.
- Casaús Arzú, Marta Elena. *Guatemala: linaje y racismo*. Guatemala: F&G Editores, 2018 [1992].

- Díaz, Guillermo. «Oligarquía y élite económica guatemalteca. Un análisis de redes sociales». *Sociedad y discurso*, n.º 30 (2016), p. 50-70.
- Domhoff, William G. «The Four Networks Theory of Power: A Theoretical Home for Power Structure Research». *Who Rules America?*, (abril de 2005) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] http://whorulesamerica.net/theory/four_networks.html
- Domhoff, William G. y Dye, Thomas R. «Introduction». En: Domhoff, William G. y Dye, Thomas R. (eds.). *Power Elites and Organizations*. Londres; Nueva Delhi: Sage, 1987, p. 7-17.
- Fischer, Karin. «The Atlas network: littering the world with free-market think tanks». *Global Dialogue. Magazine of the International Sociological Association*, vol. 8, n.º 2 (2018), p. 10-11.
- Fischer, Karin. «Latin America's neoliberal seminary: Francisco Marroquín University in Guatemala». En: Plehwe, Dieter y Slobodian, Quinn (eds.). *Market Civilizations. Neoliberals East and South (working title)*. Nueva York: Zone Books, 2021 (en preparación).
- Fischer, Karin y Plehwe, Dieter. «La formación de la sociedad civil neoliberal en América Latina: redes de think tanks e intelectuales de la nueva derecha». En: Ramírez, Hernán (ed.). *O neoliberalismo sul-americano em clave transnacional: enraizamento, apogeu e crise*. São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2013, p. 58-78.
- Fischer, Karin y Plehwe, Dieter. «Neoliberal Think Tank Networks in Latin America and Europe: Strategic Replication and Cross-National Organizing». En: Murray, Georgina y Salas-Porras, Alejandra (eds.). *Think Tanks and Global Politics – Key Spaces in the Structure of Power*. Basingstoke: MacMillan-Palgrave, 2017, p. 159-186.
- Fonseca, Marco. «La Red Atlas en Guatemala». *Refundación Ya*, (21 de noviembre de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://marcofonseca.net/2018/11/21/la-red-atlas-en-guatemala/>
- Hackworth, Jason. «Faith, Welfare and the Formation of the Modern American Right». En: Martikainen, Tuomas y Gauthier, François (eds.). *Religion in the Neoliberal Age. Political Economy and Modes of Governance*. Farnham, Burlington: Ashgate Publishing, 2013, p. 91-106.
- Mann, Michael. *Las fuentes del poder social, I. Una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d.C.* Madrid: Alianza Editorial, 1991 [1986].
- Mannheim, Karl. «Das konservative Denken: soziologische Beiträge zum Werden des politisch-historischen Denkens in Deutschland». *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 57, (1927) n.º 1, pp. 68-142; n.º 2, p. 470-495.

- Marroquín, Andrés y Thomas, Fritz. «Classical Liberalism in Guatemala». *Econ Journal Watch*, vol. 12, n.º 3 (2015), p. 460-478.
- McGann, James G. y Weaver, Kent (eds.). *Think-tanks and Civil Societies. Catalysts for Ideas and Action*. Piscataway: Transaction Publishers, 2005.
- Medvetz, Thomas. *Think-tanks in America*. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
- Mills, C. Wright. *The Power Elite*. Nueva York: Oxford University Press, 2000 [1956].
- Mintz, Beth A. y Schwartz, Michael. *The Power Structure of American Business*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Mirowski, Phil y Plehwe, Dieter (eds.). *The Road from Mont Pèlerin. The Making of the Neoliberal Thought Collective*. Cambridge; Londres: Harvard University Press, 2009.
- Plehwe, Dieter. «The politics of policy think-tanks: organizing expertise, legitimacy and counter-expertise in policy networks». En: Fischer, Frank; Douglas, Torgerson; Durnová, Anna y Orsini, Michael (eds.). *Handbook of Critical Policy Studies*. Cheltenham: Edward Elgar, 2015, p. 358-379.
- Plehwe, Dieter. «Neoliberal Thought Collectives: Integrating Social Science and Intellectual History». En: Cahill, Damien; Cooper, Melinda; Konings, Martijn y Primrose, David (eds.). *The SAGE Handbook of Neoliberalism*. Londres, Thousand Oaks: SAGE, 2018, p. 85-97.
- Plehwe, Dieter y Fischer, Karin. «Continuity and Variety of Neoliberalism: Reconsidering Latin America's Pink Tide». *Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas*, vol. 13, n.º 2 (2019), p. 166-202.
- Sapinski, Jean Philippe y Carroll, William K. «Interlocking directorates and corporate networks». En: Nölke, Andreas y May, Christian (eds.). *Handbook of the International Political Economy of the Corporation*. Cheltenham: Edward Elgar, 2018, p. 45-60.
- Scott, John. «Networks of Corporate Power: A Comparative Assessment». *Annual Review of Sociology*, n.º 17 (1991), p. 181-203.
- Scott, John. *Social Network Analysis*. Londres: SAGE, 2013 [1991].
- Slobodian, Quinn. *Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism*. Cambridge; Londres: Harvard University Press, 2018.
- Valdez, José Fernando. *El gobierno de las élites globales: cómo se organiza el consentimiento. La experiencia del Triángulo Norte*. Guatemala: Editorial Cara Parens, 2015.
- Waxenecker, Harald. *Élites políticas y económicas en El Salvador: ¿Captura de Estado?* San Salvador: Fundación Heinrich Böll, 2017.
- Waxenecker, Harald. *Desigualdad y poder en Guatemala. Captura de Estado*. Guatemala: Paraíso Desigual, 2018.

- Waxenecker, Harald. *Redes ilícitas y crisis política: la realidad del Congreso guatemalteco*. Guatemala CD.: Fundación Myrna Mack, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Nómada, 2019a.
- Waxenecker, Harald. *Redes de poder político-económico en Honduras: un análisis post-golpe*. San Salvador: Fundación Heinrich Böll, 2019b.

Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.

FORO INTERNACIONAL

VOL. LXI

ENERO-MARZO, 2021

NÚM. 1

243

Agustín Salvia, Santiago Poy y Guido Lamarmora

¿Senderos divergentes y resultados convergentes?

La desigualdad económica en Europa y América Latina
en las primeras décadas del siglo XXI

*Mariana Aparicio Ramírez, Gustavo Adolfo Islas Cadena
e Iván López Martínez*

Un diálogo entre discursos y hechos: el acercamiento
del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Alianza
del Pacífico (AP)

Analilia Huitrón Morales

Valorando la cooperación Sur-Sur. Un estudio
comparado de las experiencias de Colombia y México
en el periodo 2008-2019

Nevia Vera

Potenciando ideas: una propuesta de análisis para discutir
el desarrollo de tecnología nuclear en Argentina y México
(1950-1991)

Ramón I. Centeno

López Obrador o la izquierda que no es

EL COLEGIO DE MÉXICO

La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)

The Peruvian right: from hegemony to crisis (1990-2020)

Nicolás Lynch

Profesor principal de Sociología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú).
nlynchg@unmsm.edu.pe. ORCID: <https://orcid.org/0000-0017205-7602>

Cómo citar este artículo: Lynch, Nicolás. «La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 117-138.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.117

Resumen: Este artículo plantea el origen y el desarrollo de la derecha peruana como una derecha neoliberal, en el período 1990-2020. En un primer momento, con el *fujimorismo*, se trató de una derecha autoritaria y, en un segundo momento, de una derecha que mantiene la continuidad del modelo, pero que transita a la democracia. Sin embargo, es una transición inacabada, ya que la continuidad neoliberal promueve una democracia limitada que, aunque representada por políticos, es administrada por tecnócratas. Los escándalos de corrupción de los últimos años revelan el agotamiento de este modelo. En la actualidad, por falta de una alternativa, la salida se juega entre dos facciones del neoliberalismo –los restos del *fujimorismo* y la procreada en democracia– que no son capaces todavía de definir la situación, lo cual podría suponer la entrada en juego de un tercer actor aún incierto.

Palabras clave: Perú, derecha, neoliberalismo, tecnócratas, crisis

Abstract: This paper looks at how the origin and development of the Peruvian right wing as a neoliberal right wing between 1990 and 2020. Initially, under *Fujimorism*, it was authoritarian only to later become a right wing that ensured the continuity of the model but ushered it towards democracy. However, the transition remains incomplete, because neoliberal continuity has promoted a limited democracy in which although politicians represent, technocrats administrate. The corruption scandals of recent years have laid bare the model's moribundity. The present lack of alternatives means the way out is a choice between two neoliberal factions – the remnants of *Fujimorism* or the group that emerged during democracy. With both apparently unable to clarify the situation, a third as yet unknown actor may yet emerge.

Key words: Peru, right, neoliberalism, technocrats, crisis

Hablar de la *derecha* nos lleva a tratar con el espinoso tema de la definición. Más allá de ofrecer un recorrido heurístico, aquí seleccionamos la muy conocida definición de Norberto Bobbio (1996), que concreta la derecha en contraposición a su tradicional opuesto, esto es, la izquierda. Este autor afirma que lo distintivo de la tradicional oposición es que, mientras la derecha considera la desigualdad como una cuestión natural, la izquierda la ve como una construcción social, por lo que la primera no promueve su superación y la segunda, en cambio, señala la superación de la desigualdad como un objetivo fundamental de su acción.

Esta cuestión adquiere la mayor relevancia en el caso peruano –una realidad histórica y agudamente desigual–, porque el orden político posterior a la independencia de España (1821) ha naturalizado la desigualdad al convertir en moneda corriente que un pequeño grupo viva a costa de los demás (Alarco *et al.*, 2019¹; Latinobarómetro, 2018).

Quizás quien mejor recoja la situación del Perú sea el historiador Mark Thurner (2006) cuando señala que lo que hoy es este país pasó de las dos repúblicas en la época colonial –la de los indios y la de los españoles– a una república dividida en dos, con el grupo de raíz colonial dominando a los demás.

Quizás quien mejor recoja esta situación sea el historiador Mark Thurner (2006) cuando señala que lo que hoy es el Perú pasó de las dos repúblicas en la época colonial –la de los indios y la de los españoles– a una república dividida en dos con, cabe agregar, el grupo de raíz colonial dominando a los demás. En este

caso, y a diferencia de otros textos sobre el mismo tema (Vergara, 2012; Meléndez, 2019), asumimos una posición normativa que trata de entender la derecha, en el contexto más amplio de la formación social peruana y de su manifestación última y actual, como una derecha neoliberal. Para ello, se caracteriza el período actual de dominio neoliberal en dictadura y democracia, y se analizan las importantes coyunturas de origen en la década de 1990, de transición frustrada en los 2000 y de crisis irresuelta en la actualidad. Ello con intención de observar las posibilidades de desenlace que se pueden dar en el corto y mediano plazo.

Si algo distingue a la derecha peruana del resto de América Latina es que ha gobernado el país sin interrupciones desde 1990. Esto significa que ha establecido una hegemonía política e ideológica en los últimos 30 años que le da la capacidad para

1. El análisis que hacen estos autores de las distintas correcciones al coeficiente de Gini del ingreso sitúa la medida de desigualdad en el Perú muy por encima del índice de Gini oficial que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censo en estos últimos años. Como ejemplo, podemos señalar que el índice oficial se sitúa alrededor del 0,45 mientras que los corregidos alcanzan hasta el 0,7, un valor de medida pavoroso de la desigualdad.

tener vigencia hasta el día de hoy. No lo ha hecho como antaño, con una invocación general a su carácter de élite que, por diversas razones —de propiedad y/o intelecto—, tendría el derecho a *mandar*, sino con un programa muy claro de reorganización de la sociedad y el Estado, en contraste con la realidad anterior de crisis que busca dejar atrás. Nos referimos a la aplicación de lo que se ha venido en llamar el modelo neoliberal del Consenso de Washington o el establecimiento de la lógica del mercado para el funcionamiento del país. Esta hegemonía es la que le ha permitido mantenerse en el poder a través de sucesivas crisis en estas tres décadas y, en especial, luego del desgobierno de los últimos tres años. En este último período, ha renunciado un presidente, el resto está siendo investigado o en prisión por corrupción, e incluso uno de ellos se suicidó cuando los fiscales llamaron a su puerta para detenerlo. Además, el Parlamento elegido en 2016 para un período de cinco años fue disuelto en octubre del 2019 por reiterada actitud obstruccionista hacia el Poder Ejecutivo. A consecuencia de ello, se celebraron elecciones parlamentarias extraordinarias para elegir un Parlamento que cubriera el período que le faltaba al anterior, es decir, hasta julio de 2021. Aunque ganaron listas sin ninguna relación aparente con los partidos que generaron las anteriores crisis, tampoco se ha producido alternativa alguna hacia adelante. Esta situación parece que ha abierto una crisis de régimen sin solución a la vista.

En este contexto, ¿qué es permanente y qué es nuevo en la derecha peruana? Aquí se argumenta que lo permanente es su carácter oligárquico, colonial, racista y patrimonial, mientras que lo nuevo sería haber asumido un modelo capitalista, ligado a la globalización neoliberal, que ha proyectado las ventajas del patrimonialismo hasta límites desconocidos en la historia peruana, dándole una capacidad hegemónica poco común en las derechas de la región.

Origen de la nueva derecha en el Perú

Como apunta Carlos Alberto Adrianzén (2014), la derecha neoliberal en el Perú tiene su primera expresión ideológica en la prédica de dos intelectuales: Felipe Ortiz de Zavallos, cabeza del grupo empresarial Apoyo, y Hernando de Soto, autor del libro *El Otro Sendero* (1986). Sin embargo, quien la lleva a la acción política es el escritor Mario Vargas Llosa y su movimiento Libertad en la campaña electoral desarrollada entre 1985 y 1990. Si bien su plasmación como una política pública justo se lleva a cabo con el ajuste económico del Gobierno del recién electo Alberto Fujimori, a principios de agosto de 1990, quien aplicó al llegar al Gobierno exactamente lo contrario de lo que dijo en campaña. Esto se produce en un contexto mundial que tiene como mayores referentes a Margaret Thatcher y a

Ronald Reagan, y como precedentes adelantados en América Latina, las dictaduras militares de Augusto Pinochet en Chile y Jorge Videla en Argentina; más adelante, cuenta con seguidores civiles como los gobiernos de la concertación en Chile y el de Carlos Menem en Argentina, además de la *vuelta de tuerca* del régimen priísta con Carlos Salinas en México.

En el Perú, esta derecha, en su versión fujimorista, afirmó su poder casi dos años después con el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, dieron un viraje autoritario y establecieron una dictadura que duró hasta la huida del presidente fuera del país y su posterior destitución en noviembre del año 2000. El ajuste económico y el golpe posterior tuvieron su corolario en una nueva Constitución, elaborada por un Congreso elegido en dictadura y ratificada por un referéndum fraudulento en octubre de 1993 (Chávez Molina, 2000). Promulgada bajo estas condiciones, esta Constitución –con su restricción de derechos, concentración del poder y capítulo económico– supuso la base para las reformas neoliberales. Este inicio autoritario es clave porque va a dar la pauta –ajuste, golpe y nueva Constitución–, primero en dictadura y luego en democracia, de los 30 años que ha vivido el país bajo el modelo neoliberal.

Ahora bien, este origen fue a la vez una ruptura con el período anterior (1962-1990), que de manera genérica podemos llamar reformista en la política peruana, e implicó una reconversión de la derecha histórica anterior a 1968. Si tomamos como referencia la relación sociedad-Estado y siguiendo las reflexiones de Francisco Durand (2019), observamos que el período reformista fue un gran intento transformador para separar a las clases propietarias del aparato estatal a fin de instaurar un Estado al servicio del conjunto de la ciudadanía, lo que en pleno siglo xx se consideraba un Estado moderno (Weber, 1982). Sin embargo, de 1990 en adelante, se procedió a la captura o, mejor dicho, a la recaptura del Estado por las clases propietarias, con el gran pretexto del fracaso de los esfuerzos del período reformista por conseguir mantener las reformas implementadas en el intento de separación antedicho. En el otro extremo, este fracaso fue patente en la violencia política y su secuela terrorista, así como en la hiperinflación del período, ambos fenómenos acaecidos principalmente en la segunda mitad de la década de 1980. Así, este fracaso del reformismo es lo que le dará una legitimidad de origen a la recaptura llevada a cabo por la derecha neoliberal.

De hecho, el período reformista no fue sino el epílogo de un largo proceso de dominación oligárquica que se había ido erosionando desde 1930 y que terminó con el golpe militar del 3 de octubre de 1968 que dio inicio al Gobierno nacionalista del general Juan Velasco Alvarado (Pease, 1978; Franco, 1983). La alianza de clases que supone la dominación oligárquica es, según Sinesio López (1991), la articulación terrateniente de la oligarquía costeña dedicada a la agroexportación y el gamonalismo andino, basada en la servidumbre y coaligada como alianza social

y política al capital extranjero que estaba presente a través de enclaves mineros y agrícolas. De esta forma, la derecha histórica se establece –tal como la oligarquía terrateniente en el siglo XIX– como heredera de la dominación colonial española, es decir, de la explotación social y opresión racial de una pequeña minoría de ancestro europeo sobre la inmensa mayoría de la población peruana, principalmente campesina e indígena. Ello es fundamental para entender a la derecha de este país. Aníbal Quijano (2000) nos dirá en su texto sobre la colonialidad del poder que la dependencia peruana, colonial primero y neocolonial después, tiene dos aspectos: la dependencia externa del país respecto de un centro de poder mundial, por una parte, y el colonialismo interno (González Casanova, 2003 [1963]), por la otra, que organiza las jerarquías sociales a través de una clasificación racial. El colonialismo interno, como característica constitutiva, se expresa entonces en la diferenciación racial y finalmente en el racismo como norma de interacción social.

Oligarquía, colonialismo y racismo llevan a una cuarta característica constitutiva de la derecha peruana: el patrimonialismo, o la no distinción entre el bolsillo privado y el tesoro público. Julio Cotler (1978) señalaba que el patrimonialismo viene directamente del régimen colonial, cuando el rey de España consideraba al Virreinato del Perú su patrimonio personal, concediendo a sus súbditos la gracia de administrarlo. Esa característica se transmitiría al grupo criollo heredero de la administración colonial en la república peruana temprana. Alfonso Quiroz (2013), en su *Historia de la corrupción en el Perú*, señala la importancia del asalto a los fondos públicos en la conformación de las grandes fortunas desde un momento tan temprano como la década de 1840, cuando se produce la estafa de los bonos de la deuda interna o el reclamo falso de haberle prestado dinero y/o bienes al Ejército patriota en la guerra de la independencia. Es importante señalar este aspecto, el origen estructural de la corrupción en el patrimonialismo, como característica fundadora de la república criolla. De allí su repetición endémica en la conducta del grupo dominante hasta el día de hoy, en el que la corrupción se convierte en el azote de la democracia y en la distinción de su precariedad.

En este artículo sostenemos que, en el Perú, tanto la derecha que fundó la república criolla –que podríamos llamar la vieja oligarquía– (Lynch, 2014), como la derecha neoliberal surgida del ajuste, el golpe y la Constitución de 1993,

En el Perú, tanto la derecha que fundó la república criolla –la vieja oligarquía– como la derecha neoliberal surgida del ajuste, el golpe y la Constitución de 1993, comparten los siguientes rasgos: oligarquía, colonialidad, racismo y patrimonialismo. Empero, ¿qué distingue a la vieja oligarquía de la derecha neoliberal? Subrayamos el carácter abiertamente delictivo de la conducta política de esta última, sin legitimidad tradicional que la sustente.

comparten los siguientes rasgos: oligarquía, colonialidad, racismo y patrimonialismo. Empero, ¿qué distingue a la vieja oligarquía de la derecha neoliberal? Subrayamos el carácter abiertamente delictivo de la conducta política de esta última, sin legitimidad tradicional que la sustente. La vieja oligarquía todavía gozaba del imperio de la costumbre, que permitía al señor considerar las arcas públicas como su botín. Pero esto se va diluyendo con la crisis del Estado oligárquico y termina con las reformas velasquistas de la década de 1970. En el caso de la derecha neoliberal, esta característica corrupta estuvo reservada, en el período del fujimorismo, por el carácter mafioso de su actuar y la megacorrupción resultante en la década de 1990; más tarde, los escándalos de corrupción han continuado saliendo a la luz, hasta la actualidad, por lo que podemos señalar que se trata de un fenómeno sistémico y transversal de la época neoliberal y, por supuesto, sin legitimidad que lo ampare.

La derecha neoliberal como fujimorismo

A esta recaptura la hemos denominado también (Lynch, 2009), para explicar su momento fundacional, «regresión autoritaria», en contraste con lo que había significado la transición a la democracia de finales de la década de 1970 y los gobiernos reformistas tanto civiles como militares de las décadas de 1960 y 1970. En este sentido, un dato muy importante para caracterizar el establecimiento de la derecha neoliberal es su inicio autoritario. Si bien el período comienza con el triunfo electoral de Alberto Fujimori en julio de 1990, rápidamente se da un viraje autoritario con el ajuste de agosto del mismo año y el golpe de abril de 1992. Este último, precisamente, porque el Congreso de entonces rechazaba la aprobación de un paquete de decretos legislativos² para la lucha antiterrorista que restringía los derechos de la ciudadanía. A partir del golpe se instituyó una dictadura³ que se basó en una alianza abierta

2. Legislación de emergencia dada directamente por el Poder Ejecutivo en el Perú.

3. Hay, sin embargo, quien cuestiona esta caracterización de dictadura. Martín Tanaka (2005) señala más bien que se trataría de un autoritarismo competitivo, debido a que hay elecciones y se ponen nuevamente a funcionar, aunque bajo el control del Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Pero Tanaka se equivoca, tal como aquí argumentamos, ya que confunde las formalidades con el fondo de las cosas, al privilegiar el funcionamiento institucional a los fraudes, las trampas, la imposibilidad del control y la represión abierta y reiterada. Por lo que se relativiza el autoritarismo del régimen y el daño a la futura democracia.

con las Fuerzas Armadas, los grandes empresarios nacionales y extranjeros, y los organismos financieros internacionales; con el apoyo –reticente a veces, pero apoyo, al fin y al cabo– del Gobierno de Estados Unidos, por lo que en la época se denominó un régimen cívico-militar. En estos primeros años se agregó a esta alianza el sector conservador de la Iglesia católica, cuando Juan Luis Cipriani, miembro del Opus Dei, es nombrado arzobispo de Lima y más tarde cardenal por Juan Pablo II (Adrianzén, 2014).

Es muy importante señalar que el liderazgo de esta alianza, constituida por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, le da un giro mafioso a la situación, convirtiendo al Estado en una maquinaria delincencial a su servicio⁴, violando derechos humanos, asaltando fondos públicos, repartiendo prebendas a los amigos, atacando cotidianamente la libertad de expresión, naturalizando el fraude electoral, amedrentando a sus enemigos e incluso eliminándolos. Estos hechos se evidenciarán en sucesivas comisiones investigadoras del Congreso de la República del año 2000 en adelante, serán reseñados por diversos autores (Rospigliosi, 2000; Dammert, 2001; Pease, 2003) y detallados en la sentencia contra Alberto Fujimori de la Corte Suprema del Perú por hurto de fondos públicos y homicidio calificado del año 2009.

Cabe destacar que la relación de los grandes empresarios y tecnócratas con el régimen de Fujimori y Montesinos fue distinta. Varios de los primeros, tanto nacionales como extranjeros, pasaron a tener una relación directa con la cúpula del régimen, participando en negociados corruptos, así como en la negociación de grandes contratos de obra pública y de explotación de recursos naturales⁵. Los tecnócratas, por su parte, sin dejar de tener relación con los grandes empresarios y sus negocios corruptos, se apropiaron de la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, desde donde se proyectarían progresivamente en los años siguientes a los demás ministerios, primero a los ministerios productivos y luego a los sociales. Esta nueva relación entre economía y política establecida por la derecha neoliberal es lo que Francisco Durand (2010) denomina «captura

4. El uso del término «mafioso», tal como lo definen Dammert (2001) y Pease (2013), tiene que ver con la organización de un poder paralelo y opaco, que no solo controla totalmente las instituciones, sino que usa el chantaje, el soborno y la amenaza cotidianamente. En la organización y operación de este sistema, estuvieron, además de diversos organismos sectoriales del Estado, el Servicio de Inteligencia Nacional, articulado con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; todo ello a cargo de Vladimiro Montesinos.

5. Al respecto, Manuel Dammert (2001) señala que solo con la privatización de las empresas públicas entraron al erario 6.444 millones de dólares. A finales de 2000, el Gobierno de transición de Valentín Paniagua se encontró sin una cuenta clara de por medio y con tan solo la cantidad de 543 millones de dólares.

del Estado» y que, por mi parte, he calificado de «capitalismo de amigotes», un sistema en el que la rentabilidad de un negocio no estaba definida por la competitividad de los factores de producción, sino por las buenas relaciones con las esferas del poder (Lynch, 2009).

Un componente clave de esta alianza de poder con los grandes empresarios y los organismos financieros internacionales es que estos no parecían tener mayor problema con el carácter mafioso del régimen. Ello se refleja en el hecho de que la Confederación de Empresarios Privados (CONFIEP), tras la caída de Fujimori y Montesinos, no hiciera público ningún comunicado autocrítico, como sí lo hizo, por ejemplo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el 5 de abril de 2001⁶. Asimismo, fue decisivo el apoyo de una coalición internacional de fuerzas que, poco a poco, iba constituyendo esta derecha neoliberal. Tanto el ajuste como el golpe, y luego la Constitución, fueron claves para los grandes empresarios y los organismos financieros internacionales. Quizás quien mejor resumió este apoyo fuera Michel Camdessus, entonces director ejecutivo del FMI, quien dijo escuchar «música celestial» cuando Fujimori fue a Washington, en junio de 1990, a comunicar el viraje neoliberal de su Gobierno. Sin embargo, en el caso de los estados el asunto fue más complejo. La reacción inicial de Estados Unidos fue de condena y solo aceptó la situación cuando se regularizó el ciclo electoral a finales de 1992 (Cotler, 2000), aunque no le importó, al igual que a otros países latinoamericanos y europeos, los constantes cambios de reglas y las denuncias de fraudes posteriores. A lo sumo, se limitaron a acompañar las denuncias de violación de los derechos humanos que hicieron algunos organismos especializados.

La contraparte de este poder autoritario y mafioso fue el clientelismo político. Fujimori y, especialmente, Montesinos desarrollaron una estrategia de clientelización de la población enfocada en los microproyectos urgentes de comunidades urbanas y rurales, principalmente en los ámbitos de la pobreza y la extrema pobreza. Tomaron como referencia para ello los resultados electorales obtenidos en distintos momentos y desarrollaron como propósito la fidelización de una base social permanente que les diera su apoyo político. Este esfuerzo clientelista fue llevado a cabo por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) y se inició en el período 1993-1995, con

6. Ese día se publicó en la prensa nacional un comunicado de los militares donde hacían explícita su autocrítica por el apoyo dado al régimen autoritario. De acuerdo con una comunicación personal con el entonces asesor presidencial Alberto Adrianzén, esto sucedió por pedido expreso del presidente interino Valentín Paniagua.

singular éxito en el momento y con proyección al siglo xxi⁷. Cabe destacar también la obsesión legalista del régimen, en particular de Vladimiro Montesinos, pero no por el afán de cumplir la ley o de establecer nuevas reglas, sino de cambiar la norma escrita cuantas veces fuera necesario para adecuarla a las necesidades políticas del régimen autoritario, sin tener escrúpulos en cuanto a los medios a utilizar para ese propósito, pero siempre teniendo un papel escrito y aprobado para referirse a él⁸. Al respecto, el régimen organizó un megafraude en el referéndum de ratificación constitucional de octubre de 1993 por la necesidad que tenía de una nueva Constitución (Chávez Molina, 2000). De igual forma, el Congreso –sumiso al Gobierno– destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional que se negaron a aprobar la tercera reelección presidencial de Fujimori, lo que a la postre sería el detonante de los movimientos que años después derrocarían al régimen.

Paralelamente a este tinglado político, se produjo el cambio en la hegemonía ideológica. El reformismo de la segunda mitad del siglo xx había promovido un conjunto de valores antioligárquicos, cuyos pilares se sostenían en la justicia social, la soberanía y la identidad nacionales, la importancia de la organización popular y todos los derechos que ello conllevaba, que ampliaban y multiplicaban la precaria ciudadanía anterior. A partir del ajuste económico, vía *terapia de shock* (Klein, 2007), los esfuerzos del régimen se dirigieron a borrar esta memoria de valores, identidades y derechos, identificándola con el terrorismo de Sendero Luminoso. Es más, en los años posteriores al golpe del 5 de abril de 1992, se persiguió a todo aquel que reivindicase dichas banderas y estableciera, aunque fuera mínimamente, algún reclamo frente a la autoridad. De esta manera, se satanizaron no solo identidades y derechos que se pudieran relacionar con la izquierda, sino a la política y a los partidos en general. Como contraparte, se desarrolló una campaña en varios frentes a favor de la iniciativa individual y la empresa privada. Esto tuvo especial incidencia en los intentos de destruir los derechos del trabajador, los cuales pasan a denominarse «sobrecostos laborales», y en el elogio a la informalidad que, según Hernando de Soto (1986), pasaría a ser el nuevo punto de partida para un empresariado popular y próspero.

7. Norbert Schady (1999) señala, en una evaluación para el Banco Mundial, la relación que existía entre el gasto efectuado –también con préstamos del propio Banco Mundial– y las simpatías políticas por el fujimorismo en la primera mitad de la década de 1990.

8. «Papelito manda» era la expresión burlona que se acuñó en la época en referencia a los resultados electorales fraudulentos que pretendía hacer pasar por buenos un jefe del organismo electoral controlado por Montesinos.

Con la integración de Monseñor Juan Luis Cipriani al núcleo de poder neoliberal en su versión fujimorista, también aparecieron en el régimen autoritario los motivos del catolicismo conservador, especialmente en torno a los valores familiares, el aborto y la educación. Ello se plasmó en su influencia en el Ministerio de Educación, a través de materias tales como la educación sexual y la revisión general de los textos para los estudiantes de la educación pública, que llevaron a cabo funcionarios afines a esta visión conservadora⁹.

Este fue el origen de la derecha neoliberal y, en particular, de su facción fujimorista. Se trata de una derecha que hereda de la oligarquía sus características de élite, coloniales, racistas y patrimoniales, pero en la que se le agrega el autoritarismo mafioso y la burla reiterada de la ley –hasta de su propia ley– en el afán de ocultar su golpismo y aparecer como legal. Asimismo, es una derecha que se preocupa por establecer una base popular propia de carácter clientelista, por lo que mediáticamente –en especial por sus medios de comunicación afines– la han llamado «derecha popular». Esta característica, que fue fundamental en los tiempos del Gobierno de Fujimori, como base electoral y recurso de movilización en apoyo a sus políticas, va a permanecer como referencia entre los sectores populares y reaparecerá cuando el fujimorismo vuelva con fuerza a la escena política entre los años 2011 y 2019. El fujimorismo se convierte, así, en una marca de éxito electoral en la memoria de los sectores más pobres de la población.

La derecha neoliberal peruana: políticos, empresarios y tecnócratas

El otro sector de la derecha neoliberal es la formada por políticos –viejos y nuevos– y grandes empresarios nacionales y extranjeros, los cuales empiezan a tener una influencia más directa y con una agenda propia sobre el poder. A ellos se añaden los tecnócratas neoliberales o, más precisamente, como señala Jorge Domínguez (1997), los *technopols*, es decir, los tecnócratas convertidos –o que quieren convertirse– en políticos.

9. Como ministro de Educación del primer gabinete de un Gobierno elegido tras el régimen autoritario, tuve que desmontar el aparato que se había creado para este efecto de «lectura» de los materiales escolares. Asimismo, tuve que soportar la queja de Monseñor Cipriani al presidente Toledo por tener un ministro de Educación que no era católico sino agnóstico.

Como hemos visto, hay un antecedente intelectual importante para el neoliberalismo peruano: Hernando de Soto y su libro *El Otro Sendero* (1986), con el que desde un rigor cuestionable intenta proponer la posibilidad de un liberalismo popular¹⁰. Este autor es avalado por grandes empresarios y tecnócratas, que ven en él una forma de difundir el evangelio del libre mercado y, a la postre, el nuevo poder global que venían construyendo. Una prédica que adquiere importancia política con el surgimiento del movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa, que se levanta contra la fallida expropiación de la banca en 1985. Es en este momento cuando grandes empresarios y tecnócratas aparecen en la escena asesorando, junto con diferentes personalidades de la derecha, en la confección del plan de gobierno del Frente Democrático (FREDEMO)¹¹, con un sentido neoliberal radical de los cambios que se debían llevar a cabo (Vargas Llosa, 1993). Su presencia, sin embargo, está subordinada a las personalidades y empresarios amigos de Vargas Llosa, ligados a la clase alta y media alta de Lima, que se esfuerzan por dejar su marca –colonial y racista– en la campaña en curso. El ingreso a posiciones de gobierno recién se da con el ajuste económico de agosto de 1990, para afincarse en el poder luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Sin embargo, cabe señalar que, con el triunfo electoral de Fujimori y el posterior golpe de Estado, los líderes de los partidos tradicionales Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Acción Popular y (PPC) y Solidaridad y Democracia (SODE), así como buena parte de las personalidades que acompañaron a Vargas Llosa, incluyendo al propio escritor, se alejaron del Gobierno elegido, por estar en desacuerdo con su carácter autoritario. No pasa lo mismo con los grandes empresarios y los tecnócratas, que más bien señalan que Fujimori, especialmente en términos económicos, está cumpliendo con su programa.

10. La tesis central de De Soto es que los pobres tienen recursos que no están valorizados en el mercado. Si, por ejemplo, les dieran títulos de propiedad por su pequeño lote de terreno urbano, podrían transarlo en el mercado y obtendrían un capital para trabajar. Pero se olvida De Soto que el capitalismo no es una utopía de pequeños propietarios en competencia permanente, sino una realidad de acumulación que marcha al monopolio y a la liquidación de la pequeña propiedad.

11. El FREDEMO fue un frente político para las elecciones de 1990 entre el movimiento Libertad de Vargas Llosa, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y el grupo de tecnócratas Solidaridad y Democracia (SODE).

Los distintos gobiernos democráticos pos-Fujimori

La derecha neoliberal, ya sin Fujimori y Montesinos, continúa en democracia. Pero ¿de qué democracia se trata? Como ya se ha señalado en otros textos (Lynch, 2009 y 2014), se trata de una democracia precaria, sin democratización. Esto significa que los dos elementos de desarrollo democrático –la sociedad civil y los partidos políticos– se encuentran trabados en su desarrollo. El primer elemento –la sociedad civil–, por la brutal fragmentación a la que ha sido sometida por el modelo neoliberal, que ha dañado el mercado interno, la empresa nacional y el trabajo con derechos, haciendo muy difícil el desarrollo del tejido social y la expresión colectiva. Y, al mismo tiempo, por la importante cantidad de leyes existentes que criminalizan la protesta social hasta hacerla casi imposible.

La derecha neoliberal, ya sin Fujimori y Montesinos, continúa en democracia. Pero se trata de una democracia precaria, sin democratización. Esto significa que los dos elementos de desarrollo democrático –la sociedad civil y los partidos políticos– se encuentran trabados en su desarrollo.

El segundo elemento –los partidos políticos–, fuertemente golpeados ya por la violencia terrorista y el ajuste económico, ven muy difícil su labor proselitista y gravemente disminuida su capacidad de representar políticamente. Esta situación ha hecho del electorado

peruano un conjunto volátil, que difícilmente establece lealtad política con organización alguna, moviéndose según las ofertas de la coyuntura. A diferencia de lo que han planteado otros autores (Tanaka, 2005; Vergara, 2012), la peruana no es solo una democracia sin partidos, hecho de por sí grave, sino una democracia sin democratización, es decir, sin los motores para desarrollarse, lo que es más grave aún.

Los sucesivos gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2021) han ido profundizando la captura del Estado en democracia. Paniagua¹² es el único que expresó algún reparo ante ello, pero sin emprender ninguna acción importante. En algún momento se pensó que podía cambiar o al menos reformar

12. Valentín Paniagua fue un político del momento anterior de la política peruana, que ocurrió como se ha señalado entre 1962 y 1990. Militó primero en la Democracia Cristiana y luego en Acción Popular. Si bien asumió las posiciones conservadoras a las que evolucionó este segundo partido, estaba marcado por el afán reformista del período que intentó separar la oligarquía del Estado.

la Constitución de 1993, pero la oposición de la derecha y la falta de tiempo lo impidieron. Las claves de esta continuidad en democracia han sido dos: el mantenimiento de la Constitución írrita de 1993 y el del modelo económico. Lo que se traduce en la captura del Estado y el «capitalismo de amigotes» antes señalado, con la diferencia, frente al período anterior, de que hay un personal permanente – los tecnócratas neoliberales– y un personal eventual –curiosamente, los que se supone que mandan, los políticos elegidos–. De igual manera, los líderes y personalidades en general son mucho más importantes que los partidos políticos. Ya sean partidos con trayectoria o movimientos de ocasión, estos solo sirven como maquinarias electorales y eventuales canales de clientelismo, que se desactivan o languidecen entre una elección y otra. Sobre esta base se desarrolla la relación de los grandes empresarios y los tecnócratas en los siguientes gobiernos. Como antes, aquí también hay diferencias: en un primer momento, la relación con los grandes empresarios fue difícil porque estaban frescas las denuncias de corrupción contra ellos; sin embargo, de Alejandro Toledo en adelante se puede afirmar que el panorama se compone para grandes empresarios y tecnócratas.

Alejandro Toledo apareció en escena en el momento de crisis del fujimorismo, señalando que iba a construir «el segundo piso» de las reformas neoliberales que había comenzado Fujimori y enorgulleciéndose de su calidad de independiente, ajeno a los partidos anteriores a 1990. Toledo se radicalizó por el fraude en contra suyo que realizaron Fujimori y Montesinos en las elecciones del año 2000, y se negó a presentarse a la segunda vuelta electoral. En esta coyuntura, se encontró con el movimiento antidictatorial y se convirtió en su líder, lo que le llevó a ganar las elecciones libres de 2001. Formó un primer gabinete apoyándose en este movimiento, pero rápidamente se aisló del electorado que lo llevó al triunfo y tuvo serios choques con los movimientos sociales. Su capacidad de gobierno fue reducida y, en su cuarto año en el poder, con un 8% de aprobación durante 13 meses seguidos, hubiese sido vacado de no haber sido por los poderes fácticos de la economía y la seguridad que lo sostuvieron.

Alan García, por su parte, era un político de gran recorrido, militante de un partido tradicional de la política peruana como es el Partido Aprista y con una primera experiencia de gobierno entre 1985 y 1990 que fue considerada desastrosa (Reyna, 2000). Sin embargo, en 2006 se presentó transformado, con críticas menores al modelo neoliberal y mostrando su experiencia como la llave para un buen gobierno. Se caracterizó en el poder por su represión al movimiento social y por la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De los cinco presidentes posteriores a Paniagua, fue el que más cercanía tuvo con grandes empresarios y tecnócratas. De igual manera, buscó cultivar las mejores relaciones con Estados Unidos, tomando la iniciativa en la formación de

la Alianza del Pacífico, coalición de países¹³ de tendencia neoliberal que buscaba contrarrestar la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Ollanta Humala representó el caso de conversión más súbita y radical. Fue elegido en 2011 desde una plataforma nacionalista de izquierda y, en el curso del primer año, viró a la derecha neoliberal. Curiosamente, el nacionalismo de izquierda era una prédica que el político mantuvo desde el año 2001, cuando como oficial del Ejército peruano lideró un levantamiento en la localidad de Locumba contra Fujimori, en las postrimerías del Gobierno autoritario. Se presentó en 2006 con su plataforma radical y quedó segundo, continuando con su prédica por el país hasta ser elegido en los siguientes comicios. Antes de jurar como presidente, ya entregó varios ministerios claves a los neoliberales, entre ellos el de Economía y Finanzas y luego, progresivamente, la mayor parte del Gobierno. Su lema de campaña «la gran transformación» terminaría en el desván de los recuerdos.

Respecto a Pedro Pablo Kuczynski, este unió su calidad de gran empresario a la de tecnócrata o, más precisamente, de *technopol* desde sus inicios en la década de 1960, para ser elegido presidente en 2016. En su caso no podemos hablar de que fungía de otra cosa que no fuera de neoliberal, ni de que su Gobierno no tuviera ese sello. Sin embargo, llegó a la Presidencia porque logró el apoyo, en la segunda vuelta, del sector antifujimorista del electorado, principalmente de izquierda. Se rodeó desde un primer momento de un grupo de tecnócratas muy similares a él, con aspiraciones de *technopols*, lo que profundizó la visión externa –casi extranjera– que tenía del país, que lo llevaría finalmente a su debacle. Por último, Martín Vizcarra, el actual presidente, no ha sido elegido, sino que, como vicepresidente de Kuczynski, lo sucedió luego de las graves acusaciones de corrupción contra este, en marzo de 2018. Más allá de su lucha contra el resurgimiento fujimorista, ha demostrado ser leal al neoliberalismo y mantener la captura tecnocrática y las relaciones de privilegio con la gran empresa.

El gran ausente en esta revisión de la continuidad en democracia parece ser el propio fujimorismo, pero lo presentamos aquí por ser el único en el que, aun sin haber vuelto al Gobierno, todos los demás continuistas se han visto interpelados. En una primera etapa, hasta mediados del segundo Gobierno de Alan García, parecía ser un recuerdo más de la política peruana. Su candidata en 2006, una líder histórica de su movimiento, Martha Chávez, apenas logró el 8% de los votos. Sin embargo, de allí en adelante, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, cambió el panorama, y logró el segundo puesto, ajustadamente, en 2011, frente a un candidato claramente opuesto como es Humala. En 2016 mejoró su *performance*, quedando

13. Chile, Colombia, México y Perú.

nuevamente a muy poco de ganar la Presidencia frente a Kuczynski. Hasta 2006, el fujimorismo había repetido las formas y contenidos de los años noventa, pero con Keiko Fujimori de líder se buscó sofisticar su aparato clientelista y aparecer como una mejor continuidad en democracia que sus rivales de derecha. Asimismo, si bien no llegó a la autocrítica abierta como movimiento de los «errores» autoritarios del pasado, señaló que estos ya no podrían repetirse en las actuales condiciones. El nuevo rostro, sin embargo, se desbarató por la actuación obstruccionista que tuvo su mayoría parlamentaria frente al Gobierno de Kuczynski y su sucesor Vizcarra, así como los casos de corrupción en que se vio envuelta la propia Keiko Fujimori y varios de sus colaboradores, regresando, luego de la disolución de la asamblea legislativa en la que ostentaba la mayoría, a una situación subordinada y de pronóstico reservado en la escena peruana.

Pero lo interesante para destacar en esta revisión, es que la propuesta neoliberal nunca se había presentado directamente en democracia hasta la candidatura de Kuczynski. Toledo fue el «cholo sano y sagrado» que debía reivindicar a las mayorías de ancestro indígena en el Perú. García provenía de un partido popular, como originalmente había sido el Partido Aprista y su prédica, y si bien más explícito en términos neoliberales, ello no se terminaría de aclarar hasta su ejercicio del Gobierno. Humala, simple y llanamente, cambió de programa y de aliados en poco tiempo, siendo aún hasta hoy un misterio el origen de su traición. Kuczynski es el que, más allá de sus simpatías o antipatías personales, nunca ocultó su programa, pero para ganar necesitó el manejo de la demanda electoral, que fue llevado a cabo de forma exitosa por parte de la derecha neoliberal. Al respecto, como ya se ha mencionado, en todo este período se ha mantenido un elenco estable de tecnócratas de la derecha neoliberal que han ocupado y se han mantenido en cargos y ministerios, como el Ministerio de Economía y Finanzas, extendiéndose con las sucesivas administraciones para defender sus intereses. Se trata de las mismas personas, o de sus protegidos, provenientes de los mismos colegios y universidades privadas que van y vuelven de acuerdo con las circunstancias. La estabilidad de este grupo tecnocrático y su importancia para el régimen político en su conjunto han sido analizadas por Eduardo Dargent (2014) y Francisco Durand (2019). Sin embargo, mientras que el primero resalta la contribución de los tecnócratas en la continuidad del modelo neoliberal, Durand hace hincapié en la estructura del poder. Esto último parece central en un régimen político donde los grandes propietarios vigilan, los tecnócratas administran y los políticos actúan tomando decisiones en un marco cada vez más estrecho.

Se ha mantenido un elenco estable de tecnócratas de la derecha neoliberal que han ocupado y se han mantenido en cargos y ministerios. Esto parece central en un régimen político donde los grandes propietarios vigilan, los tecnócratas administran y los políticos actúan tomando decisiones en un marco cada vez más estrecho.

La gran pregunta es: ¿por qué se ha mantenido esta continuidad? Alberto Vergara (2012) señala el éxito del modelo económico. Quizás esta fue la razón de la simpatía inicial de la mayoría de la población por el fujimorismo, ya que en ese momento el ajuste y la estabilización permitieron salir de la pesadilla de la hiperinflación. Sin embargo, siendo este el mantra que repiten la abrumadora mayoría de políticos, empresarios, opinadores y, por supuesto, los tecnócratas, aquí señalamos que este modelo ha sido un fracaso para la mayoría de los peruanos. Si bien en 30 años el PIB se ha multiplicado por tres, esta riqueza no ha sido repartida equitativamente. Además del índice de Gini ya señalado, existe una distancia de 20 a 1 entre los deciles primero y último de la escala de ingresos (Alarco *et al.*, 2019), a lo que hay que añadir que, en cuanto a producción de riqueza, en uno de los años exitosos del modelo, en 2012, solo el 12% de la Población Económicamente Activa (PEA) tenía un trabajo formal (Gamero, 2013).

Un problema de oposición política y hegemonía ideológica

La democracia peruana tiene un problema con la oposición a la derecha neoliberal. En este sentido, solo ha existido una oposición como alternativa en las elecciones de 2006, 2011 y 2016. En los dos primeros casos, se trató de la candidatura de Ollanta Humala, quien quedó segundo en 2006 y ganó en 2011; en 2016, fue la candidatura de Verónica Mendoza, que quedó tercera con casi un 20% de los votos y acabó apoyando, por menos malo, a Kuczynski frente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Aunque en todos los casos sacó mayores votaciones la candidatura de Humala, su carácter caudillista y personalista, así como la evolución posterior, nos llevan a afirmar que una candidatura más claramente independiente y alternativa – por el liderazgo desarrollado, el programa presentado y su conducta política – fue la de Verónica Mendoza. El problema es que ello ha ocurrido justo recientemente, tras un cuarto de siglo de hegemonía neoliberal. Desde los núcleos opositores, especialmente de la izquierda, ha habido un camino muy difícil por recorrer. La triple crisis de finales de la década de 1980 –con el fracaso del primer Gobierno aprista de Alan García que termina en una hiperinflación desenfrenada, la derrota del terrorismo senderista por la vía de la guerra sucia por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, así como la división de la Izquierda Unida¹⁴– produce una hecatombe en las fuerzas

14. La Izquierda Unida fue en la década de 1980 un frente de partidos de izquierda muy exitoso para la época, que logró ganar la Alcaldía de Lima en 1983 y quedó segundo en las elecciones presidenciales de 1985. Lo destruyó la división interna y su incapacidad para señalar una alternativa a la crisis de finales de esa década.

de izquierda que enfrentan diezmadas la década de 1990. Así, el ajuste, el golpe y la nueva Constitución que establece la derecha neoliberal prosiguen sin oposición real alguna. Ello hace de la izquierda una fuerza política subordinada hasta el año 2016. Recién ese año se presenta una alternativa que tiene además la novedad del recambio generacional. Ya no son las mismas caras de la derrota y la resistencia, es una nueva generación portadora de otras sensibilidades que, no sin dificultades, aúnan las reivindicaciones de la antigua izquierda de la justicia social y la soberanía nacional con los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente y la igualdad de género.

En cuanto a la hegemonía ideológica, efectivamente, hay contenidos –transmitidos por los poderes político, económico y mediático desde la década de 1990– que subrayan la importancia de la iniciativa individual y la competencia en el mercado que permanecen en el sentido común de la población; junto con el elogio a la informalidad, que ha tomado la forma del emprendedor: persona sin recursos que se atreve a enfrentar los obstáculos de una burocracia insensible para poder tener un negocio propio para vivir. Este mensaje continúa manteniendo aparcados los valores de justicia, nación y derechos sociales, marginando a los individuos u organizaciones que osen plantearlos. Sin embargo, sí se acepta el debate sobre la igualdad de género, la destrucción del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, como cuestiones de la globalización. Ello ha permitido la alianza tácita –con matices– entre sectores progresistas y un sector de la tecnocracia neoliberal que ve en estas sensibilidades temas propios de la época y, como tales, insoslayables.

La permanencia de estos contenidos ideológicos neoliberales en la población, así como la carencia de caminos eficaces para enfrentarlos, quizás sean las mayores dificultades para plantear una alternativa al neoliberalismo en la actualidad.

Reflexiones finales: la derecha neoliberal frente a la crisis

El Perú atraviesa en la actualidad una crisis de régimen que no presenta solución a la vista, es decir, el arreglo institucional que establece el neoliberalismo para llevar adelante sus políticas en la década de 1990 y sus ajustes posteriores ya no funcionan. El escenario es el de todos los expresidentes encausados por corrupción, un Parlamento visto como una institución inservible y un poder judicial en reorganización casi permanente –más allá de las excepciones de algunos parlamentarios, jueces y fiscales probos–, lo que hace

que la política y el aparato del Estado sean vistos con gran desconfianza por la población (Latinobarómetro, 2018). La gran diferencia hoy frente a años y décadas anteriores es que la corrupción ha empezado a ser menos tolerada por los ciudadanos. El dicho popular «roba, pero hace obra», que mostraba un cinismo ciudadano frente a la posibilidad de cambiar algo, parece ya no ser tan fuerte, y los escándalos –ciertamente con más espacios de contestación política– parecen importar más que en la época de la dictadura fujimorista. La corrupción, de esta manera, empieza a ser asociada con la pobreza de los servicios públicos, la falta de un Estado que vele por el interés general y, más todavía, las posibilidades de futuro como país.

El telón de fondo de esta crisis está en la economía, la menor demanda de materias primas –minerales en el caso peruano– por parte del mercado mundial, especialmente de China. Esta demanda mantuvo un alto crecimiento del PIB en los años de auge, llegando al 8% anual, mientras que en el año anterior a la pandemia había rondado el 2% y, se calcula que, con la crisis del coronavirus el país entrará en una recesión que podría llegar al -14% del PIB (INEI, 2019). Esta crisis de régimen, que se ha agudizado con la crisis de la pandemia del COVID-19, ha tenido hasta ahora su escenario más importante en una crisis en las élites. Los escándalos de corrupción han remecido al país en los últimos cuatro años: todos los expresidentes de la república de la era neoliberal –salvo Valentín Paniagua– están enjuiciados o presos por delitos relacionados con la financiación de campañas políticas y/o sobornos para la concesión de obras públicas e influencia indebida. Así, todos los gobiernos neoliberales, salvo el de transición, están manchados.

Ello ha tenido su corolario en las graves dificultades para gobernar el país. Primero, por la propia dificultad de gobernar en medio del escándalo de las denuncias, investigaciones y juicios; pero también por los graves enfrentamientos entre los poderes ejecutivo y legislativo, que han dejado el país sin un norte claro hacia donde avanzar. Este enfrentamiento ha tenido como protagonistas, en un primer momento, a la mayoría fujimorista del Congreso de la República que, aliada al Partido Aprista, trató de bloquear el Gobierno de Kuczynski primero y de Vizcarra después, para acortar su mandato y que su lideresa Keiko Fujimori tuviera una vía más rápida a la Presidencia de la República. Esto parecía concretarse cuando las serias denuncias por corrupción obligaron a Kuczynski a renunciar a la Presidencia en marzo de 2018, siendo sucedido por su vicepresidente Martín Vizcarra quien, para sorpresa de muchos, ha buscado tomar la iniciativa con un proyecto de reforma política y judicial. Esto dio algunos avances, pero finalmente se entrampó y, en el curso del enfrentamiento con el Congreso, disolvió la asamblea legislativa y convocó a elecciones extraordinarias para completar su período de sesiones.

El resultado ha sido un Congreso más fragmentado y sin una orientación clara, por lo que el pronóstico de la situación es reservado.

En este contexto, desde la sociedad civil y la oposición democrática no se han desarrollado opciones consistentes de salida para la situación política. En el período 2018-2019, de enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, se llevaron a cabo frecuentes movilizaciones ciudadanas contra el control del fujimorismo y el Partido Aprista del Congreso de la República y la oposición obstruccionista que realizaban al Gobierno de Vizcarra, aunque no alcanzaron una masividad que las convirtiera en un factor de crisis importante. Además, tampoco han tenido una expresión política clara que las sustentara ni una proyección en las elecciones legislativas complementarias. La alternativa de Verónica Mendoza y su movimiento Nuevo Perú hasta ahora no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias.

Esto nos deja un conflicto entre dos facciones de la derecha neoliberal, principalmente en las alturas. Por una parte, el fujimorismo venido a menos, con una actuación

La continuidad de unos en el poder solo estará garantizada por la debilidad de los otros, en oposición al manejo oligárquico, para desplazarlos.

política en los últimos años que, aunque con nuevas caras, es nuevamente identificado con el actuar mafioso de la década de 1990; y el Partido Aprista, otrora el gran partido nacional popular de la política peruana, devenido en una fuerza neoliberal menor y de futuro incierto. Sin embargo, el golpe del COVID-19 a la estructura de poder y el descrédito de sus antiguos representantes han hecho resurgir a los grandes propietarios como actores públicos, ya sea directamente o a través de su gremio, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), hoy especialmente locuaz ante la agudización de la crisis. Por la otra parte, a los tecnócratas que han buscado convertirse en *technopols*, que tuvieron su mejor expresión en Kuczynski y ahora tratan de acomodarse con Vizcarra. Si los primeros insisten en el neoliberalismo que se tramita por la vía del negocio oscuro y la prepotencia pública; los segundos prestan más atención a la etiqueta, e insisten en que controlan las bondades de un saber que les permite «hacer las cosas bien»; su opción es apelar a la opinión pública para obtener el apoyo del que carecen por no contar con bases organizadas y encontrar un nuevo rostro que les permita continuar controlando los principales resortes del poder entre bambalinas. Ninguna de las dos facciones logra articular un proyecto para el país que no sea el de la repetición de lo anterior, aunque los tecnócratas insisten en la posibilidad de remozar la propuesta económica y entroncarla con la, hoy congelada, reforma política. ¿Será eso posible? Hasta hace pocos meses hubiera afirmado que los tecnócratas harían el tránsito –al

que paradójicamente se resisten, pero también anhelan— para convertirse en *technopols* y «salvar los muebles»¹⁵ del neoliberalismo, intentando una reconstrucción. Pero hoy, ante la incertidumbre planetaria, creo que todas las opciones para continuar el camino de esta derecha, la dictadura incluida, permanecen abiertas.

Ante este panorama, ¿qué le queda a la derecha peruana? Los sectores más ligados a los grandes propietarios, que expresan con más nitidez su condición de clase, insisten en vender su proyecto oligárquico como el único posible para el conjunto del país, y manifiestan la urgencia de volver al momento anterior de auge neoliberal para salir de los estragos actuales. Esta propuesta, sin embargo, no repara en el deterioro sufrido por la falta de legitimidad de su dominación, lo que quizás haga imposible una renovación hegemónica en los mismos términos. Así las cosas, la continuidad de unos en el poder solo estará garantizada por la debilidad de los otros, en oposición al manejo oligárquico, para desplazarlos.

Referencias bibliográficas

- Adrianzén, Carlos Alberto. «Una obra para varios elencos». *Nueva Sociedad*, n.º 254 (2014), p. 100-111.
- Alarco, Germán; Castillo, César y Leiva, Favio. *Riqueza y Desigualdad en el Perú. Visión Panorámica*. Lima: OXFAM, 2019.
- Bobbio, Norberto. *Left and right. The significance of a political distinction*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
- Chávez Molina, Juan. *Mis votos singulares. Historia de un fraude que no debe repetirse*. Lima: Horizonte, 2000.
- Cotler, Julio. *Clases, Estado y Nación en el Perú*. Lima: IEP, 1978.
- Cotler, Julio. «La gobernabilidad en el Perú. Entre el autoritarismo y la democracia». En: Cotler, Julio y Grompone, Romeo. *El fujimoirismo, Ascenso y caída de un régimen autoritario*. Lima: IEP, 2000, p. 13-75.
- Dammert, Manuel. *El Estado mafioso. El poder imagocrático en las sociedades globalizadas*. Lima: Ediciones El Virrey, 2001.
- Dargent, Eduardo. *Technocracy and democracy in Latin America: the experts running government*. Nueva York: Cambridge University Press, 2014.
- De Soto, Hernando. *El Otro Sendero*. Lima: Instituto Libertad y Democracia, 1989.

15. Salvar los muebles, que refiere en su origen a salvar los muebles de una casa en un incendio, es una expresión que se usa para señalar que alguien quiere salvar lo mejor de una experiencia terminada.

- Domínguez, Jorge I. *Technopols. Ideas and leaders in freeing politics and markets in Latin America in the 1990s*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1997.
- Durand, Francisco. *La mano invisible del mercado. Crítica a los neoliberales criollos*. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico de San Marcos, 2010.
- Durand, Francisco. *La captura del Estado en América Latina. Reflexiones teóricas*. Lima: OXFAM, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019.
- Franco, Carlos. «Los significados de la experiencia velasquista: forma política y contenido social». En: Franco, Carlos (comp.). *El Perú de Velasco*. Tomo II. Lima: CEDEP, 1983, p. 249-422.
- Gamero, Julio. *El trabajo decente en el Perú*. Una mirada al 2012. Lima: IESI, 2013.
- INEI-Instituto Nacional de Estadística y Censos. *Panorama de la Economía Peruana 1950-2018*. Lima: INEI, 2019.
- Klein, Naomi. *The Shock Doctrine. The rise of disaster capitalism*. New York: Metropolitan Books, 2007.
- Latinobarómetro, Corporación. *Informe 2018*. Banco de datos en línea, (2018) (en línea) www.latinobarometro.org
- López, Sinesio. «El Estado Oligárquico en el Perú, un ensayo de interpretación». En: *El Dios mortal. Estado, sociedad y política en el Perú del siglo XX*. Lima: Instituto Democracia y Socialismo, 1991.
- Lynch, Nicolás. *El argumento democrático sobre América Latina. La excepcionalidad peruana en perspectiva comparada*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, 2009.
- Lynch, Nicolás. *Cholificación, república y democracia*. Lima: Otra Mirada, 2014.
- Meléndez, Carlos. «Las vertientes populistas conservadora y democrático liberal en Perú post 2000». *Colombia Internacional*, n.º 99 (2019), p. 3-27.
- Pease, Henry. *El ocaso del poder oligárquico*. Lima: DESCO, 1977.
- Pease, Henry. *La autocracia fujimorista: del Estado intervencionista al Estado mafioso*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2013.
- Quijano, Aníbal. «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina». En: Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2000, p. 246.
- Quiroz, Alfonso W. *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: IEP; Instituto de Defensa Legal, 2013.
- Reyna, Carlos. *La anunciación de Fujimori. Alan García 1985-1990*. Lima: DESCO, 2000.
- Rospigliosi, Fernando. *El arte del engaño. Las relaciones entre los militares y la prensa*. Lima: edición del autor, 2000.

- Schady, Norbert. *Seeking votes. The political economy of expenditures by Peruvian Social Fund (Foncodes) 1991-1995*. Washington D.C.: Banco Mundial, 1999.
- Tanaka, Martín. *Democracia sin partidos: Perú, 2000-2005. Los problemas de representación y las propuestas de reforma política*. Lima: IEP, 2005.
- Thurner, Mark. *Republicanos andinos*. Lima: Centro Bartolomé de las Casas, IEP, 2006.
- Vargas Llosa, Mario. *El pez en el agua*. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1993.
- Vergara, Alberto. «Alternancia sin alternativa: ¿un año de Humala o veinte años de un sistema?». *Argumentos. Revista de análisis y crítica*, n.º 3 (2012) (en línea) <https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/alternancia-sin-alternativa-un-ano-de-humala-o-veinte-anos-de-un-sistema/>
- Weber, Max. *La política como vocación. Escritos Políticos II*. México D.F.: Folios Ediciones, 1982.

Democracia, poder de las élites y sociedad civil: una comparativa entre Bolivia y el Perú

Democracy, elite power and civil society: Bolivia and Peru compared

John Crabtree

Investigador asociado, Centro Latinoamericano, Universidad de Oxford.
john.crabtree@lac.ox.ac.uk.

Cómo citar este artículo: Crabtree, John. «Democracia, poder de las élites y sociedad civil: una comparativa entre Bolivia y el Perú». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 139-161. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.139

Resumen: A pesar de su proximidad y similitudes culturales, el Perú y Bolivia aportan ejemplos contrapuestos del poder de las élites frente al de los movimientos populares. En los últimos años, el Perú ha vivido la consolidación del poder empresarial en detrimento de una sociedad civil políticamente activa; con una oposición a las políticas neoliberales fragmentada y débil. Bolivia, en cambio, registra una historia de movimientos sociales fuertes que apuntalaron las sucesivas administraciones del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Pero estas trayectorias no son fijas y la capacidad de la sociedad civil y de las élites de controlar el Estado fluctúa. El golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia nos lo recuerda. Este artículo compara los dos países en períodos diferentes: el del desarrollo liderado por el Estado, anterior a 1980, el neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 y el del posneoliberalismo a partir del año 2000.

Palabras clave: Perú, Bolivia, élites, poder empresarial, movimientos sociales, Estado, democracia

Abstract: Despite proximity and cultural similarities, Peru and Bolivia provide contrasting examples of elite power as opposed to that of popular movements. Peru in recent years has seen the consolidation of business power at the expense of a politically active civil society; opposition to neoliberal policies has been fragmented and weak. Bolivia has a history of strong social movements that underpinned successive administrations by the Movimiento al Socialismo (MAS). However, these trajectories are not fixed and the ability of civil society and elites to control the state fluctuates. The November 2019 coup in Bolivia is a reminder of this. This article compares the two countries over different time periods: that of state-led development prior to 1980, the neoliberal period in the 1980s and 1990s, and that of post-neoliberalism period after 2000.

Key words: Peru, Bolivia, elites, business power, social movements, state, democracy

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la «profundización» de la democracia en América Latina; concepto con el que nos referimos al aumento de la participación democrática y el colapso de los tradicionales mecanismos de exclusión política. A partir del año 2000, se han vivido varios intentos de ampliar el grado de participación y de incorporar nuevos actores a los procesos de toma de decisiones en el Estado. Sin lugar a duda, este proceso no siempre ha estado exento de problemas, y las élites arraigadas han buscado maneras de protegerse de lo que a menudo se denomina «política populista». De hecho, se han dado varios casos de reversión, con el desplazamiento de movimientos y partidos más progresistas por parte de fuerzas de derechas vinculadas a los intereses empresariales y/o a las élites. También hay ejemplos en los que estos intereses han seguido siendo predominantes y la «profundización» democrática apenas –o nada– ha tenido impacto.

En qué medida los grupos de la élite están dispuestos a aceptar las normas de la política democrática depende del contexto, por lo que ello ha ido cambiando con el tiempo. Muchos académicos, especialmente los de la escuela de la «consolidación democrática», afirmaron que la viabilidad de la democracia en América Latina dependía de la disposición de las élites a aceptar y acoger la democracia¹. Sin embargo, en los últimos 30 años se han sucedido los casos que han demostrado que la aceptación de la gobernanza democrática ha estado sujeta a unos límites claros (Bartell y Payne, 1995; Hagopian, 1996). Las políticas democráticas han desafiado el poder de las élites y estas no han dudado en recurrir a formas de gobierno autoritarias de derechas cuando actores populares, especialmente partidos de izquierdas y la fuerza laboral organizada, les han desafiado. Los acontecimientos políticos recientes –especialmente en Brasil, pero también en otros lugares– muestran los límites de la aceptación por parte de la élite de los giros hacia la izquierda.

Bolivia y el Perú, países vecinos con muchas similitudes, representan experiencias contrapuestas en este sentido. A partir del año 2006, el partido boliviano de centroizquierda Movimiento al Socialismo (MAS) tomó medidas para acabar con las viejas prácticas de exclusión y llevar a las esferas de la influencia política los movimientos sociales fuertemente organizados en el país. En cambio, en el Perú, los intereses de las élites –reforzados por las políticas neoliberales de la década de 1990– impusieron su agenda en la formulación de políticas, especialmente en aquellos ámbitos en los que tenían mayores intereses materiales, excluyendo a grandes sectores de la población. A diferencia de Bolivia, en este país las organizaciones de la sociedad civil eran débiles,

1. Una obra clave sobre este tema es el trabajo en tres volúmenes de Guillermo O'Donnell y Schmitter (1986), que compara las transiciones en América Latina con las parecidas y exitosas transiciones en España, Portugal y Grecia.

fragmentadas e incapaces de imponer su agenda sobre la política estatal. En Bolivia, ante el panorama de enfrentarse a cinco años más de Gobierno del MAS, las élites lograron recuperar temporalmente el poder en noviembre de 2019 e instauraron un Gobierno con una ideología claramente de derechas que no solo acogía con los brazos abiertos los valores empresariales, sino también una agenda social sumamente conservadora. Este artículo pretende, a partir de la comparación de estos dos casos, ayudar a elucidar algunas de las dinámicas subyacentes de la «profundización» democrática en América Latina, de tal manera que contribuya a ampliar la discusión sobre la democratización en la región. Las diferencias existentes, como se argumenta aquí, reflejan no solo desarrollos en el pasado reciente, sino también contrastes históricos entre ambos casos profundamente inveterados.

Si nos referimos, más concretamente, al concepto de *profundización* democrática en América Latina (y en otros lugares), resulta útil comparar el poder de las élites con el de la sociedad civil en general y su influencia respectiva sobre el rumbo de la política estatal. El equilibrio de poderes relativos entre las élites y la sociedad civil en América Latina ha experimentado lo que podríamos denominar «cambios tectónicos», en aspectos críticos concretos, cuando el poder relativo de ciertos grupos para influir sobre la toma de decisiones experimentó cambios significativos. En este punto es útil hacer referencia a la obra de Joe Foweraker, cuyo libro *Polity* (2018) complementa un trabajo propio reciente sobre el Perú (Crabtree y Durand, 2017). Para Foweraker, la calidad democrática es la combinación del poder de la élite (o poder oligárquico) y del que ejerce el resto de la sociedad. El autor parte de los conceptos aristotélicos del gobierno en manos de unos pocos (oligarquía) en comparación con el gobierno de muchos (democracia) y la necesidad de un Estado exitoso —*politeia*, usando el término clásico— para contemplar una combinación de ambos. En la gobernanza de la *politeia* estos dos elementos resultan contrapuestos². Así, sostiene que los estados latinoamericanos modernos revelan esta tensión. La política en la región sigue siendo un terreno de disputas entre las agendas de las élites empresariales y las de la sociedad en general y, tal como argumenta la literatura sobre la democratización en América Latina, el compromiso de

-
2. El libro de Foweraker (2018: 1) empieza con la observación de que «la *politeia* es un sistema político que abarca tanto la oligarquía como la democracia. La combinación de estas dos esferas diferentes crea un sistema contradictorio y sincrético que conjuga dos formas de posesión de poder que están amarradas, no siempre de manera segura, por una combinación concreta de instituciones formales e informales». Este autor sostiene que los extremos de la desigualdad de América Latina reflejan la persistencia del poder oligárquico (o elitista) a través de formas como el clientelismo y el patrimonialismo (por ejemplo, instituciones informales) que tienden a determinar las reglas del juego democrático en pro de sus intereses.

las élites incluso con la democracia liberal dista de ser incondicional. Para este autor, la oligarquía está profundamente afianzada en la América Latina contemporánea (ibídem).

El equilibrio de poderes entre los grupos de las élites y el resto de la sociedad experimentó un cambio *tectónico* en la década de 1980 y principios de la de 1990, lo que supuso el fin de lo que en ocasiones se ha denominado el período «populista» de desarrollo impulsado por el Estado y su sustitución por un modelo neoliberal en el que los intereses privados prevalecían sobre los públicos, acercándose los intereses empresariales al centro del poder político. Las políticas de esa época favorecieron a las élites (o a los que se encontraban en una situación privilegiada para aprovechar las oportunidades que se creaban), mientras que otros intereses que en su día habían tenido poder (como los sindicatos) quedaron relegados a los márgenes (Silva y Rossi,

Las políticas democráticas han desafiado el poder de las élites y estas no han dudado en recurrir a formas de gobierno autoritarias de derechas cuando actores populares, especialmente partidos de izquierdas y la fuerza laboral organizada, les han desafiado. Bolivia y el Perú, países vecinos con muchas similitudes, representan experiencias contrapuestas en este sentido.

2018). Fue en ese momento cuando América Latina, durante mucho tiempo ya la región con mayor desigualdad del planeta, lo iba siendo cada vez más. Este proceso tuvo su paralelo en otros lugares del mundo, en particular en las regiones desarrolladas: Europa Occidental y América del Norte. Pero lo que nos interesa aquí no es solo la desigualdad de ingresos o de tenencia de activos, sino las desigualdades en el acceso al poder político. Así pues,

la noción de democracia está ligada a cómo diferentes grupos buscan influir en la gestión del Estado y el uso de los recursos públicos. Cuando la *res-publica* (la cosa pública) se subsume en la prevalencia de los intereses privados (lo que podríamos denominar la *res-privada*) debido al desequilibrio del poder político, la calidad de la democracia necesariamente se resiente.

La era del desarrollo impulsado por el Estado (hasta la década de 1980)

Aunque el Perú y Bolivia quedaron muy por detrás de otros países latinoamericanos por lo que respecta a la clase de políticas destinadas a promover la industrialización local bajo los auspicios del Estado, ambos países experimentaron importantes avances en el período previo a la década de los

setenta que dieron un nuevo papel al Estado en la búsqueda del desarrollo. Sin embargo, hubo importantes diferencias en la manera en que se dieron estos pasos en cada caso.

En Bolivia, la revolución de 1952 acarrió un cambio abrupto para el papel del Estado y, con ello, para la relación tanto con el sector privado como con la organización popular. Hasta ese año, el sector privado estaba dominado por la minería y el prominente papel desempeñado por los tres «barones del estaño» del país: Patiño, Hochschild y Aramayo (Klein, 2011). Aunque no es típico de América Latina, las industrias exportadoras más importantes de Bolivia estaban en manos de capitalistas locales, pero con fuertes conexiones internacionales. Durante gran parte de la primera mitad del siglo xx (aunque con interrupciones significativas), la élite minera ejerció un control considerable sobre el Estado, especialmente sobre las políticas económicas que favorecían sus intereses. Dada la escasa industrialización del país, las élites principales (u oligarquía) eran agrarias, propietarias de vastas extensiones de tierra (tremendamente infrautilizadas), cuyos intereses eran satisfechos por los que estaban en el poder, si bien su poder económico llevaba tiempo en decadencia. Los inmigrantes europeos llevaron consigo intentos aislados de industrialización, ayudados por la naturaleza de país sin litoral de Bolivia y su distancia a fuentes de suministro clave³. Sin embargo, a partir de la década de 1930 en adelante, aparecieron nuevos actores que cuestionaron el control político ejercido por las élites tradicionales. La derrota en la Guerra del Chaco con Paraguay (1932-1935) dio lugar al surgimiento de unas Fuerzas Armadas nacionalistas con planes reformistas. La nacionalización del petróleo en 1937 (antes que la de México) fue un indicio de este nuevo espíritu, al igual que la Constitución de 1938, que realzó el papel del Estado y subsumió la inviolabilidad de la propiedad privada a cuestiones de necesidad social. El crecimiento del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), mayoritariamente de clase media, en la década de 1940, muy influido por el peronismo en Argentina, se fundamentó en las ideas del nacionalismo económico, y forjó alianzas con otros sectores, especialmente con un incipiente movimiento obrero radicalizado.

La revolución de 1952 supuso un giro de 180 grados en la influencia de las élites sobre la política. La nacionalización de la industria minera y la creación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) pusieron fin abruptamente al poder de los barones del estaño y sus aliados. Igualmente, la reforma agraria abolió el sistema de haciendas y, con ello, se aniquiló el poder residual de los

3. Sobre el papel de los inmigrantes en particular y el desarrollo de grupos de poder elitistas, véase Fernando Molina (2019).

terratenientes. En su lugar, el vacío político lo llenaron radicales de clase media y el movimiento obrero que competían por el control sobre el MNR. En particular, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSMTB), fundada en 1944, y la flamante Central Obrera Boliviana (COB) fueron actores clave en el Gobierno. Durante un breve período, por lo menos, es justo afirmar que estos controlaron efectivamente el Estado, desplazando los intereses elitistas. Al mismo tiempo, el Gobierno del MNR introdujo el sufragio universal –27 años antes que en el Perú–, lo que provocó un cambio considerable en la naturaleza de la política en favor de las masas que anteriormente habían quedado excluidas.

Con todo, la etapa «revolucionaria» de la revolución boliviana resultó ser breve (Malloy y Thorn, 1971). En las décadas de 1950 y 1960 surgieron nuevas élites, algunas con estrechos vínculos con el MNR y otras profundamente enfrentadas a este (como en las tierras bajas del este de Santa Cruz). El modelo desarrollista que perseguía el MNR pretendía usar la inversión pública para modernizar la economía del país y fomentar la iniciativa privada. La retirada de los planes protosocialistas de los mineros y de la COB fue motivada por los Estados Unidos, que habían visto los hechos del año 1952 con alarma. Aprovechando las dificultades económicas a las que se enfrentaban los gobiernos del MNR, reafirmaron su influencia, especialmente para abrir una brecha entre estos y el movimiento obrero (Field, 2014). En la década de 1960, tanto bajo el mandato del MNR hasta 1964 como de los militares posteriormente, la política, sin duda alguna, pasó a adoptar un rumbo mucho más favorable a los negocios. La máxima expresión de ello fue Santa Cruz, donde el sector privado prosperaba a fuerza de préstamos estatales (la mayoría de los cuales nunca fueron devueltos) diseñados para fomentar el desarrollo agroindustrial. Así pues, tal como afirman Conaghan y Malloy (1994: 42), «1952 preparó el camino para la remodelación del capitalismo boliviano».

La dictadura militar del general Hugo Banzer (1971-1978), procedente de Santa Cruz, confirmó el cambio de equilibrio entre estas nuevas élites y los movimientos sociales como los mineros. Aunque estaban en la cima de una redistribución de rentas cada vez más desigual, estas élites eran pequeñas en cuanto a número, estaban débilmente constituidas y eran incapaces de combatir la fuerza de los trabajadores organizados. Tampoco pudieron imponer un modelo de negocio que resultara duradero y sirviera a sus intereses a largo plazo. Con todo, fueron capaces de ganar influencia política y usarla según sus propios intereses, a menudo sirviéndose de recursos e infraestructura del Estado. Al final, sin embargo, fue la fuerza de los mineros la que terminó por derribar el Gobierno de Banzer en 1978, lo que vino acompañado de un período de inestabilidad política en el que, entre otros, las Fuerzas Armadas y los sindicatos competían por el control. Así, el rápido crecimiento del poder empresarial en

la década de 1970 en la mitad oriental del país, especialmente en Santa Cruz, resultó incapaz de proyectarse por todo el país, al tiempo que las élites de La Paz siguieron dependiendo profundamente del Estado y no estaban dispuestas a presionar por políticas que socavaran el modelo estatista de desarrollo. Paralelamente, el crecimiento de la minería privada se había beneficiado de las políticas de los gobiernos sucesivos en las décadas de 1960 y 1970, y surgieron nuevos grupos mineros influyentes que adquirieron prominencia política en la década siguiente, especialmente Comsur, la empresa dirigida y propiedad de la familia Sánchez de Lozada.

Por su parte, la historia peruana es diferente en muchos aspectos de la boliviana. A pesar de los desafíos *populistas*, la fuerza de la élite peruana –asentada en la agricultura y la minería– pudo mantener el control político a lo largo de gran parte de este período, con gobiernos civiles oligárquicos o gobiernos en los que las Fuerzas Armadas protegían sus intereses. El desafío más importante vino de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que estuvo cerca de desterrar estos intereses en 1931. La APRA, igual que el MNR en Bolivia, tenía una orientación antioligárquica y reformista, pero, a diferencia del MNR, nunca consiguió el control del poder público. La izquierda en el Perú seguía siendo una fuerza electoral marginal, por lo menos hasta la década de 1980; aunque los partidos de derechas tampoco lograron afianzarse⁴.

Pese a algunas similitudes, las diferencias entre Bolivia y el Perú en este periodo fueron notables. En el Perú, donde el sector privado estaba más desarrollado, las empresas demostraron ser capaces de aguantar los desafíos de los regímenes estatistas. En Bolivia, en cambio, las agendas radicales –aunque por poco tiempo– afloraron para controlar el Estado y el sector privado era mucho más débil y con una base de poder limitada.

El boom económico posterior a la Segunda Guerra Mundial aportó sustento económico para las élites del Perú. En ese período se vivió una importante diversificación en sectores como la agricultura, la pesca y la minería. A diferencia de Bolivia, el modelo de desarrollo de no intervención (*laissez-faire*) no fue seriamente cuestionado, por lo menos hasta la década de 1960 (Thorp y Bertram, 1978). Fue entonces cuando, a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, a medida que se ralentizaba el auge de las exportaciones, hubo indicios de un cambio hacia estrategias de diversificación más intervencionistas, especialmente

4. Klarén (2000) aporta una de las mejores panorámicas resumidas de la historia peruana.

en la producción. La Ley de Promoción Industrial de 1959 condujo a una tímida reorientación de los objetivos económicos, pero la producción que promovió creció desde un nivel bajo y estaba controlada en gran medida por la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos. Ello vino acompañado por un crecimiento en la intervención estatal sobre la planificación económica, aunque con un alcance modesto. El Gobierno reformista de Belaunde (1963-1968) supuso una ruptura con el pasado y llevó adelante planes de diversificación económica y reforma agraria. No obstante, no fue hasta después de la destitución de Belaunde por el golpe militar de 1968 cuando se afianzaron los auténticos planes para la modernización bajo el mandato del general Juan Velasco Alvarado. Igual que en Bolivia en 1952, en el Perú a partir de 1968 hubo un cambio claro y perceptible del equilibrio de poderes entre los grupos empresariales y la sociedad civil en general, aunque el impulso procedía de *arriba* y no de *abajo*.

El Gobierno de Velasco (1968-1975) fue transformador⁵. La reforma agraria, anunciada inmediatamente después del golpe de Estado de Velasco, pretendía acabar con el poder de la antigua oligarquía agraria, aunque esta ya había perdido mucha fuerza e influencia en las décadas anteriores. Respecto a su alcance, fue la reforma agraria más radical de América Latina, y buscaba redistribuir la tierra no solo en las tierras altas sino también en los valles litorales, mucho más productivos, donde intereses que anteriormente habían sido influyentes se oponían a la reforma. El Gobierno también emprendió un programa de nacionalizaciones, cuyo objetivo principal fueron los intereses de propietarios extranjeros, especialmente en los sectores de la minería, el petróleo y la banca. En consecuencia, la intervención estatal en la economía aumentó considerablemente y las élites políticas perdieron mucha capacidad de acceso al Estado y poder de influencia (por ejemplo, a través del control de los medios de comunicación). Dichas élites fueron sustituidas, al menos en parte, por un nuevo aparato burocrático que pretendía ratificar la autonomía del Estado y se suprimió la competencia partidista.

El Gobierno militar generó un movimiento popular mucho más empoderado y, aunque buscó el control y la participación directa a través de mecanismos institucionales como el Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos), los envites radicales pronto desbordaron la capacidad del Estado de mantener el control: con planes socialistas arraigados en los sectores rural (impulsados por la reforma agraria), productivo y en los asentamientos marginales que iban proliferando cada vez más en la periferia de las principales ciudades. Fue esta creciente

5. Las obras de referencia sobre los gobiernos militares peruanos (1968-1980) siguen siendo Lowenthal (1975) y Lowenthal y McClintock (1983). Véase también Aguirre y Drinot (2017).

presión social lo que, en 1975, alentó a generales más conservadores a tomar el poder, deponer a Velasco y restringir el experimento de cambio dirigido por el Estado. Privadas del poder y afectadas negativamente por las reformas militares, las élites empresariales buscaron reagruparse a partir de 1975, aprovechando los cambios liberalizadores introducidos por las Fuerzas Armadas bajo el mandato del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y, después, por el Gobierno civil de Fernando Belaunde (1980-1985). Con Velasco, muchos sufrieron la expropiación de sus propiedades o fueron forzados a vivir con sus trabajadores en las llamadas «comunidades industriales». El Gobierno habría buscado forzar el ritmo de la industrialización alentando al capital doméstico (o la burguesía nacional) a pasar del sector agrario al industrial, con el objetivo de crear un sistema de diálogo a través del cual tuviera lugar este cambio. Sin embargo, la estrategia fracasó en gran medida, puesto que las empresas locales fueron reticentes a invertir, aunque hubo excepciones. El crecimiento del grupo Romero—propietario del Banco de Crédito y de importantes empresas agroindustriales—hasta convertirse en el imperio empresarial más grande del Perú en la década de 1980, tuvo su origen en la identificación de las oportunidades comerciales disponibles.

Mientras que la crisis de la deuda de 1982, los desastres climáticos (el fenómeno del Niño) y la expansión del Sendero Luminoso pusieron trabas a los impulsos privatizadores del Gobierno de Belaunde, su sucesor Alan García (1985-1990) retomó una estrategia de desarrollo dirigido por el Estado a través de acuerdos con el sector privado. No obstante, una vez más, el experimento fracasó, en particular debido al intento (erróneo y fallido) de García de nacionalizar la industria bancaria privada. Su Presidencia acabó en una hiperinflación y en la proliferación de la violencia política, lo que obligó al Estado, efectivamente, a doblegarse (Crabtree, 1991). También se vivió el surgimiento de un movimiento opositor de derechas más definido que, a pesar de representar los intereses empresariales y de estar encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa, no fue capaz de reunir el suficiente apoyo popular para alcanzar el poder en 1990.

Pese a algunas similitudes entre Bolivia y el Perú en este período de desarrollo dirigido por el Estado, las diferencias fueron notables. Con el impulso de la presión popular desde abajo, el año 1952 en Bolivia supuso una ruptura en la evolución del poder estatal en que las agendas radicales —aunque por poco tiempo— afloraron para controlar el Estado. Esta experiencia de empoderamiento arrojó una sombra alargada sobre las generaciones futuras. En el Perú no se produjo un punto de ruptura así cuando el Gobierno militar de 1968 buscó frustrar y controlar el incipiente radicalismo a través de reformas estructurales, aunque ello sí contribuyó enormemente a la movilización social. Por otra parte, el Estado boliviano, que seguía teniendo dificultades para imponer su agenda,

era un campo de batalla entre influencias poderosas, en particular, el poder fluctuante de los sindicatos y el Ejército. En el Perú, donde el sector privado estaba más desarrollado, las empresas demostraron ser capaces de aguantar los desafíos de los regímenes estatistas bajo los mandatos de Velasco y García. En Bolivia, en cambio, el sector privado era mucho más débil y su base de poder limitada fue incapaz de proyectarse nacionalmente. En ninguno de los dos países, sin embargo, emergieron partidos de masas de derechas capaces de alcanzar el poder político mediante elecciones.

La era del neoliberalismo (mediados de la década 1980 hasta 2000)

Es posible trazar ciertos paralelismos entre ambos países en la década de 1980, cuando el modelo de desarrollo dirigido por el Estado cedió ante el neoliberalismo. Los dos se enfrentaron a dificultades graves para el reembolso de la deuda contraída durante la década de 1970 y atravesaron episodios de hiperinflación. En Bolivia, esto ocurrió a principios de los años ochenta, durante el Gobierno de centroizquierda de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), y terminó en un programa de estabilización de amplio alcance bajo el mandato de su sucesor, Víctor Paz Estenssoro. En el Perú, acontecimientos similares –podría decirse que más graves debido a cómo el conflicto con Sendero Luminoso dejó al descubierto la debilidad del Estado– acarrearón a principios de los noventa otra reestructuración radical bajo el Gobierno de Alberto Fujimori. La magnitud de la crisis económica e institucional en cada país no dejó otra alternativa que emprender políticas –apoyadas con entusiasmo por empresas y acreedores extranjeros– destinadas a enterrar las estrategias de desarrollo dirigido por el Estado, con el fin de cambiar las *placas tectónicas* del equilibrio de poderes entre las élites empresariales y los movimientos populares decisivamente hacia las primeras.

En Bolivia, el ajuste estructural iniciado por el Gobierno de Paz Estenssoro buscaba liberalizar la economía y reducir el tamaño del sector público, en una economía que, desde 1952, había sido una de las más estatistas de América Latina. Igual que la desregulación y la liberalización comercial, estos cambios (promulgados por el Decreto Supremo 21060) aniquilaron muchas empresas públicas, incluyendo particularmente a Comibol, con el cierre de minas clave y el despido de unos 26.000 mineros. Esto, en efecto, cercenó el poder ejercido desde la década de 1940 por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de

Bolivia (FSTMB) y socavó profundamente el poder de la COB, de la cual la FSTMB era la columna vertebral, al oponerse a las reformas liberalizadoras. Muchos mineros despedidos emigraron a zonas urbanas como El Alto o al Chapare, donde fueron absorbidos en el floreciente sector del cultivo de la coca (Grisaffi, 2019). El sector privado fue el principal beneficiario de estos cambios, tras haber sufrido con dureza las huelgas y las movilizaciones acontecidas anteriormente durante el Gobierno de Siles. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) desempeñó un papel fundamental en el diseño y la implementación del *paquetazo*, así como a la hora de orquestar una campaña publicitaria y educativa crítica con el modelo de desarrollo anterior (Conaghan, 1995). Figuras clave del sector privado desempeñaron un papel destacado en la Administración de Paz Estenssoro, la más visible de las cuales fue Gonzalo Sánchez de Lozada, propietario de la empresa minera privada más grande de Bolivia (Comsur) y principal artífice de los ajustes.

Con la desarticulación de la principal fuente de oposición y la relativa estabilización de los precios (a pesar del enorme coste social), cuajó un consenso más sólido tras la agenda liberalizadora, que se reafirmó cuando Sánchez de Lozada alcanzó la Presidencia en 1993. Su programa de reformas de segunda generación, el llamado Plan de Todos, tenía como premisa la idea de que la sostenibilidad del modelo requería forjar un consenso en la sociedad boliviana compartiendo hasta cierto punto los beneficios de la liberalización⁶. Su plan para privatizar las empresas bolivianas que aún eran públicas, especialmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) –la compañía petrolífera estatal–, giraba en torno a un esquema mediante el cual se atraían inversores extranjeros para administrarlas, de manera que el sector público boliviano se quedaba una participación del 50%, que se usaría para financiar un plan de pensiones universal⁷. Su política de Participación Popular, basada en un ambicioso plan de creación de nuevos municipios, también estuvo orientada a levantar un puntal de apoyo político.

En Bolivia, el neoliberalismo se introdujo gradualmente y, aunque los movimientos populares sufrieron sus consecuencias, persistieron las tradiciones y las estructuras organizativas sobre las que se asentaban. En el Perú, la política neoliberal de Fujimori, quien recurrió a un modelo de gobierno cada vez más personalista y autoritario, supuso un cambio de rumbo abrupto y radical.

6. Estas ideas se parecían a las del «capitalismo popular» desarrolladas en Chile y otros sitios.

7. Para más detalles, véase Bauer y Bowen (1997).

Este proyecto resultó ser problemático, en especial, bajo el Gobierno de Hugo Banzer, que volvió al poder como presidente electo en 1997. A finales de los noventa, resurgieron influentes movimientos sociales organizados en torno a demandas concretas, aunque diferentes de las reivindicaciones laborales que habían caracterizado el período anterior. La emergencia del movimiento cocalero en el Chapare fue una respuesta a la guerra contra la droga desatada por Banzer a instancias de Washington. Asimismo, la llamada Guerra del Agua de Cochabamba fue la respuesta directa al intento de privatizar el suministro de agua de la ciudad (Olivera y Lewis, 2004). Otros movimientos sociales también reflejaron disputas en torno a políticas del Gobierno relacionadas con el uso y la apropiación de recursos naturales (Crabtree, 2005). El recién fundado MAS demostró ser muy efectivo en explotar estos polos de oposición y proporcionar vínculos ideológicos y organizativos entre ellos. También se aprovechó del descrédito en el que había caído el sistema de partidos (que se había impuesto a partir 1985) por su fracaso en ser el portavoz del creciente descontento público con las políticas gubernamentales. Ante este panorama, el sector privado fue incapaz de aportar respuestas convincentes, especialmente por el fracaso de las políticas neoliberales a la hora de generar los beneficios para el empleo prometidos en el Plan de Todos. Aunque este se reforzó, estaba lejos de ser hegemónico. Así, el sistema de partidos surgido de la crisis de 1985, y que había aportado un mínimo de estabilidad política, no consiguió mantener la legitimidad del proyecto de reforma liberalizadora. La magnitud de la amenaza a la «nueva normalidad» se hizo evidente en 2002, cuando el MAS, con Evo Morales como candidato, pasó de estar fuera de todas las quinielas a prácticamente ganar a Sánchez de Lozada en los comicios de 2002. El MAS, cuyo apoyo se basaba en los resurgentes movimientos sociales bolivianos, aportó el liderazgo político y su fuerza electoral para cuestionar el modelo neoliberal.

En el Perú, mientras tanto, poco después de haber sido elegido presidente, Alberto Fujimori lanzó un paquete de medidas liberalizadoras en 1990 (conocidas como el «paquetazo») con el apoyo de Washington y las instituciones financieras internacionales (FMI y Banco Mundial). Este *paquetazo* resultó ser uno de los ajustes más radicales y rápidos de toda América Latina e implicó la privatización de prácticamente todas las compañías públicas, una desregulación radical de los mercados, la apertura de los mercados peruanos a las importaciones y generosos incentivos a la inversión exterior, especialmente en el sector clave de la minería. Se rechazó todo vestigio de la época de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) en favor del crecimiento orientado al exterior (Wise, 2002; Arce, 2010). Estas medidas fueron duras, pero tuvieron éxito en la contención de la inflación y (finalmente) en el impulso al crecimiento. Sin embargo, no encajaban bien con el respeto a las normas democráticas, y el régimen adoptó

una postura cada vez más autoritaria que buscaba alejar la toma de decisiones del escrutinio público y las presiones populares.

La izquierda peruana se encontraba en una situación difícil para resistir tales cambios. Izquierda Unida, que en su día había tenido una gran fuerza electoral, resultó ser un báculo de caña quebradizo. Con sus graves fracturas internas, no fue capaz de formar una alternativa seria en 1990 –tampoco en elecciones sucesivas– y su base social se vio socavada por el doble desafío de la hiperinflación y la violencia política. La fuerza laboral organizada resultó ineficaz para resistir el desplome del nivel de vida de los trabajadores a finales de la década de 1980, y fue víctima de la posterior privatización de las empresas públicas. La guerra interna con Sendero Luminoso, además, destrozó las organizaciones agrarias construidas desde la izquierda en décadas anteriores y, a la vez, suscitó malestar político, lo que fue aprovechado por la derecha y ayudó a apuntalar el apoyo a Fujimori y sus políticas. A finales de los noventa, mientras que en Bolivia la organización popular sobrevivió y resurgió como fuerza política, en el Perú –como se verá– los movimientos sociales siguieron atomizados y apartados de las esferas de la toma de decisiones.

Así pues, el sector privado peruano salió reforzado, tanto económica como políticamente, de las crisis de finales de los ochenta, y estableció una estrecha relación mutuamente beneficiosa con el Gobierno de Fujimori. Las reformas liberalizadoras de los años noventa implicaron el traspaso masivo de bienes del sector público al privado, por lo que los grupos empresariales prosperaron y pudieron estrechar lazos –aunque informalmente– con el Estado, consiguiendo una poderosa influencia en las esferas de toma de decisiones que más les interesaban. Este desplazamiento en la *tectónica* del poder en favor de la clase empresarial permitió a esta aumentar su control hegemónico sobre el Estado en detrimento de la sociedad en general, y difundir un potente relato sobre las virtudes de la iniciativa privada para promover el desarrollo nacional (Crabtree y Durand, 2017). Es más, a diferencia de Bolivia, la etapa neoliberal del Perú efectivamente sobrevivió a su principal artífice, ya que la restauración de la democracia en 2000 no acarrió un cambio de modelo económico. Bajo el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y a pesar de algunas reformas democráticas, el modelo neoliberal se mantuvo intacto; con el de Alan García (2006-2011) se reforzó más, especialmente respecto a la liberalización comercial y a la atracción de la inversión extranjera; e incluso con el de Ollanta Humala, cuya candidatura a la Presidencia en los comicios de 2006 y de 2011 se basaba en la oposición al neoliberalismo, este se apresuró a deshacerse de las políticas heterodoxas al asumir el cargo. Desde 2001, todos los ministros de Economía –que ejercen un poder enorme en el Perú– han sido nombrados por sus vínculos con redes bancarias y negocios globales.

De esta forma, mientras que en Bolivia el neoliberalismo se introdujo gradualmente, en el Perú fue el resultado de un cambio de rumbo abrupto y radical. En el primero, el Gobierno de Sánchez de Lozada buscó introducir reformas que ayudaran a sostener políticamente el modelo, pero Fujimori, menos preocupado por crear consensos, recurrió a un modelo de gobierno cada vez más personalista y autoritario. Además, el impacto a largo plazo de la violencia política del Perú no se daba en Bolivia, y cuesta imaginar que una organización como Sendero Luminoso pudiera haber arraigado en este país⁸. En el Perú, el sector privado se benefició enormemente del proceso de privatización y la posterior reanudación del crecimiento impulsado por las exportaciones. En Bolivia, aunque los movimientos populares sufrieron a consecuencia del neoliberalismo, persistieron las tradiciones y las estructuras organizativas sobre las que se asentaban; contrariamente al Perú, donde las crisis políticas y económicas de la década de 1980 les asestaron un golpe casi fatal del que tuvieron que luchar para recuperarse⁹.

El poder de los movimientos sociales en el siglo XXI

La divergencia de los caminos seguidos por el Perú y Bolivia alcanzó su máxima expresión en 2006, cuando Evo Morales, líder de los cocaleros del Chapare, prestó juramento como presidente de un Gobierno cuyo origen está precisamente en los sectores del movimiento popular que se habían opuesto más hostilmente a las políticas del neoliberalismo. El ascenso del MAS reveló el fracaso de las reformas de los años noventa para forjar apoyos políticos sólidos y duraderos a través de la consolidación de un partido institucionalizado profundamente arraigado en la sociedad. El surgimiento de movimientos sociales que se oponían a aspectos concretos de la política gubernamental, a

-
8. Las tradiciones bolivianas de sindicalización campesina iban en contra de las nociones de la lucha armada como camino viable hacia el poder político, lo que subraya la validez de participar en las elecciones. En las décadas de 1960 y 1970 se acometieron varios intentos de guerra de guerrillas, pero con un efecto limitado.
 9. Los sindicatos más resistentes solían ser los que se mantenían en el sector público, especialmente en sectores como la sanidad y la educación. La izquierda, despojada de mucho de su apoyo social anterior, cosechó malos resultados en sucesivas elecciones.

partir de finales de los noventa, desmintió la idea de que el Decreto Supremo 21060 y las reformas de segunda generación de la década de 1990 habían terminado con la resistencia popular. El alcance y la extensión de esta oposición destaparon la debilidad del intento de erigir una nueva Administración en Bolivia basada en principios neoliberales. Entre 1999 y 2006, los movimientos populares consiguieron reorganizarse, multiplicarse y construir un proyecto político que implicó la revocación de dichas prioridades políticas. A través de campañas electorales y otras formas de movilización, el MAS consiguió coordinar campañas dispares y fusionarlas en un movimiento que buscaba romper con el statu quo¹⁰. Así, el Gobierno que tomó el poder en 2006, procedente de dichos movimientos sociales, se comprometió a aplicar un modelo de intervención estatal y defensa de la soberanía nacional, desoyendo las recomendaciones políticas que procedían de Washington. También buscó cuestionar los sistemas de poder político que habían dominado hasta mediados de la década de 1980 e incorporar sectores que previamente habían sido excluidos en las funciones decisorias del Estado¹¹.

Cabe afirmar, pues, que el año 2006 representa un importante punto de inflexión, quizá el más importante desde 1952. Sin duda, contrasta con la historia peruana, que en 2006 volvió a llevar a Alan García al poder con unos planes muy conservadores basados en la oposición a la «marea rosa» de alternativas de izquierda de otros lugares de América Latina. De hecho, la victoria electoral de Morales prometió más cambios de largo alcance en Bolivia que la mayoría de los otros países de la marea rosa. La decisión del Gobierno de aumentar el control estatal sobre el sector de los hidrocarburos (semiprivatizado bajo el Gobierno de Sánchez de Lozada) era una muestra de lo que estaba por llegar. Para el sector empresarial, 2006 supuso un gran revés, al cortársele el acceso a la toma de decisiones estatales. Sin un partido instrumental capaz de representar sus intereses, el sector, especialmente en Santa Cruz, tomó las calles usando redes locales de derechas. Esta oposición alcanzó su punto álgido en 2008, cuando el Comité Pro Santa Cruz, en el que los grupos empresariales estaban bien representados, exigió una autonomía del Gobierno central que estuvo cerca de la secesión. Sus reivindicaciones se repitieron en todos los puntos de las tierras bajas del este del país.

10. Actualmente, existe una vasta literatura sobre los orígenes del MAS y su llegada al poder en 2006. Algunos trabajos, a modo de ejemplo, son Anria (2019), Madrid (2012) y Zuazo (2008).

11. La manifestación más evidente de ello fue la tarea de la Asamblea Constituyente (2006-2008) de redactar la nueva Constitución.

Ante esta situación, tras su reelección en 2009, Morales buscó un *modus vivendi* con las élites de Santa Cruz, consciente de los peligros políticos latentes que planteaban y de la necesidad de darles voz dentro del Gobierno. Por su parte, las élites empresariales también se percataron de que Morales no sería derrocado fácilmente y que, con la recuperación de la economía por el auge de las materias primas, podían ganar dinero. Un signo temprano de distensión fue la decisión en 2009 de proporcionar garantías a los intereses agroindustriales de Santa Cruz contra la expropiación de tierras. No obstante, fue el 2011 el año decisivo a la hora de forjar vínculos estructurados y cooperativos entre los empresarios y el Gobierno¹², con considerables cambios políticos para la expansión de la frontera agrícola de Santa Cruz con el fin de impulsar la producción alimentaria y las exportaciones de soja. Esta

La divergencia de los caminos seguidos por el Perú y Bolivia alcanzó su máxima expresión en 2006, cuando Evo Morales, líder de los cocaleros del Chapare, prestó juramento como presidente de un Gobierno cuyo origen está precisamente en los sectores del movimiento popular que se habían opuesto más hostilmente a las políticas del neoliberalismo.

distensión ocurrió en paralelo con otras políticas que causaron fricciones con los movimientos sociales, surgiendo escisiones en el seno del Pacto de Unidad –la coalición en la que el MAS salió elegido en 2006– en forma de movimientos específicos que perseguían sus propios intereses. Mientras tanto, el Gobierno se sintió identificado con la necesidad de fomentar las

industrias extractivas. El llamado conflicto TIPNIS –respecto a la construcción de una carretera que atravesaba una reserva indígena en las fronteras entre los departamentos de Cochabamba y Beni– causó importantes divisiones (Postero, 2017). Aun así, gran parte del apoyo campesino al MAS se mantuvo fiel a la agenda del partido. A pesar de las numerosas acusaciones de que los movimientos sociales se habían dejado manejar y corromper por el Gobierno, estos mantuvieron en gran medida la autonomía a la hora de perseguir sus propios intereses concretos (Crabtree y Chaplin, 2013)¹³.

La situación en el Perú, como ya se ha comentado, resultó ser muy diferente. Los movimientos sociales que surgieron con fuerza a finales de los años setenta y principios de los ochenta y que habían apuntalado Izquierda Unida, se vieron gravemente debilitados por la violencia política y las tur-

12. Wolff (2016) resulta particularmente útil.

13. Para un punto de vista más reciente, véase Anria (2019).

bulencias económicas de finales de los años ochenta, y por la fuerza con la que Fujimori implementó sus políticas neoliberales en la década de 1990. A partir del año 2000, los principales signos de resistencia a la política gubernamental se dieron en aquellos sectores en los que el desarrollo de las industrias extractivas amenazaba los intereses de la comunidad, especialmente en la minería (en las tierras altas) y los hidrocarburos (en la selva amazónica). Otros sectores impulsaron acciones de retaguardia, como los cocalleros que se opusieron a los planes de erradicación del Gobierno. Con todo, la izquierda peruana resultó ser incapaz de coordinar estas acciones –hacer encajar todas las piezas– para aportar liderazgo y una ideología encaminada a la protección de los recursos naturales contra el capitalismo desbocado, por lo que los movimientos sociales siguieron atomizados y con proyección únicamente local. Algunos acontecimientos, como el enfrentamiento en Bagua (región del Amazonas) en 2009 y el conflicto por el Conga en Cajamarca en 2011, tuvieron claras repercusiones en la política nacional, pero no como para provocar cambios importantes en las prioridades políticas generales. La necesidad de inversión extranjera, especialmente en la minería, seguía siendo un dogma inalterable en los debates sobre política¹⁴.

Todo ello no significa que la opinión pública estuviera firmemente comprometida con un modelo que sin duda beneficiaba a unos sectores más que otros o, de hecho, a algunas regiones más que otras. Las ediciones anuales del Latinobarómetro muestran la fuerza del sentimiento antisistema en el Perú, así como la desconfianza tanto en las élites políticas como en la forma en que estas gestionan las instituciones democráticas. Tal insatisfacción subyacía en la victoria electoral de Humala en 2011, pero le faltó expresión política, ya que este, rápidamente, se vio obligado a retroceder en su agenda adaptándose al poder de facto de los intereses comerciales establecidos. Los partidos de izquierda, marginados políticamente desde finales de la década de 1980, no estaban en condiciones de ofrecer un liderazgo alternativo a un electorado desencantado. De hecho, el Perú vio en la década de los noventa cómo partidos de todos los colores se veían reducidos a vehículos electorales con una estructura rudimentaria y poca o ninguna presencia organizada en la sociedad.

14. Para un análisis comparativo de las respuestas al extractivismo dentro de la región andina y fuera de esta, véase Bebbington (2013).

¿Nuevos cambios tectónicos?

En los últimos años, el poder relativo de ambos sectores –las élites empresariales y los movimientos sociales– ha cambiado una vez más en los dos países.

La capacidad de las élites empresariales para dominar la toma de decisiones políticas en el Perú ha sido puesta recientemente en entredicho por los escándalos de corrupción que salieron a la luz con las investigaciones del caso Lavo Jato en Brasil, que implicaban las actividades de las principales empresas constructoras y sus contrapartes peruanas (Durand, 2018). El hecho de exponer que una sucesión de gobiernos desde la década de 1980 había recibido sobornos de empresas constructoras desacreditó sectores clave de la comunidad empresarial. El Poder Judicial y otros órganos del aparato del Estado habían desempeñado

En los últimos años, el poder relativo de las élites empresariales y los movimientos sociales ha cambiado una vez más en ambos países. En el Perú, la capacidad de las élites para dominar la toma de decisiones políticas ha sido puesta en entredicho por los escándalos de corrupción. En Bolivia, el resurgimiento del poder de las élites llevó a la destitución de Morales en noviembre de 2019, aunque el MAS ha vuelto al Gobierno tras las elecciones de octubre de 2020.

un papel activo a la hora de ocultar y, de hecho, promover tales actividades¹⁵. Una retahíla de presidentes y otras figuras políticas de primer nivel han sido identificadas por su participación en actividades ilegales con intereses empresariales, para financiar sus campañas electorales, para su enriquecimiento personal o con ambos fines. Estas revelaciones condujeron a un cambio en la política pública, especialmente tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski

como presidente en marzo de 2018. Su sucesor, Martín Vizcarra, buscó emprender una limpieza en la vida pública y, aunque su Administración no era de ningún modo antiempresarial, el poder de las empresas que antes era indiscutible dio paso a una postura más crítica¹⁶. Los intentos de antiguos fujimoristas de explotar el conservadurismo social (con asuntos como el aborto y el matrimonio

15. La corrupción en el Gobierno y el Poder Legislativo y el Judicial se vio alentada por el narcotráfico y otras actividades ilícitas tanto en el Perú como en Bolivia. Con el fin de llevar a cabo sus negocios, los implicados debían comprar el apoyo de los que tenían autoridad, quienes, a su vez, demostraron estar dispuestos a recibir sobornos.

16. El derrocamiento del Gobierno de Vizcarra en noviembre de 2020 fue el resultado de una oposición de intereses, fuertemente representados en el Congreso, que se sintieron amenazados por la política anticorrupción. Atacaron al presidente por actos suyos supuestamente corruptos cuando se desempeñó como gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014.

homosexual) en gran medida fracasaron para crear un partido de derechas de base popular. Aun así, el poder político del sector privado ha salido reforzado, mientras que los movimientos sociales y la izquierda apenas suponen una amenaza inmediata¹⁷.

Bolivia, por su parte, presentaba un panorama contrario. En este país, el resurgimiento del poder de las élites llevó en última instancia a la destitución de Morales como presidente en noviembre de 2019 y su sustitución por un Gobierno abiertamente vinculado al poder de los intereses de la élite, especialmente de Santa Cruz, cuya influencia había sido relegada durante los 14 años de mandato de Morales¹⁸. Durante su tercer mandato seguido, como se ha señalado, se reforzó la influencia de las élites empresariales sobre la toma de decisiones en el Estado, en que las autoridades estatales hicieron considerables concesiones a las reivindicaciones empresariales. No solo el Gobierno apreciaba la importancia de la inversión privada como complemento a la del Estado, sino que también las organizaciones empresariales se mostraban cada vez más confiadas en su capacidad de presionar por sus reivindicaciones de maneras concretas. Aun así, la destitución de Morales se debe en gran parte a los errores tácticos en los que incurrió el Gobierno y, en concreto, el propio presidente al querer presentarse a un cuarto mandato a pesar del voto negativo registrado en el referéndum de febrero de 2016¹⁹.

El «golpe de Estado» que acabó destituyendo a Morales de su cargo, propagado por intereses de Santa Cruz, fue muy bien recibido por el sector privado. La CEPB no ocultó su satisfacción con la destitución de un Gobierno que consideraba excesivamente intervencionista y comprometido con los intereses de los trabajadores y la COB. Los altercados posteriores a las controvertidas elecciones, celebradas en octubre de 2019, recordaban a los que habían sacudido el país en 2008, pero que Morales había conseguido dominar. No obstante, la vuelta del MAS al Gobierno

17. Las movilizaciones que acompañaron la caída de Vizcarra fueron expresión de un descontento popular, pero espontáneo y poco estructurado.

18. El Comité Pro Santa Cruz, que mantenía fuertes vínculos con intereses empresariales clave, desempeñó un papel fundamental en la deposición de Morales, especialmente su entonces presidente, Fernando Camacho.

19. El referéndum de 2016 supuso una ajustada victoria para los opositores a la campaña de Morales para la reelección, lo que condujo a un creciente movimiento de oposición liderado, en su mayor parte, por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005). Este quedó segundo en los comicios de 2019 y alzó la voz enérgicamente para declararlos fraudulentos. La veracidad de tales declaraciones seguía generando dudas en el momento de escribir estas líneas. El resultado declarado dio a Morales la primera posición con un margen de diferencia del 10% respecto a Mesa, lo que le permitió afirmar que había ganado en primera ronda.

tras otras elecciones en octubre de 2020 subraya la incapacidad de la élite boliviana de construir para sí misma una base popular. El Gobierno *interino* de Jeanine Añez —que había buscado revertir muchas de las políticas de Morales—, como resultado de la presión popular, finalmente se vio obligado a convocar unas elecciones, tras una serie de intentos previos para evitarlas. Como resultado, el candidato del MAS, Luis Arce, obtuvo una contundente victoria con el 55% de los votos. Sin embargo, en el momento de finalizar este artículo, quedaba por ver cómo respondería la élite de Bolivia —especialmente la de Santa Cruz— y, de hecho, hasta qué punto el nuevo Gobierno buscaría llegar a algún tipo de acuerdo con ella.

Conclusiones

En este artículo se han analizado los límites de la «profundización» democrática en el Perú y Bolivia representados por la influencia de los intereses de las élites (u oligarquía) y debidos a los cambios en la *tectónica* del poder ejercido por estas y por los movimientos populares a lo largo del tiempo. A pesar de algunas similitudes, ambos países brindan algunos contrastes destacables en el poder relativo de estas dos fuerzas en diferentes momentos de los últimos 80 años, en las diferentes fases del ciclo de desarrollo histórico. Esta visión a largo plazo muestra cómo esas relaciones de poder pueden cambiar, a menudo, de manera impredecible. La historia boliviana señala las debilidades de las élites, en comparación con las del Perú, para imponer sus prioridades políticas sobre los actores del Estado; asimismo, indica la perseverancia de los movimientos sociales y su capacidad para mantener y —en ocasiones— imponer su agenda y reemplazar el poder de las élites por completo. Por su parte, la historia peruana ejemplifica las continuidades del poder de las élites, incluso en momentos en que estas estaban a la defensiva (como bajo el Gobierno de Velasco).

Por lo que respecta al mantenimiento y a la intensificación de la gobernanza democrática, los dos países muestran lo difícil que ha resultado alcanzar algo de equilibrio para que los intereses empresariales cuadren con los de los sectores populares y así contribuir a estabilizar la política y legitimar el Gobierno. El reciente giro de los acontecimientos en Bolivia sugiere que las élites solo toleran de manera limitada los gobiernos que buscan modificar las reglas de la participación en la economía y redistribuir los beneficios sociales, a pesar de los intentos de estos por atraer al sector privado; demuestra, a la vez, el poder electoral de los movimientos populares de derrocar gobiernos de la derecha que representan sectores de un elite muy minoritaria. El sector privado, en ninguno de los dos países, ha conseguido crear un partido político con un amplio atractivo capaz de ganar unas elecciones. El MNR

lo intentó en Bolivia en la década de 1990, pero no lo consiguió, mientras que en el Perú las estructuras de partido que se han presentado a las elecciones desde el año 2000 carecen de base social sólida y, por lo tanto, disfrutan de una legitimidad limitada. Las organizaciones populares, en cambio, sí han conseguido alcanzar el poder en Bolivia —en los años cincuenta y en el año 2006—, pero se les antojó difícil cultivar una relación estable y basada en el respeto mutuo con el sector empresarial.

Los intentos de las élites empresariales en ambos países por ensanchar su atractivo político en un marco general democrático no han logrado ganar mucho terreno. En el Perú, los simpatizantes del fujimorismo han apelado a diversos tipos de conservadurismo religioso, sobre todo entre los grupos evangélicos en rápida expansión; en Bolivia, por su parte, los que depusieron a Morales en 2009 apelaron a valores católicos tradicionales y racistas como contrapunto a las tendencias proindígenas de Morales. Con todo, en ambos casos fue difícil establecer prácticas e instituciones políticas en las que el poder de las élites estuviera dispuesto a adaptarse a los cambios en el poder político que implicaran mayor participación, inclusión y redistribución de los recursos.

Tal como sugiere Foweraker (2018), el fortalecimiento de las instituciones democráticas en estos países, y en América Latina en general, dependerá de encontrar la fórmula por medio de la cual las élites y los movimientos populares —separados por desavenencias sociales de profundas desigualdades— sean capaces de encontrar una meta común. Mientras tanto, la «profundización» democrática, es decir, la creciente participación de personas previamente excluidas en la toma de decisiones, topará con la constante oposición de las élites establecidas cuando el poder de la *voice* desafíe el statu quo.

Referencias bibliográficas

- Aguirre, Carlos y Drinot, Paulo (eds.). *The Peculiar Revolution: Rethinking the Peruvian Experiment under Military Rule*. Austin: University of Texas Press, 2017.
- Anria, Santiago. *When Movements Become Parties: the Bolivian MAS in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Arce, Moisés. *El fujimorismo y la reforma del mercado en la sociedad peruana*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2010.
- Bartell, Ernest y Payne, Leigh. *Business and Democracy in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995.
- Bauer, Richard y Bowen, Sally. *La fórmula boliviana: del capitalismo del estado a la capitalización*. Santiago de Chile: McGraw-Hill e Interamericana de Chile, 1997.

- Bebbington, Anthony (ed.). *Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry: Evidence from South America*. Abingdon: Routledge, 2013.
- Conaghan, Catherine. «The Private Sector and the Public Transcript: the Political Mobilization of Business in Bolivia». En: Bartell, Ernest y Payne, Leigh (ed.). *Business and Democracy in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995, p. 105-140.
- Conaghan, Catherine y Malloy, James. *Unsettling Statecraft: Democracy and Neoliberalism in the Central Andes*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1994.
- Crabtree, John. *Peru under Garcia: an Opportunity Lost*. Basingstoke: Macmillan, 1991.
- Crabtree, John. *Patterns of Protest: Politics and Social Movements in Bolivia*. Londres: Latin America Bureau, 2005.
- Crabtree, John y Chaplin, Ann. *Bolivia: Processes of Change*. Londres: Zed Books, 2013.
- Crabtree, John y Durand, Francisco. *Peru: Elite Power and Political Capture*. Londres: Zed Books, 2017.
- Durand, Francisco. *Odebrecht: la empresa que capturaba gobiernos*. Lima: Oxfam y Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018.
- Field, Thomas. *From Development to Dictatorship: Bolivia and the Alliance for Progress in the Kennedy Era*. Ithaca: Cornell University Press, 2014.
- Foweraker, Joe. *Polity: Demystifying Democracy in Latin America and Beyond*. Boulder y Londres: Lynne Rienner, 2018.
- Grisaffi, Thomas. *Coca Yes, Cocaine No: How Bolivia's Coca Growers Reshaped Democracy*. Durham y Londres: Duke University Press, 2019.
- Hagopian, Frances. «Traditional Power Structures and Democratic Governance in Latin America». En: Domínguez, Jorge I. y Lowenthal, Abraham (eds.) *Constructing Democratic Governance: Latin America and the Caribbean in the 1990s, Themes and Issues*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
- Klarén, Peter. *Peru: Society and Nationhood in the Andes*. Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Klein, Herbert S. *A Concise History of Bolivia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Lowenthal, Abraham. *The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule*. Princeton: Princeton University Press, 1975.
- Lowenthal, Abraham y McClintock, Cynthia (ed.). *The Peruvian Experiment Reconsidered*. Princeton: Princeton University Press, 1983.
- Madrid, Raúl. *The Rise of Ethnic Politics in Latin America*. Nueva York: Cambridge University Press, 2012.
- Malloy, James M. y Thorn, Richard S. (ed.). *Beyond the Revolution: Bolivia since 1952*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1971.

- Molina, Fernando. *Modos de privilegio: alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia contemporánea*. La Paz: Centro de Investigación Sociales y Oxfam, 2019.
- O'Donnell, Guillermo, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead. *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives* (3 vols.) Baltimore and London: Johns Hopkins Press, 1986.
- Olivera, Oscar y Lewis, Tom. *Cochabamba: Water War in Bolivia*. Cambridge, MA.: South End Press, 2004.
- Postero, Nancy. *The Indigenous State: Race, Politics and Performance in Plurinational Bolivia*. Oakland: University of California Press, 2017.
- Silva, Eduardo y Rossi, Federico M. *Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2018.
- Thorp, Rosemary y Bertram, Geoffrey. *Peru 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy*. Nueva York: Columbia University Press, 1978.
- Wise, Carol. *Reinventando el Estado: estrategia económica y cambio institucional en el Perú*. Lima: Universidad del Pacífico, 2002.
- Wolff, Jonas. «Business Power and the Politics of Neoliberalism: Relations between Governments and Economic Elites in Bolivia and Ecuador». *Latin American Politics and Society*, vol. 58, n.º 2 (2016), p. 124-127.
- Zuazo, Moira. *Cómo nació el MAS: la ruralización de la política en Bolivia*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung, 2008.

Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.

ÍCONOS 68

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

vol. XXIV (3er. cuatrimestre)
No. 68
septiembre-diciembre 2020
Cuatrimestral

DOSSIER

Presentación del dossier
Políticas exteriores y de defensa sudamericanas:
hacia un nuevo regionalismo
Anabella Busso y Samuel Alves-Soares

Ocaso del regionalismo posneoliberal en
Sudamérica: las deudas de la marea rosa en
la conducción política de la Defensa
Emilse Eliana Calderón

Democracia y educación: notas sobre
la enseñanza militar en Argentina y Brasil
Ana Penido, Suzeley Kalil Mathias y Eduardo Mei

Acuerdos Mercosur-Unión Europea desde la
perspectiva de la política exterior Argentina
Alejandro Simonoff

La Defensa como política fiscal durante
el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)
Sergio Gabriel Eissa

La Amazonía en el pensamiento militar brasileño:
concepciones y acciones estratégicas del Ejército
y la Armada en la década de 1990
Dilceu Roberto Pivatto-Junior
y Raul Cavedon-Nunes

TEMAS

La trata de personas en los Andes: dinámicas
socio-espaciales en las fronteras de Perú
Manuel Dammert-Guardia, Lucía Dammert y
Katherine Sarmiento

Buen vivir y agricultura familiar en el Totonacapan
poblano, México
Mauricio Torres-Solis, Benito Ramírez-Valverde, José
Pedro Juárez-Sánchez, Mario Aliphath-Fernández y
Gustavo Ramírez-Valverde

TEMAS

La representación del Sur en la elección del alcalde de
Quito. ¿Déficit de isotropía o escasez de respeto?
Alfredo Santillán

Ciudades contrapeso al centralismo unitarista en
Sudamérica: Santa Cruz, Guayaquil y Concepción
Esteban Valenzuela-Van Treek
y Claudia Vaca

Familia migrante, escuela y comunidad en los Andes
equinocciales: continuidades y cambios en la identidad
cultural
Marta Rodríguez-Cruz

Número anterior:
ICONOS 67: Desaparición de personas en el mundo
globalizado: desafíos desde América Latina

Número siguiente:
ICONOS 69: Estrategias comunitarias frente a conflictos
socio-ambientales: más allá de la resistencia

Íconos. Revista de Ciencias Sociales está incluida en los siguientes índices científicos: *Academic Search Premier*; *Directory of Publishing Opportunities* (CABELL'S); Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC); Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales (CLASE); DIALNET; *Directory of Open Access Journal* (DOAJ); *Emerging Source Citation Index* (ESCI) Web of Science; ERIHPLUS; FLACSO Andes; Fuente Académica Plus; *Hispanic American Periodical Index* (HAPI); *International Bibliography of the Social Science* (IBSS); Informe Académico Thompson Gale; *International Institute of Organized Research* (IZOR); LatAm-Studies, LATINDEX- catálogo; MIAR; *Political Science Complete*; REDALYC; REDIB; Scielo Ecuador; *Sociological Abstracts*; *Social Science Journals. Sociology Collection*; *Ulrich's Periodical Directory*; *Worldwide Political Science Abstracts* (WVPSA).

Página web: www.revistaiconos.ec

Correo electrónico: revistaiconos@flacso.edu.ec



FLACSO
ECUADOR

Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador

Información y colaboraciones: (revistaiconos@flacso.edu.ec)

Revista Íconos: www.revistaiconos.ec

La democracia como estrategia política de la derecha venezolana

Democracy as political strategy of the Venezuelan right

Ybiskay González

Socióloga venezolana, docente en la Universidad de Newcastle (Australia).
Ybiskay.gonzaleztorres@newcastle.edu.au. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4492-2480>

Cómo citar este artículo: González, Ybiskay. «La democracia como estrategia política de la derecha venezolana». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 163-184.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.163

Resumen: Este artículo examina el caso emblemático del uso del discurso de la democracia como un componente clave de las estrategias de formación de identidad de la derecha venezolana. Como parte de su competición por la hegemonía, tras el surgimiento del proyecto político del chavismo, el artículo examina la narrativa de identidad de la oposición en Venezuela a partir de entrevistas realizadas en 2016 a integrantes venezolanos pertenecientes a este espectro político. El caso venezolano revela que el discurso de la democracia no solo facilita la coalición y movilización de individuos sin una supuesta articulación de referentes ideológicos de izquierda o derecha, sino que también ayuda a prevenir cambios del orden social existente.

Palabras clave: Venezuela, oposición, derecha, discurso, democracia

Abstract: This paper examines the emblematic case of the use of the discourse of democracy as a key component of identity formation strategies on the Venezuelan right. The Venezuelan opposition's identity narrative is analysed as part of its competition for hegemony following the emergence of the Chavist political project, based on interviews conducted in 2016 with Venezuelans from this part of the political spectrum. The Venezuelan case reveals that the discourse of democracy not only facilitates the coalition and mobilisation of individuals without necessarily articulating ideological references of left or right, it also helps prevent changes to the existing social order.

Key words: Venezuela, opposition, right wing, discourse, democracy

Durante los últimos 20 años, Venezuela ha vivido una alta polarización política entre los chavistas –simpatizantes del proyecto político instalado por el expresidente Hugo Chávez (1998-2013)– y la oposición, un grupo heterogéneo que nace del rechazo a ese proyecto en el año 2002, cuando masivas manifestaciones demandaron la salida del presidente. Aquel proyecto, inicialmente llamado Proyecto Bolivariano, fue un referente de transformación política con la instalación de un modelo de democracia participativa¹ que más tarde –a finales del año 2005– fue llamado «socialismo del siglo XXI» (Biardeau, 2009). Desde entonces, chavistas y oposición se han enfrentado para controlar el poder del Estado, esgrimiendo una variedad de razones y argumentos por los cuales ellos son parte, o no, de uno de estos dos grupos. Mientras algunas de estas razones pueden ser más explícitas que otras, este artículo presta atención a la justifi-

Este artículo no considera los grupos de derecha como una clase específica (las élites, los empresarios o la Iglesia, etc.), sino que examina los discursos de la derecha como una guía para el análisis.

cación más común de la oposición para ofrecer una nueva perspectiva de cómo se crean coaliciones para contrarrestar transformaciones políticas.

En América Latina, los actores de derecha han sido históricamente liberales o conservadores. Según Bowen (2011), los liberales usualmente promueven la máxima libertad individual, una mínima intervención del Estado en el mercado, un papel reducido de la Iglesia (particularmente en la economía) y un Estado pequeño y eficiente. Los conservadores, por su parte, utilizan el aparato estatal para defender los intereses de las élites terratenientes y empresariales, además de apoyar un papel activo de la Iglesia en la vida social y económica. No obstante, este autor señala que luego de la crisis económica y política de las décadas de 1980 y 1990, nació una «nueva izquierda» internamente diversa y muy diferente de sus predecesoras y «una derecha» multifacética y distinta a los grupos de otras épocas. De ahí que este artículo no considere los grupos de derecha como una clase específica (las élites, los empresarios o la Iglesia, etc.), sino que examina los discursos de la derecha como una guía para el análisis.

De acuerdo con el filósofo italiano Norberto Bobbio (citado en Cannon, 2016), la profunda diferencia entre «izquierda» y «derecha» es la actitud con respecto al ideal de igualdad de los seres humanos. Mientras la izquierda se

1. Este modelo reta al de democracia representativa liberal y busca legitimar el conflicto en vez del consenso que caracterizaba el modelo de democracia de Venezuela antes de la elección de Chávez.

considera principalmente igualitaria y actúa para asegurar que el ideal de igualdad se convierta en la guía de toma de decisiones políticas, la derecha enfatiza la inevitabilidad y necesidad de desigualdad para el funcionamiento de las sociedades. No obstante, esta distinción puede ser borrosa dependiendo del contexto político. Por ejemplo, en el caso venezolano, donde no existía una verdadera oposición bajo el pacto de *Puntofijo*² (Zahler, 2017), la contienda ideológica en las elecciones era casi invisible. Más tarde en la década de 1980, con la aceptación del neoliberalismo como única opción posible de desarrollo, el espectro político se distanció aún más de la izquierda, favoreciendo los valores de mercado de la derecha. Como resultado, la mayoría de la población en Venezuela no se ubicaba en dimensiones ideológicas determinadas (García, 2003). Sin embargo, los altos niveles de pobreza y las demandas de cambio, en especial respecto a la apertura de mayores espacios de participación ciudadana, precipitaron la necesidad de nuevas opciones. Esas demandas ya existían mucho antes de 1999 (López Maya, 2011), pero fue Hugo Chávez quien facilitó la redacción de una nueva Constitución y los ciudadanos pudieron introducir el modelo de democracia participativa en el marco constitucional. En consecuencia, los venezolanos observaron cambios en la comprensión de la política democrática y, con ello, en el proceso de las relaciones patrimoniales con el Estado (Spanakos, 2015).

La oposición surgió en ese contexto, usando el discurso político del «liberalismo constitucional» (García-Guadilla, 2006). El modelo de sujeto democrático de esta tradición se caracteriza por la aceptación de las reglas y los códigos de conducta política constitutivos del liberalismo político, incrustados en la economía de mercado, donde el Estado liberal estabiliza la conducta política (Motta, 2017). Sin embargo, en Venezuela también ha habido sectores que desconfían del liberalismo constitucional, tales como los movimientos de izquierda, que ven en dichas reglas mecanismos para beneficiar el libre mercado y los derechos de las élites (Pearce, 2004). Dichos movimientos, que se oponen al consenso liberal, suelen ser representados como grupos antidemocráticos y rebeldes, como hace Jorge Castañeda (2006: 29) en su descripción de la izquierda en América Latina. Según este autor, hay dos izquierdas: una izquierda «moderna, de mente

-
2. El Pacto de *Puntofijo* fue un acuerdo firmado en octubre de 1958 entre tres partidos políticos para garantizar la gobernabilidad del país después de la dictadura. Con el declive del partido Unión Republicana Democrática (URD), los dos partidos restantes (Acción Democrática [AD] y Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI]) se alternaban el Poder Ejecutivo sin ofrecer políticas públicas que significaran una alternativa diferente para el electorado.

abierta, reformista e internacionalista», y una «izquierda de núcleo duro» que es populista, nacionalista, estridente y cerrada. En este discurso, cualquier intento de democracia participativa fuera de las instituciones liberales produce clientelismo, personalismo y privación de derechos, con lo cual un trabajo activo de transformación política parece ser rechazado de antemano, favoreciendo así el statu quo (Motta, 2009: 32).

La oposición en Venezuela nació compartiendo esta interpretación justificativa de la inevitabilidad de un liberalismo político y de negación de la izquierda de núcleo duro. De ahí que el movimiento de la oposición naciera sin contradecir los intereses empresariales o de las élites y que, para aquel entonces, sus demandas de destitución del presidente estuvieran principalmente basadas en su percepción de amenaza a la democracia (González, 2020).

El discurso de la defensa de la democracia merece una mayor atención, aun cuando este discurso no pareciera tener un referente ideológico. La democracia es un significativo vacío por su multiplicidad de interpretaciones, pero mediante los discursos se pueden observar modelos políticos y sociales.

Según Hirsch-Hoefler y Mudde (2013), los movimientos de derecha reproducen como sentido común una percepción de amenaza y, aunque son variados, comparten el objetivo de preservar y expandir los derechos y privilegios de sus miembros. No obstante, dado el largo proceso de interacción entre el Gobierno y la oposición durante

las dos primeras décadas del nuevo milenio, así como la actual crisis existente en Venezuela, grupos de izquierda que anteriormente apoyaban el proyecto político del Gobierno –como Marea Socialista y movimientos sociales ambientalistas– se han unido a la oposición, rechazando el actual Gobierno de Nicolás Maduro, sucesor del de Chávez. Sin embargo –tal como enfatiza uno de los líderes de Marea Socialista en una entrevista–, su opción busca ser una oposición desde la izquierda, que rechaza el Gobierno de Maduro y desea salir de la polarización, por lo que no quiere que Marea Socialista sea homogenizada con la oposición de la derecha que siempre ha rechazado el chavismo. Ello no solo demuestra las complejidades de la polarización en Venezuela, sino que cuestiona la representación dominante de la oposición como aquella que rechaza al chavismo. Por eso, el discurso de la defensa de la democracia merece una mayor atención, aun cuando este discurso no pareciera tener un referente ideológico. Tal como lo explica Solomon (2015), la democracia es un significativo vacío por su multiplicidad de interpretaciones, pero mediante los discursos se pueden observar modelos políticos y sociales.

Debido a que la oposición en Venezuela es un movimiento que se moviliza sin un liderazgo específico –si bien tiene una relación compleja con partidos

políticos—, las relaciones entre los distintos actores van más allá de considerar las ideologías políticas como una estructura previamente compartida. Los movimientos que la conforman actúan en un contexto donde los actores no son estáticos o pasivos, por lo que es necesario un análisis que observe otras dimensiones del juego político, en especial la dimensión discursiva y de identidad mediante la cual los grupos avanzan en sus objetivos. Por este motivo, aquí parece útil la visión posestructuralista del poder, que reconoce tanto el carácter productivo del poder como las diferencias en la construcción de la identidad (Foucault, 1991). De esta perspectiva se desprende que, cuando se habla de movimientos, los límites de interioridad/exterioridad son efectos de relaciones de poder y, a su vez, una posibilidad de afectar el juego político (Laclau, 1996). Por eso, bajo esta perspectiva, el éxito de un proyecto político depende no solo de la comprensión de los objetivos compartidos por sus miembros, sino también de ver la formación de la identidad como un proceso y no como una condición estática preexistente (Flores-Macias, 2012). Los individuos pueden actuar sobre sí mismos para convertirse en agentes activos bajo ciertas condiciones, en las que se incluyen los discursos disponibles en ese proceso (Laclau, 1996). De ahí que los individuos usen y promuevan los discursos que valoran como verdaderos o legítimos, y los movimientos definan qué es y qué no es central para ellos. Por lo tanto, es en sus narrativas donde podremos observar su actitud hacia la igualdad y las posibilidades de transformación política, es decir, sus valores ideológicos.

Siguiendo este marco analítico, este artículo explora las narrativas de la identidad de la oposición venezolana, lo cual nos permitirá observar el límite de interioridad/exterioridad del movimiento. Como estas narrativas (re) definen las fronteras entre el «yo» y «el otro» (Yuval-Davis, 2010), también podremos percibir el «deseo» o «el por qué» las personas dicen con tanta pasión que son miembros de este movimiento. A través de este análisis, se podrá observar cómo el poder moldea las formas a través de las cuales se justifica el discurso de «nosotros/ellos», y así a hacer visible la complejidad de las subjetividades políticas. Para llevar a cabo este ejercicio, el artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se ofrece una breve reseña de la oposición; en segundo lugar, se explica el marco analítico basado en las dimensiones de poder/sujeto de Foucault (2000a) y la metodología usada para examinar cómo los miembros de la oposición se identifican a sí mismos; en tercer lugar, se presentan los resultados del análisis bajo los títulos que emergen del marco analítico; y, finalmente, se concluye argumentando que la invocación a la democracia es articulada con una subjetividad de ciudadanos, lo cual ayuda a la oposición a convertirse en sujeto activo de denuncia al chavismo, a la vez que oculta su carácter de derecha.

La oposición venezolana como estudio de caso

De acuerdo con Cannon (2014), la oposición en Venezuela ha pasado por diferente etapas. Sus inicios corresponden al ciclo de protestas en contra del expresidente Hugo Chávez en 2001, un año después de la aprobación de la Ley Habilitante por la Asamblea Nacional³. Esta ley le había dado al presidente Chávez un año para legislar un conjunto de decretos para institucionalizar las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, después de la aprobación de la Constitución en diciembre de 1999. Así, en noviembre de 2001, un grupo de empresarios y actores sociales rechazaron algunos de los 49 decretos firmados por el presidente como parte de esa ley. En concreto, fueron dos los decretos que atrajeron la mayor atención de estos grupos: la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola, medidas ambas que afectaban importantes intereses económicos dentro de Venezuela, lo que generó el primer choque abierto entre el Gobierno y la oposición. Dichas controversias contribuyeron a la creación de una imagen fuerte respecto a las prácticas autoritarias gubernamentales y a hacer visibles los actores involucrados en la oposición: la Iglesia católica, la Federación de Cámaras y Asociación de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Ello muestra cómo los grupos de poder tradicionales en el país no habían podido influir en el proceso de diseño de dichas políticas públicas, tal como habían estado acostumbrados a hacerlo en el pasado.

La primera gran protesta antigubernamental tuvo lugar el 23 de enero de 2002, fecha simbólica conmemorativa de la fundación de la democracia tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Sin embargo, fue el paro nacional contra el Gobierno, el 9 de abril de 2002, el evento más emblemático del conflicto político. El suceso se desencadenó por el despido de algunos altos cargos de la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). La empresa, por su parte, facilitó la creación de la asociación civil Gente del Petróleo, se unió a la marcha antigubernamental y exigió respeto por la «meritocracia» y la autonomía de la industria petrolera. Paralelamente, seguidores de Chávez organizaron una contramanifestación en apoyo al presidente. Finalmente, los dos grupos se encontraron y ello dio como resultado la muerte de 17 personas y cientos de heridos. Ante estos hechos, los medios de comunicación culparon a los seguidores de Chávez y al Gobierno. Dos días después, en la tarde del 11 de abril de 2002, un grupo de generales pidió al presidente Chávez que

3. Ley Habilitante, publicada en *Gaceta Oficial* n.º 37.076 (13 de noviembre de 2000).

renunciara y, al día siguiente, Pedro Carmona, presidente de FEDECÁMARAS, anunció que estaba formando un nuevo Gobierno con «el consenso de la sociedad civil y el Ejército» (citado en Encarnación, 2002: 43). Tras este intento de golpe de Estado, siguieron dos paros nacionales más y un referéndum revocatorio al presidente en el año 2004, el cual no tuvo los resultados esperados por parte de la oposición. Resultaba claro que la cara de la oposición no era la de los partidos políticos, sino la de otros actores sociales, que utilizaron principalmente los medios de comunicación privados (Domínguez, 2011).

Aunque, en esta primera etapa, la oposición recurrió a los medios de comunicación para convocar y organizar a aquellos que se sentían atraídos por su discurso sobre la amenaza a la democracia, más tarde nacería la Coordinadora Democrática (CD), un grupo de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos (Gómez-Calcaño, 2009) sin ninguna estrategia política clara más allá de sacar a Chávez del Gobierno. No obstante, después de la derrota de la coalición de partidos de la oposición en las elecciones presidenciales de 2006, nueve partidos de la oposición firmaron el Acuerdo de Unidad Nacional el 23 de enero de 2008, antecesor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). De ahí que Cannon (2014) identifique la firma de este acuerdo como el inicio de una segunda etapa, que da paso a la fase de incorporación de partidos políticos. La principal diferencia entre la CD y la MUD era la visión electoralista de la segunda, en contraste con la inmediatez que el sector empresarial y los medios de comunicación buscaban dentro del CD (ibídem). Con la MUD, se adoptó un sistema unificado de candidatos, con el propósito de unir fuerzas, que condujo a importantes resultados: elecciones primarias para elegir candidatos presidenciales; un discurso unificado, expresado especialmente en el documento «Directrices para el Programa del Gobierno de Unidad Nacional 2013-2019» (MUD, 2012); y la victoria electoral en las elecciones de representantes a la Asamblea Nacional en 2015. Sin embargo, fueron los resultados de las elecciones presidenciales de 2013 –luego de la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 y con Nicolás Maduro como ganador de la Presidencia– lo que propició el retorno de la prominencia de las estrategias extrainstitucionales, un patrón que ha continuado hasta el presente (Cannon y Brown, 2017). En dichas elecciones, Henrique Capriles Radonsky⁴ y la MUD impugnaron los resultados (una victoria de

4. Henrique Capriles Radonsky es un abogado que a la edad de 26 años (1998) ya era diputado por el partido COPEI y durante la era de Chávez fue alcalde y gobernador del segundo estado más poblado de Venezuela por el partido Primero Justicia. Después de la muerte de Hugo Chávez fue el candidato presidencial por la oposición, perdiendo por pocos votos frente a Nicolás Maduro.

apenas el 1,5%) y la oposición, como movimiento, fue nuevamente activada a través de protestas que fueron llamadas «La Salida». Aunque otros miembros de la oposición vinculados a la MUD no se unieron a estas protestas –evidenciando fuertes divisiones en el seno de la oposición– La Salida desembocó en una cadena de violentas protestas lideradas por Leopoldo López⁵, quien acabó siendo encarcelado el 18 de febrero de 2014.

Una nueva movilización comenzó en 2017 con el arresto de varios políticos de la oposición, con cargos de terrorismo, entre el 11 y 12 de enero (Buxton, 2018). Sin embargo, fue en abril de ese mismo año, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intentara disolver la Asamblea Nacional el 29 de marzo, cuando las protestas llegaron a su máximo punto debido a que el TSJ declaró traidores a los diputados de la oposición por haber solicitado la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de que esa decisión fue revocada un par de días después, las protestas en rechazo del Gobierno de Maduro fueron diarias y masivas en Caracas y otras ciudades importantes del país, extendiéndose hasta agosto de 2017, mientras fuerzas de seguridad las reprimían con violencia. Además, el 7 de abril, el TSJ prohibió a Capriles Radonsky postularse para cualquier cargo político por un período de 15 años. La frustración de no poder hacer oposición política usando canales institucionales venía desde 2016, cuando un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro no fue posible y dos diputados de la oposición no fueron reconocidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), eliminando la posibilidad de una mayoría absoluta opositora, mientras la crisis económica se agudizaba incrementando el descontento de la mayoría de los venezolanos. La severa crisis económica en Venezuela –expresada en el colapso de la moneda nacional, bajos precios del barril del petróleo, una hiperinflación del 2.616% para fines de 2017 (Reuters, 2018, citado en Buxton, 2018) y un embargo de Estados Unidos que redujo el nivel ya menguado de productos importados– contribuyó a un éxodo de más de tres millones de venezolanos entre 2014 y noviembre de 2019 (Naciones Unidas, 2019).

En este contexto de baja popularidad del Gobierno, la MUD también sufrió fuertes divisiones internas motivadas, a grandes rasgos, por la estrategia para remover a Maduro del Gobierno (Buxton, 2018). Por un lado, grupos más moderados –en torno a los partidos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD),

5. Leopoldo López es un economista que fundó el partido Voluntad Popular, luego de separarse del partido Primero Justicia. En el 2019 fue liberado de su arresto domiciliario por Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y diputado por el partido Voluntad Popular.

Avanzada Progresista (AP) y Un Nuevo Tiempo (UNT)– veían las elecciones como un mecanismo de cambio político. Por otro lado, grupos más intransigentes –como Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López, Vente Venezuela (VV) de María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo (ABP) de Antonio Ledezma– abogaban por las protestas y la abstención electoral (Velasco, 2018). Estas divisiones socavaron las bases de la MUD dejando la oposición más débil y dependiente del apoyo internacional.

En 2019, el apoyo internacional de Estados Unidos fue públicamente declarado a un nuevo líder, Juan Guaidó, un político del partido VP que se había convertido en diputado parlamentario del estado de Vargas en 2016 y luego, tras un acuerdo entre los partidos de la oposición en la Asamblea Nacional, fue nombrado presidente de ese órgano el 5 de enero de 2019. Más tarde, el 15 de enero, Guaidó se declaró, en una plaza pública, presidente interino de Venezuela al invocar los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana. Como resultado, Venezuela tiene en la actualidad un presidente interino, el propio Guaidó, y otro presidente, Nicolás Maduro, quien ganó unas elecciones no reconocidas internacionalmente en mayo de 2018 y había iniciado un nuevo período presidencial desde enero de 2019.

En resumen, aunque las diversas acciones de la oposición desde enero de 2002 hasta el presente han sido variadas, esta ha logrado (re)crearse y mantenerse con su principal propósito: expulsar el chavismo del poder del Estado. A través de un análisis del discurso, veremos las estrategias que la oposición ha usado para expandir su coalición.

Aunque las diversas acciones de la oposición desde enero de 2002 hasta el presente han sido variadas, esta ha logrado (re)crearse y mantenerse con su principal propósito: expulsar el chavismo del poder del Estado.

Marco teórico del análisis del discurso

Siguiendo una comprensión posestructuralista de la política como un espacio limitado, finito y táctico de maniobra (Wenman, 2017: 6), el análisis que aquí se presenta considera la subjetividad como parte del entramado de relaciones de poder en el cual los individuos están invitados a actuar para movilizar, aceptar o rechazar proyectos políticos. Dentro de los enfoques posestructuralistas, el concepto de «gubernamentalidad» de Foucault (1991 y 2007) parece apropiado para el estudio de la narrativa de identidad, porque permite identificar cómo algunos discursos son efectivos para (re)crear una identidad política. Por

«gubernamentalidad» Foucault entiende una mentalidad/lógica de «conducir la conducta», una racionalidad estratégica donde ciertos individuos o grupos intentan conducir la conducta de otros individuos o grupos apelando a técnicas y procedimientos que varían a lo largo del tiempo y según el contexto (Dean, 2010). Particularmente, se presta atención a las tecnologías de poder disciplinario, incluyendo tecnologías del yo: sujeción y subjetivación (Foucault, 2005).

En primer lugar, cabe subrayar que, para Foucault, la tecnología es «un conjunto múltiple de estrategias a través de las cuales los humanos devienen sujetos» (Castro Gómez, 2010: 36). En segundo lugar, en este enfoque los discursos no son objetivos o neutrales, sino que enfatizan la racionalidad interna de formas de pensar, hablar y actuar en un contexto específico. Al mismo tiempo, las prácticas establecidas en y a través de esas relaciones contingentes son las que distribuyen los valores y las respuestas a dilemas de temas específicos en un momento y lugar dado. Si los discursos distribuyen un sistema de valores, ellos regulan lo que es considerado como legítimo e ilegítimo, bajo el influjo del saber/poder o regímenes de verdad. Por otro lado, los discursos también proveen un sistema clasificatorio de las personas y, bajo un régimen de verdad, fijan criterios de inclusión y de exclusión, otorgan al individuo un puesto, el cual afecta su relación con otros y su enfoque sobre sí mismo, al fijar márgenes de acción y decisión. Foucault (2000c) llama a este proceso «sujeción». Sin embargo, como los individuos (en libertad) todavía pueden rechazar tales posiciones con mayor o menor poder, Foucault señala que existe otro proceso en el cual las personas desean ser sujetos, como un acto voluntario al cual este autor llama «subjetivación». De esta manera, se entiende que los individuos se convierten en sujetos constituidos/constituyentes, en un campo de afectación mutua en el cual los discursos y el poder interactúan.

Foucault (2000a) distingue cuatro dimensiones para explicar cómo y desde dónde el sujeto se explica, se piensa, se dice y desea ser. La primera dimensión es la «sustancia ética», que puede entenderse como «la parte de nosotros mismos o de nuestro comportamiento que es relevante para el juicio ético» (Foucault, 2000a: 263). Según Dean (2010: 26), se refiere a «aquello sobre lo que buscamos actuar»; por ejemplo, la carne en el cristianismo. Para el propósito de este artículo, significa identificar los atributos, disposiciones y comportamientos que los miembros de la oposición buscan desarrollar. La segunda dimensión es el «modo de subjetivación», que se refiere a la forma en que «las personas son invitadas o incitadas a reconocer sus obligaciones» (Foucault, 2000a: 264), o el proceso de «subjetivación». Como sugiere Dean (2010: 26), Foucault se refiere a cómo gobernamos la sustancia ética, lo cual puede incluir ejercicio espiritual, procedimientos de vigilancia y normalización. Para el caso de la oposición, esto significa identificar las prácticas que guían sus actividades

como movimiento. La tercera dimensión consiste en las tecnologías del yo o los medios por los cuales podemos cambiarnos para convertirnos en sujetos éticos (Foucault, 2000b). Se trata de quiénes somos cuando seguimos el modo de subjetivación. De acuerdo con Dean (2010: 42), esto significa preguntar qué vocabularios son usados. Por ejemplo, qué vocabularios usa la oposición para representarse significativamente a sí misma, y los vocabularios y tácticas que limitan lo que es posible. Finalmente, la cuarta dimensión es el *telos*, que se refiere a «los fines u objetivos buscados, en qué esperamos convertirnos o en el mundo que esperamos crear» (ibídem: 27). Esto podría ser la salvación, vivir una vida bella y noble, o ser un buen ciudadano. Para este análisis, se corresponde con la identificación del «tipo de sujeto» (Foucault, 2000a) en que los miembros de la oposición aspiran a convertirse.

Al prestar especial atención a los vocabularios y formaciones discursivas utilizadas por miembros de la oposición, se puede observar no solo cómo esta da coherencia a las razones que la llevan a la acción colectiva, sino también cómo se construye su identidad. Esta narrativa es una práctica valiosa para entender cómo la derecha se ha comprometido con un proyecto de formación de identidad con el fin de promover sus proyectos políticos (Eaton, 2014: 87).

Consideraciones metodológicas

Los grupos necesitan ampliar sus bases para obtener apoyo a sus proyectos políticos. No obstante, como se ha explicado, ha sido difícil para la oposición llegar a un consenso absoluto y mantener su unidad. En este artículo, por consideraciones de tiempo, se pone más atención a los consensos que a los disensos; en especial se observan los discursos que han creado los referentes para dar significados no solo al contexto político, sino también a ellos mismos. Por eso se identifican los vocabularios y las formaciones discursivas utilizadas por miembros de la oposición en entrevistas realizadas entre mayo y julio de 2016, así como en artículos de opinión publicados por los mismos entrevistados en prensa nacional impresa o digital. Los entrevistados fueron seleccionados luego de recopilar una muestra de artículos publicados en prensa nacional utilizando los criterios de búsqueda del término «democracia» en sus títulos y alguna referencia explícita de oposición al Gobierno. La recolección de la muestra también consideró diferentes períodos históricos marcados por eventos de alta conflictividad, por ejemplo, los comprendidos en 2001-2002, 2007, 2014 y 2016. Diferentes individuos fueron invitados a participar en el estudio de investigación, pero no todos respondieron y algunos de ellos estaban fuera de Venezuela para ese entonces.

El número de entrevistas fue significativo: un total de 16 entrevistas semiestructuradas. El criterio de saturación se alcanzó frente a los hallazgos encontrados en las entrevistas, en los cuales se repetían discursos similares a los localizados en los artículos de opinión. Entre los entrevistados hay profesores universitarios, gerentes de organizaciones de la sociedad civil y profesionales que trabajaban en la elaboración de los documentos oficiales de la oposición. Esta muestra es representativa del movimiento no solo por su visibilidad en los medios de comunicación nacional, sino también por representar lo que Middlebrook (citado en Bowen, 2011) señala como «los nuevos actores de la derecha»: académicos que justifican algunas políticas públicas y rechazan otras en un contexto donde los partidos políticos han perdido legitimidad. Una vez realizadas las entrevistas, la fase de codificación incluyó la observación de las cuatro dimensiones de *gubernamentalidad* de Foucault: la sustancia ética, modo de subjetivación, tecnologías del yo y el *telos*, tal como se presenta en la siguiente sección.

La narrativa de identidad de la oposición venezolana

Sustancia ética de la oposición: democráticos

Con base en la dimensión de sustancia ética de Foucault, se identificaron las formas en que los miembros de la oposición problematizaban actitudes y comportamientos que consideraban como antidemocráticos. Desde el inicio del conflicto, miembros de la oposición buscaron actuar sobre el significado de «lo que es ser democrático» en medios de comunicación para así clasificar al Gobierno como antidemocrático. Por ejemplo, Marta Colomina (2001), una prominente personalidad de la oposición, expresó en el periódico *El Universal*: «Chávez no participa: o lo obedeces ciegamente o eres su enemigo». Desde la oposición, Chávez había usado el término «participación» engañosamente, debido a la poca influencia que los anteriores grupos tradicionales tuvieron en la toma de decisiones de las políticas públicas. Como Marino —un profesor universitario asesor en políticas públicas— explicó en su entrevista: «Yo soy uno de los pocos expertos en materia de salud del país y a mí nunca el Ministerio de Salud me han llamado para hablar de este tema».

En Venezuela, las redes y alianzas entre el poder económico tradicional y la clase media dieron paso a lo que Rey (2003) llama un «modelo semicorporativo» para tomar decisiones públicas. Este modelo permitió a unos pocos acceder a la toma de decisiones del Gobierno limitando las posibilidades de cualquier agen-

da popular. Por lo tanto, no solo se afianzaron relaciones patrimoniales dentro del Estado venezolano, sino que también estas formas se legitimaron como políticas democráticas, aun cuando ellas excluyen a la mayoría de los venezolanos. Tal fue la legitimación de este tipo de prácticas que estas no fueron percibidas como políticas. Según se desprende de las entrevistas, un Gobierno exige «directrices claras, no politización», pero el Gobierno de Chávez consistía en «una facción política» que busca sus propios intereses «en detrimento del resto de la nación». Por ejemplo, Urbaneja (2001) escribió en *El Universal* que «lo que define a una sociedad democrática es su capacidad para discutirlo todo, no someter a la sociedad a la invocación del pensamiento de un hombre». En ese mismo artículo, la principal preocupación de Urbaneja no era cómo hacer posible el diálogo, sino «el problema del Bolivarianismo», que resumió de la siguiente manera: «Venezuela se convierte en un país con su Biblia, su Corán, su Torá o su evangelio particular: el Bolivarianismo» (ibídem). Según esta lógica, ser democrático corresponde a no tener una facción política, la cual es representada como una atrocidad exclusiva del presidente Chávez. La representación de lo democrático sin referente ideológico es evidente en la mayoría de las entrevistas, como veremos en la sección sobre las tecnologías del yo.

Según la lógica de las narrativas de la identidad de la oposición venezolana, ser democrático corresponde a no tener una facción política, la cual es representada como una atrocidad exclusiva del presidente Chávez.

Lo que parece emblemático de esta representación democrática es la participación de grupos de interés legitimados para influenciar en la toma de decisiones, así como el rechazo a la politización, lo cual deslegitima las luchas de grupos populares que buscan reactivar lo político (Motta, 2014). Esto resuena con argumentos académicos que identifican los movimientos sociales con una tendencia a «culturalizar» la desventaja social y «patologizar» sus luchas como irracionales (Jasper, 2011). De ahí que los miembros de la oposición se autoidentifiquen como civilizados y racionales, y que su actitud ante el ideal de igualdad reproduzca la división barbarie y civilización.

Modo de subjetivación: civilizados

El llamado a ser democráticos implica para la oposición actuar cívica o decentemente. En 2016, el abogado y político Ramos Allup (2016), como presidente de la nueva Asamblea Nacional, expresó en esta línea: «En los próximos días vendrá el presidente de la República a rendir su mensaje anual, a presentar la memoria y cuenta de su gestión, y lo recibiremos con dignidad y respeto porque

es nuestra condición cívica, no por rendirle culto a nadie sino porque esa es nuestra condición cívica. Nosotros no chiflamos, no pitamos, tenemos un riguroso respeto por la urbanidad, la personal y cívica».

La oposición, así, solo requiere de un «espíritu civil» para actuar y no de ideologías políticas. La oposición ofrece un espacio no solo para rechazar al Gobierno, sino también para actuar como sujetos civilizados. Esta clasificación convierte a la oposición en una autoridad moral que por sí sola es capaz de dar dirección política, separada de ideologías políticas e incluso de las restricciones institucionales, como lo demostró el intento de golpe de Estado en abril de 2002 (Buxton, 2005). En la entrevista con Yorelis, por ejemplo, esta profesora universitaria expresó que el Gobierno es ilegítimo, debido al abuso de poder y el uso de palabras grotescas o incivilizadas. Durante la entrevista, dijo que la forma en que el Gobierno representa a la oposición rompe la coexistencia imaginada de los ciudadanos, así como viola los derechos políticos y civiles de los venezolanos. Así lo argumentó: «La oposición responde a la amenaza del chavismo, pero no tiene el aparato del Estado. El Gobierno cerró *RCTV* y *Globovisión* [canales de televisión] y cambió la línea editorial de periódicos como *El Universal*, *Últimas Noticias*. También cerró 37 estaciones de radio hace dos años. La oposición, sí, usa el discurso de nosotros/ellos, pero Capriles no usa malas palabras grotescamente como lo hace el chavismo». Yorelis también se describe a sí misma como ciudadana: «Por lo general, voto, pero nunca he sido políticamente activa ... Soy miembro del grupo de la universidad, soy profesora en la universidad e investigadora, pero si me preguntas como ciudadana, no soy ni chavista ni *nini*»⁶.

Ser *ciudadanos* le da a la oposición una forma de subjetivación, una respuesta aceptable a lo que conforma su identidad como sujetos políticos cuando rechazan el Gobierno. Dado que la subjetividad de «ciudadano» tiene raíces coloniales en el contexto venezolano, la identificación de ser «ciudadano» y oposición ratifica la importancia de ser más inteligible para sí mismo. En otras palabras, identificarse como ciudadano invita a actuar para rechazar el Gobierno y a quienes lo apoyan. Por lo tanto, la oposición actúa como un agente civilizador, lo cual les otorga a sus miembros una jerarquía social que los justifica. Tal narrativa es clara cuando la oposición apela a su condición de ciudadano sin reconocer la misma condición a los sujetos chavistas. En este sentido, su actitud ante la desigualdad les otorga el privilegio de ser los diseñadores del modelo de sociedad para todos los venezolanos.

6. En el contexto venezolano un *nini* es alguien que no apoya ni al Gobierno ni a la oposición.

Visto a través de la lente de la ética según Foucault, el éxito de ser opositor y ciudadano se convierte en el principal modo ético de subjetivación que los venezolanos deberían adoptar para tener de vuelta la democracia. Mientras ser ciudadano es defender la democracia, el guion y la escena están dados para oscurecer orientaciones políticas que no correspondan con el modelo liberal. Es decir, la ideología de los grupos que solían influenciar las políticas públicas se hace invisible cuando se normaliza a esos grupos como legítimos para ese actuar. Como consecuencia, en vez de promover una pluralidad de perspectivas y reconocer las luchas de igualdad, la autorrepresentación como sujetos morales/civilizados y racionales les favorece.

Tecnologías del yo: ciudadanos activos

Los miembros de la oposición actúan sobre ellos mismos para presentarse como ciudadanos que defienden la democracia, aunque dicen que no se identifican con una ideología de derecha. Por ejemplo, Yorelis se ve a sí misma teniendo un papel como ciudadana, pero claramente dice que no es miembro de un partido político. Ella ofrece una visión sobre el papel que como ciudadana y miembro de la oposición tiene: «He tratado de trabajar en base a teorías y hechos, mis tareas son de una académica, y no es el lugar de un estudiante de doctorado o un pelele [un don nadie] entender lo que está sucediendo. Esta es la razón por la que tengo mucho trabajo, en radio, publicando en medios digitales». Como académica, este testimonio demuestra que ella se representa a sí misma como productora de conocimiento científico y como sujeto/agente en la creación del movimiento de oposición. Ella se presenta como un sujeto de razón y, por lo tanto, con la capacidad de hablar, un interlocutor legítimo. También se representa a sí misma con el firme compromiso de denunciar y sacar el chavismo del Gobierno.

Las reflexiones de Yorelis son similares a las de otros entrevistados, como el de Miguel, quien publica en la prensa digital y también es profesor universitario. Él describe su identificación con la oposición en términos de «rechazo»: «Estoy del lado de la oposición, pero no soy miembro de ningún grupo político de la oposición, estoy con el término original de la oposición, lo que significa que no estoy de acuerdo con el Gobierno actual, con lo que hacen, o con el Gobierno de Hugo Chávez». Miguel explica su identificación con la oposición como una que es «original», en tanto que rechaza al Gobierno, aunque no tiene una identificación política con ningún partido político. Igualmente, Luis, colaborador habitual en la prensa nacional con artículos de opinión, afirma en su entrevista: «Lo que busco es un cambio, un cambio en el modelo político y económico del intervencionismo estatal, que, en mi opinión, es responsable de la crisis más severa del país durante muchos años. Ahora, no estoy

vinculado a ningún partido político, o líder de la oposición, no estoy interesado en ninguno de ellos».

Dado que la identificación como opositor no está intrínseca o necesariamente vinculada a los partidos políticos, es la defensa de la democracia el discurso que invita al ciudadano a actuar. Por ejemplo, Juan, investigador de una universidad en Caracas, dijo: «Me identifico con la oposición, no con lo que ofrece la oposición porque ellos tienen diferentes propuestas, sino con lo que representan: un rechazo al Gobierno». Del mismo modo, Sócrates, personal técnico de la oposición en la Asamblea, manifestó que le gustaría que existiera un tercer grupo político, en el que «pueda expresar libremente una opinión, pero sin tener una empatía política definida», y continuó: «sin embargo, obviamente tengo empatía con la Mesa de la Unidad Democrática [MUD], la opción democrática en Venezuela (...) Estoy de acuerdo con las políticas que tienen porque son similares a lo que creo que podría ser bueno para el futuro de Venezuela». Observamos cómo los entrevistados muestran su desinterés o no identificación con los partidos políticos, por lo que su participación como opositores está marcada por un sentido moral visible en expresiones tales como: «protestamos por nuestra propia voluntad, a mí nadie me pagó», «ellos no se dan cuenta de que están haciendo lo contrario a lo que los gobiernos deben hacer». Otros comentarios de la oposición son usados para descalificar a los seguidores de Chávez, quienes eran remunerados por marchar o, actualmente, reciben una caja de comida del Gobierno de Maduro.

En resumen, ser ciudadano para la oposición es estar libre de ideologías políticas, actuar independientemente sin manipulaciones políticas y rechazar lo errado o equivocado del otro. Tal interpretación de ciudadano sin referentes políticos es consistente con una actitud ante la desigualdad de los seres humanos por la que esta se considera inevitable, mientras que la actuación para rechazar al Gobierno es justificada para preservar el diseño social que les confiere privilegios. Dicho diseño social está basado en la idea de que, aunque los individuos valoran ciertas ideas, todos valoran el liberalismo político y la economía de mercado como mecanismo de redistribución de la riqueza, lo cual los lleva a hacer poco para contrarrestar la desigualdad.

Telos: la democracia como modernización

El llamado a los venezolanos a defender la democracia, actuando como ciudadanos, está relacionado con lo que Mignolo (2012) llama «diseños globales» que explican la estructura misma del mundo moderno y su apoyo a la misión civilizadora. Se trata de un esfuerzo por identificarse con categorías universales

sin una reflexión de las historias locales. Por ejemplo, en un texto publicado en *Prodavinci*, Martínez (2016: pár. 15) afirma: «tales son las luchas [contra el Gobierno] que damos cuando nuestra vida y libertad se encuentran en juego, cuando alargar nuestra sumisión no es un gesto de caridad o buena voluntad, sino una incongruencia inútil que prolonga la tiranía y ofende la más elemental dignidad y amor propio». Esta cita demuestra cómo la aspiración de la oposición está asociada con alcanzar una causa global/universal, un *telos* que nos dice a todos cómo sentir sin consideraciones de raza, género, etnia o clase social. El lenguaje de lo esperado, que abarca la vida y la libertad, así como la dignidad y el amor propio, crea en el individuo opositor una obligación moral que refuerza su compromiso contra el Gobierno chavista. Esto último significa que los miembros de la oposición no están exceptos de discursos cargados de afecto.

Para la oposición, perder la democracia significa perder la posibilidad de una sociedad próspera, en tanto que la democracia representa un prerrequisito para promover la modernización del país (Coronil, 1994: 652). Y lo contrario es el Gobierno chavista. Por ejemplo, en el año 2001, en un artículo de opinión, Jaimes (2001, pár. 1) dice: «Basta ya. Basta ya de abusos de autoridad, de voluntarismo, de arbitrariedades. Basta ya de insultos, descalificaciones y burlas. Basta ya de exacerbar odios, de dividir a los venezolanos... El país está despierto, unido en acción cívica, y no permitirá que este Gobierno lo siga llevando por los caminos del atraso, la confrontación y el subdesarrollo». Esta cita demuestra cómo la oposición, con términos como «atraso», «confrontación» y «subdesarrollo», ejemplifica su rechazo al chavismo mientras busca lo opuesto: modernidad, consenso y progreso. Teniendo en cuenta estos afectos y razones, se puede decir que el deseo de la oposición de un «futuro moderno, civilizado, democrático» ayudó a desarrollar su sujeción contra el chavismo. Deseando proteger el discurso liberal que los reconoce y los capacita dentro de un orden simbólico, la subjetividad de la oposición es creada y recreada por discursos globales a su disposición. Su *telos* representa la función general de la estructura afectiva histórico-temporal de la clase media venezolana, en la cual un país democrático, moderno y desarrollado es amenazado por la politización, la incivilidad y el atraso.

En resumen, el deseo de actuar como ciudadano y de tener democracia se utiliza como base para ser opositor. Los atributos para la disposición de actuar sobre sí mismo a partir de esas aspiraciones pueden ser agrupados en tres tipos: disposiciones que se relacionan con la orientación futura («buen futuro para Venezuela» o «las luchas que damos»); autopercepción (como «nuestra condición cívica» o «unido en acción cívica»); y atributos antagónicos expresados no solo en el lenguaje, sino también en la práctica o persistencia de mantener un rol activo en la denuncia del Gobierno (como «tengo mucho trabajo»).

Conclusión

Este artículo se ha propuesto explorar las narrativas de identidad de los miembros de la oposición venezolana para explicar cómo este movimiento ha logrado avanzar contra el Gobierno del expresidente Chávez, primero, y mantenerse hasta hoy. Pese a que este artículo no tiene el tiempo y espacio para desarrollar los fracasos del chavismo, los cuales indudablemente han afectado a la oposición, ha demostrado cómo el discurso de la democracia facilita la coalición y movilización de individuos.

Basándose en un análisis del discurso guiado por el concepto de «gubernamentalidad» de Foucault (1991 y 2007), se demuestra que una subjetividad centrada en la idea de ciudadano, sin identificación partidaria, y el discurso de democracia

Una subjetividad centrada en la idea de ciudadano, sin identificación partidaria, y el discurso de democracia son usados como razones para ser opositor en Venezuela, lo cual muestra que no es necesario utilizar referentes ideológicos de la derecha —como propiedad privada y promoción del crecimiento económico— para atraer seguidores.

son usados como razones para ser opositor, lo cual muestra que no es necesario utilizar referentes ideológicos de la derecha —como propiedad privada y promoción del crecimiento económico— para atraer seguidores. Más aún, cuando emergen nuevos discursos de democracia y surgen otros actores para romper con modelos que favorecen a las élites, la invocación de la subjetividad ciudadana

ayuda a la movilización en contra de procesos de transformación. Las formas de ser ciudadano en estas condiciones amenazantes han sido simplemente antagonizar el chavismo, en vez de vías para buscar el diálogo y reconocer al otro como sujeto político. Esto contribuye a hacer visible la complejidad de las subjetividades políticas y cómo estas son articuladas a partir de viejos discursos como parte de nuevas formas de resistencia. La democracia como discurso del siglo xx sirve para desviar la atención de las orientaciones políticas y socioeconómicas que reproducen la alta desigualdad en América Latina. Defender la «democracia» mientras se clasifica al otro como antidemocrático, populista o no liberal no ayuda a avanzar el liberalismo político que promueve el diálogo e inclusión de todos los actores. En cambio, tal defensa ayuda a reproducir la democracia representativa liberal como el único modelo, aunque en América Latina dicho modelo ha servido para mantener formas oligárquicas heredadas del colonialismo (Robinson, 2008).

Paradójicamente, los regímenes liberales consisten en dar a los individuos un lugar en el cual se sienten justificados y alentados por una racionalidad específica de *libertad*. Pero, a su vez, estos regímenes funcionan como un componente funcional en la difusión y extensión de las racionalidades del poder reproduciendo

una epistemología que sostiene una división entre quienes pueden gobernar y quienes no pueden hacerlo. En este sentido, tal como Bobbio (citado en Cannon, 2016) identifica la derecha, la oposición en Venezuela enfatiza la inevitabilidad y necesidad de desigualdad para el funcionamiento de las sociedades. Mientras son los grupos tradicionales de poder los destinados a gobernar o los que tienen influencia en la toma de decisiones, el Gobierno desde su posición de Estado simplemente se debe dedicar a satisfacer las demandas de esos grupos de interés, con una supuesta posición neutral y garantizando un sentido de estabilidad. Aunque la mayoría de las personas entrevistadas no se autoidentificó con una ideología de derecha, a excepción de los que se identificaron y asumieron una identidad de izquierda, el análisis arrojó un elemento común para aquellos «sin una autoidentificación ideológica»: siempre se han considerado como parte de la oposición, nunca votaron por Chávez o por Maduro.

Referencias bibliográficas

- Biardeau, Javier. «Del árbol de las tres raíces al socialismo bolivariano del siglo XXI ¿una nueva narrativa ideológica de emancipación?». *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 15, n.º 1 (2009), p. 57-113.
- Bowen, James. «The Right in “New Left” Latin America». *Journal of Politics in Latin America*, vol. 3, n.º 1 (2011), p. 99-124.
- Buxton, Julia. «Venezuela’s contemporary political crisis in historical context». *Bulletin of Latin American Research*, vol. 24, n.º 3 (2005), p. 328-347.
- Buxton Julia. «Venezuela: Deeper into the Abyss». *Revista de Ciencia Política*, vol. 38, n.º 2 (2018), p. 409-428.
- Cannon, Barry. «As Clear as MUD: Characteristics, Objectives, and Strategies of the Opposition in Bolivarian Venezuela». *Latin American Politics and Society*, vol. 56, n.º 4 (2014), p. 49-70.
- Cannon, Barry. *The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State*. Nueva York: Routledge, 2016.
- Cannon, Barry y Brown, John. «Venezuela 2016: the year of living dangerously». *Revista de Ciencia Política*, vol. 37, n.º 2 (2017), p. 613-633.
- Castañeda, Jorge. «Latin America’s Left Turn». *Foreign Affairs*, vol. 85, n.º 3 (2006), p. 28-43.
- Castro-Gómez, Santiago. *Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, Liberalismo y Neoliberalismo en Michel Foucault*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2010.
- Colomina, Martha. «No hay participación alguna al lado de Chávez». *El Universal*, (13 de mayo de 2001).

- Coronil, Fernando. «Listening to the Subaltern: The Poetics of Neocolonial States». *Poetics Today*, vol. 15, n.º 4 (1994), p. 643-658.
- Dean, Mitchell. *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. Londres: SAGE, 2010.
- Domínguez, Francisco. «Venezuela's Opposition: Desperately Seeking to Overthrow Chávez». En: Domínguez, Francisco; Lievesley, Geraldine y Ludlum, Steve (eds.). *Right-wing Politics in the New Latin America: Reaction and Revolt*. Londres: Zed, 2011, p. 113-130.
- Eaton, Kent. «New Strategies of the Latin American Right: Beyond Parties and Elections». En: Luna, Juan y Rovira Kaltwasser, Cristóbal (eds.). *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014, p. 75-92.
- Encarnación, Omar «Venezuela's Civil Society Coup». *World Policy Journal*, vol. 19, n.º 2 (2002), p. 38-48.
- Flores-Macias, Gustavo. *After Neoliberalism?: The Left and Economic Reforms in Latin America*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Foucault, Michel. «Governmentality». En: Burchell, Graham; Gordon, Colin y Miller, Peter (eds.). *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: Chicago University Press, 1991, p. 87-104.
- Foucault, Michel. «On the Genealogy of Ethics: An Overview of Works in Progress». En: Rabinow, Paul (ed.). *Michel Foucault: Ethics: subjectivity and truth. Essentials works of Michell Foucault 1954-1984*. Londres: Penguin, 2000a, p. 253-280.
- Foucault, Michel. «Technologies of the Self». En: Rabinow, Paul (ed.). *Michel Foucault: Ethics: subjectivity and truth. Essentials works of Michell Foucault 1954-1984*. Londres: Penguin, 2000b, p. 223-251.
- Foucault, Michel. «The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom». En: Rabinow, Paul (ed.). *Michel Foucault: Ethics subjectivity and truth. Essentials works of Michell Foucault 1954-1984*. Londres: Penguin, 2000c, p. 281-301.
- Foucault, Michel. *The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France, 1981-1982*. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Foucault Michel. *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977-1978*. Basingstoke: Macmillan, 2007.
- García, José. «Izquierda y Derecha en Venezuela: Nuevas Fuentes de Diferenciación Ideológica». *Reflexión Política*, vol. 10, n.º 5 (2003), p. 135-150.
- García-Guadilla, María. «Organizaciones sociales y conflictos sociopolíticos en una sociedad polarizada: las dos caras de la democracia participativa en Venezuela». *América Latina Hoy*, vol. 42, (2006), p. 37-60.
- González, Ybiskay. «'Democracy under Threat': The Foundation of the Opposition in Venezuela». *Bulletin of Latin American Research*, (2020) (en línea) <https://doi.org/10.1111/blar.13090>

- Gómez-Calcaño, Luis. *La Disolución de las Fronteras: Sociedad Civil, Representación y Política en Venezuela*. Caracas: CED, Universidad Central de Venezuela, 2009.
- Hirsch-Hoefler, Sivan y Mudde, Cass. «Right-Wing Movements». En: Snow, David; della Porta, Donatella; Klandermans, Bert y McAdam, Doug (eds.). *The Wiley-Blackwell Encyclopaedia of Social and Political Movements*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013, p. 1.116-1.124.
- Jaimes, Carolina. «¡Basta basta!». *El Universal*, (8 de diciembre de 2001). [Fecha de consulta: 10.06.2017] http://www.eluniversal.com/2001/12/08/opi_art_OPI3.shtml
- Jasper, James. «Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research». *Annual Review of Sociology*, vol. 37, (2011), p. 285-303.
- Laclau, Ernesto. *Emancipation(s)*. Londres: Verso, 1996.
- López-Maya, Margarita. *Democracia participativa en Venezuela (1999–2010): Orígenes, leyes, percepciones y desafíos*. Caracas: Centro Gumilla–UCAB, 2011.
- Martínez, Miguel. «En torno al Significado y Límites del Diálogo y la Obediencia». *Prodavinci*, (2 de junio de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 06.06.2016] <https://historico.prodavinci.com/2016/06/02/actualidad/en-torno-al-significado-y-limites-del-dialogo-y-la-obediencia-por-miguel-angel-martinez-meucci/>
- Mignolo, Walter. *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*. New Jersey: Princeton University Press, 2012.
- Motta, Sara. «Old Tools and New Movements in Latin America: Political Science as Gatekeeper or Intellectual Illuminator?». *Latin American Politics and Society*, vol. 51, n.º 1 (2009), p. 31-56.
- Motta, Sara. «Latin America: Reinventing Revolutions, an “Other” Politics in Practice and Theory». En: Stahler-Sholk, Richard; Harry, Vanden y Becker, Marc (eds.). *Rethinking Latin American Social Movements: Radical Action from Below*. Londres: Rowman & Littlefield Publishers, 2014, p. 21-42.
- Motta, Sara. «Latin America as Political Science’s Other». *Social Identities*, vol. 3, n.º 6 (2017), p. 701-717.
- MUD. «Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)». *Unidadvenezuela*, 2012 (en línea) [Fecha de consulta: 10.11.2020] <https://es.scribd.com/document/104928866/MUD-Lineamientos-Para-El-Programa-de-Gobierno-de-Unidad-Nacional-23-Enero-2012-Final-2-DEF>
- Naciones Unidas-Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos. «Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos». (04.07.2019) [Fecha de consulta: 10.11.2020] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S>

- Pearce, Jenny. «Collective Action or Public Participation? Complementary or Contradictory Democratisation». *Bulletin of Latin America Research*, vol. 23, n.º 4 (2004), p. 483-504.
- Ramos Allup, Henry. «Discurso Completo de Henry Ramos Allup». *Sumarium.com*, (05.01.2016). [Fecha de consulta: 15.05.2017] <http://sumarium.com/el-discurso-completo-de-henry-ramos-allup/>
- Rey, Juan Carlos. «Esplendores y Miserias de los Partidos Políticos en la Historia del Pensamiento Venezolano». *Boletines de la Academia Nacional de la Historia*, Tomo LXXXVI, vol. 343, (2003), p. 9-43.
- Robinson, William I. *Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective*. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 2008.
- Solomon, Ty. *The Politics of Subjectivity in American Foreign Policy Discourses*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015.
- Spanakos, Anthony. «Institutionalities and Political Change in Bolivarian Venezuela». En: Spanakos, Anthony y Panizza, Francisco (eds.). *Conceptualizing Comparative Politics*. Nueva York: Routledge, 2015, p. 215-242.
- Urbaneja, Diego. «El problema del Bolivarianismo». *El Universal*, (22 de noviembre de 2001). [Fecha de consulta: 31.05.2017] http://www.eluniversal.com/2001/11/22/opi_art_OPPI8.shtml
- Velasco, Alejandro. «The Pyrrhic Victories of Venezuela's President». *Current History*, vol. 117, n.º 796 (2018), p.73-76.
- Wenman, Mark. «Much Ado about 'Nothing': Evaluating Three Immanent Critiques of Poststructuralism». *Political Studies Review*, vol. 15, n.º 4 (2017), p. 564-576.
- Yuval-Davis, Nira. «Theorizing identity: beyond the 'us' and 'them' dichotomy». *Patterns of Prejudice*, vol. 44, n.º 3 (2010), p. 261-280.
- Zahler, Reuben. «Medium- and Short-Term Historical Causes of Venezuela's Crisis». *LASA Forum*, vol. 48, n.º 4 (2017), p. 3-6.

Por Dios y por las armas: el ascenso neopentecostal y securitario en Brasil (2003-2019)

In the name of God and rifles: the Neo-Pentecostal and securitarian rise in Brazil (2003-2019)

Kristina Hinz, Juliana Vinuto y Aline Beatriz Coutinho*

Cómo citar este artículo: Hinz, Kristina; Vinuto, Juliana y Coutinho, Aline Beatriz. «Por Dios y por las armas: el ascenso neopentecostal y securitario en Brasil (2003-2019)». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 185-213. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.185

Resumen: Este artículo analiza la evolución del espacio político brasileño en los poderes legislativo y ejecutivo, a partir de la convergencia de la aproximación entre pautas y actores de seguridad y el cristianismo neopentecostal; proceso que experimentó un momento de ascensión en los años 2000 y se consumó con la elección como presidente del país de Jair Bolsonaro en octubre de 2018. A través del análisis de actas gubernamentales, propuestas legislativas y materiales periodísticos, se trazan los perfiles de las principales agrupaciones armamentísticas/securitarias y neopentecostales en el legislativo brasileño. Tomando como objeto de estudio el Frente Parlamentario Evangélico y el Frente Parlamentario de Seguridad Pública, se demuestra el crecimiento, entre 2011 y 2019, de su influencia y alineamiento mutuo.

Abstract: This article analyses the evolution of the Brazilian political space in the legislative and executive powers, focusing specifically on the increasing convergence between security and Neo-Pentecostal actors and affairs, culminating in Jair Bolsonaro's election as president in October 2018. By analysing government proceedings, legislative proposals and journalistic materials, this article traces the profiles of the main pro-armament/ security and Neo-Pentecostal associations in the Brazilian legislature. Taking the Evangelical Parliamentary Front and the Parliamentary Front of Public Security as objects of study, this study demonstrates their growing mutual influence and alignment between 2011 and 2019.

Palabras clave: Brasil, Frente Parlamentario de Seguridad Pública, Frente Parlamentario Evangélico, derecha brasileña, bolsonarismo

Key words: Brazil, Parliamentary Front of Public Security, Evangelical Parliamentary Front, Brazilian right, Bolsonaroism

* **Kristina Hinz**, investigadora asociada, Centro de Estudio de Desigualdades y Relaciones de Género (NUDERG), Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Brasil; investigadora predoctoral, Instituto de Estudios Latinoamericanos (IAL), Universidad Libre de Berlín, Alemania (kristina.hinz@fu-berlin.de), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1369-9207>; **Juliana Vinuto**, profesora asistente, Departamento de Seguridad Pública (DSP), Instituto de Estudios Comparados de Administración de Conflictos (InEAC), Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil (julianavinuto@id.uff.br), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6035-4463>; **Aline Beatriz Coutinho**, investigadora asociada, Laboratorio para el Estudio de las Diferencias y Desigualdades Sociales (LEDDES), Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Brasil (alinebeatrizcoutinho@gmail.com), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2830-2700>.

La investigación que dio como fruto este artículo recibió el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Agradecemos el trabajo de los revisores anónimos, cuyos comentarios y sugerencias ayudaron a mejorar y aclarar nuestras ideas y argumentos.

El auge de la llamada «nueva derecha» es un factor sociopolítico que, en el siglo XXI, se observa en varios países del mundo, como Estados Unidos, Hungría, Polonia y Brasil (Lacerda, 2019: 28). Se trata de un movimiento intelectual y político que favorece los valores morales tradicionales, generalmente basados en el cristianismo (principalmente evangélico), la lucha contra el comunismo y en el conservadurismo económico (Diamond, 1995; High, 2009). Sin embargo, la principal característica de esta corriente es su enfoque en las cuestiones sexuales y reproductivas (Diamond, 1995), las cuales se entrelazan con un pensamiento punitivo de ley y orden, con una defensa de la familia patriarcal, con el militarismo anticomunista y con el neoliberalismo (Harvey, 2005; Grandin, 2006; Lacerda, 2019). En América Latina, este fenómeno ya se ha observado en Brasil, Argentina y Chile (Codato *et al.*, 2018). El surgimiento de esta «nueva derecha» en el escenario brasileño (Botelho y Ferreira, 2010) tiene varios segmentos y características, entre los cuales destaca la existencia de nuevas bases sociopolíticas, tal como se percibe en el análisis de los candidatos a diputados federales en las dos primeras décadas del siglo XXI. Con la elección del actual presidente Jair Bolsonaro en 2018, se ha consolidado en el panorama político la convergencia entre estos valores –sobre todo entre el moralismo cristiano y el militarismo civil– incluyendo al país en este nuevo movimiento *de derechas* transnacional.

En este contexto, este artículo analiza la situación sociopolítica de Brasil que hizo posible la elección de Jair Bolsonaro como presidente del país; una elección que se entiende como la consumación de un progresivo ascenso de fuerzas políticas como el Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP) y el Frente Parlamentario Evangélico (FPE) producido durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Así, la articulación entre estos dos frentes parlamentarios es el principal objeto de estudio de este análisis, en el que se expone la acción de los parlamentarios de ambas fuerzas, concretamente en lo relativo al intercambio de apoyo político en la votación de las propuestas legislativas consideradas esenciales para cada uno de ellos (Cepêda, 2018; Codato *et al.*, 2018; Messenberg, 2010). Para ello, el artículo se divide en cinco apartados: los dos primeros permiten comprender el surgimiento del Frente Parlamentario de Seguridad Pública y del Frente Parlamentario Evangélico; el tercero analiza la articulación de ambos frentes en el transcurso de los gobiernos del PT –época caracterizada por desacuerdos pero también por acercamientos y concesiones entre el Poder Ejecutivo y los Frentes Parlamentarios de Seguridad Pública y Evangélico–; el cuarto examina la actua-

ción de los dos frentes parlamentarios en el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en el que se argumenta que su eliminación del poder representa el pleno ascenso político de ambos frentes; y, finalmente, el último analiza la relación entre este contexto de fortalecimiento de estos frentes parlamentarios y la victoria de Jair Bolsonaro en la elección presidencial de Brasil.

En la elaboración del artículo se utiliza una metodología basada en el análisis de los perfiles de los miembros de la Cámara de los Diputados (*Câmara dos Deputados*) de Brasil a través de una multiplicidad de fuentes como actas, propuestas legislativas, sitios web de los diputados, materiales gubernamentales, periodísticos y estadísticos que permitieron comprender el desempeño de los dos frentes fundamentales que hicieron posible la configuración actual del campo político brasileño.

Las iglesias neopentecostales y la formación del Frente Parlamentario Evangélico (FPE)

Desde el proceso de redemocratización¹, las iglesias evangélicas han ampliado su influencia en la política brasileña, representando una de las mayores fuerzas del Poder Legislativo. Entre el año 2000 y el 2010, los católicos pasaron de representar el 73,80% de la población al 64,60%, respectivamente, mientras que los evangélicos subieron del 15,60% al 22,20% (IBGE, 2012). Una encuesta realizada por DataFolha en 2019, indica que un 50% de la población en el país se consideraba católica y un 31% evangélica, y se prevé que en 2032 los evangélicos superarán a los católicos por primera vez, convirtiéndose en el grupo religioso mayoritario en Brasil (Balloussier, 2020). El crecimiento del pentecostalismo tiene como una de sus principales características estar centrado en las periferias de las regiones metropolitanas brasileñas; en estas áreas, donde la mayoría de la población es de bajos recursos, más del 70% de sus habitantes se reconoce como evangélico (Jacob *et al.*, 2004). Cabe señalar que, desde la década de 1980 hasta la actualidad, hay una normalización por parte de los evangélicos de la máxima «el hermano vota por el hermano» (Araújo, 2019).

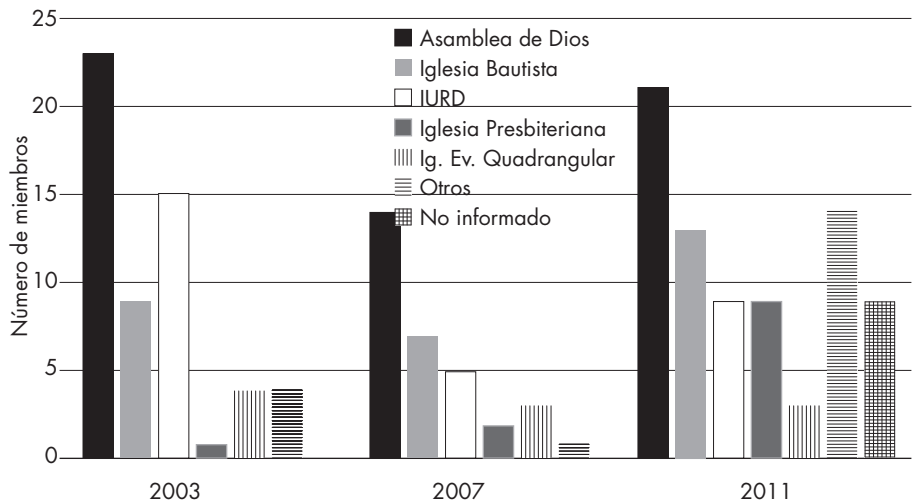
1. Un proceso que comenzó después de la Dictadura Cívico-Militar (1964-1985) y culminó en la formulación de una nueva constitución en 1988.

Figura 1. Miembros del Frente Parlamentario Evangélico (FPE) y contingente de profesionales de religión en la Cámara de los Diputados (2003-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de República Federativa do Brasil (2003); portal de la Câmara dos Deputados (2019), prensa y sitios web oficiales de los diputados.

Figura 2. Iglesias de los miembros del Frente Parlamentario Evangélico (2003-2011)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de República Federativa do Brasil (2003); portal de la Câmara dos Deputados (2019), prensa y sitios oficiales de los diputados.

En este contexto, en 2003 se creó el Frente Parlamentario Evangélico (FPE), regulado en la Cámara de los Diputados en 2005 como asociación suprapartidaria. Con 56 miembros fundadores, uno de sus objetivos era «buscar, de manera continua, la innovación de la legislación necesaria para promover políticas públicas, sociales y económicas eficaces (...) de acuerdo con sus objetivos, combinados con los propósitos de Dios, y de acuerdo con su Palabra» (República Federativa do Brasil, 2003: 36). Desde el principio, la influencia de los profesionales religiosos —obispos, pastores, diáconos, teólogos, cantantes de góspel, locutores y presentadores de programas religiosos— ha tenido mucho peso en el FPE. Como muestra la figura 1, en la Cámara de los Diputados, en 2003, el 73,21% (n=41)² de los miembros de la FPE eran profesionales religiosos. A lo largo de los años, esta proporción ha ido disminuyendo, del 46,61% (n=20) en 2007, el 38,46% (n=30) en 2011, el 15,65% (n=31) en 2015 hasta el 16,92% (n=33) en 2019³. Asimismo, también hay miembros del FPE que son evangélicos muy activos —a menudo hablan en nombre de sus iglesias en lugar de sus partidos—, pero no encajarían en ninguno de los grupos de profesionales religiosos definidos anteriormente.

Aunque todos sus miembros se denominan evangélicos, existe una diferenciación interna de denominaciones entre sus adherentes, ya sean protestantes históricos, pentecostales o neopentecostales. En las legislaturas de 2003 a 2011, la mayoría de los diputados asociados al FPE eran miembros o profesionales de la Iglesia Universal Reino de Deus (IURD), la Iglesia Bautista, la Asamblea de Dios o la Iglesia Presbiteriana, entre otras iglesias menos conocidas, como la Iglesia Cristiana Maratana, la Congregación Cristiana o la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios (véase la figura 2).

Una de las principales banderas enarboladas por el FPE es la articulación de un discurso contra los derechos reproductivos de las mujeres, ya que entiende que la posibilidad de legalizar el aborto es contraria a la premisa de que la vida es un don

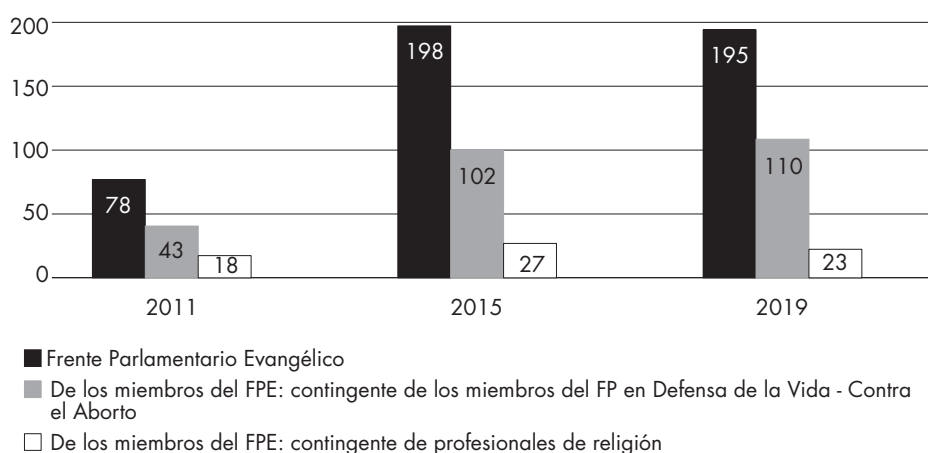
El crecimiento del pentecostalismo tiene como una de sus principales características estar centrado en las periferias de las regiones metropolitanas brasileñas, marcadas por el abandono del Estado y la violencia sistémica, ya sea perpetrada por el narcotráfico o por grupos de exterminio y milicianos.

2. Equivale al número de diputados.

3. Cabe señalar que en el sitio web oficial de la Cámara de los Diputados se suele omitir información sobre los oficios religiosos de los diputados, así como sobre su pertenencia a las respectivas iglesias. Por consiguiente, fue necesario reunir esta información a través de otras fuentes, como los sitios web oficiales de los diputados (si están disponibles) o los artículos de prensa. Por lo tanto, los números aquí mencionados de los diputados religiosos profesionales deben entenderse como valores mínimos.

de Dios y solo él puede quitarla. Así pues, se considera que los proyectos legislativos relacionados con los derechos reproductivos y sexuales son inmorales y tienen la intención de «degenerar» la sociedad brasileña (Miguel, 2012). Con la creación del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Vida-Contra el Aborto (FP en Defensa de la Vida) en 2005, dos años después de la fundación del FPE, esta movilización ganó aún más aliento. En sus estatutos, el FP en Defensa de la Vida define como su objetivo «movilizar la opinión pública brasileña contra la legalización del aborto y cualquier otra forma de atentado contra la vida» e impedir «la aprobación de proyectos de ley que abran lagunas en la legislación para permitir el aborto (...)» (República Federativa do Brasil, 2005: 45). Siendo suprarreligioso y suprapartidario, el FP en Defensa de la Vida reúne una amalgama de diputados y senadores evangélicos, católicos carismáticos, espiritistas y conservadores en general que tienen como agenda principal la defensa de la vida desde la concepción. Además, con inicialmente 59 diputados y tres senadores entre sus miembros fundadores en 2005, y 192 diputados y 13 senadores en 2011, el FP en Defensa de la Vida fue en origen incluso más grande que el FPE, aunque esa relación se invirtió entre 2015 y 2019. El FPE aún representa, aproximadamente, entre el 53% y el 55% de los diputados firmantes del FP en Defensa de la Vida (55,13% en 2011 [n=43/78]; 51,51% en 2015 [n=102/198] y 56,41% en 2019 [n=110/195]), y es el principal articulador de sus acciones (véase la figura 3).

Figura 3. Frente Parlamentario Evangélico (FPE): contingente de miembros del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Vida-Contra el Aborto y contingente de profesionales de religión



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de República Federativa do Brasil (2003); portal de la Câmara dos Deputados (2019), prensa y sitios oficiales de los diputados.

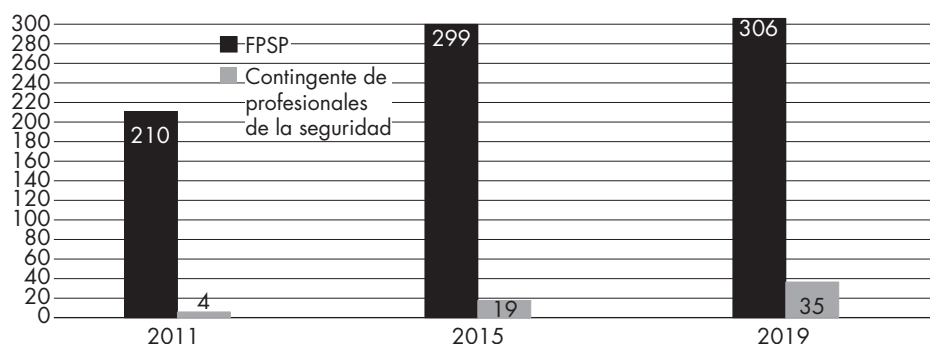
El lobby armamentístico/securitario y la formación del Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP)

El término «bancada de la bala» —en referencia a la Cámara de Diputados— comenzó a utilizarse a principios del decenio del 2000, y fue movilizado inicialmente por la prensa durante los debates sobre el registro, la posesión y la venta de armas de fuego y municiones, que condujeron a la creación del Estatuto de Desarme (Presidência da República, 2003). Hoy en día, se denomina «bancada de la bala» a las agrupaciones suprapartidistas del Poder Legislativo brasileño compuestas principalmente por individuos vinculados a las fuerzas de seguridad y sus simpatizantes. Entre estas destaca el Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP), fundado en 2011 con el objetivo de «estudiar y debatir cuestiones relacionadas con la seguridad pública para promover la mejora de la legislación sobre el tema», además de fomentar la «valorización de los profesionales de la seguridad» y vigilar e inspeccionar las políticas de seguridad pública (República Federativa do Brasil, 2011: 201). Establecido a petición de su primer presidente, el capitán de la Policía Militar Fernando Franschini (SD-PR)⁴, el FPSP tuvo 210 miembros fundadores en 2011, que se ampliarían a 299 en la Cámara de los Diputados de 2015 y a 306 en 2019 (Câmara dos Deputados, 2011, 2015a y 2019).

Hoy en día, se denomina «bancada de la bala» a las agrupaciones suprapartidistas del Poder Legislativo brasileño compuestas principalmente por individuos vinculados a las fuerzas de seguridad y sus simpatizantes. Entre estas destaca el Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP), fundado en 2011.

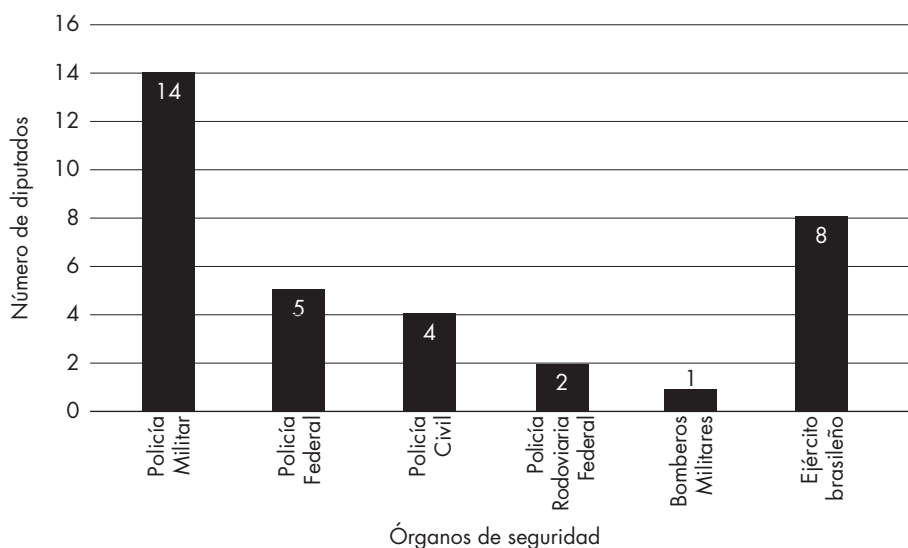
-
4. Es importante destacar que en Brasil existe una distinción entre la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, estas últimas constituidas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. El personal militar vinculado a las Fuerzas Armadas está subordinado al Ministerio de Defensa y actúa a nivel federal, siendo responsable de la seguridad de las fronteras para garantizar la soberanía nacional. A nivel estatal, la Policía Militar es responsable del patrullaje de la calle, mientras que la Policía Civil se encarga de la investigación policial. Por lo tanto, en este país no existe un cuerpo policial completo. A pesar de la separación institucional, la Policía Militar es una fuerza auxiliar y de reserva del Ejército brasileño, lo que ha contribuido a un alineamiento ideológico entre las instituciones. A pesar de los diferentes fines oficiales, no es raro que las Fuerzas Armadas y la Policía Militar actúen de manera conjunta, como en las acciones de «Garantía del orden público», como fue el caso de la intervención federal en Río de Janeiro en 2018 (véase Muniz y Proença, 2007).

Figura 4. Miembros del Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP) y contingente de profesionales de la seguridad en la Cámara de los Diputados (2011-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del portal de la Câmara dos Deputados (2019), prensa y sitios oficiales de los diputados.

Figura 5. Cámara de los Diputados 2019: perfil de los miembros del Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP) identificados como profesionales de la seguridad



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del portal de la Câmara dos Deputados (2019), prensa y sitios oficiales de los diputados.

Como se establece en sus estatutos, una proporción pequeña de los miembros del FPSP son profesionales de la seguridad, que en este artículo entendemos como oficiales de la Policía Militar, delegados de la Policía Civil y Federal, oficiales de la policía de carreteras, bomberos militares o miembros de las Fuerzas Armadas, tanto activos como de reserva. De sus miembros fundadores, solamente el 1,90% eran profesionales de estas categorías. Pero este número ha aumentado y, en la legislatura de 2015 y 2019, el 6,35% y el 11,47%, respectivamente, de los miembros del FPSP eran profesionales de la seguridad (véase la figura 4).

Por lo tanto, es importante señalar que no todos los miembros del FPSP forman parte de este *núcleo duro* en la Cámara de Diputados (Santos, 2018). Como la seguridad es un tema de amplio interés en la sociedad brasileña, cuya agenda política no se limita a los grupos de derecha, hay también varios diputados de partidos considerados de centro e izquierda en el FPSP.

También cabe mencionar la relación de clientelismo que mantienen ciertos políticos prominentes en el ámbito de la seguridad pública con su «estructura de poder local», especialmente en las periferias pobres de las grandes ciudades (Cano y Loot, 2008; Alves, 2003; Cano y Duarte, 2012). En algunos barrios de Río de Janeiro, los grupos de exterminio formados por cuerpos paramilitares y parapoliciales, llamados «milicias», se han establecido desde la época de la dictadura militar como organizaciones relevantes para la política local. Hoy en día, una parte considerable de las favelas de Río de Janeiro están bajo el control de las milicias (Olliveira *et al.*, 2018), las cuales destacan por el control efectivo de un determinado territorio, la coerción de la población residente y el beneficio derivado de las actividades que se realizan en ese territorio, como el cobro de tasas de protección o servicios como el uso de la televisión por cable y la distribución de gas, entre otros (Cano y Loot, 2008: 59).

A partir de su influencia para elegir a los cargos de consejero o diputado –o garantizar los votos de la población de *su territorio* para un político determinado–, las milicias se han acercado a la esfera estatal. Esa presencia se produce incluso indirectamente, ya que a veces los familiares de los milicianos se empleaban como asesores de los políticos elegidos, con acceso a fuentes de información privilegiadas (Alves, 2003). Como argumentan Cano y Loot (2008: 78): «La ocupación de cargos públicos por los jefes de las milicias

En algunos barrios de Río de Janeiro, los grupos de exterminio formados por cuerpos paramilitares y parapoliciales, llamados «milicias», se han establecido desde la época de la dictadura militar como organizaciones relevantes para la política local.

cierra el círculo de la dominación, ya que a la dominación informal se une ahora la dominación formal, incluso con la legitimidad otorgada por el voto popular. Para los líderes de la milicia, esto tiene ventajas obvias: el establecimiento de contactos políticos al más alto nivel y la obtención de inmunidad parlamentaria frente a posibles procesos penales. Para la comunidad, la elección de estas figuras puede ayudar a canalizar los recursos públicos hacia estas áreas, lo que a su vez debería fortalecer la popularidad y la legitimidad de estos líderes».

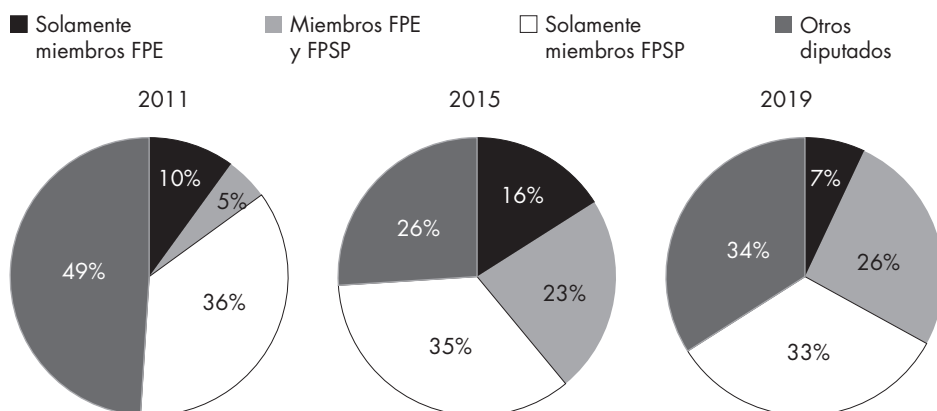
Además del *núcleo duro* de profesionales de la seguridad en el FPSP, hay otros grupos más pequeños dentro de la Cámara de Diputados brasileña que tienen como agenda principal los temas relacionados con la seguridad. Fundada en 2002, la Comisión de Seguridad Pública y Lucha contra el Crimen Organizado (CSPCCO) es uno de los órganos más antiguos que orienta la guerra contra las drogas y la delincuencia organizada. La Comisión tiene 33 miembros y 33 suplentes que son nombrados anualmente (Cámara dos Deputados, 2018). Respecto a los diputados que forman parte de la CSPCCO y el FPSP, bien sean o no profesionales de la seguridad, cabe mencionar su compromiso con las agendas vinculadas a las políticas de orden público, como la de permitir la tenencia de armas, reducir la mayoría de edad penal, poner fin a las sentencias alternativas a las penas de privación de libertad y flexibilizar las penas de los agentes de seguridad que causan víctimas mortales en los enfrentamientos. Un ejemplo puede verse en el proyecto de ley 713/2015, en el que se establece la presunción de defensa propia en el uso de un arma de fuego por un agente de policía, lo que dificultaría la investigación de los asesinatos cometidos por dichos agentes (Cámara dos Deputados, 2015a).

Los gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003-2016): el papel del FPE y del FPSP

Como se ha mostrado, tanto el FPSP como el FPE han tenido una notable expansión en legislatura brasileña desde inicios del nuevo milenio. También sus *núcleos duros* –los profesionales de la seguridad y de la religión–, que han contado con números estables o crecientes a lo largo del período. En otras palabras: durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (ambos del PT), el legislativo brasileño se volvió progresivamente más conservador, ampliando no solo el número de diputados militares, policiales, obispos y pastores, sino también de simpatizantes alineados con los proyectos conservadores que aquellos representaban.

Es importante destacar que, ya en 2011, año de la fundación del FPSP, la suma de los diputados que formaban parte del FPSP, del FPE o de ambos ya superaba el número de diputados que no formaban parte de ninguno de los dos frentes. En la composición de las cámaras de 2015 y 2019, esta relación se siguió intensificando: si en 2011 el número de diputados que no formaban parte de ninguno de los dos frentes era todavía del 49% (frente al 51% del total de miembros del FPSP y/o FPE), en 2015 solo había un 26%, frente al 74% del total de miembros del FPSP y/o del FPE, y en 2019 un 34%, frente al 66% (véase la figura 6). Este profundo cambio de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados también debe analizarse como una explicación de las concesiones que Lula da Silva y Dilma Rousseff creían que debían hacer para garantizar la gobernabilidad de sus mandatos en una Cámara cada vez más fragmentada.

Figura 6. Contingente de miembros del Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP) y Frente Parlamentario Evangélico (FPE) en la Cámara de los Diputados (2011-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de República Federativa do Brasil (2011, 2015 y 2019); Congresso Nacional (2019), portal de la Câmara dos Deputados (2019), prensa y sitios web oficiales de los diputados.

Los primeros acercamientos de los gobiernos del PT con los políticos evangélicos se produjeron con el Gobierno de Lula da Silva, que había estado formando alianzas electorales con partidos dominados por políticos evangélicos, como los partidos PSC (Partido Social Cristão) y PRB (Partido Republicano

Brasileiro)⁵, por ejemplo (Valle, 2018). Estas alianzas se pueden observar tanto en el ámbito político electoral-ministerial como en el financiero. Un caso ejemplar ocurrió en la elección para el primer mandato de Lula en 2005, cuando José Alencar –afiliado al PRB– se convirtió en vicepresidente. En 2009, Lula firmó el Día Nacional de la Marcha por Jesús. Además, durante las elecciones de 2010, el PT también dio un ejemplo de la alianza financiera, dando al PSC 4,7 millones de reales en vísperas de la campaña electoral (Odilla y Seligman, 2010). En el plano sociocultural, estas elecciones de 2010 marcaron el momento en que Lula y Dilma Rousseff se reunieron con líderes evangélicos y congresistas del FPE para discutir cuestiones de su futuro Gobierno, incluyendo la no legalización del aborto y cumpliendo con algunas demandas de los líderes evangélicos formuladas en la «Carta a los Evangélicos» (Pires, 2010).

La garantía de los derechos reproductivos y el tema del aborto fueron puntos constantes de desacuerdo y acercamiento entre los miembros de la base gobernante del PT y los políticos del FPE. Un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto –el Proyecto de Ley 1335/91– fue propuesto en 1991 por dos diputados del PT, Eduardo Jorge y Sandra Starling (Câmara dos Deputados, 1991), pero no entró en vigor hasta 2004, durante la primera Conferencia Nacional de Políticas para la Mujer, en la que se recomendó la despenalización y legalización del aborto. En 2005, este Proyecto de Ley fue adaptado por la relatora del Comité de Seguridad Social y Familia, la diputada Jandira Feghali. Para enfrentar el proyecto, algunos diputados organizaron el FP en Defensa de la Vida en el mismo año 2005, siendo una de las primeras acciones suprapartidarias entre los religiosos de la Cámara, que acabaron impidiendo la aprobación de dicho proyecto (Mariano y Biroli, 2017). Ese mismo año se produjo el escándalo del *Mensalão*, una acusación de compra de votos de los diputados de la base gobernante para apoyar las medidas del Gobierno (Leher, 2005). Con su Gobierno amenazado, sumado a las elecciones que tendrían lugar al año siguiente, Lula da Silva priorizó buscar el apoyo de evangélicos y católicos para su reelección, por lo que desatendió las demandas de los grupos sociales favorables a la legalización del aborto (Santos, 2015: 78-79).

5. A finales de 2019, el PRB decidió cambiar su nombre por el de «Republicanos». Este cambio se produjo como un medio para alejarse de su alianza con el campo de la izquierda y su antiguo apoyo al PT, para convertirse en una opción para el electorado conservador y liberal. Los Republicanos no tienen un vínculo inmediato con la religión cristiana, pero este partido fue fundado y tiene en su comité ejecutivo personas directamente vinculadas a la denominación pentecostal, en particular la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD).

La relación de los gobiernos del PT con el numeroso y poderoso FPSP, también se caracteriza por momentos de enfrentamiento, mediación de la fuerza y, eventualmente, concesiones por parte del Gobierno. Un momento ilustrativo de esta ambigüedad se encuentra en la promulgación de la Ley n.º 10.826/2003, conocida como el Estatuto de Desarme. Además de aumentar el control estatal sobre las armas, este estatuto intenta reducir la circulación de estas entre la población civil, restringiendo la posesión directa y aumentando las penas por su uso y posesión ilegal (Presidência da República, 2003). Asimismo, también incluía el artículo 35, que prohibía la venta de armas de fuego dentro del territorio nacional, con la excepción de las entidades previstas en el artículo 6 de la misma ley. Debido a la gravedad de la cuestión, fue necesario someter el artículo 35 a un referéndum popular. Con la pregunta «¿Debe prohibirse el comercio de armas de fuego y municiones en Brasil?», el referéndum concluyó con un 63,94% de votos para el «no» y un 36,06% para el «sí», por lo que el artículo quedó rechazado (Folha de São Paulo, 2005). Ello permitió incluir la liberación autorizada por el Ejército de la tenencia y uso de armas por parte de coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores (CACs, por sus siglas en portugués), abriendo una brecha para las armas de uso civil, relativamente fácil de aprovechar por la delincuencia organizada. Este resultado también representa, sobre todo, una primera derrota del Gobierno Federal frente a la industria de armamento brasileña y sus representantes políticos: mientras que el PT y el presidente Lula da Silva se posicionaron claramente al lado de la campaña por el «sí», la campaña por el «no» estuvo encabezada por el Frente Parlamentario para la Defensa Legítima, con innumerables diputados notablemente conocidos por su actuación en el FPSP, como Jair Bolsonaro (Câmara dos Deputados, 2005). Al respecto, el periódico *O Globo* reveló que la campaña fue financiada casi en su totalidad por donaciones de dos de las mayores empresas de armas y municiones en Brasil: Forjas Taurus y la Companhia Brasileira de Cartuchos. En conjunto, las dos empresas donaron más de 5,5 millones de reales para el «no» (Gripp, 2005).

En este período, otro punto de debilitamiento del PT frente al lobby armamentístico/securitario fue la falta de combate sistémico a los grupos paramilitares y parapoliciales. Aunque, en 2008, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las milicias de la Asamblea Legislativa del Estado del Río de Janeiro dio lugar a la detención de más de 240 milicianos en Río de Janeiro, la mayoría de las 58 recomendaciones de la CPI para el enfrentamiento efectivo de las milicias y sus fuentes de financiación no fueron adoptadas. Entre otras sugerencias, en el informe final se recomendó que la formación de milicias se tipificara como delito federal y que el

La relación de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) con el numeroso y poderoso FPSP, también se caracteriza por momentos de enfrentamiento, mediación de la fuerza y, eventualmente, concesiones por parte del Gobierno.

uso indebido de los centros sociales —espacios señalados para la compra de votos— se considerara un delito electoral (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 2008). Hasta la fecha, ninguna de estas dos sugerencias se ha convertido en ley⁶.

Destitución de Dilma Rousseff (2016): ruptura democrática

A raíz del resultado de las elecciones de 2014, el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP) consideró ese año como el «más conservador desde 1964», año del golpe militar brasileño (Souza y Caram, 2014). De los

El papel del FPE y el FPSP fue fundamental en el proceso de impugnación de Dilma Rousseff. Los miembros de estas bancadas actuaron para defender la legitimidad y la admisibilidad de la apertura del juicio político contra ella. De los 367 votos a favor de su destitución (contra 137 en contra), 101 fueron de diputados de ambos frentes, entre ellos el de Jair Bolsonaro.

513 diputados elegidos, 299 formaban parte del FPSP y 198 del FPE. Considerando que 119 diputados estaban asociados a ambos frentes parlamentarios, la Cámara de Diputados de 2015 tenía 378 diputados de esas opciones políticas, frente a solo 135 diputados que no formaban parte de ninguna de ellas. Esto significó que casi el 74% de los diputados elegidos para la Cámara de Diputados formaban parte del FPE

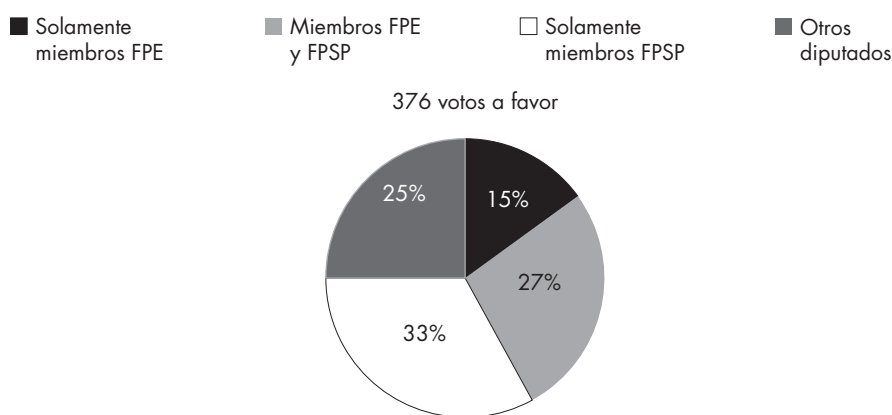
y/o el FPSP, constituyendo una mayoría abrumadora. Una señal de ello fue la elección de Eduardo Cunha para la Presidencia de la Cámara de los Diputados en febrero de 2015. Cunha, miembro fundador y en activo del FPE, así como del FPSP, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados con el apoyo de la mayoría absoluta de los parlamentarios (267 votos de un total de 513), muchos de ellos vinculados al FPE o al FPSP (Agência Brasil, 2015).

El proceso de impugnación de Dilma Rousseff comenzó, así, con la aceptación de la admisibilidad del juicio político por parte de la Cámara de Diputados,

6. Solo en 2018 –10 años después de la publicación del informe de la Milicia CPI– se aprobó en el Senado brasileño el Proyecto de Ley 9709/2018 que permite la investigación de los crímenes de la milicia por la Policía Federal brasileña si las fuerzas de seguridad de los estados están involucradas. Hasta la fecha, el proyecto de ley sigue en curso en la Cámara de los Diputados (véase Cámara dos Deputados, 2018).

basado en una denuncia de responsabilidad fiscal llevada a cabo por Eduardo Cunha. Varios autores destacan las irregularidades y la falta de fundamento jurídico de la solicitud de impugnación de Rousseff (Peixinho, 2018). Como afirman Rangel y Dutra (2019), la destitución de Rousseff se debió a la articulación de los intereses políticos de sus oponentes y, en el proceso, hubo fragilidad en las acusaciones de prácticas indebidas en la gestión financiera, por lo que no hubo un verdadero delito de responsabilidad que justificara tal juicio político.

Figura 7. Origen de los votos a favor de la impugnación de Dilma Rousseff



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de República Federativa do Brasil (2011, 2015 y 2019); Congresso Nacional (2019), portal de la Câmara dos Deputados (2016, 2019).

El papel del FPE y el FPSP fue fundamental en la consecución de los hechos. Los miembros de estas bancadas actuaron para defender la legitimidad y la admisibilidad de la apertura del juicio político contra Rousseff, para lograr el voto sobre la destitución y para la organización de las fuerzas políticas tras el final del proceso. Esta movilización dio sus frutos: desde febrero de 2015, se presentaron 50 solicitudes de impugnación, 39 de las cuales no presentaban ninguna prueba y no cumplían los requisitos formales (Barifouse, 2016). Además, es importante señalar que fueron los diputados vinculados a estas bancadas los que tomaron más posición para que las acusaciones de responsabilidad se convirtieran en denuncias. Igualmente, sus votos fueron fundamentales para la destitución efectiva de la presidenta. Mientras que, en general, hubo un 72% de los diputados a favor de la impugnación, en el FPE el apoyo fue del 84% y, en el FPSP, del 81%. Estas cifras son

mucho más elevadas que el 67% de los votos necesarios para aprobar la destitución de Rousseff, que finalmente se produjo el 16 de agosto de 2016 (Monteiro, 2020). De los 367 votos a favor de su destitución (contra 137 en contra), 101 fueron de diputados de ambos frentes, entre ellos el de Jair Bolsonaro.

Militares y evangélicos llegan al Gobierno: la Presidencia de Jair Bolsonaro

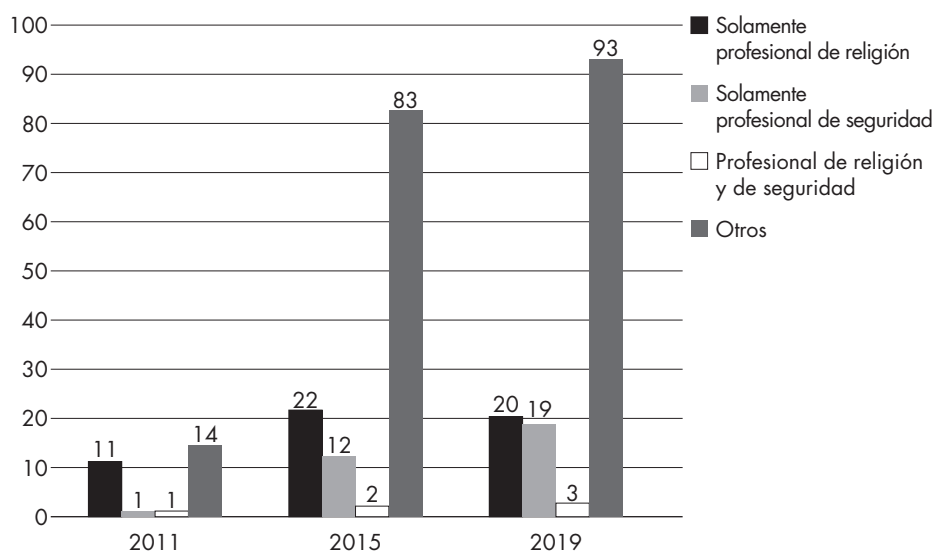
Con la controvertida elección de Jair Bolsonaro a la Presidencia de Brasil en 2018, por primera vez un excapitán del Ejército ocupaba el cargo más alto del país —además de ser uno de los representantes más conocidos del *núcleo duro* del FPSP y también miembro del FPE. En ello radica la mayor diferencia con los años anteriores: ahora ambos grupos dominan el campo político, no solo el del Poder Legislativo, sino también, y decisivamente, el del Poder Ejecutivo. Con el Gobierno de Bolsonaro, las policías y los evangélicos están notablemente presentes en el Legislativo. En la Cámara de los Diputados de 2019, el FPE y el FPSP juntos suman el 66% (n=340) de los parlamentarios. Además, el número de diputados en ambos frentes ha aumentado considerablemente en los últimos ciclos legislativos. Si en 2011 solo el 5% (n=27) de los diputados formaban parte de ambos frentes, en 2015 ya eran el 23% (n=119) y en 2019 el 26% (n=135).

El perfil de los miembros que forman parte de los dos frentes es bastante diverso. En la investigación, se han localizado a 22 diputados que son profesionales de la seguridad, entre los que se encuentran agentes de la Policía Civil y Federal, así como miembros de las Fuerzas Armadas. Los profesionales de la religión también tienen una fuerte presencia: 23 de los diputados de estos frentes son pastores, obispos u ocupan otras funciones en las iglesias. También cabe destacar a los tres diputados que son profesionales de la seguridad y de religión al mismo tiempo: Gilberto Nascimento (PSC-SP), policía y evangelista de la Iglesia de la Asamblea de Dios; João Campos (PRB-GO), pastor auxiliar de la Asamblea de Dios y delegado de la Policía Civil, y el sargento pastor Isidório (AVANTE-BA), policía militar retirado y pastor de la Fundación Doctor Jesús.

En el Gobierno de Bolsonaro, los militares y los evangélicos también tienen importantes cargos en el Ejecutivo. Sin embargo, destaca que, si bien gran parte de su apoyo político está respaldado por las policías (militar y civil), son los miembros de las Fuerzas Armadas los que constituyen la mayoría de la estructura de su Gobierno. Aun así, Bolsonaro señala un apoyo constante a la policía, como ocurrió durante las discusiones sobre la reforma de las pensiones, implementando beneficios y ventajas para este cuerpo en relación con la reforma de otros trabajadores brasileños. Otro

ejemplo es el proyecto de ley que dejaría de castigar al personal militar de las Fuerzas Armadas y a los miembros de las fuerzas de seguridad en operaciones de Garantía del Orden Público, como fue el caso de la intervención federal en la ciudad de Río de Janeiro en 2018 (Câmara dos Deputados, 21 noviembre 2019).

Figura 8. Perfiles profesionales de los diputados miembros del Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP) y del Frente Parlamentario Evangélico (FPE) (2011-2019)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de República Federativa do Brasil (2011, 2015 y 2019); Congresso Nacional (2019), portal de la Câmara dos Deputados (2019), prensa y sitios web oficiales de los diputados.

En su constitución original de 2019, el gabinete de Bolsonaro incluía siete militares de las Fuerzas Armadas y tres profesionales religiosos, así como varios evangélicos. Tras el intercambio de varios ministros durante el primer año de la Presidencia, en 2020, el número de ministros militares aumentó a ocho frente a tres ministros evangélicos (véase la tabla 1). Cabe subrayar que el Gobierno de Bolsonaro ya tiene más ministros militares que la mayoría de los presidentes de la dictadura militar, a excepción del Gobierno de Castelo Branco entre los años 1964 y 1967 (Barrucho, 2020). Además, en octubre de 2019, contaba con, por lo menos, 2.500 oficiales militares al frente o asesorando su Gobierno (Mattoso y Bragan, 2020).

Tabla 1. Ministros del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2020)

Ministério	2019	2020	
Casa Civil	Onyx Lorenzoni	Walter Souza Braga Netto	
Secretaría General de la Presidencia de la República	Gustavo Bebianno	Jorge Oliveira	
Gabinete de Seguridad Institucional	Augusto Heleno	Augusto Heleno	
Secretaría de Gobierno	Carlos Alberto Cruz	Luiz Eduardo Ramos	
Economía	Paulo Guedes	Paulo Guedes	
Justicia y seguridad pública	Sergio Moro	Sergio Moro	
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento	Tereza Cristina	Tereza Cristina	
Ciencia y Tecnología	Marcos Pontes	Marcos Pontes	
Salud	Luiz Henrique Mandetta	Luiz Henrique Mandetta	
Educación	Ricardo Vélez Rodríguez	Abraham Weintraub	
Defensa	General Fernando Azevedo e Silva	General Fernando Azevedo e Silva	
Relaciones Exteriores	Ernesto Araújo	Ernesto Araújo	
Contralor General de la Unión	Wagner Rosário	Wagner Rosário	
Abogado General de la Unión	André Luiz de Almeida Mendonça	André Luiz de Almeida Mendonça	
Infraestructura	Tarcísio Gomes da Costa	Tarcísio Gomes da Costa	
Desarrollo regional	Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto	Rogério Marinho	
Ciudadanía	Osmar Terra	Onyx Lorenzoni	
Turismo	Marcelo Álvaro Antônio	Marcelo Álvaro Antônio	
Minas y energía	Bento Costa Lima	Bento Costa Lima	
Mujer, Familia y Derechos Humanos	Damaraes Alves	Damaraes Alves	
Medio Ambiente	Ricardo Salles	Ricardo Salles	

	Observaciones
	Lorenzoni, miembro del FPE y el FPSP, es reemplazado por un general del Ejército activo, Walter Souza Braga Netto, excomandante de la intervención federal en el área de seguridad de Río de Janeiro en 2018.
	Bebiano, abogado, es reemplazado por un oficial de la policía militar de la reserva.
	General de reserva del Ejército.
	Cruz, que es un general de la reserva del Ejército, es reemplazado por un miembro de la iglesia bautista.
	Economista
	Exjuez
	Agrónoma y empresaria
	Teniente coronel de la Reserva Aeronáutica y astronauta
	Médico
	Rodríguez, licenciado en teología, es sustituido por un economista que afirma tener la Biblia como principal referencia.
	General de reserva del Ejército
	El diplomático niega la existencia del calentamiento global, afirma que el globalismo es una ideología anticristiana dominada por el marxismo cultural, y que el nazismo y el fascismo son movimientos de izquierda.
	Graduado en ciencias militares
	Pastor presbiteriano
	Graduado en Ciencias Militares y capitán del Ejército brasileño
	Canuto, que es ingeniero, es reemplazado por Marinho, economista.
	Terra, miembro del FPSP y el FPE, es sustituido por Lorenzoni, también miembro de ambos frentes.
	Miembro de la Iglesia de Maranata.
	Almirante de la Marina, en activo.
	Pastora pentecostal
	Abogado

Además del aparato estatal militarizado, Bolsonaro también se ha comprometido a fortalecer la presencia evangélica. Entre los pentecostales que ocupan puestos clave, cabe destacar a la ministra y pastora evangélica Damares Alves al frente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (en los gobiernos anteriores se denominaba Ministerio de Derechos Humanos) y al luterano Onyx Lorenzoni, exministro de la Casa Civil, actual ministro de Ciudadanía, ambos con actuaciones rotundas a favor del FPSP y el FPE. De esta manera, se entiende que la alianza entre el FPE en la Cámara de Diputados y el Gobierno federal de Bolsonaro –en este caso liderado por Alves– produce un *backlash* en los derechos de la mujer y la población LGBTIQ+. Un ejemplo de esta alianza y articulación es el (re)lanzamiento del Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y la Familia en 2019, que contó con la presencia y el apoyo explícito de Alves. Como resultado, nunca se presentaron tantos proyectos contrarios a la legalización del aborto como en 2019, el primer año del Gobierno de Bolsonaro, incluso en los casos en que ya es legal –después de una violación o cuando el embarazo constituye un peligro para la vida de la madre– (Da Silva y Bozza Martins, 2019).

En el escenario internacional, Alves es la articuladora y representante del Gobierno de Bolsonaro para la difusión de una política de valorización de la moral cristiana, influyendo en la política exterior brasileña: liderando alianzas con países como Egipto, Irak, Arabia Saudita y Hungría; y (re)alineando Brasil con los Estados Unidos de Donald Trump (Coutinho y Hinz, 2020). Bajo las instrucciones del nuevo Gobierno, las delegaciones brasileñas han vetado toda mención del uso de la palabra *género* en las resoluciones de las Naciones Unidas –formulaciones estas que habían sido introducidas por consenso en las Conferencias de El Cairo y Beijing de los años noventa⁷ (Folha de São Paulo, 2019).

En relación con el FPSP, es significativo el aumento de sus miembros y la creciente aceptación de sus discursos de orden público propagados desde el inicio de la Presidencia de Bolsonaro. Así pues, el frente parlamentario, el FPSP ya no actúa como un veto, sino como una agenda y un fijador de temas, siendo pieza fundamental para el fortalecimiento de las políticas represivas y la deslegitimación de las políticas de garantía (Macaulay, 2017). Desde enero de 2019, el Gobierno de Bolsonaro ha hecho varios intentos de satisfacer las demandas de su base en el FPSP, incluida la flexibilización de la legislación sobre armas de fuego, así como de las penas por los excesos cometidos en operaciones policiales y militares, incluidos los homicidios cometidos por agentes de seguridad (Hinz, 2019). Un decreto emi-

7. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo (CIDP) de 1994, y Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, 1995.

tido por el presidente, el 25 de junio de 2019, aprovechaba la laguna jurídica para facilitar la adquisición de armas por parte de los llamados «CACs» (cazadores, coleccionistas y tiradores de deporte), introducida tras el plebiscito de 2005, estableciendo que los tiradores deportivos pueden poseer hasta 60 armas, los cazadores 30, y los coleccionistas 10 (Presidência da República, 2019). Como ha demostrado un estudio del Instituto Sou da Paz, los registros de CACs han crecido más del 800% en los últimos cinco años, lo que representa más de 350.000 armas en su posesión con «casos recurrentes de desviación al mercado ilegal, aunque no sea intencionalmente» (Instituto Sou da Paz, 2019).

Desde que Jair Bolsonaro asumió la Presidencia, los grupos de lobby y los empresarios de armas y municiones han estado presentes regularmente en las reuniones de su Gobierno. La empresa Taurus, la mayor fabricante brasileña de armas de fuego y proveedor de armas para todas las fuerzas policiales y de seguridad del país, acumuló un aumento del 82% en el mercado de valores en 2019 (Morrino, 2019), con 48.300 nuevas armas registradas entre enero y abril de 2020 —el 60% de estos registros realizados por ciudadanos comunes— (Rossi y Buono, 2020). De acuerdo con José Claudio Alves (2020: 4-5), la Presidencia de Bolsonaro «permitió la formulación de un proyecto político que consolidó a los agentes de seguridad, militares y milicianos en la ocupación de cargos públicos, la formulación de leyes y el lanzamiento de trayectorias electorales victoriosas» y que «la faceta ilegal de este bloque de la llamada “bancada de la bala” es precisamente la expansión de la milicia». En este sentido, es importante señalar que algunas investigaciones policiales están descubriendo relaciones entre la familia Bolsonaro y uno de los mayores grupos paramilitares de Río de Janeiro —la «Oficina del Crimen»— que ha sido declarado responsable de la ejecución de la concejal Marielle Franco en 2018. Actualmente, el senador Flávio Bolsonaro —hijo del presidente— está siendo investigado por malversación de dinero público y financiación ilegal de edificios irregulares en barrios pobres. En este caso, el dinero recaudado fue entregado a algunas personas, entre ellas al exmilitar Adriano Magalhães da Nóbrega, quien fue expulsado de la corporación policial en 2014 y era considerado el líder de la Oficina del Crimen. Destaca que Flávio Bolsonaro empleó a la madre y a la esposa de Magalhães da Nóbrega en su oficina de la Asamblea Legislativa del estado del Río de Janeiro (Filho, 2019).

Conclusión

A partir de los análisis realizados anteriormente, la Presidencia de Jair Bolsonaro se entiende como una amplia alianza sociopolítica en el escenario político nacional que implica la coexistencia y la notable y creciente convergencia entre actores del

espectro cristiano y particularmente neopentecostal, con agentes de seguridad, militares, el lobby armamentístico y grupos paramilitares y parapoliciales, las llamadas «milicias». Con un enfoque analítico sobre las disputas y los cambios en la legislatura brasileña, el presente artículo demuestra que el Gobierno de Jair Bolsonaro —que destaca por su alto número de militares y religiosos en los ministerios— se ha construido sobre una amplia base que se ha ido expandiendo a lo largo de varios ciclos legislativos en la Cámara de los Diputados brasileña. Por ello, no se trata necesariamente de algo nuevo, sino de la consolidación de una agenda política guiada por valores conservadores e inserta en las acciones de grupos con un poder cada vez mayor para orientar las políticas nacionales.

La coexistencia y creciente convergencia de estos grupos del espectro neopentecostal y securitario, que aquí se ha buscado demostrar, encuentra su núcleo de unión

La presencia neopentecostal en la política ha llevado a cabo una guerra en la esfera ideológica y cultural, aumentando el abanico de posibles enemigos y amenazas: las personas LGBTIQ+, las mujeres que luchan por la libre elección de seguir o no con un embarazo, las activistas feministas y cualquier persona cuyo estilo de vida u opciones morales difieran de un modelo familiar tradicional y heteronormativo.

en un proyecto conservador y tradicional, con una base electoral fuertemente anclada en las periferias urbanas, marcadas por el abandono del Estado y la violencia sistémica, ya sea perpetrada por el narcotráfico o grupos de exterminio y milicianos. Como ha argumentado Alves (2002: 78), ha surgido una «alianza insospechada» entre los tres poderes locales de las periferias pobres —el tráfico de drogas, las iglesias evangélicas y la milicia y otros agentes estatales— que contribuye al

«mantenimiento de una estructura de poder local clientelar, violenta y conservadora, en la que ninguno de los implicados asume ningún vínculo con el otro».

A nivel de la legislatura federal, se confirma esta facilidad de adaptación de ambas fuerzas conservadoras: el FPSP y el FPE. Si la idea misma de la que se nutre el concepto de seguridad presume la idea de un enemigo interno o externo (Koonings y Kruijt, 1999; Chevigny, 2003; Pearce, 2010) y la «guerra contra las drogas» se ha llevado a cabo con un coste humano desastroso y un beneficio extremadamente elevado para la industria armamentística y las empresas de seguridad privada en las últimas décadas, la presencia neopentecostal en la política ha llevado a cabo esta guerra en la esfera ideológica y cultural, aumentando únicamente el abanico de posibles enemigos y amenazas: las personas LGBTIQ+, las mujeres que luchan por la libre elección de seguir o no con un embarazo, las activistas feministas y, como también se ha visto en otros países (Berg, 2019), cualquier persona cuyo estilo de vida u opciones morales difieran de un modelo familiar tradicional y heteronormativo.

No es de extrañar, así, que esta oposición moral entre «el bien y el mal», tejida discursivamente por miembros ilustres del FPE y el FPSP, haya llevado la polarización política en el Brasil democrático a cotas desconocidas hasta la elección de 2018; eliminando la posibilidad de encontrar soluciones políticas y generando debates agónicos y el contexto propicio para la elección de un populista de la extrema derecha –oriundo de un pequeño partido político– como salvador mesiánico que encabeza un proyecto de defensa nacional: la defensa de la familia tradicional y de la vida, ya sea entendida como un proyecto de lucha contra los derechos sexuales y reproductivos o a favor del armamento popular.

Referencias bibliográficas

- Agência Brasil. «Eduardo Cunha é eleito em primeiro turno presidente da Câmara com 267 votos». *Agência Brasil*, (1 de febrero de 2015) (en línea) <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-02/eduardo-cunha-e-eleito-em-primeiro-turno-presidente-da-camara-com-267-votos>
- Alves, José Claudio S. «Violência e religião na Baixada Fluminense: uma proposta teórico-metodológica». *Revista Rio de Janeiro*, n.º 8 (2002), p. 59-82.
- Alves, José Claudio S. *Dos barões ao extermínio: uma história da violência na Baixada Fluminense*. Duque de Caxias: Clio, 2003.
- Alves, José Claudio S. «Chame a milícia: O Estado e a violência em tempos de coronavírus». *Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social*, Reflexões na Pandemia, 2020, p. 1-7 (en línea) [Fecha de consulta: 09.09.2020] <https://www.reflexpandemia.org/texto-8>
- Araújo, Victor. *A Religião distrai os pobres?* Tesis de doctorado en Ciencia Política, Universidade de São Paulo, 2019.
- Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. *Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro*. ALERJ, Comissão Parlamentar de Inquérito, Rio de Janeiro, 2008.
- Balloussier, Anna Virginia. «Evangélicos podem desbancar católicos no Brasil em pouco mais de uma década». *Folha de São Paulo*, (14 de enero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/01/evangelicos-podem-desbancar-catolicos-no-brasil-em-pouco-mais-de-uma-decada.shtml>
- Barifouse, Rafael. «O que dizem os outros 11 pedidos de impeachment contra Dilma». *BBC Brasil*, (17 de abril de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 25.03.2020] https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160414_outros_pedidos_impeachment_rb

- Barrucho, Luis. «Brasil de Bolsonaro tem maior proporção de militares como ministros do que Venezuela; especialistas veem riscos». *BBC Brasil*, (26 de febrero de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2020] <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51646346>
- Berg, Lynn. «Between Anti-Feminism and Ethnicized Sexism. Far-right gender politics in Germany». En: Fielitz, Maik y Thurston, Nick (eds.). *Post-Digital Cultures of the Far Right: Online Actions and Offline Consequences in Europe and the US*. Bielefeld: transcript-Verlag, 2019, p. 79-91.
- Botelho, André y Ferreira, Gabriela Nunes (orgs.). *Revisão do pensamento conservador: ideias e política no Brasil*. São Paulo: Hucitec y Fapesp, 2010.
- Braga, Isabel. «Cunha rompe com o governo Dilma e diz que agora é de oposição». *O Globo*, (17 de julio de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://oglobo.globo.com/brasil/cunha-rompe-com-governo-dilma-diz-que-agora-de-oposicao-16804174>
- Câmara dos Deputados. «Projeto de Lei PL 1135/1991». *camara.leg.br* (28 de mayo de 1991) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16299>
- Câmara dos Deputados. «Ato da mesa de 21 de julho de 2005» (21 julio 2005) (en línea) [Fecha de consulta: 09.09.2020] https://www2.camara.leg.br/legin/fed/atomes_sn/2005/atodamesa-35565-21-julho-2005-537881-publicacaooriginal-30947-cn.html
- Câmara dos Deputados. Frente Parlamentar da Segurança Pública (2011) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=351>
- Câmara dos Deputados. Frente Parlamentar da Segurança Pública (2015a) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53460>
- Câmara dos Deputados. «Projeto de Lei PL 713/2015». *camara.leg.br* (12 de marzo de 2015b) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=996852>
- Câmara dos Deputados. *Secretaria Geral de Mesa. Lista de Votantes por UF* (18 abril 2016) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www.camara.leg.br/internet/votacao/PARECER%20-%20DA%20COMISS%20C3%83O%20ESPECIAL%20DCR%201-2015.pdf>
- Câmara dos Deputados. «Relatório das atividades da CSPCCO 2018». *camara.leg.br*, (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco/documentos/relatorios-de-atividades/Relatriodeatividades2018CSPCCO-versofinal2512019.pdf>

- Câmara dos Deputados. «Frente Parlamentar da Segurança Pública». *camara.leg.br* (6 de febrero de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53890>
- Câmara dos Deputados. «PL 6125/2019» (21 noviembre 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1D20F3530DFD70597245DD5B294325CF.proposicoesWebExterno2?codteor=1836676&filename=PL+6125/2019
- Cano, Ignacio y Duarte, Thais. *No sapatinho. A evolução das milícias no Rio de Janeiro (2008-2011)*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2012.
- Cano, Ignacio y Loot, Carolina. «Seis por meia dúzia? Um estudo exploratório do fenômeno das chamadas “milícias” no Rio de Janeiro». En: Justiça Global (ed.). *Segurança, Tráfico e Milícias no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2008, p. 48-103.
- Cepêda, Vera. «A Nova Direita no Brasil: contextos e matrizes conceituais». *Revista Mediações*, vol. 23, n.º 2 (2018), p. 75-122.
- Chevigny, Paul. «The populism of fear: Politics of crime in the Americas». *Punishment & Society*, vol. 5, n.º 1 (2003), p. 77-96.
- Codato, Adriano; Bolognesi, Bruno y Roeder, Karolina Mattos. «A nova direita brasileira: uma análise da dinâmica partidária e eleitoral do campo conservador». En: Velasco e Cruz, Sebastião; Kaysel, André y Cotas, Gustavo (orgs.). *Direita, volver! O retorno da direita e o ciclo político brasileiro*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015 p. 115-144.
- Coutinho, Aline Beatriz y Hinz, Kristina. «Back to the Past: Brazil's Backlash of Reproductive Justice in its Domestic and Foreign Policy». *Disrupted*, vol. 2, n.º 1 (2020), p. 12-17.
- Da Silva, Vitória Régia y Bozza Martins, Flávia. «Projetos de lei da Câmara contrários ao aborto batem recorde em 2019». *Carta Capital*, (28 de septiembre de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/projetos-de-lei-da-camara-contrarios-ao-aborto-batem-recorde-em-2019/>
- Diamond, Sara. *Roads to dominion: right-wing movements and political power in the United States*. Nueva York: Guilford Press, 1995.
- Filho, João. «Bolsonaro pode não ter relação com a morte de Marielle, mas tem tudo a ver com os suspeitos». *The Intercept Brasil*, (3 de noviembre de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 09.09.2020] <https://theintercept.com/2019/11/03/bolsonaro-escritorio-do-crime-marielle-queiroz-milicia/>
- Folha De São Paulo. «Diferença entre “não” e “sim” supera 27 pontos percentuais». *Folha de São Paulo*, Referendo sobre venda de armas, (24 de octubre de 2005) (en línea) [Fecha de consulta: 09.09.2020] <https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u114508.shtml>

- Folha de São Paulo. «Itamaraty orienta diplomatas a frisar que gênero é apenas sexo biológico». *Folha de São Paulo*, (26 de junio de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/itamaraty-orienta-diplomatas-a-frisar-que-genero-e-apanas-sexo-biologico.shtml>
- Grandin, Greg. *Empire's Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism*. Nueva York: Metropolitan Books, 2006.
- Gripp, Allan. «Não: R\$ 5,8 milhões de Taurus e CBC». *O Globo*, (25 de noviembre de 2005) (en línea) https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/395151/complemento_1.htm?sequence=2
- Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism*. Nueva York: Oxford University Press, 2005.
- High, Brandon. «The Recent Historiography of American Neoconservatism». *The Historical Journal*, vol. 52, n.º 2 (2009), p. 475-491.
- Hinz, Kristina. «Why Jair Bolsonaro's new security policy endangers the lives of black and marginalized women». *Open Democracy*, (8 de agosto de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 29.03.2020] <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/nova-pol%C3%ADtica-de-seguran%C3%A7a-de-bolsonaro-p%C3%B5e-em-risco-mulheres-negras-e-marginalizadas-en/>
- IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. «Censo 2010: número de católicos cai e aumenta o de evangélicos, espíritas e sem religião». *IBGE*, (29 de junio de 2012) (en línea) [Fecha de consulta: 30.03.2020] <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&id=3&idnoticia=2170&xbusca=1&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-aumenta-evangelicos-espiritas-sem-religiao>
- Instituto Sou Da Paz. «Nota pública: Decreto sobre CACs altera lei de controle das armas no país em detrimento da segurança pública». *Instituto Sou Da Paz*, (7 de mayo de 2019) (en línea) <https://soudapaz.org/noticias/nota-publica-decreto-sobre-cacs-altera-lei-de-controle-das-armas-no-pais-em-detrimento-da-seguranca-publica/>
- Jacob, César; Hees, Dora R.; Waniez, Philippe y Brustlein, Violette. «Território, cidade e religião no Brasil». *Religião & Sociedade*, vol. 24, n.º 2 (2004), p. 126-151.
- Koonings, Kees y Krujit, Dirk. *Societies of Fear: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America*. Londres: Zed, 1999.
- Lacerda, Marina. *O novo conservadorismo brasileiro: de Reagan a Bolsonaro*. Porto Alegre: Editora Zouk, 2019.
- Leher, Roberto. «Opção pelo mercado é incompatível com a democracia: a crise no governo Lula da Silva e no PT e as lutas sociais». *Observatorio Social de América Latina*, vol. 6, n.º 17 (2005), p. 109-117 (en línea) [Fecha de consulta: 30.03.2020] <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110313053127/15surleher.pdf>

- Macaulay, Fiona. «Presidents, producers and politics: law-and-order policy in Brazil from Cardoso to Dilma». *Policy Studies*, vol. 38, n.º 3 (2017), p. 248-261.
- Mariano, Rayani y Biroli, Flávia. «O debate sobre aborto na Câmara dos Deputados (1991-2014): posições e vozes das mulheres parlamentares». *Cadernos Pagu*, vol. 59, n.º 50 (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 30.03.2020] <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8650734>
- Mattoso, Camila y Bragon, Ranier. «Bolsonaro amplia presença de militares em 30 órgãos federais». *Folha de São Paulo*, (28 de marzo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/bolsonaro-amplia-presenca-de-militares-em-30-orgaos-federais.shtml>
- Messenberg, Débora. «O “alto” e o “baixo clero” do Parlamento brasileiro». *Cadernos Asleis, Brasília*, vol. 40 (2010), p. 79-107.
- Miguel, Luis Felipe. «Aborto e democracia». *Revista Estudos Feministas*, vol. 20, n.º 3 (2012) p. 657-672 (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2012000300004>
- Monteiro, André. «Boi, Bíblia e Bala: ‘bancada BBB’ engrossa derrota de Dilma na Câmara». *Folha de São Paulo*, (18 de abril de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1762237-bancada-bbb-do-boi-bibia-e-bala-engrossa-derrota-de-dilma-na-camara.shtml>
- Morrino, Thiago Ferrer. «Taurus, ascensão de uma fabricante de armas com Bolsonaro». *El País Brasil*, (15 de enero de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2020] https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/09/economia/1547038307_822194.html
- Muniz, Jacqueline y Proença Junior, Domício. «Forças armadas e policiamento». *Revista Brasileira de Segurança Pública*, vol. 1, n.º 1 (2007), p. 48-63.
- Nascimento, Luciano. «Senado aprova revogação de decreto que flexibiliza acesso a armas». *Agência Brasil*, (18 de junio de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 29.03.2020] <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-06/senado-aprova-revogacao-de-decreto-que-flexibiliza-acesso-armas>
- Odilla, Fernanda y Seligman, Felipe. «Retardatário no apoio a Dilma, PSC leva R\$ 4,7 mi do PT». *Folha de São Paulo*, (2 de octubre de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 09.09.2020] <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0212201018.htm>
- Oliveira, Cecília; Couto, Maria Isabel; Hirota, Renata y Spagnulo, Sérgio. «Tá tudo dominado. As milícias assumiram o controle do Rio de Janeiro». *The Intercept Brasil*, (5 de abril de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 09.09.2020] <https://theintercept.com/2018/04/05/milicia-controle-rio-de-janeiro/>

- Pearce, Jenny. «Perverse state formation and securitized democracy in Latin America». *Democratization*, vol. 17, n.º 2 (2010), p. 286-306 (en línea), [Fecha de consulta: 09 septiembre 2020] <https://doi.org/10.1080/13510341003588716>
- Peixinho, Manoel Messias. *Os fundamentos constitucionais e legais que regulam o processo de impeachment do presidente da República no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Gramma, 2018.
- Pires, Carol. «Em carta, Dilma assina compromisso contra o aborto». *Estadão*, (15 de octubre de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 31.03.2020] <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-carta-dilma-assina-compromisso-contra-o-aborto,625257>
- Presidência Da República. «Lei no 10.826». *legislacao.presidencia.gov.br*, (22 de diciembre de 2003) (en línea) <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=10826&ano=2003&ato=ea7QTSE50dRpWT25c>
- Presidência Da República. «Decreto nº 9.846». *legislacao.presidencia.gov.br*, (25 de junio de 2019) (en línea) <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=9846&ano=2019&ato=2dbcXVE9keZpWTe91>
- Rangel, Patricia y Dultra, Eneida Vinhaes. «Elections in times of neo-coupism and populism: A short essay on Brazil's right-wing presidential candidates' plans for governance and their proposals for gender and Afro-Brazilians». *Irish Journal of Sociology*, vol. 27, n.º 1 (2019), p. 72-79 (en línea) [Fecha de consulta: 22.03.2020] <https://doi.org/10.1177%2F0791603519827224>
- República Federativa Do Brasil. *Diário da Câmara dos Deputados*, Año LVIII, n.º 144, (5 de septiembre de 2003), Brasilia (en línea) [Fecha de consulta: 22.03.2020] <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD-05SET2003.pdf#page=>
- República Federativa Do Brasil. *Diário da Câmara dos Deputados*, Año LX, n.º 186, (26 de octubre de 2005), Brasilia (en línea) [Fecha de consulta: 22.03.2020] <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD26OUT2005.pdf#page=>
- República Federativa Do Brasil. *Diário da Câmara dos Deputados*, Año LXVI, n.º 35, (2 de marzo de 2011), Brasilia (en línea) [Fecha de consulta: 21.03.2020] <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD02MAR2011.pdf#page=>
- Rossi, Amanda y Buono, Renata. «O Brasil se arma». *Revista Piauí*, (22 de junio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 09.09.2020] https://piaui.folha.uol.com.br/o-brasil-se-arma/?utm_campaign=a_semana_na_piaui_11&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
- Santos, Rayani. *O debate parlamentar sobre aborto no Brasil: atores, posições e argumentos*. Tesis de maestría en ciencia política, Universidade de Brasília, 2015.
- Santos, Eveline Ribeiro dos. *A Bancada da Bala na câmara: quem são e o que propõem esses deputados*. Tesis de maestría en sociología, Universidade de Brasília, 2018.

- Souza, Nivaldo y Caram, Bernardo. «Congresso eleito é o mais conservador desde 1964, afirma Diap». *Estado de São Paulo*, (6 de octubre de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 25.03.2020] <https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,congresso-eleito-e-o-mais-conservador-desde-1964-afirma-diap,1572528>
- Valle, Vinicius Saragiotto Magalhães. «Direita religiosa e partidos políticos no Brasil: os casos do PRB e do PSC». *Teoria e Cultura*, vol. 13, n.º 2 (2018), p. 85-100 (en línea) [Fecha de consulta: 22.03.2020] <https://doi.org/10.34019/2318-101X.2018.v13.12425>



290

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020



Libros e ideas en tiempos de incertidumbre

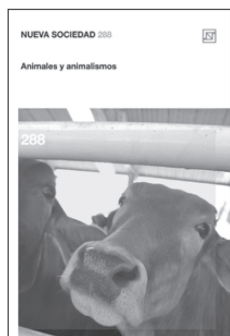
COYUNTURA: **Pablo Stefanoni**. La montaña rusa boliviana. Entrevista a Pablo Ortiz.

TRIBUNA GLOBAL: **Timothy Kuhner**. La Carta de la Oligarquía. Capitalismo y democracia.

TEMA CENTRAL: **Ricardo Dudda**. Dos tazas de capitalismo. Desigualdades, liberalismo y meritocracia. **Verónica Gago**. Lecturas sobre feminismo y neoliberalismo. **Rob Lucas**. Capitalismo de vigilancia.

Yanina Welp. La democracia y el declive de las elites. **Marc Saint-Upéry**. *Red Mirror*: ¿qué futuro se escribe en China? Entrevista a Simone Pieranni. **Benjamin Kunkel**. ¿De la socialdemocracia al socialismo? **Ingrid Spiller**. ¿Cómo cambiar el mundo? **Pablo Carmona Pascual**. Patriotas indignados, Europa como fantasma. **Tomás Borovinsky**. Fragmentar el futuro. Hacia una nueva relación humano/no humano. **Juan Duchesne-Winter**. ¿Por qué el comunismo resulta «insoportable»? Más allá de la economía libidinal.

ENSAYO: **Eduardo Grüner**. Sartre: hacia una moral de la ambigüedad.



288

JULIO-AGOSTO 2020

Animales y animalismos



289

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020

Fronteras latinoamericanas
Más allá de los límites

PAGOS: Solicite precios de suscripción y datos para el pago a <info@nuso.org> o <distribucion@nuso.org>.

EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO
Geopolíticas latinoamericanas

Las mujeres de las derechas latinoamericanas del siglo XXI

Latin American women of the right in the 21st century

Verónica Giordano

Investigadora, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires y CONICET, Argentina. veronicaxgiordano@gmail.com.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7299-6984>

Gina Paola Rodríguez

Investigadora, Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. paolitarodriguez@yahoo.com.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1702-3386>

Cómo citar este artículo: Giordano, Verónica y Rodríguez, Gina Paola. «Las mujeres de las derechas latinoamericanas del siglo XXI». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 215-237. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.215

Resumen: En América Latina, las primeras dos décadas del siglo XXI han sido un momento de crecimiento del liderazgo político de las mujeres. No obstante, ello no se ha visto reflejado en las investigaciones científicas recientes a nivel regional, relativamente escasas, ni aún menos en aquellas enfocadas en los partidos y movimientos de derecha. Basándose en la revisión de fuentes periodísticas y discursos de mujeres referentes de las derechas en la actualidad, este artículo busca llenar esta vacancia interrogándose sobre la trayectoria de estas mujeres y las visiones de género desplegadas en sus discursos y agendas políticas. Para ello, estudia un conjunto de mujeres de derechas latinoamericanas vinculadas o aspirantes a los más altos cargos del Poder Ejecutivo: Mireya Moscoso (Panamá), Laura Chinchilla (Costa Rica), Gabriela Michetti (Argentina), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fonet (Chile).

Palabras clave: América Latina, mujeres, derechas, perspectiva de género, política

Abstract: In Latin America, the first two decades of the 21st century have been a time of growth for women's political leadership. However, this has not been reflected in recent scientific research at regional level, which remains relatively scarce on the subject, especially when it comes to right-wing parties and movements. Based on a study of journalistic sources and the discourses of leading women on the right, this paper seeks to fill this gap by examining the trajectories of these women and the gender views expressed in their political discourses and agendas. To do this, it studies a group of Latin American women linked to or aspiring to the highest positions in executive power: Mireya Moscoso (Panama), Laura Chinchilla (Costa Rica), Gabriela Michetti (Argentina), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Keiko Fujimori (Peru) and Evelyn Martínez Fonet (Chile).

Key words: Latin America, women, right wing, gender perspective, politics

Introducción: contexto y metodología

El año 1989 marcó el inicio de la implementación de las políticas inscriptas en el Consenso de Washington en América Latina. En este contexto de aplicación del neoliberalismo, las derechas optaron por competir en elecciones apelando a la democracia en términos instrumentales (Hinkelammert, 1988), hasta la actualidad. Recientemente, estas fuerzas ganaron elecciones en Argentina con Mauricio Macri (2015-2019), en Perú con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en Colombia con Iván Duque (2018), en Brasil con Jair Bolsonaro (2019) y en Uruguay con Luis Alberto Lacalle Pou (con mandato desde 2020). En paralelo, las dos primeras décadas del siglo XXI han sido en la región un momento de crecimiento del liderazgo político de las mujeres en todo el arco ideológico. El telón de fondo de esta mayor presencia

Las investigaciones dedicadas al liderazgo político femenino en América Latina se han incrementado, pero son aún muy escasas aquellas enfocadas en las mujeres pertenecientes a partidos y movimientos de derecha; además, poco se ha dicho acerca de sus discursos e ideologías.

femenina se vincula con una serie de reformas constitucionales y/o legislativas que han buscado superar las rémoras autoritarias y excluyentes de las décadas anteriores. En este sentido, en 17 países tuvieron lugar al menos 37 procesos de reforma legislativa, según sostienen Freidenberg y Lajas García (2017). Este proceso de

democratización, que no es completo ni homogéneo en todos los países, está hoy en plena ebullición al generar debates profundos acerca del rol de las mujeres en la sociedad, de los derechos que las asisten y de la responsabilidad de los estados en el desmonte de todas las formas de opresión y discriminación por razón de género.

Si ponemos el foco en las presidencias del Poder Ejecutivo, vemos que hubo cinco países con mujeres en ese cargo: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Panamá. Este número se incrementa cuando, además de considerar aquellas mujeres que han vencido en las urnas, incluimos a las que han presentado candidaturas. Así, en el período 1989-2019, hubo países con más de 10 candidaturas femeninas (Argentina y Guatemala), entre 9 y 5 (Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y México) y menos de 4 (Panamá, Nicaragua, Honduras, Uruguay, Paraguay, Bolivia y El Salvador). En esta misma línea, y como ya se ha analizado (Giordano, 2013), en 2010 la región tenía un promedio de representación parlamentaria de mujeres del 23%¹. Al respecto, conviene enfatizar que,

1 Según las mediciones del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, 2011.

comparativamente, la presencia de mujeres en los espacios deliberativos (parlamentos, asambleas, consejos, etc.) es mucho mayor que en puestos de carácter ejecutivo que, hasta la fecha, continúan siendo un terreno casi exclusivo de los varones (IPU, 2020).

Este artículo se ocupa, en concreto, de estudiar el rol de las mujeres en las fuerzas políticas de las derechas, así como su participación en la contienda electoral por ocupar los máximos cargos ejecutivos. En trabajos anteriores (Giordano, 2020), se ha analizado el mapa de las derechas latinoamericanas del período neoliberal y se ha propuesto un criterio de clasificación referente a la vía de acceso al poder del Estado, es decir, por la vía golpista o electoral. En todos los casos de liderazgos de mujeres aquí analizados, se trata de liderazgos insertos en la competencia por el poder por la vía partidaria y electoral².

Si bien las investigaciones dedicadas al liderazgo político femenino en América Latina se han incrementado (Fernández Poncella, 2008; Fernández Ramil y Oliva Espinosa, 2012; Fernández Matos, 2017; Freidenberg *et al.*, 2018; Seisdedos y Grande, 2015), aquellas enfocadas en las mujeres pertenecientes a partidos y movimientos de derecha son aún muy escasas. Además, buena parte de los estudios se han ocupado de la cuantificación de la participación femenina en la política partidaria (IPU, 2020; CEPAL, 2011), el impacto de los sistemas de cuotas (Schwindt-Bayer, 2009; Archenti y Tula, 2007) o la representación en los sistemas subnacionales (Caminotti y Freidenberg, 2016; PNUD, 2013), pero poco se ha dicho acerca de los discursos e ideologías defendidos por las mujeres que alcanzan las más altas posiciones de liderazgo. En este sentido, este trabajo aspira a contribuir a llenar esta vacancia, asumiendo que, por una parte, no basta con ocupar estas posiciones para lograr cambios significativos en favor de las mujeres y, por la otra, que es necesario conocer qué y cómo hacen política las mujeres de la derecha. Así, nos ocupamos, en particular, de sus trayectorias, discursos y líneas de acción para observar en qué medida son subsidiarias de las visiones de género de los partidos que integran y representan.

-
2. La opción por la vía electoral de las derechas no ha sido la única. Recientemente, también hubo interrupciones golpistas de gobiernos elegidos democráticamente: en Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia (además de otros intentos que no alcanzaron su objetivo). Por el momento, estas prácticas golpistas no han estado seguidas de la instauración de formatos dictatoriales. Para el tema que nos ocupa, cabe detenerse un instante en el caso de Bolivia, pues la Presidencia de facto de Jeanine Añez (2019-2020) introduce un matiz a la consideración de la participación política de las mujeres derechistas: el liderazgo femenino en las derechas golpistas. Al mismo tiempo, esto refuerza la importancia de abordar el peso específico de las mujeres en los máximos cargos ejecutivos.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación es de carácter cualitativo, con un alcance crítico-hermenéutico. El objetivo es reconstruir y analizar las visiones y agendas políticas en materia de género de un conjunto de mujeres de derechas que han ocupado los más altos cargos del Poder Ejecutivo en seis países de América Latina, a partir del estudio de sus discursos vertidos en intervenciones públicas y en entrevistas en medios de comunicación. Para ello, se ha empleado el método de análisis temático del software Atlas Ti, buscando códigos y patrones en más de 50 documentos con base en la coincidencia entre los nombres de las mujeres en estudio y seis descriptores: mujer, género, aborto, matrimonio igualitario, familia y feminismo. En el caso de las fuentes periodísticas, se ha buscado que estas pertenezcan a medios de comunicación de todo el espectro ideológico, entendiendo que, leídas con sentido crítico, ofrecen un registro flexible de la historia que permite rastrear las

Este artículo estudia las trayectorias profesionales y políticas, así como las visiones de género, de mujeres de derecha que han alcanzado posiciones de alta jerarquía en seis países de América Latina: Mireya Moscoso (Panamá), Laura Chinchilla (Costa Rica), Gabriela Michetti (Argentina), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fonet (Chile).

diferentes ideologías y complementar los documentos oficiales (Hernández Ramos, 2017; Yanes, 1995).

En cuanto a la estructura, el artículo se compone de tres partes. En primer lugar, se analiza la trayectoria profesional y política de seis mujeres derechistas vinculadas o aspirantes a los más altos cargos del Poder Ejecutivo: dos presidentas en el siglo XXI, Mireya Moscoso (Panamá) y Laura

Chinchilla (Costa Rica); dos vicepresidentas, Gabriela Michetti (Argentina) y Marta Lucía Ramírez (Colombia), y dos candidatas que encabezaron las listas por el segundo partido con mayor votación, Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fonet (Chile). En segundo lugar, se estudian las visiones de género en relación con tópicos como el feminismo, el aborto, la familia y los derechos de las disidencias sexo-genéricas, entre otros. Por último, en tercer lugar, se concluye con una visión de conjunto y de los principales hallazgos.

Trayectorias de las mujeres de derechas

La trayectoria profesional y política de las derechistas latinoamericanas es, en general, extensa y nutrida, al combinar la gestión en diversos cargos del Poder Ejecutivo con la labor parlamentaria y, en algunos casos, el desempeño en el sector privado y en organismos internacionales. Este recorrido puede explicarse, en parte, por una condición inicial de privilegio asociada a sus redes de parentesco

y clase, pero también cabe interrogarse acerca de cuáles han sido las credenciales que validaron su acceso a posiciones de poder. Asimismo, es posible observar sus vínculos con movimientos religiosos, especialmente en tiempos electorales, lo que da cuenta de la influencia creciente de los grupos católicos y evangélicos y su agenda *provida* en la región.

Mireya Moscoso tenía 53 años cuando accedió al cargo de presidenta de Panamá (1999-2004) por el Partido Arnulfista. Se había acercado a la política a partir de su cargo como secretaria en la Dirección General de la Caja de Seguro Social. En 1964 participó de la campaña de Arnulfo Arias, líder conservador y nacionalista que había ejercido la Presidencia en dos oportunidades previamente. Entre 1966 y 1968, Moscoso se desempeñó como gerente de ventas en una de las empresas del líder político. Arias no resultó electo en 1964 y se presentó nuevamente en 1968, y aunque resultó vencedor fue inmediatamente derrocado por el movimiento liderado por Omar Torrijos. Con más de 40 años de diferencia de edad, Arias y Moscoso contrajeron matrimonio en el exilio ese mismo año. En 1988, el político falleció y el Partido Panameñista que lideraba quedó desmembrado. Moscoso asumió la tarea de coordinadora de inscripción del partido, el cual fue rebautizado como Partido Arnulfista en 1990. Entre 1991 y 1996 fue su presidenta y representante legal, y con él fue candidata en las elecciones de 1994, que perdió por escaso margen, y de 1999, cuando finalmente accedió a la Presidencia. En cuanto a su educación formal, tenía un título de Decoradora de Interiores de una universidad de Miami (1974). En este caso, pesó mucho la trayectoria que se forjó junto a su esposo.

Laura Chinchilla, por su parte, fue la presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014 por el Partido Liberación Nacional. Como en el caso anterior, fue la primera mujer de su país elegida para este cargo desde que se aprobó el voto femenino en 1949. Resultó ganadora por un 47% de los votos contra el 24% del candidato de centroizquierda. Fue investida presidenta a los 50 años, tras una larga carrera burocrática. Entre sus credenciales, Chinchilla cuenta con un título de grado de Ciencia Política en la Universidad de Costa Rica y un diploma de Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Dentro de su trayectoria se incluyen los cargos de vicepresidenta en el Gobierno del liberal Oscar Arias (2006-2008), diputada de la Asamblea Legislativa (2002-2006), ministra de Seguridad Pública (marzo-abril de 2008 y 1996-1998) y viceministra de Seguridad Pública (1994-1996).

Además de esta prominente carrera en la gestión y la administración pública, esta política ha tenido un vínculo sólido con organismos internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en calidad de consultora y fun-

cionaria. A esta extensa red de cargos y relaciones con las instituciones hegemónicas hemisféricas, vale sumar su membresía en organizaciones de la sociedad civil ocupadas de expandir el ideario liberal, como el Club de Madrid y la Fundación Euroamérica, ambas con sede en la capital española. En el ámbito americano, Chinchilla se desempeña como presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis de políticas públicas, compuesto por exfuncionarios del Departamento de Estado norteamericano, la Casa Blanca y 121 personalidades de la derecha política del continente. La red de Chinchilla se completa con sus contactos en el mundo religioso, una relación que se hizo explícita en tiempos de su campaña presidencial, comprometida con los «valores de la familia y la vida». Más cercana a la Iglesia católica por su profesión de fe, se opuso a eliminar la palabra «Dios» de la Constitución costarricense e intentó captar el voto cristiano y evangélico sumándose a las consignas de los grupos «provida» (De Cárdenas, 2010).

En Argentina, Gabriela Michetti fue vicepresidenta del país bajo el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Su trayectoria política empezó en 2001, y enseguida asumió el cargo de legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (2003-2007) por el partido Compromiso para el Cambio —que encabezaba Macri—, con el que ha hecho toda su carrera política. Ocupó los cargos de vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2009), diputada nacional (2009-2013) y senadora (2013-2015). En cuanto a su formación, en 1988 obtuvo el título de Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Su vínculo con la Iglesia católica databa de mucho antes. En su pueblo natal (Laprida, provincia de Buenos Aires), fue catequista, dirigente Scout y coordinadora de la Diócesis de Azul. También tuvo un brevísimo lapso en el que indagó su vocación de monja. Vinculada por línea materna con la familia política nacional (es sobrina nieta del presidente Arturo Illia, 1963-1966), no parece haber sido esta la variable más determinante de su opción por la carrera político-partidaria, en todo caso, pesó todo el conjunto de la trama familiar, cultural y social (Ventura, 2007). Tras graduarse en 1989, ingresó a la esfera del Estado como agente de gobierno, a partir de los vínculos de la universidad donde había estudiado con el Cuerpo de Administradores del Estado y, más tarde, como funcionaria del Ministerio de Economía. Realizó un curso de especialización en Solución de Diferencias en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra (2000) y una carrera de Especialización en Gestión Universitaria en la Universidad de Ottawa (2001).

Michetti accedió a la candidatura a la Vicepresidencia luego de haber perdido la interna partidaria para la Jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires frente a Horacio Rodríguez Larreta (actualmente en su segundo mandato en ese cargo). No fue aquella la primera vez que había quedado rezagada. Durante los últimos dos años de gobierno de Macri, Michetti fue desplazada del primer plano de la Casa de Gobierno por el Jefe de Gabinete Marcos Peña y, en la carrera

electoral de 2019, por otro peso pesado de la política tradicional, Miguel Ángel Pichetto. En retrospectiva, el acceso de Michetti a la Vicepresidencia parece haber sido mucho más el resultado de una jugada política a manos de una fuerza de gesto patriarcal que de un paso de autonomía de la candidata en el tablero electoral. El corolario de los cuatro años de gestión, que de algún modo ilustra este desplazamiento y subordinación, puede apreciarse en el acto en el que Macri reconoció la derrota electoral en octubre de 2019. Para moverse libremente en el espacio, Macri apoyó el micrófono en el regazo de Michetti (que se desplaza en silla de ruedas), una escena rápidamente viralizada en las redes en las que se acusaba al presidente saliente de utilizar a la *vice* de «mesita».

Respecto a Marta Lucía Ramírez, esta es la actual vicepresidenta de Colombia (2018-2022), posición que alcanzó luego de perder en 2017 la interna de precandidatos del Partido Centro Democrático frente al actual presidente Iván Duque. Los orígenes partidarios de Ramírez, de 54 años, se hallan en el tradicional Partido Conservador que, a comienzos de los 2000, había sumado su apoyo a Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de la nación y líder histórico de la ultraderecha colombiana. Educada desde muy joven en el colegio benedictino, la política ha hecho explícita su relación con el mundo religioso. Sin embargo, no ha logrado capitalizar este vínculo en sus campañas a la Presidencia. Se formó como abogada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y tiene tres posgrados en la Universidad de Harvard. Ha desarrollado una carrera en el campo del comercio y las finanzas internacionales, alternando el trabajo en el sector privado con la gestión pública. En su paso por el Estado, condujo el Instituto de Comercio Exterior (INCOMEX; en 1991-1992) y los ministerios de Comercio Exterior (1998-2002) y Defensa (2002-2003). También fue senadora por el Partido de la Unidad Nacional (2006-2009). En el sector privado, Ramírez se desempeñó como presidenta ejecutiva de Invercolsa (1997-1998) y gerente general de su propia consultora Ramírez & Orozco International Strategy Consultants (hasta 1998). Recientemente, se han hecho públicos sus vínculos estrechos con el sector financiero y en particular con el grupo AVAL presidido por Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los banqueros y constructores más ricos del país (Pulzo, 2019). En estos momentos se encuentra envuelta en un escándalo de corrupción por su supuesta intervención en negociaciones a favor del grupo AVAL y la empresa brasileña

La trayectoria profesional y política de las derechistas latinoamericanas que alcanzan altos cargos en el Poder Ejecutivo es extensa y nutrida, al combinarlos con su labor parlamentaria y, a veces, en el sector privado u organismos internacionales. Se observan asimismo sus vínculos con movimientos religiosos, lo que da cuenta de la influencia creciente de los grupos católicos y evangélicos y su agenda provida en la región.

Odebrecht en el contrato de construcción de la ruta del sol (Semana, 2019), además de por los comprobados vínculos de su hermano y esposo con el narcotráfico.

En Perú, Keiko Fujimori es la lideresa del partido Fuerza Popular, por lo que ocupa un lugar central en la política peruana, aun cuando se encuentra en prisión por cargos de lavado de activos de la empresa Odebrecht en sus campañas presidenciales. Desde sus tiempos como primera dama (entre 1994 y 2000, en reemplazo de su madre, apartada de esta posición luego de un conflictivo y violento divorcio de Alberto Fujimori), Keiko ha dedicado sus esfuerzos a la vindicación heroica de la figura del exmandatario y a la articulación de una nueva generación del fujimorismo. Sus estudios en el exterior incluyen un grado en Administración de Negocios de la Universidad de Boston y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia. Con el único antecedente político como congresista de la nación (2006-2011), Fujimori fue candidata a la Presidencia en las elecciones generales de 2011 y de 2016. En estas últimas quedó en segundo lugar por un estrecho margen frente al neoliberal Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio (PPK).

El perfil liberal-tecnocrático de mujeres como Chinchilla, Michetti y Ramírez contrasta con la figura de Keiko Fujimori, cuyo discurso populista y anti-elitista se dirige a las mujeres de clase obrera, cabezas de familia y víctimas de múltiples discriminaciones; en este sentido, se acerca más al tipo de liderazgo ejercido por Moscoso de estilo populista. En otros trabajos (Rodríguez, 2019) ya hemos distinguido diversos estilos políticos dentro del campo de las derechas: populista autoritario, liberal-tecnocrático y conservador, siendo Keiko Fujimori ejemplo de la primera categoría. En sus intervenciones públicas, la fujimorista apela al legítimo resentimiento de los sectores populares y trata de devolverles una imagen de dignidad tan atractiva y potente como ficticia. Para ello, acude a una receta ensayada por Fernando De Soto en los años noventa, consistente en la homologación de la economía informal con el gran empresariado nacional y transnacional bajo la figura del emprendedurismo.

En el Plan de Gobierno para las elecciones de 2016, Keiko buscó interpelar a los sectores campesinos e informales que no encontraban espacio para desarrollar sus proyectos (Fuerza Popular, 2014). Se trataba de una fórmula que perseguía un imposible equilibrio entre dos sectores tan distantes como incompatibles, pero que fue útil para reforzar el nexo de Keiko con las provincias a través de nuevos *empresarios* que representaban el ascenso económico de sectores antiguamente rezagados y veían en Fuerza Popular la oportunidad de ingresar en la arena política. Estos fueron grandes aportantes de su campaña y aún se debate la legalidad de su actividad económica. También es conocida la vinculación de Keiko y algunos congresistas de Fuerza Popular con los grupos «provida» en defensa de la familia tradicional, como se ampliará más adelante. Al igual que

su padre –quien encontró en el cardenal del Opus Dei, Juan José Cipriani, un aliado de peso para la lucha contrainsurgente–, Keiko ha acogido en su partido a católicos y pastores evangélicos ávidos de llevar a la política su lucha contra «la ideología de género», un neologismo usado internacionalmente para denegar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres y el reconocimiento pleno de la ciudadanía a las poblaciones LGTBIQ (Rodríguez, 2019).

Desde Chile, Evelyn Matthei Fornet es, desde 2016, alcaldesa de la comuna de Providencia, una de las más ricas del país. Es licenciada en economía por la Universidad Católica de Chile, y fue diputada nacional entre 1990 y 1998 y senadora entre 1998 y 2011. De 2011 a 2013, se desempeñó como ministra de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Sebastián Piñera y, ese último año, se presentó a las elecciones para la Presidencia en las que resultó perdedora frente a la candidatura de Michelle Bachelet. Matthei fue la primera mujer de la derecha política en ser candidata presidencial, siendo si embargo Michelle Bachelet la primera en ser electa para este cargo en Chile. En 2015, Matthei anunció su regreso a la vida política y se transformó en una dura opositora a Bachelet. Era miembro del directorio del *think tank* Fundación Avanza Chile, desde donde anunció que se presentaría como candidata a la Alcaldía de Providencia en las elecciones de 2016. Cabe destacar que es hija de un alto funcionario de la dictadura de Augusto Pinochet e inició su actividad en el Estado bajo ese Gobierno de facto. En 1988, se unió a Renovación Nacional (RN), partido del cual se alejó tras conocerse su participación en el «Piñeragate». Matthei y Piñera habían sido figuras prominentes de la denominada «patrulla juvenil» y, en la elección de 1993, los dos fueron precandidatos presidenciales de RN. Sin embargo, ambas aspiraciones se vieron truncadas el 23 de agosto de 1992, cuando el empresario Ricardo Claro difundió en televisión una escucha telefónica entre Piñera y Pedro Pablo Díaz, en donde ambos discutían las formas de desacreditar públicamente a Matthei. Los dichos de Piñera fueron los siguientes: «Pero la gracia es que trate elegantemente de dejarla [a Matthei] como una *cabrita chica*, cierto, despistada, que está dando *palos de ciego* [opiniones o iniciativas al azar], sin ninguna solidez, me *entendís* tú ¿o no?». Pocos meses después, luego de severas presiones, Matthei confesó haber instigado para que se difundiera esa pieza de audio; enseguida, renunció tanto a su precandidatura presidencial como al partido. En 1999, se incorporó en las filas de la Unión Democrática Independiente (UDI).

Este lamentable episodio muestra la feroz competencia intrapartidaria y el peso de los estereotipos de género dentro de estas estructuras de fuerte corte patriarcal. Cabe notar que entre las trayectorias aquí estudiadas Matthei no es el único caso de subordinación y discriminación de género. En Colombia, Marta Lucía Ramírez debió aceptar ser fórmula vicepresidencial de Iván Duque, un hombre joven e inexperto, que nadie conocía al momento de anunciar su can-

didatura, pero que contaba con el activo más importante para ser presidente de Colombia: el aval de Álvaro Uribe Vélez. Esta no fue la primera vez que Ramírez tuvo que afrontar la subordinación a las estructuras patriarcales de la política. En los años noventa, tras haber planificado la transformación del Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) en el Ministerio de Comercio Exterior, vio cómo la ilusión de ser su primera ministra se desvanecía mientras el entonces presidente César Gaviria le daba la cartera a Juan Manuel Santos (que pavimentaba así la carrera que lo condujo a presidente de la República dos décadas después). Un amigo de confianza le diría en aquel momento que, «pese a su buena preparación, ella no era nadie políticamente hablando» (Muñoz, 2018). Desde entonces, Ramírez ha cedido varias veces sus propias pretensiones para ser quien está «detrás de» un varón y nunca como figura principal.

Las carreras políticas de las mujeres de derechas no han estado exentas de obstáculos y dificultades por su condición de género. A pesar de su formación académica y posición socioeconómica, en algunos casos, estas mujeres han debido ceder ante las aspiraciones políticas de los varones de sus espacios políticos.

En Perú, Keiko Fujimori es una figura que ha crecido a la sombra de la figura de su padre y a partir de la persecución a su madre, Susana Higuchi. Desde el año 2000, el fujimorismo se recompuso, disputando elecciones a otras fuerzas del arco de derecha, y Keiko se convirtió en su figura líder, allende la enconada competencia con su hermano Kenji. Sin alejarse de los

modos patriarcales de la política, el liderazgo de Keiko ha jugado un papel activo en la rehabilitación del modelo autoritario construido por su padre. No olvidemos que a la admiración profunda por su progenitor le antecedieron su ejercicio como primera dama, cuando su madre fue recluida y torturada por denunciar malos manejos del dinero donado por entidades privadas del Japón.

Tiende a pensarse que, por el hecho de no portar ideas que puedan ser consideradas una amenaza real para el statu quo, para las mujeres derechistas, en general, suele ser más fácil el acceso a cargos de poder. Sin embargo, como se ha podido ver, esto no ha sido necesariamente así. En efecto, las carreras políticas de las mujeres de derechas no han estado exentas de obstáculos y dificultades por su condición de género. A pesar de su formación académica y posición socioeconómica, en algunos casos, estas mujeres han debido ceder ante las aspiraciones políticas de los varones de sus espacios políticos. Tampoco puede generalizarse la idea de que las mujeres de las derechas (y las de otros polos ideológicos también) son simples fórmulas de continuidad de varones poderosos, como podría sugerir el caso de Moscoso en Panamá o incluso Keiko en Perú. Sin duda, existen casos de esposas e hijas de varones prominentes, pero entre el privilegio y la meritocracia hay matices y, sobre todo, agencia.

Las visiones de género en los discursos y líneas de acción de las mujeres de las derechas

La movilización y organización de la sociedad en torno a clivajes de género es un fenómeno reciente. El conjunto de trayectorias analizadas más arriba se despliega en un tramo temporal de dos décadas en las cuales los cambios en este plano han sido vertiginosos. Así, la experiencia de Moscoso en el Poder Ejecutivo dista de las más recientes de Ramírez o Michetti en relación con los tópicos de las agendas de derechos y de género.

Mireya Moscoso no tuvo una agenda feminista durante su Gobierno; no obstante, desde el ámbito de la Dirección Nacional de la Mujer del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, adoptó medidas encaminadas a atender la violencia contra las mujeres tales como el «Plan Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar y Políticas de Convivencia Ciudadana» (2000); la creación de una Comisión Multisectorial para reducir la violencia intrafamiliar (Decreto Ejecutivo n.º 99 de 20 de Noviembre de 2000) y el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Panamá (PIOM II, 2002-2006), que contemplaba entre sus áreas de trabajo la «Violencia Intrafamiliar y Conflictos Armados». En el año 2000, declaró el mes de marzo como «Mes de la Mujer» y dispuso la realización de actividades en el marco del día Internacional de la Mujer. Sin embargo, esta batería de leyes y protocolos con perspectiva de género, que parecen obedecer más bien a cierto ordenamiento a nivel internacional, contrasta con el decidido apoyo de Moscoso a la realización del concurso de belleza Miss Universo en 2002. En su recepción a las 71 candidatas dijo: «Gracias por venir a mi país (...) La celebración del concurso Miss Universo es una gran oportunidad para mostrar al mundo nuestras bellezas» (My Plainview, 2013). Asimismo, justificó el certamen como parte de la estrategia para atraer turismo al país. Y, si bien utilizó palabras que parecen ir en un sentido contrario a la afirmación de los estereotipos tradicionales, lo cierto es que el certamen se hizo siguiendo el canon tradicional. Recordemos los dichos de la presidenta: «(...) el certamen constituye mucho más que la simple elección de una mujer bonita, se trata de hacer coincidir en un solo sitio a las más dignas representantes de esa mujer moderna, que ha dejado de ser solo un modelo de hermosura y glamour para ser, además, profesional, dirigente y líder en cada sociedad» (La prensa, 2002). Para beneplácito de la presidenta, la panameña Justine Pasek se hizo de la corona y su participación fue reconocida con la Orden Manuel Amador Guerrero, máxima distinción de este país.

En tiempos más recientes, con algunas variantes, las mujeres de los partidos de derecha coinciden en su rechazo al término «feminismo», además de atacarlo

como teoría política y como movimiento social. Dentro de sus argumentos, lo acusan de tratar a las mujeres como víctimas y de promover una guerra contra los hombres para –así distorsionado– presentarlo como otro de los supuestos engaños del progresismo a las mujeres. En esta línea de pensamiento se ubica la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, enfática al desmarcarse del feminismo: «La lucha no pasa ya por el feminismo rabioso de los setenta. Ya no se trata de esa plataforma feminista que veía en el hombre la causa de todos los males. Mi historia ha estado basada en el acompañamiento de grandes hombres. No podría encarnar yo una posición de esa naturaleza» (Murillo, 2008). Pero su descalificación del feminismo no fue obstáculo para que promoviera la inclusión de propuestas orientadas a las mujeres dentro de su campaña y gestión. En efecto, el segundo capítulo del Plan de gobierno 2010-2014 planteaba el Programa Nacional de Cuido, para niños, niñas y personas adultas mayores (Florez-Estrada, 2010), el cual consideraba especialmente a las mujeres jefas de hogar, buscando que estas, aliviadas en el cuidado de sus hijos, pudieran «trabajar fuera del hogar y ganar los ingresos que necesitan para sacar adelante a sus familias» (Chinchilla, 2010: 5). Con el objetivo de lograr la incorporación de las mujeres al mercado extradoméstico, esta medida concebía las tareas del hogar como un trabajo no remunerable. Con ello, el territorio doméstico se mantuvo invisibilizado y siguió sin subvertirse la relación de desigualdad y dependencia económica respecto de los varones (Federici, 2013). En los hechos, el impacto de la Red de Cuido fue mínimo, como ha analizado Sagot (2017), y las declaraciones de Chinchilla, como sus políticas, han sido ampliamente criticadas por mujeres dentro y fuera del feminismo, tanto por su falta de compromiso con los derechos de las mujeres, como por su carácter conservador (Ameco Press, 2010; Salas Murillo, 2010).

Otro dato que habla de la visión de género de Chinchilla es su postura en relación con el aborto y las disidencias sexo-genéricas. Su presentación oficial como candidata coincidió con la «Marcha de la vida y de la familia», en noviembre de 2009, apoyada por la Iglesia católica, en la que 50.000 personas marcharon contra la legalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. A lo largo de su campaña, Chinchilla expresó su compromiso con la agenda de los grupos conservadores: oposición al aborto y la anticoncepción de emergencia, al matrimonio gay y a eliminar la palabra «Dios» de la Constitución (La Nación, 2010). Una vez llegada a la Presidencia, no obstante, el compromiso de Chinchilla con la agenda «provida» evolucionó hacia una postura de apoyo al aborto bajo las causales de violación y riesgo para la salud de la madre. También asumió una posición intermedia en relación con la unión de las parejas homosexuales. Aunque sin equipararla a la figura del matrimonio heterosexual, que según ella «solo puede ser la unión de un hombre y una mujer», la presidenta se

mostró partidaria de dotar de un marco jurídico a las parejas del mismo sexo; sin embargo, durante su Gobierno no avaló ninguna medida en este sentido (de Cárdenas, 2010).

En otros casos, las mujeres de las derechas pasan del rechazo explícito al uso táctico del discurso feminista. Este es el caso de Evelyn Matthei y Marta Lucía Ramírez, quienes dicen compartir la agenda feminista. En el primer caso, sin embargo, las medidas de su partido mantienen incólumes las estructuras de la opresión. En el discurso de la vicepresidenta de Colombia, la posición de igualdad frente a los hombres es presentada como producto del arrojo personal, desligándose de la deuda histórica con el movimiento de mujeres (Alegre Barrientos, 2018). Por su parte, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei se autoproclama feminista y ha hecho diversas intervenciones en pro de una agenda chilena para la equidad de género. Desde su perspectiva, «el feminismo no es de derecha o de izquierda, es cultural» (Radio Duna, 2018). En 2018 presentó al presidente Piñera una agenda para la equidad tendiente a mejorar la situación laboral de las mujeres. Según ella, el problema es que «el hombre no es corresponsable en los cuidados del hogar»; pese a ello, la medida correctiva que propuso fue la apertura de *salas cuna* que descargaran parcialmente a las mujeres del cuidado de los hijos. Se trata de una iniciativa similar a la de Laura Chinchilla en Costa Rica, que delega en otras mujeres las tareas de cuidado para que las mujeres que «salían a trabajar» redujeran su desventaja frente a los varones. Según el diagnóstico elaborado por la alcaldesa, «las mujeres no se atreven a salir de la casa por miedo al robo y por el cuidado de una persona (niño o adulto) enfermo» (Radio Duna, 2018). Así, el segundo tema estaría «parcialmente cubierto» con la medida de las *salas cuna* (si omitimos que las tareas de cuidado no solo se dirigen a personas enfermas). En cuanto al primero, este abre la puerta para una agenda de seguridad de carácter policivo. Obsérvese que el acento está puesto en la violencia padecida fuera del ámbito doméstico y con ocasión de robo. En este contexto, sorprende su apoyo a la ola feminista surgida en 2018 en la que miles de estudiantes se tomaron las universidades y colegios en denuncia del acoso y abuso sexual ocurrido en los planteles: «Las cosas pasan cuando algo las gatilla. Tal vez antes hubo muchos motivos, pero quizás no estaba madura la sensación de rabia (...) a veces es necesario un grito fuerte, de rabia y, quizás, también de extremismo para correr la valla. Si no, no se escucha» (Reyes, 2018).

Con algunas variantes, las mujeres de los partidos de derecha coinciden en su rechazo al término «feminismo», además de atacarlo como teoría política y como movimiento social. Lo acusan de tratar a las mujeres como víctimas y de promover una guerra contra los hombres, para presentarlo como otro de los supuestos engaños del progresismo a las mujeres. Aunque también pueden pasar del rechazo explícito al uso táctico del término.

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se autopercibe como feminista, aunque ha elaborado su visión de género a partir de un discurso autorreferencial en el que destaca los progresos y luchas individuales antes que la lucha del colectivo de mujeres. La meritocracia y el autoesfuerzo concretan su visión derechista del empoderamiento femenino: «En todas partes he encontrado machismo, pero he resuelto que esto no me frene. Logré cumplir con mis tareas a punta de trabajo, auténtica vocación de servicio y de transformación de este país, a pesar de las dificultades. Como ministra de Comercio Exterior no lo sentí mucho porque fui yo quien lo creó, además. Sentí mucho machismo como ministra de Defensa, porque así es el ambiente militar. No obstante, me llena de orgullo saber que di la pelea para lograr que hubiera mujeres generales. Logré que no sacaran a las coroneles del servicio, sino que siguieran concursando para el siguiente rango. Y estoy segura de que algún día veremos a una general al mando de una tropa» (Tamayo, 2019). Esta política describe al movimiento feminista «como un espacio de defensa de los derechos de las mujeres (...) cómo ser mujer y no defender nuestros derechos» (ibídem). Pero deja en evidencia su lectura ingenua, por no decir confusa, del movimiento: «Lo femenino debe aportar a la sociedad colombiana: sensibilidad, cuidado, empatía. Colombia necesita mucho más ese sello de lo femenino en el ejercicio del poder y en el manejo del Estado» (Alegre Barrientos, 2018). No solo confunde el feminismo con lo femenino, sino que cae en el esencialismo de género que le costó décadas superar a la teoría feminista imputando valores, actitudes y comportamientos «naturales» a las mujeres. En una línea similar, Ramírez entiende al hombre y la mujer como complementos necesarios: «Lo que jamás voy a hacer es ir en contra de los hombres. Necesitamos una sociedad en la que las mujeres y los hombres seamos iguales, en la que vayamos hombro a hombro, avanzando, progresando, luchando juntos» (Tamayo, 2019). Con ello, no solo difumina la desigualdad de género, sino que refuerza una imagen clásica del heteropatriarcado.

En el caso de Ramírez, el uso retórico del discurso feminista se evidencia también en su crítica acérrima a «la ideología de género» presente, según su opinión, en los Acuerdos de Paz de la Habana. La ideología de género es un discurso de circulación internacional que confunde la perspectiva de género con una ideología totalitaria que atenta contra nuestro «ser biológico natural». En el caso colombiano, fue empleada para restar legitimidad a las negociaciones y al acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el cual fue sometido a plebiscito en 2016 y dio como resultado el triunfo del «No». Esta postura defensiva devela que el *feminismo* de Ramírez se halla siempre subordinado al enfoque guerrillero de su partido que, con o sin ideología de género, se ha resistido históricamente a reconocer la existencia del conflicto armado en Colombia y a implementar

acciones reparadoras para las víctimas y sobrevivientes. Pero donde dejó más clara Ramírez su visión de género fue en la propuesta de crear un Ministerio de la Mujer y la Familia. Al mantener unidos ambos conceptos mostró que, en su comprensión, el sujeto pasible de políticas públicas son la familia tradicional y la mujer en cuanto madre. Aunque esta es una postura asumida por buena parte de la sociedad colombiana, apegada a los valores tradicionales y católicos, la propuesta de cambiar el Departamento de Prosperidad Social por el Ministerio de la Mujer y la Familia tenía un alcance mayor: reducir toda la política social a los cánones de la familia tradicional. Esta visión *cis* se plasma también en la oposición de Ramírez y su partido a la adopción igualitaria, anclada en la idea de que solo el matrimonio heterosexual puede garantizar los derechos de las infancias (Revista Fucsia, 2020).

La defensa de la familia tradicional es una bandera igualmente ondeada por Keiko Fujimori desde sus tiempos como primera dama. En 1994, asumió la Presidencia de la Fundación por los Niños del Perú, fundada en 1985 por el Gobierno de Alan García y presidida por la esposa de este. Además, acudió a las reuniones de la Cumbre de primeras damas de las Américas en las que las visiones acerca del rol de las mujeres abonaban ese terreno de ideas. Más recientemente, en el marco de la campaña presidencial de 2016, Keiko se reunió con cientos de representantes de las iglesias evangélicas, ante los que afirmó que estaba «a favor de la familia conformada por hombres y mujeres y no entre personas del mismo sexo», por lo que rechazaba la unión civil, el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de las personas homosexuales. Como ya hemos analizado en otro trabajo (Rodríguez, 2019), este alineamiento con la agenda de la fe le sumó sendos apoyos electorales por parte de sectores conservadores.

Las posturas en relación con el aborto de las mujeres de las derechas analizadas van de parcial a totalmente restrictivas. Con relación a este tema, hemos visto cómo la postura de Chinchilla transitó del prohibicionismo a la legalización en algunas causales. Por su parte, la colombiana Ramírez se ha declarado a favor solo en los casos límite contemplados por la ley de este país. Para ella «la vida es un derecho de una criatura. Lo que es un derecho de la mujer es tener acceso a una educación sexual, a la prevención, a una mamá que la forme y le indique de qué manera puede evitar embarazos no deseados» (Alegre Barrientos, 2018). Así, aunque habla de preservar los casos de aborto no punible establecidos por la Corte Constitucional (malformación del feto, peligro para la salud de la madre o embarazo producto de una violación), desde su perspectiva, las tácticas para frenar el embarazo adolescente son la familia, el hogar y el cuidado de los padres. También Keiko Fujimori en Perú se ha expresado a favor del aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. Pero en el caso de violación se declaró en contra y recomendó a las mujeres «que se queden con sus bebés porque el concebido

no tiene la culpa de lo ocurrido» (DW, 2018). Esta mirada restrictiva de la libertad de elección por parte de las mujeres se replica en su afán por justificar los casos de esterilización forzada de cientos de mujeres quechuahablantes durante el Gobierno de su padre, como parte de la Política Nacional de Población. Curiosamente, en ocasión de implementar esta medida, el exmandatario invocó el discurso de los derechos de las mujeres y la declaración de Beijing para justificar la infertilización de las mujeres más pobres (Miró Quesada, 2019).

En la lucha por la legalización del aborto despunta el caso de Argentina. Durante el Gobierno de Macri este tema alcanzó un punto álgido, llegándose a debatir un proyecto de ley en el Senado tras conseguir la primera sanción en la cámara baja. El proyecto finalmente no prosperó, pero la experiencia puso en evidencia los matices respecto de este fenómeno en el arco de las derechas. En este caso, la vicepresidenta Michetti sostuvo una posición taxativamente contraria a la legalización. Durante su gestión promovió una agenda antiderechos y fundamentalista en términos religiosos. Así, ha expresado en varias comparecencias su rechazo a esta práctica bajo cualquier circunstancia (Perfil, 2018). Católica ferviente y cercana a la militancia «provida», Michetti también se opuso a la homoparentalidad. Con afirmaciones altamente polémicas, refirió a la adopción de parte de parejas del mismo sexo con argumentos irritantes, sosteniendo algo así como que ella solo daría en adopción a una pareja gay a un/a niño/a que esté en condiciones de extremo abandono y cuando no quedara mejor alternativa (La Nación, 2012).

En la posición ultracatólica y conservadora también se sitúa Evelyn Matthei. Sin embargo, a diferencia de Michetti, la chilena se mostró favorable a la legalización en ciertas circunstancias. Siendo senadora, junto con su par socialista Fulvio Rossi, presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en aquellos casos en los que la vida de la persona gestante estuviera en peligro o que el desarrollo del feto fuera inviable. Su posición no estuvo respaldada por la UDI y muchos referentes de las derechas repudiaron la propuesta. Finalmente, en 2012, el Senado rechazó este proyecto y otros dos que habían sido presentados sobre el mismo tópico (Torres, 2011). Vale destacar que, a diferencia de las otras cinco políticas estudiadas, la chilena Evelyn Matthei cultivó la trilla de movilización de mujeres derechistas de su país (Power, 2002). En ocasión del arresto de Pinochet en Londres en 1998, ella junto a Pía Guzmán y Rosa González creó el Movimiento Femenino por la Dignidad Chilena. El objetivo inmediato fue protestar en las puertas de la embajada de España en Santiago de Chile por la actuación del juez Baltasar Garzón que derivó en la detención del exdictador.

La pregunta que surge tras el mentado «feminismo» de la líder pinochetista es: ¿qué ocurre cuando las derechas «se montan» sobre la ola feminista con una agenda de género? En los casos chileno y colombiano, hemos visto que se

responde cosméticamente a algunas de las demandas de las mujeres, pero se mantienen intactas las estructuras de la desigualdad y la opresión. Por otra parte, esta captura de la agenda genera efectos desarticuladores en las luchas sociales y políticas que enfrentan al statu quo, al negar la legitimidad de sus demandas y responder a ellas con el aparato represivo.

Conclusiones

A lo largo de este artículo se ha indagado acerca de las trayectorias profesionales y políticas, así como sus visiones de género, de mujeres pertenecientes a partidos políticos de derecha que han alcanzado posiciones de alta jerarquía en seis países de América Latina durante las dos primeras décadas del siglo XXI. En concreto, de Mireya Moscoso (Panamá), Laura Chinchilla (Costa Rica), Gabriela Michetti (Argentina), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fornet (Chile).

Respecto de las trayectorias profesionales, cabe señalar que ellas no necesariamente constituyen liderazgos, sino más bien un posicionamiento estratégico (salvo por el caso de Keiko Fujimori). El liderazgo es un concepto relacional (con pares y seguidores) y, por ello, las trayectorias analizadas no conducen a la idea de que estamos frente a un nuevo modo de relación entre los géneros en la política partidaria en los espacios de las derechas latinoamericanas. En este artículo se ha prestado especial atención a los vínculos con sectores empresariales, organismos internacionales y grupos religiosos. También se ha subrayado la posición relativa de estas mujeres respecto a los varones de su misma colectividad. En general, se ha encontrado que las seis mujeres tienen una formación universitaria destacada, algunas con nivel de posgrado, y que desde muy jóvenes han ingresado al mundo de la política. En este último ámbito, hemos identificado su inscripción en dos tipos diferentes de estilo de ejercicio del poder: por un lado, se puede agrupar a Chinchilla, Michetti, Ramírez y Matthei, en un polo de corte liberal-tecnocrático; por el otro, a Moscoso y Keiko, quienes se inscriben más cómodamente en un polo de corte populista, y autoritario en el caso de la segunda. Esta diferencia de estilos, no obstante, no interfiere en sus preferencias religiosas. Excepto en el caso de Keiko, que en su programa político optó por un acercamiento a los grupos evangélicos, el resto de las mujeres profesa un vínculo estrecho con la Iglesia católica (más lábil en el caso de Moscoso).

En cuanto a las visiones de género, cabe señalar que la agenda de género ya es parte del campo de batalla cultural en el que disputan las derechas (valores posideológicos) y, en virtud de esto, ya hay casos en los que intentan asimilarla

y apropiársela (esto es más claro en el ejemplo de Chile). En los tres tópicos analizados en este artículo (feminismo, aborto y disidencias sexuales), todas estas mujeres de derechas han manifestado y tomado una posición pública al respecto (aunque no necesariamente informada), con excepción de Moscoso —y quizás por desfase histórico con el actual auge del feminismo—. Dichas posturas guardan una marcada correspondencia con aquellas sostenidas por los movimientos conservadores y «provida», que han sido en ciertas coyunturas electorales aliados estratégicos de los partidos de derecha en los que estas mujeres militan. Todos los casos analizados coinciden en la defensa de la familia patriarcal, aun cuando puedan asumirse retóricamente afines al feminismo (como en el caso de Matthei y Ramírez), que es designado como una «ideología de género» o simplemente rechazado de plano.

En general, bajo el pretendido feminismo liberal, empresarial y meritocrático suscrito por algunas de estas derechistas, persiste una defensa de la familia tradicional, heteronormativa y con fines reproductivos. Una actitud que las ha posicionado en tiempos electorales como una alternativa para muchos votantes, que las ven como un salvavidas ante la crisis política y moral actual.

manifestado su oposición a la adopción de niños por parte de este colectivo. En suma, las incursiones de las mujeres de la derecha en las agendas de género ni constituyen liderazgos alternativos (en tanto femeninos) ni cuestionan los modos de liderar de los varones. Los estilos políticos identificados más arriba no parecen influir en la forma de concebir dichas agendas. En general, bajo el pretendido feminismo liberal, empresarial y meritocrático suscrito por algunas de estas derechistas, persiste una defensa de la familia tradicional, heteronormativa y con fines reproductivos. Esta actitud las ha posicionado en tiempos electorales como una alternativa para muchos votantes que ven, en el recupero del «pilar elemental de la sociedad», un salvavidas ante la crisis política y moral actual.

Estas representantes de la derecha ponen en evidencia los modos de funcionamiento del neopatriarcado neoliberal y sus consecuencias para las políticas de igualdad. Aunque en general apoyan una versión de la igualdad de género estrecha y orientada al mercado, los partidos políticos que encarnan abonan el funcionamiento del neopatriarcado neoliberal y/o autoritario (como en el caso de Keiko Fujimori). Este es el nudo gordiano de los liderazgos femeninos de las

En relación con el aborto, como se ha visto, hay matices que van desde la aceptación de una legalización limitada hasta una negativa total. En temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción en este marco de uniones, las posturas también son similares —están en contra—. En general, estas mujeres han reivindicado el matrimonio heterosexual, han negado la extensión de este derecho a parejas del mismo sexo y han

derechas: ¿pueden cambiar la situación de desigualdad de las mujeres manteniendo sin modificar las estructuras sociales y simbólicas que la sustentan? ¿En qué medida, en su condición de mujeres *cisgénero*, blancas, heterosexuales, ricas, católicas y con poder político, las mujeres de las derechas latinoamericanas terminan siendo un comodín del patriarcado?

Las grandes transformaciones en favor de las mujeres se hacen desafiando el statu quo y abogando por los derechos humanos. Empero, las agendas de las derechas son por esencia conservadoras del orden imperante, el cual es machista y heteropatriarcal. Diversas experiencias de gobiernos encabezados por mujeres de derecha alrededor del mundo demuestran que, una vez en el poder, sus administraciones terminan echando por tierra los logros alcanzados y frenando los reclamos enarbolados por los movimientos por la igualdad y la inclusión. Los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido, Kolinda Gravar en Croacia y la presidenta de Birmania Aung San Suu Kyi son solo algunos ejemplos. América Latina no ha sido ajena a esta tendencia.

Referencias bibliográficas

- Alegre Barrientos, Julia. «Marta Lucía Ramírez, de frente con los derechos de la mujer». *El Tiempo*, (10 de junio de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/marta-lucia-ramirez-formula-vicepresidencial-de-ivan-duque-228662>
- Ameco Press/Artemisa. «Laura Chinchilla no nos representa». *AmecoPress*, (12 de febrero de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://amecopress.net/Laura-Chinchilla-no-nos-representa>
- Archenti, Nélida y María Inés Tula. «Cuotas de género y tipos de lista en América Latina». *Opinião Pública*, vol. 13, n.º 1 (2007), pp. 185-218.
- Chinchilla, Laura. «Plan de Gobierno 2010-2014». *Archivoelectoral.org*, (2010) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <http://www.archivoelectoral.org/documentos/plan-de-gobierno-laura-chinchilla-pln/11>
- DW. «Keiko Fujimori contra el aborto y la unión civil de homosexuales». *DW*, (8 de mayo de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.dw.com/es/keiko-fujimori-contr-a-el-aborto-y-la-uni%C3%B3n-civil-de-homosexuales/a-19230857>
- Fernández Matos, Dhayana Carolina (comp.). *Liderazgo y participación política de las mujeres en América Latina en el Siglo XXI*. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2017.
- de Cárdenas, Nicolás. «La nueva presidenta de Costa Rica defiende el aborto,

- aunque se presentó como provida». *Religión en Libertad*, (8 de febrero de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.religionenlibertad.com/noticias/6981/la-nueva-presidenta-de-costa-rica-defiende-el-aborto-aunque-se.html>
- Escobar, Melba. «Marta Lucía Ramírez: La mujer conservadora». *El Tiempo*, (9 de mayo de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13965977>
- Federici, Silvia. *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. Madrid: Traficantes de sueños, 2013.
- Fernández Poncela, Anna M. «Las mujeres en la política latinoamericana. Nuevos liderazgos, viejos obstáculos». *Nueva Sociedad*, vol. 218, (2008), p. 57-71.
- Fernández Ramil, María de los Ángeles y Oliva Espinosa, Daniela. «Presidentas latinoamericanas e igualdad de género: un camino sinuoso». *Nueva Sociedad*, vol. 240, (2012), p. 119-133.
- Flórez-Estrada, María. «La campaña de Laura Chinchilla y las mujeres ¿Oportunismo o compromiso con un nuevo pacto sexual?». *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 130, (2010), p. 85-89 (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/4156>
- Freidenberg, Flavia y Lajas García, Sara. *¡Leyes vs. Techos! Evaluando las reformas electorales orientadas a la representación política de las mujeres en América Latina*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2017.
- Freidenberg, Flavia; Muñoz-Pogossian, Betilde; Caminotti, Mariana y Dosek, Tomás. *Mujeres en la Política: experiencias nacionales y subnacionales en América Latina*. México: UNAM y Instituto Electoral de México, 2018.
- Fuerza Popular. «Plan de Gobierno. 2016-2021. Un Perú para todos con un plan de todos» (2014) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020]: <http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/2/7/127397.pdf>
- Giordano, Verónica. «30 años de democracia: un balance con perspectiva de género». *Observatorio Latinoamericano*, n.º 12, (2013), p. 291-301.
- Giordano, Verónica. «El mapa del giro a la derecha en América Latina en el siglo XXI. Una clasificación posible». En: Oliveira Xavier, Lidia de; Domínguez Ávila, Carlos F. y Fonseca, Vicente (eds.). *Política, cultura e sociedade na América Latina: estudos interdisciplinares e comparativos* [vol. 6]. Curitiba: CRV, 2020, p. 169-182.
- Hernández Ramos, Pablo. «Consideración teórica sobre la prensa como fuente historiográfica». *Historia y comunicación social*, vol. 22, n.º 2 (2017), p. 465-477.
- Hinkelammert, Franz. «Democracia y nueva derecha en América Latina». *Nueva Sociedad*, n.º 98 (1988), p. 104-115.
- IPU-Interparliamentary Union. «Global data on national parliaments». *IPU*,

- 2020 (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://data.ipu.org/women-averages>
- La Nación. «Chinchilla opuesta a matrimonio gay, aborto y Estado laico». *La Nación*, (3 de febrero de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.nacion.com/el-pais/chinchilla-opuesta-a-matrimonio-gay-aborto-y-estado-laico/YPYC7XHHH6RHGLN6UQXZLNBBHBG4/story/>
- La Nación. «Michetti pidió perdón». *La Nación*, (13 de junio de 2012) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.lanacion.com.ar/politica/michetti-pidio-perdon-por-sus-dichos-sobre-la-adopcion-gay-nid1526065>
- La Prensa. «Panamá firma contrato con Miss Universo». *La Prensa*, (25 de julio de 2002) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] https://www.prensa.com/impresa/opinion/Panama-firma-contrato-Miss-Universo_0_701929904.html
- Miró Quesada, Josefina. «Cuando el fujimorismo defendió el enfoque de género». *El Comercio*, (24 de junio de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://elcomercio.pe/politica/fujimorismo-defendio-enfoque-genero-ecpm-noticia-640876-noticia/>
- Muñoz Guerrero, Leonardo. «Marta Lucía Ramírez: fe y política». *El Espectador*, (16 de junio de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/marta-lucia-ramirez-fe-y-politica-articulo-794807>
- Murillo, Álvaro. «Laura Chinchilla: “no soy feminista”». *La Nación*, (10 de octubre de 2008) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.nacion.com/el-pais/laura-chinchilla-no-soy-feminista/7C4Y5GEFFFHENM7OJCYZLBKOEM/story/>
- My Plainview. «Moscoso recibe a concursantes de Miss Universo». *My Plainview*, (21 de mayo de 2003) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.myplainview.com/news/article/Moscoso-recibe-a-concursantes-de-Miss-Universo-8854200.php>
- Perfil. «Michetti, contra el aborto: “O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada”». *Perfil*, (1 de julio de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.perfil.com/noticias/politica/michetti-contra-el-aborto-o-sea-podes-dar-en-adopcion-el-bebe-y-no-te-pasa-nada.phtml>
- PNUD-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. *¿Cuánto hemos avanzado? Un análisis de la participación política de las mujeres en los gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe*. Panamá: PNUD (Centro Regional para América Latina y el Caribe, Área de Gobernabilidad, Área de Género), 2013.
- Power, Margaret. *Right-Wing Women in Chile: Feminine Power and the Struggle Against Allende, 1964-1973*. Filadelfia: Penn University Press, 2002.
- Pulzo. «Pruebas que mostró Robledo sobre “cercanía” de la Vice y Luis Carlos

- Sarmiento Angulo». *Pulzo*, (4 de septiembre de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.pulzo.com/nacion/pruebas-que-robledo-presento-para-decir-que-vice-era-amiga-sarmiento-angulo-PP761022>
- Radio Duna. «Evelyn Matthei por agenda de Equidad de Género: “El feminismo no es de derecha o de izquierda, es cultural”». *Radio Duna*, (23 de marzo de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.duna.cl/programa/hablemos-en-off/2018/05/23/evelyn-matthei-por-agenda-de-equidad-de-genero-el-feminismo-no-es-de-derecha-o-de-izquierda-es-cultural/>
- Revista Fucsia. «Martha Lucía Ramírez y Claudia López responden desde polos opuestos». *Revista Fucsia*, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.fucsia.co/actualidad/mujeres-fucsia/articulo/martha-lucia-ramirez-y-claudia-lopez-entrevista-polos-opuestos/79564>
- Reyes, Soledad. «Evelyn Matthei y las tomas feministas: Los hombres nunca se han dado cuenta de que hay mucha rabia acumulada». *La Tercera*, (mayo de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <http://biut.latercera.com/actualidad/2018/05/evelyn-matthei-y-las-tomas-feministas/>
- Rodríguez, Gina Paola. «Vueltas y revueltas de la derecha peruana». *Estudios Sociales del Estado*, vol. 5, n.º 9 (2019), p. 24-54 (en línea) <http://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/article/view/170/132>
- Sagot, Monserrat. «Laura Chinchilla y la promesa incumplida». *Revista con la A*, n.º 52 (2017), p. 1-3.
- Salas Murillo, Otto. «Feministas proponen agenda a gobierno de Laura Chinchilla». *Universidad de Costa Rica*, (20 de mayo de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/05/20/feministas-proponen-agenda-a-gobierno-de-laura-chinchilla.html>
- Schwindt-Bayer, Leslie A. «Making Quotas Work: The Effect of Gender Quota Laws on the Election of Women». *Legislative Studies Quarterly*, vol. 34, n.º 1 (2009), p. 5-28.
- Semana. «Debate Odebrecht: los casos de la ministra, la vicepresidenta, Zuluaga y los periodistas». *Semana*, (9 de noviembre de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.semana.com/nacion/articulo/debate-odebrecht-casos-de-la-ministra-vicepresidenta-zuluaga-y-periodistas/631491>
- Tamayo Gaviria, Natalia. «“Sentí mucho machismo como ministra de Defensa”: Marta Lucía Ramírez». *El Espectador*, (8 de marzo de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.elespectador.com/noticias/politica/senti-mucho-machismo-como-ministra-de-defensa-marta-lucia-ramirez-articulo-843749>
- Torres, Verónica. «Evelyn Matthei: Se han pasado a llevar los derechos de las mujeres de una manera brutal. Y no estoy dispuesta a que siga pasando». *The Clinic.cl*, (3 de enero de 2011) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020]

- <https://www.theclinic.cl/2011/01/03/evelyn-matthei-se-han-pasado-a-llevar-los-derechos-de-las-mujeres-de-una-manera-brutal-y-no-estoy-dispuesta-a-que-siga-pasando/>
- Ventura, Any. «El factor Michetti». *La Nación*, (15 de julio de 2007) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] <https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-factor-michetti-nid924557>
- Yanes, José Antonio. «La prensa como sujeto y objeto de investigación histórica». En: Santacreu Soler, José Miguel (coord.). *Historia contemporánea y nuevas fuentes*. Alicante: Universidad de Alicante, 1995, p. 71-79.

El papel de los tribunales supremos y la nueva derecha: el neogolpismo en Brasil

The role of supreme courts and the new right: neo-coups in Brazil

Mayra Goulart

Profesora adjunta, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). mayragoulart@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6955-1586>

André Luiz Coelho

Profesor adjunto, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
andreluizrj@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1632-0098>

Cómo citar este artículo: Goulart, Mayra y Coelho, André Luiz. «El papel de los tribunales supremos y la nueva derecha: el neogolpismo en Brasil». *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 239-260. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.239

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar el papel de los tribunales supremos de Justicia en algunas de las últimas destituciones de presidentes y gobiernos progresistas en América Latina –la denominada «marea rosa»–, donde se ha observado el ascenso de gobiernos calificados como de «nueva derecha». Se trata de demostrar que la composición de los tribunales supremos actuó como variable determinante para apartar del poder a dichos gobiernos. El análisis gira en torno a la hipótesis de que el Poder Judicial pudo haber actuado como entidad de legitimización de los procesos de interrupción y destitución dirigidos por el Poder Legislativo en contextos de parálisis institucional (o conflicto con el Poder Ejecutivo). Para demostrarlo, se analiza el caso de Brasil y el papel jugado por el Supremo Tribunal Federal (STF) durante el proceso de destitución de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Palabras clave: tribunales supremos, América Latina, Brasil, impugnación (*impeachment*), Dilma Rousseff

Abstract: This paper aims to analyse the role of supreme courts of justice in some of the recent removals from office of progressive “pink tide” Latin American presidents and governments where so-called “new right” governments have taken power. It shows the composition of the supreme courts to be a decisive factor in removing these governments from power. The core hypothesis is that the judiciary may have served as a body for legitimating interruption and dismissal processes led by the legislature in contexts of institutional paralysis (or conflict with the executive branch). To demonstrate this, the case of Brazil is analysed and specifically the role played by the Federal Supreme Court (STF) in the dismissals of Luis Inácio Lula da Silva and Dilma Rousseff.

Key words: supreme courts, Latin America, Brazil, impeachment, Dilma Rousseff

En los últimos años, América Latina ha observado un *reflujo* de la centroizquierda en el poder, en muchos casos, con procesos de destitución contradictorios cuya legalidad ha sido cuestionada. En particular, nos referimos a los casos de los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Evo Morales (Bolivia), Manuel Zelaya (Honduras), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela), Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), Michele Bachelet (Chile) y Daniel Ortega (Nicaragua). En este contexto, el objetivo de este artículo es analizar el papel que han jugado los tribunales supremos de Justicia –con probabilidades reales de destituciones de presidentes– en las diferentes situaciones de crisis política de estos países. Trataremos de demostrar que la configuración de esos tribunales ha actuado como variable determinante para mantener o apartar a los gobiernos que conforman la llamada «marea rosa», con el objeto de averiguar hasta qué punto el Poder Judicial ha actuado como *fiat* y entidad legitimadora en procesos de interrupción y destitución, dirigidos por el Poder Legislativo en situaciones de conflicto con el Poder Ejecutivo. En tales conflictos, se observa la configuración de una nueva correlación de fuerzas formada por miembros de la élite política y económica tradicional de estos países y la llamada «nueva derecha». Para tal propósito, se analiza el caso brasileño y, en particular, los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en relación con la actuación del Supremo Tribunal Federal (STF) durante su proceso de destitución, y consiguiente sustitución, llevada a cabo por una alianza entre la *nueva* derecha¹ y la derecha tradicional.

Así pues, se tratará de comprender de qué modo se establece una relación entre los jefes del Poder Ejecutivo y los demás poderes e instituciones del Estado brasileño. Por consiguiente, puesto que el objeto de investigación es la actuación de los tribunales supremos en procesos que implicaron directamente a los presidentes del país, se analizará el posicionamiento de los magistrados –designados por el poder Ejecutivo para ocupar las instancias superiores del Poder Judicial– con el propósito de medir el grado de autonomía y objetividad entre sus decisiones y los intereses de aquellos que los designaron. Para ello, se examinarán todos los nombramientos presidenciales de magistrados que conformaron los tribunales supremos de Brasil durante los gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), así como la posición que tomaron esos mismos

1. En este análisis no nos centraremos a describir estos nuevos actores, puesto que nuestro interés reside en la actuación de los tribunales supremos. Para una descripción detallada de la nueva derecha, véanse Demier y Hoeveler (2016) y Cruz *et al.* (2015).

magistrados en los fallos decisivos para la permanencia o no continuidad de esos mandatos presidenciales. Con ello, se mostrará que el Poder Judicial y las cortes supremas desempeñaron un papel destacado en los procesos de contestación y parálisis institucional en la reciente historia de América Latina.

¿Qué podemos aprender de nuestros vecinos? La «marea rosa» y su *reflujo*

El ascenso de la «marea rosa»

El fenómeno del ascenso de los gobiernos de centroizquierda y de izquierda originado a finales de la década de 1990, y plenamente desarrollado en los años 2000, en América Latina ha sido investigado desde diversos enfoques analíticos, como «onda rosa» (Panizza, 2006); «gobiernos progresistas» (Soares de Lima, 2008); «giro a la izquierda» (Santander, 2009); «socialdemocracia en América del Sur» (Castelan, 2013), entre otros. No obstante, la literatura especializada también se ha dedicado a establecer tipologías en la identificación de este fenómeno, como elemento presente en los conceptos de «populismo y socialdemocracia» (Lanzaro, 2007) y de «las renovadoras y las refundadoras» (Silva, 2014). Ahora bien, pese a las discrepancias en cuanto a la categorización, los distintos autores tienden a estar de acuerdo en cuanto al diagnóstico de que ese nuevo contexto, iniciado con la elección del presidente Hugo Chávez en Venezuela (1998), marcó la historia de la región al apartarse de las políticas macroeconómicas propias del período neoliberal bajo los auspicios del consenso de Washington que marcaría la década de 1990.

La elección de Evo Morales en 2005 en Bolivia, y la victoria de Rafael Correa el año siguiente en Ecuador, indicaron el final de la inestabilidad política que estos países habían vivido la década anterior. En Brasil, este proceso se inició con la elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2002. Como señala Silva (2014), como «característica destacable» del ascenso de estas fuerzas, puede señalarse su «capacidad de reproducción inmediata» por medio de las reelecciones y la elección de sus sucesores. En el primer eje, se incluyen casos como los de Chávez (2000-2006), Lula (2006), Correa (2009) y Morales (2009); en el segundo, los de Michelle Bachelet (2006), Cristina Kirchner (2007), «Pepe» Mujica (2009) y Dilma Rousseff (2010). Tanto la literatura sobre el tema, como algunos grupos mediáticos se han referido a todos los presidentes y presidentas aquí citados como representantes legítimos del populismo en la región.

El reflujo de la marea rosa

Podemos afirmar que al reflujo de la marea rosa que actualmente está en curso en América Latina han contribuido una combinación de factores, tanto en el plano doméstico como en el internacional. Respecto al internacional, podemos citar la crisis económica de 2008 (aunque afectó de forma más aguda a Estados Unidos y Europa) y la llegada de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos y su cambio de estrategia respecto a América Latina. Si durante el Gobierno de Bush la región pasó desapercibida –salvo casos puntuales como las relaciones con Venezuela–, durante el Gobierno de Obama las atenciones de la Casa Blanca se reorientaron hacia un mayor compromiso, con la clara intención de recuperar el terreno y prestigio perdidos en los años previos.

En el plano doméstico, además de perder popularidad –sobre todo en los casos de Argentina y Brasil, como resultado de varios años en el poder–, los gobiernos progresistas de la región se enfrentaron a una serie de dificultades estructurales relacionadas con problemas internos y las consecuencias de la crisis de 2008. Esta crisis puso fin a un período de bonanza fruto de los altos precios de las materias primas (*commodities*), lo que generó insatisfacción –especialmente entre los segmentos de renta media– a causa del deterioro de los servicios públicos y un recrudecimiento de problemas como la violencia urbana y el aumento de la inflación. En 2013, se sucedieron una serie de protestas en varios países –sobre todo en Brasil y Chile– que fueron resultado directo de ese cúmulo de insatisfacciones, si bien sin mensajes reivindicativos claros, que debilitaron políticamente aún más a sus gobiernos, ya en un franco proceso de desgaste. Paralelamente, a partir de operaciones y actuaciones de la Policía y del Poder Judicial, empezaron a emerger escándalos de corrupción en países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, que implicaban tanto a políticos de primera línea como a empresarios. Todo ello tuvo una amplia repercusión mediática. Así pues, se puede observar el creciente protagonismo del Poder Judicial, tema objeto de estudio en las siguientes secciones de este artículo. Aunque no es una cuestión exclusivamente brasileña, ya que el paulatino control de los tribunales supremos sobre las acciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo puede estimarse como una nueva realidad en la región, vamos a centrarnos en el caso de Brasil.

Cabe destacar que, a partir de 2009, en América Latina las fuerzas de la oposición conservadora se fueron gradualmente reorganizando y reconquistando terreno en varios países, sobre todo durante las elecciones legislativas y regionales, lo que les creó la expectativa de que, en la siguiente tanda electoral, se produciría una nueva transición regional hacia la centroderecha de tradición neoliberal. Sin embargo, este hecho no se confirmó, ya que los resultados apuntaban a otra di-

rección: victorias de Ollanta Humala en 2011 en Perú, de Michelle Bachelet en 2013 en Chile², la tensionada elección de Nicolás Maduro en Venezuela, también en 2013, la de Tabaré Vázquez en 2014 en Uruguay, así como la reelección de Dilma Rousseff en Brasil, también en 2014.

Es posible que las disputas ajustadas no tuvieran como resultado la victoria de la oposición conservadora, pero propiciaron (sobre todo en Brasil, Venezuela y Chile) una radicalización política, la formación de nuevas alianzas de partidos y un mayor poder de acción de la oposición, principalmente respecto al Poder Legislativo, que favoreció un escenario de mayores dificultades económicas y crisis de gobernabilidad. Brasil sufrió con mucha más intensidad la escalada de esa radicalización y esas dificultades, lo cual ocasionó en 2016, año y medio después de las elecciones que reeligieron a Dilma Rousseff, la ruptura del orden institucional y la interrupción del mandato presidencial. Ello no se produjo según los patrones clásicos de golpe de Estado, sino por medio de un neogolpe: una forma de destitución compleja, relativamente nueva en la literatura política, cuya principal característica es la ausencia del uso de la fuerza y un mantenimiento aparente del orden institucional (Coelho y Mendes, 2020). Como en la década de 1960 –cuando ocurrieron una serie de golpes militares en la región–, en el siglo XXI de nuevo varios gobiernos elegidos democráticamente vieron interrumpidos sus mandatos. De hecho, llaman la atención dos casos de neogolpes anteriores a la caída de Dilma Rousseff: el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras, en 2009, y la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, en 2012. Ambos casos confirman la hipótesis de que representan una suerte de ensayo de esta forma de golpe, así como la tesis de que, junto con el caso brasileño, configuran los neogolpes como un fenómeno regional.

El episodio de la destitución *exprés* de Manuel Zelaya en 2009 fue el primer ejemplo de neogolpe ocurrido en la región, y demostró que la acción coordinada entre los poderes Legislativo y Judicial se ha convertido en una variable determinante para debilitar a un presidente en ejercicio y, así, precipitar una impugnación (*impeachment*) acelerada que busca dar apariencia de legitimidad a un hecho

Brasil sufrió con mucha más intensidad la escalada de radicalización política y la crisis económica y de gobernabilidad, lo cual ocasionó en 2016 –año y medio después de la reelección a Dilma Rousseff– la ruptura del orden institucional y la interrupción del mandato presidencial.

2. Elección que permitió a la centroizquierda recuperar la Presidencia, concluido el mandato del liberal Sebastián Piñera.

grotesco como es la expulsión del país de un presidente legítimamente electo, de madrugada y vestido aún con pijama (Coelho, 2016). En este caso, la utilización del poder del decreto, en un contexto de escaso apoyo legislativo, y la pérdida de la coalición de gobierno precipitó la salida de Manuel Zelaya de la Presidencia. En Honduras, la crisis institucional entre los poderes del Estado surgió cuando el procurador general anuló el decreto que autorizaba la organización de un referéndum popular convocado por el presidente, tras lo cual Zelaya promulgó un nuevo decreto con las mismas motivaciones que el anterior. El mandatario efectuó diversas maniobras con el fin de permitir dicha consulta, tras lo cual el Congreso, con Roberto Michelletti –el principal opositor de Zelaya– al mando, aprobó una ley que tenía la finalidad preventiva de evitar el referéndum nacional promovido por aquel. El resultado del conflicto fue el conocido golpe cívico-militar contra Zelaya, que se perpetró una vez que los miembros del Tribunal Supremo y el Congreso Nacional reconocieron una supuesta inconstitucionalidad en la actuación de hasta ahora presidente y emitieron una orden de prisión contra él.

El proceso de *impeachment* de Fernando Lugo en 2012 en Paraguay ocurrió en menos de 48 horas, lo cual apenas dejó doce horas para que sus abogados pudieran preparar la defensa (Martínez-Escobar y Sánchez-Gómez, 2015). En vano, pidieron una prórroga del juicio para poder articular una defensa apropiada. Aparte de la excesiva diligencia del proceso, los abogados del expresidente también destacaron el carácter vago y subjetivo del juicio político, que carecería de acusaciones sólidas que justificaran la remoción de Lugo. Asimismo, cabe mencionar que, antes de iniciarse el juicio, Lugo planteó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia paraguayo, alegando que disponían de poco tiempo para preparar la defensa. Entretanto, el propio tribunal denegó la acción promovida por el expresidente, sin siquiera llegar a analizarla. La Justicia paraguaya sostuvo que reconocía la legalidad del proceso de *impeachment* a cargo del Congreso.

Así, el caso brasileño –ejemplar por su relevancia y complejidad– no fue el primero en la historia reciente de la región, pero sí podría significar un peligroso detonante regional para una nueva oleada de destituciones. Según afirma Coelho (2016), el hecho de que determinados grupos de centroderecha fueran apartados del poder, cuando históricamente siempre habían formado parte de las administraciones, tuvo unas consecuencias funestas para la democracia en América Latina, y defiende que los últimos casos de destitución de presidentes de centroizquierda debe ser entendida como una estrategia de golpes contra mandatarios, lo que constituye un nuevo modelo posible de acción política de las élites conservadoras y antidemocráticas en la región, reeditando con nuevos ropajes antiguas prácticas que parecían quedar ya lejos de la experiencia democrática contemporánea de América Latina.

El neogolpe jurídico-parlamentario en Brasil en 2016: una alianza entre las nuevas y las antiguas derechas

Las manifestaciones de junio y julio de 2013, que se originaron como una protesta por el aumento de las tarifas del autobús en las grandes capitales brasileñas, pero que enseguida adquirieron dimensiones y pautas de reivindicación inesperadas, marcaron simbólicamente el comienzo de una relevante pérdida de adhesión social y política a los gobiernos progresistas iniciados con la Presidencia de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) en 2003, a cuya cabeza estaba, en aquel momento, su sucesora Dilma Rousseff. A falta de liderazgos identificables, con una agenda repleta de frustraciones, pero desprovistos de exigencias claras, y con un fuerte rechazo a los partidos políticos, esos movimientos –que congregaron a millones de personas en las calles de todo el país– movilizaron tanto a sectores de la izquierda como de la derecha. Sin embargo, esta última y sus variantes más extremas ganaron nuevo impulso, una mejor organización en las redes virtuales, así como una mayor disposición a adherirse de forma más enérgica (aunque bastante mal organizada por entonces) a la oposición al Gobierno de Rousseff.

Al respecto, en la literatura reciente que analiza la ideología en Brasil (Tarouco y Madeira, 2013; Cowan, 2014), ha ido ganando fuerza la percepción de que, a lo largo de la última década, han coexistido dos modelos distintos de derecha: 1) la llamada «derecha tradicional», representada por: i) partidos políticos clásicos como los Demócratas y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), ii) grupos de los grandes medios de comunicación tradicionales (radio, televisión y prensa escrita) y iii) actores clave del mercado, como la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp); y 2) la que sería considerado como la «nueva derecha». Esta *nueva* derecha estaría representada por: i) nuevos partidos políticos o partidos políticos que hasta entonces habían tenido una representación baja en el ámbito nacional, como el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Social Liberal (PSL), ambos, no casualmente, expartidos de Jair Bolsonaro³; ii) un gran número de movimientos de aparición reciente, pero de gran repercusión en las redes sociales e Internet, como el Movimiento Brasil Libre (MBL) o Revoltados Online, entre otros, y iii) altos funcionarios del sistema judicial, sobre

-
3. Si los partidos de la «vieja derecha» se caracterizarían por estar más institucionalizados y por ser un sesgo más economicista; los partidos de la «nueva derecha» presentan más bien una agenda relacionada con la moralidad tradicional, ligada a valores cristianos. Con todo, la alternativa a favor de la ortodoxia económica sería el factor que aglutinaría a todos estos partidos en términos de una identidad mínima que los definiría como derechas.

todo aquellos procedentes de órganos de control como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el Ministerio Público –que tuvo su protagonismo en la fuerza operativa de la Operación Lava Jato, dirigida por los procuradores Deltan Dallagnol y Rodrigo Janot–, junto con jueces de distintas instancias, representados principalmente por la figura del magistrado Sérgio Moro y magistrados del STF. Todos los actores citados, tanto de la derecha *tradicional* como de la *nueva* derecha actuaron de diversas maneras y de forma significativa para lograr la destitución de Dilma Rousseff.

En marzo de 2014, se produjo el otro incidente ligado a la insatisfacción social y que sirvió de combustible altamente inflamable para avivar la pira de creciente indignación contra el Gobierno: la puesta en marcha de la Operación Lava Jato⁴ por parte de la Policía Federal, que llevó a prisión al cambista Alberto Youssef y sacó a la luz una serie de escándalos de corrupción que implicaban al gigante Petrobras (la empresa estatal que aglutina la mayor parte de la explotación y comercialización de petróleo y sus derivados en Brasil), grandes empresas contratistas y políticos de primera línea. Aunque las investigaciones eran aún incipientes y no implicaban directamente al Gobierno en un primer momento, sirvieron de aditivo extra, que los medios de comunicación, casi todos contrarios al Gobierno, explotaron ampliamente con el fin de que los segmentos de población más descontentos adquirieran paulatinamente una mayor capacidad organizativa, así como apoyos importantes de sectores políticos y empresariales.

Por lo tanto, a nuestro entender, a partir de ese momento se habría producido esa *alianza* entre los miembros de la derecha *tradicional* y la *nueva* derecha, aprovechando las manifestaciones de junio de 2013 para asumir la ofensiva de la disputa política, intento que conllevó un gran éxito. A partir de entonces, las calles y las instituciones –el Parlamento, el sistema judicial y los medios de comunicación– empezaron a interactuar y a brindarse apoyo mutuo, al objeto de crear una coyuntura que permitiera derrocar a la presi-

4. O la «operación de lavado», pues la expresión hace referencia a las lavanderías y estaciones de servicio con túnel de lavado usadas para blanquear dinero. Los procuradores antes mencionados, Dallagnol y Janot ocuparon durante varios meses los principales titulares de prensa del país, pero fue Sérgio Moro quien se convirtió en símbolo de la operación y pilar fundamental para la elección en 2018 de Jair Bolsonaro como presidente del país, y que este designó, aún en plena campaña electoral, futuro ministro de Justicia. Se estima que la operación Lava Jato afectó negativamente, entre el 2%-2,5% y el 3,8%-3,6% las caídas del PIB brasileño en 2015 y 2016, respectivamente. Con todo, sus repercusiones sobre el sistema político son incalculables, al reforzar el sentimiento de deslegitimación de la política y de la propia democracia, así como de aquellos identificados como parte de la política tradicional. El lavajatismo, simbolizado en la figura de Sérgio Moro, sirvió de combustible para el ascenso electoral de innumerables políticos de índole autoritaria y antisistema.

denta. El principal hilo conductor de este discurso, así como su justificación principal, fue la Operación Lava Jato y la lucha contra la corrupción, entendida por estos grupos como una batalla contra la izquierda y los miembros del PT. Para la alianza de derechas, solo había una solución para superar la crisis, y era apartar a Dilma Rousseff del poder. En este sentido, aun cuando la debacle del Gobierno Rousseff no pueda atribuirse solo a la intervención de los actores jurídicos, es indiscutible que aquellos directamente envueltos en la Operación Lava Jato, el Ministerio Público Federal (MPF) y la Policía Federal, se destacaron por haber accionado una dinámica de desestabilización, cuya eficiencia y *timing* llaman la atención. Como apunta De Almeida (2019: 104), el primer año de la operación coincide con el último año del primer Gobierno de Dilma Rousseff; su fase más dramática, cuando se intensificaron las detenciones y las acusaciones a empresarios, tuvo lugar en el mes de octubre, en plenas elecciones a la sucesión a la Presidencia de la República.

El creciente rechazo al Gobierno, que hasta ese momento carecía de un diseño institucional claro, se materializó como partido en las elecciones presidenciales de 2014, en particular, cuando el candidato a la Presidencia por el PSDB, Aécio Neves, sorprendió al arrebatar el segundo puesto a Marina Silva, candidata de la Red de Sostenibilidad, lo cual lo habilitó para enfrentarse a la presidenta Dilma Rousseff en la segunda vuelta. A partir de ese momento, la polarización política, hasta entonces poco habitual, empezó a ganar cuerpo y a penetrar en los medios sociales y culturales gracias a las redes sociales. Por una parte, los insatisfechos con el Gobierno de Dilma Rousseff, que iban en aumento y viraron circunstancialmente para dar apoyo a Aécio Neves⁵ y, por otra, los que aún apoyaban al Gobierno y temían el fin de una era de gobiernos progresistas y el regreso de los conservadores al Palacio de Planalto.

Entre 2013 y 2014, en Brasil se produjeron varios incidentes, ligados a la insatisfacción social y a casos de corrupción, mientras se iba estableciendo una alianza entre la derecha tradicional y la nueva derecha. A partir de entonces, las calles i las instituciones –Parlamento, sistema judicial y medios de comunicación– empezaron a interactuar para crear una coyuntura que permitiera derrocar a Dilma Rousseff.

5. Aécio Neves puso en duda la legitimidad del resultado, supuestamente precipitado por uso del aparato estatal por parte del PT. En 2015, el candidato derrotado accionó el Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitando: i) el recuento de los votos; ii) un informe jurídico sobre la posibilidad de *impeachment* a Rousseff, y iii) la inhabilitación de la lista vencedora.

El rechazo al Gobierno creció de manera acelerada durante las semanas que antecedieron a las elecciones, la polarización se acentuó más todavía, sobre todo debido a una clara y feroz campaña de los medios de comunicación a favor del candidato del PSDB, que se tradujo en un empate técnico en las encuestas de intención de voto la víspera de las elecciones. Pero la tendencia no fue suficiente para virar el cuadro electoral, que terminó con la reelección de Dilma Rousseff, con el resultado electoral más ajustado para la Presidencia desde la redemocratización, con cuatro millones de votos más para la vencedora. Sin embargo, Rousseff perdió al ganar. La ajustada victoria en este contexto de crispación fortaleció e incentivó más aún la reorganización de algunos sectores políticos y empresariales contrarios a las políticas progresistas, que vieron una oportunidad en la fragilidad del Gobierno recién electo. Tal combinación de factores, junto con la tardanza de la presidenta y de su entorno en reconocer la gravedad del problema y elaborar estrategias de acción para contener la sangría, debilitó la coalición del Gobierno Rousseff y abrió las puertas para el neogolpe, que ya empezó a detectarse, si bien de forma incipiente, en los primeros momentos del nuevo mandato.

En Brasil, el hecho de tener condicionantes estructurales y un régimen político más complejo, además de unas instituciones tradicionalmente más estables que en Honduras y Paraguay, poner en marcha y lograr la destitución de Dilma Rousseff exigió más tiempo (un año y ocho meses desde el inicio del segundo mandato, incluidos los nueve meses de proceso formal de destitución). Aun así, se mantuvo un elevado grado de imprevisibilidad durante buena parte del proceso, sobre todo en cuanto a los papeles de los actores políticos implicados en su ejecución, en concreto, el Senado y el STF. En esta dinámica, se observó la actuación de la alianza formada entre las distintas sensibilidades de las derechas, a las que interesaba desestabilizar al Gobierno. El protagonismo de los agentes jurídicos se basó en una lógica de distensión de las normas que conforman el sistema, respecto a la previsibilidad y la seguridad jurídicas, como condición indeleble del debido proceso legal. Iniciada en 2005 con el escándalo del *Mensalão*⁶, esta dinámica ya había sido anuncia-

6. *Mensalão* (palabra derivada de *mensal*, «mensualidad» en portugués) fue un término que los medios de comunicación utilizaron para designar supuestos pagos a diputados de la base aliada del Gobierno del PT a cambio de votos que permitieran la aprobación del Congreso Nacional de proyectos dirigidos por el Ejecutivo. La trama fue denunciada en 2005 de la mano del diputado federal Roberto Jefferson, del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). En 2007, el STF recibió la denuncia e inició un proceso que se extendió hasta 2012, con el juicio a 38 acusados. De estos, 12 fueron absueltos, 1 falleció durante el proceso y 24 fueron condenados por uno o varios delitos.

da en el contexto en el que se debatía la aceptación de la llamada «teoría del dominio del hecho». Esta teoría, que el juez ponente del caso y magistrado del STF, Joaquim Barbosa, defendía, se utilizó para fundamentar la detención de la cúpula del PT, aun cuando no existieran pruebas que demostraran su implicación en los escándalos de corrupción (De Almeida, 2019: 101). La tesis se basaba en la posibilidad de dar por supuesto, basándose en la posición que ocupaban en la estructura del Gobierno y/o del partido, que estos actores ordenaban o, al menos, tenían conocimiento de la trama de distribución de sobornos a parlamentarios de la base aliada, con el objetivo de garantizar su apoyo a la Administración del PT.

A este primer movimiento de distensión/relajación de los principios jurídicos, le siguió un segundo que tiene relación con la asociación entre: i) prisiones preventivas, muchas veces fundamentadas en la teoría del dominio de los hechos; ii) delaciones recompensadas; iii) filtraciones a los medios de comunicación del contenido de esas delaciones, y iv) la presión que la opinión pública, abastecida de estos contenidos, ejercía sobre las autoridades, lo cual legitimaba más detenciones. En este movimiento, el protagonismo pasó del STF al MPF, que actuó aliándose con medios de comunicación, y como responsable de divulgar las filtraciones de tales delaciones, obtenidas bajo la batuta de Sérgio Moro. La dinámica consiste, por lo tanto, en utilizar las repercusiones de dichas filtraciones sobre la opinión pública para aumentar la presión sobre el sistema político y, de este modo, justificar las ofensivas del ámbito jurídico sobre aquel, incluso mediante la flexibilización de los principios que configuran este ámbito (Fontainha y De Lima, 2018). Los efectos sobre el sistema político brasileño fueron devastadores en lo relativo a la legitimidad de los partidos, los altos cargos y el propio sistema político ante la opinión pública. No obstante, esto abrió más espacio a la acción de los agentes jurídicos.

Sin pretender ofrecer aquí una cronología detallada, ni un análisis político-conceptual más profundo de la crisis política brasileña entre 2013 y 2014, cabe hacer un comentario, sin embargo, acerca del papel que han desempeñado los agentes del Poder Judicial en la historia política brasileña, cuyo origen podría estar en la primacía del ámbito de lo público como protagonista en los procesos de modernización del país que, a diferencia de las trayectorias consideradas clásicas, no tuvieron las élites económicas y los intereses privados como elemento catalizador, sino el Estado y su principal instrumento: el Derecho. No obstante, esa primacía se actualiza en la Constitución de 1988, entendida como un conjunto de valores que debe materializarse a través de la activación de una comunidad de intérpretes, que tiene en el Poder Judicial un lugar preferencial para el ejercicio de la democracia y para el cumplimiento de

las garantías establecidas en el texto constitucional (Vianna, 1996; Haberle, 1997; Cittadino, 1999; Avritzer y Marona, 2014). Aunque es interesante señalar que, ese papel progresista, estuvo lejos de ser consensuado dentro del ámbito jurídico (Arantes, 1997; Almeida, 2017b). Un grupo considerable de sus agentes se identificaban más con el léxico conservador y/o estaban comprometidos con fuerzas políticas responsables de obstaculizar esas transformaciones económico-sociales. Así, el convenio de élites políticas, económicas y sociales comprometidas con inviabilizar esos cambios no es algo reciente. Tal como afirma Almeida (ibídem), el armazón institucional que hizo posible el *Mensalão*, la Operación Lava Jato y la actuación del STF en la interrupción del Gobierno de Dilma Rousseff, es fruto del diseño institucional del sistema judicial en el régimen constitucional de 1988, caracterizado por el protagonismo de los tribunales supremos y por la autonomía y discrecionalidad de las instituciones judiciales, sobre todo del Ministerio Público Federal (Arantes, 2010 y 2011).

A este respecto, motivadas por un contexto que pretendía ampliar el papel de las instituciones públicas en la regulación de las relaciones sociales, las instituciones jurídicas fueron capaces de fortalecerse frente a otras dimensiones de la Administración pública, lo cual conllevó un aumento del número de funcionarios y una mejora de sus condiciones laborales. Este papel reforzado, que primero estuvo asociado a la esfera civil y a garantizar los derechos establecidos por la Constitución de 1988, como *locus* del activismo judicial, así como de la judicialización de la política —en la medida en que se justificaba frente a la inacción de los agentes políticos—, se fue transfiriendo a la esfera penal. En este nuevo escenario, caracterizado por un *pretorianismo republicano* (Avritzer y Marona, 2017), el ámbito jurídico reivindicaba su función de representante del interés público, castigando a esos mismos agentes cuando estaban implicados (de forma más o menos inequívoca) en acusaciones de corrupción. Así pues, hasta mediados de los años 2000, la actuación del ámbito jurídico como fuerza conservadora estaba concentrada en bloquear el potencial transformador económico-social de la Constitución de 1988. Por lo que, como argumentan Koerner y Schilling (2015: 83), fue posible observar la actuación del STF a favor de los proyectos neoliberales de reforma y estabilización económica en la década de 1980.

Simultáneamente, sin embargo, la esfera jurídica también actuó como fuerza progresista durante ese período, demostrando la ambigüedad o, más concretamente, la presencia de diferentes grupos, intereses e ideologías en su seno. Ahora bien, conforme se entraba en el siglo XXI, su actuación se volvió menos ambigua, teniendo en cuenta la progresiva hegemonía de los valores conservadores y la diseminación de ese *espíritu pretoriano*, que des-

plazó su actuación a combatir la corrupción (Avritzer y Marona, 2017; Engelman, 2016). Pese a las singularidades de esta amalgama entre tradición y progreso, el objetivo de este artículo no es analizar el activismo judicial (Koerner, 2013), como tampoco elaborar una crítica a la degeneración de este bajo la forma de una judicialización política (Tate y Vallinder, 1997; Cappeletti y De Oliveira, 1999), sino simplemente examinar el papel del STF en el proceso de impugnación de Dilma Rousseff, con el propósito de averiguar si los magistrados nombrados durante las administraciones del PT se comportaron de un modo distinto, favoreciendo a aquellos que los habían designado. Para ello, se establece como punto de partida de este proceso la coyuntura que surgió a partir de la detención del senador Delcídio Amaral (PT) el 25 de noviembre de 2015, acusado de obstruir la investigación de la Operación Lava Jato. La decisión, que la segunda sala del STF apoyó por unanimidad, tensionó el principio de la división de poderes y uno de sus corolarios: la inmunidad parlamentaria. Por primera vez, desde que se había promulgado la Constitución de 1988, un senador fue detenido en ejercicio de su cargo.

La repercusión de la detención de Delcídio tuvo una relación directa con la trayectoria de la impugnación de Rousseff, debido a la posterior filtración de las delaciones remuneradas de la mano del senador, divulgadas ampliamente por los medios de comunicación. Estos hechos acrecentaron las críticas de la oposición al Gobierno y robustecieron el clima político necesario para el *impeachment*, aun cuando no hubiera pruebas que apoyaran las denuncias especificadas en la delación, ni estuvieran directamente relacionadas con la presidenta. La dinámica de distensión de los principios jurídicos estaba funcionando a toda marcha. En ese momento, los diputados del PT que constituían el Consejo de Ética de la Cámara decidieron realizar un contraataque al insistir en las investigaciones contra Eduardo Cunha —entonces presidente de la Cámara de los Diputados y principal articulador de la oposición. En respuesta, ese mismo día, Cunha aceptó la petición de *impeachment* redactada por Hélio Bicudo, jurista y diputado por el PT en la década de 1990, y de Miguel Reale Júnior, abogado y ministro de Justicia del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) en 2002. Entre los argumentos que presentaron para fundamentar el proceso, el principal fue la edición de decretos que permitían conceder créditos complementarios sin autorización del Congreso y la contratación de préstamos entre el Gobierno y las instituciones financieras públicas (Fernandes, 2020). La aceptación del proceso permitió al Congreso, en primer lugar, bloquear la Administración de Rousseff y, a continuación, iniciar el proceso que conduciría a su destitución, tras votar a favor de su continuidad el día 2 de diciembre.

El relator del proceso, el magistrado Edson Fachin, en una decisión unilateral, decidió el día 8 de diciembre de 2015 suspender la creación de la Comisión Especial, en cuanto etapa necesaria para el desarrollo del *impeachment*, hasta el día 16 del mismo mes, fecha acordada para la deliberación. Su objetivo era impedir la práctica de actos que el propio Supremo pudiera anular en el futuro. El 17 de diciembre, el STF expresó la doble esencia del proceso, es decir, la jurídica y la política. No obstante, en esta ocasión, los magistrados reafirmaron la intención de que su papel consistiera únicamente en garantizar la rectitud de los procedimientos jurídicos, sin interferir en las decisiones y deliberaciones políticas del Poder Legislativo. El tribunal se reservó, junto con el Senado, la competencia de poder rechazar la apertura del proceso y la creación de la Comisión Especial, formada por candidaturas designadas por los líderes en una votación abierta, manteniendo el mismo protocolo que se había seguido en 1992 en el proceso de *impeachment* contra el entonces presidente Fernando Collor.

Entendemos que los aspectos particulares del proceso de impugnación de Dilma Rousseff muestran el modus operandi del neogolpismo reciente en América Latina, que ha pasado por transformaciones y cambios que pueden describirse como un perfeccionamiento de esa estrategia de destitución.

Esta decisión del Supremo redujo las posibilidades de bloquear el *impeachment* por parte de la presidenta por medio de apelaciones al Poder Judicial, el cual acabó adoptando una conducta prominente en la coyuntura política brasileña, al presentarse como

variable determinante para comprender bien las circunstancias que derivaron en la interrupción del Gobierno Rousseff. Ello supuso una gran sacudida para la democracia brasileña, aunque el hecho de que se respetaran los protocolos procesales del *impeachment* sirvió para mitigar la resistencia de la opinión pública nacional e internacional en relación con la cadena de acontecimientos ocurridos entre 2013 y 2016. Por lo tanto, entendemos que los aspectos particulares del proceso de impugnación de Dilma Rousseff muestran el modus operandi del neogolpismo reciente en América Latina, que ha pasado por transformaciones y cambios que pueden describirse como un perfeccionamiento de esa estrategia de destitución.

En el caso de Brasil, los dos factores principales de tal sofisticación se refieren a la gradualidad con la que se dio el neogolpe y al proseguimiento operativo de los mecanismos empleados. Por un lado, la destitución de Rousseff tiene su origen en 2013; por otro, puede decirse que el neogolpe siguió funcionando al menos hasta 2018 a fin de garantizar la elección de Jair Bolsonaro. Ahora bien, lo que aquí nos interesa es arrojar luz sobre algunas variables que ayuden a comprender los factores que precipitaron la interrupción del Gobierno del PT, por lo que nos centraremos exclusivamente en las decisiones del STF en los dictámenes directamente relacionados con la destitución de la presidenta.

La actuación de los magistrados designados por el Partido de los Trabajadores (PT) en el *impeachment* contra Dilma Rousseff

El objetivo de este apartado es evaluar la hipótesis que configura el presente trabajo, esto es, que el Tribunal Supremo brasileño desempeñó un papel determinante en la interrupción del Gobierno del PT, aun cuando la mayoría de sus miembros habían sido designados por aquel. Para ello, identificaremos los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) nombrados por Lula da Silva y Dilma Rousseff y describiremos cómo estos actuaron en el proceso de *impeachment* de la expresidenta. Por motivos prácticos, el análisis se ha realizado a partir de un conjunto limitado de decisiones relacionadas con las sentencias clave para el inicio del proceso de *impeachment*.

El Supremo Tribunal Federal (STF) y su composición

En Brasil, el STF es el órgano de la cúpula del Poder Judicial, según el artículo 102 de la Constitución de la República, al que esta otorga la responsabilidad de protegerla. Dicho tribunal está compuesto por 11 magistrados, nombrados por el presidente de la República, previa aprobación por mayoría absoluta del Senado Federal (art. 101). Los órganos del STF son el Plenario, las salas y el presidente (art. 3º del RISTF/1980). Este último, junto con el vicepresidente, son elegidos por el Plenario, entre los magistrados, y tienen un mandato de dos años. Cada una de las dos salas está constituida por cinco magistrados y presidida por el miembro más antiguo durante un período de un año, estando vedada la reelección, hasta que todos los integrantes hayan ejercido la Presidencia, observándose el orden decreciente de antigüedad (art. 4º, § 1º, del RISTF/1980).

Como se observa en la tabla 1, de los 11 magistrados del STF, solo tres no fueron nombrados por los presidentes del PT. De ello se deriva la hipótesis de que, ante los juicios en el Plenario directamente relacionados con los intereses del partido, se formara una mayoría favorable a dichos intereses. Con todo, tal percepción obedece a la expectativa de que estos nombramientos se realizaron en función del objetivo de cooptación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, con la consiguiente vulneración de la independencia entre los poderes, que muchos medios de comunicación atribuyeron a las cúpulas *progresistas* en el marco de la *marea rosa* en América Latina. No obstante, nuestra hipótesis diverge de esta interpretación. Creemos que, precisamente por no haber seguido la lógica de la cooptación, tales nombramientos no propiciaron posicionamientos

que permitieran garantizar la perpetuación del proyecto político desarrollado por el PT. Con el fin de demostrarla, en el siguiente apartado se analizan aquellos juicios que parecen ser los más esenciales al respecto.

Tabla 1. Composición y actuación del Supremo Tribunal Federal (STF) en el transcurso del proceso de *impeachment*

Nombre	Presidente/a responsable del nombramiento
Ricardo Lewandowski	Luis Inácio Lula da Silva
Cármen Lúcia	Luis Inácio Lula da Silva
Dias Toffoli	Luis Inácio Lula da Silva
Luiz Fux	Dilma Rousseff
Rosa Weber	Dilma Rousseff
Teori Zavascki	Dilma Rousseff
Luís Roberto Barroso	Dilma Rousseff
Edison Fachin	Dilma Rousseff
Gilmar Mendes	Fernando Henrique Cardoso
Marco Aurélio Mello	Fernando Collor
Celso de Mello	José Sarney

Fuente: Elaboración propia.

Los casos

Los tres casos aquí escogidos forman parte de una serie de hechos que condujeron al *impeachment* de Dilma Rousseff y están directamente relacionados con la apertura y los protocolos del proceso por el Congreso Nacional.

El primero consiste en una interpelación por incumplimiento de precepto fundamental (ADFP 378, siglas de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) presentada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), miembro de la base de apoyo de los gobiernos del PT. En esa solicitud, se pone en cuestión que algunos dispositivos e interpretaciones de la Ley 1.079/50⁷ desafíen preceptos constitucionales. La ley en cuestión define en qué consisten los delitos de responsabilidad y establece las penas correspondientes, así como regula el respectivo proceso

7. Para más información, véase <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-1079-10-abril-1950-363423-normaatualizada-pl.html>

judicial⁸. El proceso fue juzgado el 17 de diciembre de 2015, habiéndole precedido una solicitud cautelar incidental, presentada el 8 de diciembre de 2015, en la que se requería la suspensión de la formación de la Comisión Especial como consecuencia de la decisión de la Presidencia de la Cámara de los Diputados de constituir la por medio de votación secreta, y alegando que el presidente de la Cámara Eduardo Cunha era sospechoso o estaba incapacitado para recibir la imputación. Ambas solicitudes fueron rechazadas. Los magistrados del Supremo acordaron que habría que utilizar como parámetros los protocolos observados en el *impeachment* de Collor. En ese momento, correspondía al Senado la competencia de rechazar o aprobar la apertura del proceso, y la Comisión Especial para el caso se configuró a partir de las candidaturas designadas por los líderes partidarios. Finalmente, la elección de los miembros de la Comisión se realizó mediante voto abierto. Tal acuerdo estableció que el STF no actuaría como un obstáculo para el Poder Legislativo, ni se superpondría a este en la reglamentación de sus procedimientos internos, ya que reconocía la naturaleza política del *impeachment*⁹.

El segundo caso que analizamos se refiere a las sesiones extraordinarias con fecha de 14 y 15 de abril de 2016, en las cuales el Plenario del STF se reunió para deliberar sobre una serie de actuaciones que ponían en cuestión algunos aspectos del protocolo de *impeachment*. En particular, se trataba del orden de votación que el presidente de la Cámara estableció para la sesión que tendría lugar el 17 de abril, que se iniciaría con los estados del sur (en los que supuestamente existía un menor apoyo al Gobierno del PT) y concluiría con los del norte (ampliamente favorables a aquel). El primer documento que se presentó a los magistrados fue la *Acción Directa de Inconstitucionalidad 5498*, cuyo demandante era el mismo PCdoB, en el cual solicitaba que dicha votación se desarrollara de manera intercalada entre los diputados del norte y el sur. El tribunal desestimó la petición por mayoría. Votaron por la desestimación de la medida cautelar, los magistrados y las magistradas Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes y Celso de Mello. Los magistrados Marco Aurélio (juez ponente), Edson Fachin, Luís Rober-

-
8. Se consideran delitos de responsabilidad aquellos actos cometidos por el presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y, en especial, actos practicados contra la integridad de la Unión como tal; el libre ejercicio del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los poderes Constitucionales de las unidades de la Federación; el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; la seguridad interna del país; la probidad en la Administración; la ley presupuestaria, y el cumplimiento de las leyes y las decisiones judiciales. Pese a estar descritos en el artículo 85 de la Constitución de la República Federal de Brasil (CRFB), la Ley 1.079/50 describe y regula el delito.
 9. (ADPF 378 MC / D) Véase el contenido íntegro de la sentencia en: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10444582>

to Barroso y Ricardo Lewandowski fueron derrotados. La segunda acción que se votó fue el *Recurso de Amparo 34127*, que trataba el mismo tema, presentada por el diputado federal Weverton Rocha del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), también de la base de apoyo al Gobierno. Sin embargo, el resultado de esta decisión fue el empate. Con cinco votos a favor de desestimar las medidas cautelares, y cinco a favor de aprobarlas parcialmente (con varios votos particulares), prevaleció la decisión de que, en el recurso de amparo, el empate debe favorecer la presunción de legalidad y legitimidad del acto impugnado. La tercera parte se refiere al *Recurso de Amparo 34128*, presentado por el diputado federal Rubens Pereira (PCdoB). El contenido del proceso¹⁰ y su resultado fueron los mismos del MS34127, un empate que mantendría el acto impugnado. La tercera votación se refiere al *Recurso de Amparo 34130*, presentado por la Abogacía General de la Unión (AGU) en nombre de la presidenta de la República, en la que pedía la nulidad del informe del juez ponente de la Comisión de *Impeachment* en la Cámara de los Diputados, alegando actos ilegales cometidos en la creación de dicha comisión. Por mayoría, el Plenario desestimó las alegaciones de limitación del derecho a la defensa, coincidiendo con el voto del magistrado relator Edson Fachin. La cuarta votación, realizada en la misma sesión extraordinaria del 15 de abril de 2016, deliberó sobre el *Recurso de Amparo 34131*, presentado por el diputado federal Paulo Teixeira, del PT. Aparte de contestar a la demanda de suspensión del informe de la Comisión Especial, en virtud de la extrapolación del objeto de la denuncia, el MS34131 ponía en cuestión la constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 1.079/50, en el cual constan como elementos constituyentes del delito de responsabilidad la creación de gastos o contratación de préstamos al margen de la normativa legal. Tal como consta en la página 24 de la sentencia, *por unanimidad*, los magistrados apoyaron el voto de Edson Fachin, que presentó la petición. La resolución consistió en que, precisamente porque emitía un juicio según el cual admitía la denuncia contra la presidenta de la República, la Cámara de los Diputados no debía pronunciarse sobre el carácter constitucional o no de los artículos en que se encuadra el delito de responsabilidad, pues esta función corresponde al Senado Federal.

10. En el mérito de la causa, el MS34128 pedía la concesión de la solicitud para exigir al presidente de la Cámara que respetara la literalidad de las prescripciones reglamentarias y estableciera la alternancia, convocando de forma alternativa un diputado del norte y luego uno del sur del país; de manera complementaria. En caso de que se considerara aplicable la orientación de la Cámara, la votación empezaría por los estados del norte del país, ya que la última vez que se había aplicado esta norma, la votación se inició por los estados del sur.

El tercer y último caso examinado tiene relación con el Recurso de Amparo 34193, presentado por la AGU, en nombre de la presidenta, en el que solicitaba la anulación del *impeachment* por irregularidades cometidas a lo largo del proceso. En concreto, se ponía en duda la decisión de la Comisión Especial de desestimar que se adjuntaran documentos relacionados con la colaboración retribuida del expresidente de Transpetro, Sérgio Machado. El relator, el magistrado Teori Zavascki, rechazó la acción el 4 de julio de 2016. Tres días después, se refutó el recurso a esta resolución, también por decisión unipersonal del presidente del STF, el magistrado Ricardo Lewandowski. A su entender, la denuncia que originó el proceso de *impeachment* se aceptó únicamente con relación a dos actuaciones: la apertura de créditos por decreto sin autorización del Congreso Nacional y las llamadas «pedaladas fiscales»¹¹, sin que cupiera recurso sobre otros elementos debatidos durante el juicio.

Consideraciones finales

Como se ha demostrado a lo largo del texto, los tribunales superiores de Justicia desempeñaron un papel fundamental para mantener o destituir a los presidentes considerados *progresistas* en América Latina, principalmente cuando existía un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El episodio brasileño no fue una excepción, ya que –como puede observarse a partir de la lectura de los casos analizados– en todos los juicios donde se instó al STF a decidir sobre cuestiones clave para mantener el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, las decisiones fueron tomadas, por unanimidad o por mayoría, para ir contra los intereses del PT. Tal evidencia llama la atención si tenemos en cuenta que este partido nombró a ocho de los once magistrados que componen el tribunal y que, aun cuando cada una de esas autoridades directamente escogidas por el PT tomaron las decisiones de manera unipersonal, estas resultaron ser adversas para aquel. En nuestra opinión, harían falta nuevas investigaciones contrastadas a este respecto para poder comprender de qué modo los presidentes del país escogieron (o no) a los magistrados de los tribunales supremos y de qué modo estos actuaron de tal manera en una situación de crisis y ante una posible destitución presidencial.

11. Reubicaciones en cuentas oficiales del Gobierno con el objetivo de maquillar los resultados económicos, especialmente los gastos públicos.

Al demostrar el protagonismo del Poder Judicial en el proceso brasileño, no pretendemos atribuir a este órgano la responsabilidad exclusiva de su resultado final. De hecho, la erosión de las bases parlamentarias del Gobierno en las elecciones de 2014 posibilitó la derrota por mayoría absoluta en las votaciones que tuvieron lugar en la Cámara de los Diputados en abril de 2016, y en el Senado Federal en agosto del mismo año. Así pues, llegamos a la conclusión de que el proceso de destitución de Dilma Rousseff fue dirigido por una alianza de actores

Los tribunales superiores de Justicia desempeñaron un papel fundamental para mantener o destituir a los presidentes considerados progresistas en América Latina, principalmente cuando existía un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

estatales y no estatales, tanto de la derecha *tradicional* como de la *nueva* derecha.

Así como, por un lado, los grupos pertenecientes a las élites tradicionales brasileñas, que estuvieron alejados de la Presidencia durante los años de gobierno del PT, buscaron diferentes estrategias –fueran legales

o no– para recuperar el mando del país, los miembros de la llamada «nueva derecha» parecen haber logrado su propósito, tanto al alcanzar la Presidencia de la República con Jair Bolsonaro, como al vencer el debate en el ámbito discursivo, incluyendo, además de la ya conocida ortodoxia neoliberal, asuntos de cuño moral y religioso que, a día de hoy, van adquiriendo más notoriedad e importancia en Brasil.

Referencias bibliográficas

- Almeida, Eloísa Machado de. «As elites da justiça: Instituições, profissões e poder na política da justiça brasileira». *Revista de Sociologia e Política*, vol. 22, n.º 52 (2014), p 77-95.
- Almeida, Eloísa Machado de. «O novo papel assumido pelo Judiciário». *Revista Socialismo e Liberdade*, n.º 16 (2017a), p. 31-33.
- Almeida, Eloísa Machado de. «A noção de campo jurídico para o estudo dos agentes, práticas e instituições judiciais». En: Engelmann, Fabiano (org.). *Sociologia Política das instituições Judiciais*. Porto Alegre: UFRGS; CEGOV, 2017b, p 124-150.
- Arantes, Rogério B. «Judiciário e política no Brasil». São Paulo: Idesp/Sumaré, 1997.
- Arantes, Rogério B. «The Federal Police and the Ministério Público». En: Power, Timothy y Taylor, Matthew (coord.). *Corruption and Democracy in Brazil*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2010, p. 184-217.

- Arantes, Rogério B. «Polícia Federal e construção institucional». En: Avritzer, Leonardo y Filgueiras, Fernando (orgs.). *Corrupção e Sistema Político no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira*, 2011, p. 99-132.
- Arantes, Rogério B. «Rendición de cuentas y pluralismo estatal en Brasil: Ministerio Público y Policía Federal». *Desacatos*, n.º 49 (2015), p. 28-34.
- Avritzer, Leonardo y Marona, Marjorie. «A tensão entre soberania e instituições de controle na democracia brasileira». *Dados*, vol. 60, n.º 2 (2017), p. 359-393.
- Cappelletti, Mauro y De Oliveira, Carlos Alberto Alvaro. *Juízes legisladores?* Porto Alegre: SA Fabris Editor, 1999.
- Castelan, Daniel Ricardo. *Esquerdas na América do Sul: padrões de inserção internacional e constrangimentos aos programas de proteção social*. Brasília: Ipea, 2013.
- Cittadino, Gisele. *Pluralismo, direito e justiça: elementos da filosofia constitucional contemporânea*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
- Coelho, André Luiz. «Um novo modelo de destituição de mandatários ou a releitura de velhas práticas? Reflexões sobre a instabilidade presidencial contemporânea na América Latina». *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, vol. 113, (2016), p. 11-50.
- Coelho, André Luiz y Mendes, Mateus. «A sofisticação do neogolpismo: dos protestos de 2013 à destituição de Dilma Rousseff». *Revista Sul Global*, vol. 1 (2020), p. 212-232.
- Cruz, Sebastião Velasco; Kaysel, André y Codas, Gustavo. *Direita, volver!: o retorno da direita e o ciclo político brasileiro*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015.
- Cowan, Benjamin Arthur. «“Nosso Terreno”. Crise moral, política evangélica e a formação da ‘Nova Direita’ brasileira». *Varia História*, vol. 30, n.º 52 (2014), p. 101-125.
- De Almeida, Frederico. «Os juristas e a crise». *Plural*, vol. 26, n.º 2 (2019), p. 96-128.
- Demier, Felipe y Hoeveler, Rejane (orgs.). *A onda conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil*. Rio de Janeiro: Mauad, 2016.
- Engelmann, Fabiano. «Julgar a política, condenar a democracia? Justiça e crise no Brasil». *Conjuntura Austral*, vol. 7, n.º 37 (2016), p. 9-16.
- Fernandes, Pedro de Araújo. *A Toga Contra o Voto: O STF no Impeachment da Presidente Dilma*. Curitiba: Editora Appris, 2020.
- Fontainha, Fernando y De Lima, Amanda Cavalcanti. «Judiciário e crise política no Brasil hoje: do mensalão à Lava Jato». En: Kerche, Fábio y Júnior, João Feres (coords.). *Operação Lava Jato e a democracia brasileira*. São Paulo: Contracorriente, 2018, p. 53-68.

- Haberle, Peter. *Hermenêutica Constitucional – A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição*. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1997.
- Koerner, Andrei. «Ativismo Judicial? Jurisprudência constitucional e política no STF pós-88». *Novos Estudos-CEBRAP*, n.º 96 (2013), p. 69-85.
- Koerner, Andrei y Schilling, Flávia. «O direito regenerará a República? Notas sobre política e racionalidade jurídica na atual ofensiva conservadora». En: Cruz, Sebastião Velasco; Kaysel, André; Codas, Gustavo (orgs.). *Direita, voltar!: o retorno da direita e o ciclo político brasileiro*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015, p. 75-90.
- Lanzaro, Jorge. «Gobiernos de izquierda en América Latina: entre el populismo y la social democracia – Una tipología para avanzar en el análisis comparado». *Análise de Conjuntura – Observatório Político Sul-Americano*, n.º 12 (2007), p. 1-20.
- Martínez-Escobar, Fernando y Sánchez-Gómez, José Tomás. «O golpe parlamentar no Paraguai: a dinâmica do sistema de partidos e o poder destituente do Congresso». En: Cruz, Sebastião Velasco; Kaysel, André; Codas, Gustavo (orgs.). *Direita, voltar!: o retorno da direita e o ciclo político brasileiro*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015, p. 279-294.
- Panizza, Francisco. «La marea rosa». *Análise de Conjuntura – Observatório Político Sul-Americano*, n.º 8. (2006), p. 1-16.
- Santander, Sebastián. «El ‘giro a la izquierda’ en América Latina: Fragmentación y recomposición de la geopolítica regional». *Cuadernos sobre relaciones internacionales, regionalismo y desarrollo*, vol. 4, n.º 7 (2009), p. 17-38.
- Silva, Fabricio Pereira. «Quinze anos da onda rosa latino-americana: balanço e perspectivas». *Observador On-Line*, vol. 9, n.º 12 (2014), p. 1-28.
- Soares de Lima, Maria Regina (org.). *Desempenho de governos progressistas no Cone Sul*. Río de Janeiro: Edições Iuperj, 2008.
- Tarouco, Gabriela da Silva y Madeira, Rafael Machado. «Partidos, programas e o debate sobre esquerda e direita no Brasil». *Revista de Sociologia e política*, vol. 21, n.º 45 (2013), p. 149-165.
- Tate, Neil y Vallinder, Torbjorn. *The global expansion of judicial power*. Nueva York: NYU Press, 1997.
- Vianna, Luiz Werneck. «Caminhos e descaminhos da revolução passiva à brasileira». *Dados*, vol. 39, 1996 (en línea) <https://doi.org/10.1590/S0011-52581996000300004>

Traducción del original en portugués: Roser Vilagrassa y redacción CIDOB.

Reseñas de libros

La(s) derecha(s): ¿ayer, hoy y siempre?

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.261

Elías Chavarría-Mora
*Investigador predoctoral,
Departamento de Ciencias Políticas,
Universidad de Pittsburgh*

Mudde, Cas
The Far Right Today
Polity, 2019
205 págs.

Robin, Corey
La mente reaccionaria
Capitán Swing, 2019
320 págs.

Escribo esta reseña a un mes de la posible reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, luego de leer dos libros cuyas portadas son evocativas de su persona. No hay duda de que, si hay un tema que resulta llamativo en la política internacional contemporánea, este es el fortalecimiento de movimientos a la derecha del espectro político, particular-

mente en su forma más extrema. Los dos libros aquí reseñados presentan diferentes, pero igualmente valiosas miradas a este resurgimiento de la derecha, especialmente por su atención al desarrollo histórico de este movimiento y por su negativa a tomar una visión simplista.

The Far Right Today de Mudde ofrece justo lo que su título promete: un estado de la cuestión de la extrema derecha fácil de digerir para cualquier interesado en el tema, no solo académicos. Su enfoque principal es la normalización de lo que el autor denomina la cuarta ola de la extrema derecha. A lo largo de los 10 capítulos, Mudde ofrece detalles de la historia, ideología, organización, membresía y otros detalles de la mencionada ola. Parte del atractivo de la propuesta es que no solo ofrece un estado actual, sino que se remonta a su génesis, pasando por el neofascismo de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, el populismo derechista agrario y anti-Estado de bienestar que lo siguió, y por la tercera ola de derecha radical en los ochenta. A lo largo del recuento, Mudde describe muy claramente qué es (y qué no es) fascismo, así como menciona importantes influencias intelectuales a veces ignoradas sobre

la extrema derecha, particularmente la *Nouvelle Droite* de Alain de Benoist y otros gramscianos de derecha, con su estrategia de hegemonía cultural y etnopopulismo, como predecesores de lo que hoy observamos.

Una fortaleza y punto fundamental de su enfoque es la claridad conceptual a la hora de diferenciar entre corrientes dentro de la extrema derecha. Mudde parte de la idea de que la extrema derecha (*far right*) no solo es cualitativamente diferente de la derecha conservadora tradicional, sino que también tiene sus diferencias internas: mientras que la derecha extremista (*extreme right*) es antidemocrática y continúa teniendo solo una influencia pequeña en la sociedad, la derecha radical (*radical right*) abraza la democracia y ha cosechado éxitos electorales y apoyo popular precisamente porque los fundamentos de su ideología —el nativismo (nacionalismo junto con xenofobia), el autoritarismo como rasgo de personalidad y el populismo— sí tienen aceptación en amplios sectores de la población de muchos países, aunque, como su nombre indica, en la ideología de estos grupos su nativismo, autoritarismo y populismo están más radicalizados que en el grueso de la población.

Al hablar de la organización, partidarios y activistas, así como de temas electorales relevantes para la derecha, lo que queda patente en la descripción de Mudde es la diversificación estratégica, ligada a la normalización de la derecha radical, que define la cuarta ola. La derecha radical no solo se organiza ya en corpúsculos o partidos políticos de nicho, sino que abraza la tecnología mediante publicaciones digitales y redes sociales, se comporta como

los movimientos sociales de izquierda e incluso llega a integrar entre sus líderes a mujeres y a sexualidades diversas, además de tener seguidores que van más allá del hombre blanco, joven y sin educación universitaria, que tradicionalmente apoyaba a la derecha radical.

Parte de la relevancia del texto es, por supuesto, el éxito electoral actual de esta derecha radical. Al respecto, Mudde ofrece un rápido resumen de lo que hemos aprendido sobre los casos de partidos de esta corriente que han tenido éxito en las urnas: tanto motivos económicos como culturales explican el apoyo de los votantes; sin embargo, la reacción contra los cambios culturales producto de la globalización y el multiculturalismo es mucho más potente como explicación. Una vez en el poder, la marca de estos movimientos ha sido mover el sistema político hacia democracias iliberales, es decir, hacia regímenes híbridos, siendo el caso paradigmático el Gobierno de Viktor Orbán en Hungría. Las estrategias para debilitar el campo de acción de estos partidos de derecha radical —apunta el autor— tendrán diferente efectividad dependiendo del contexto de cada país y de los objetivos perseguidos, aunque entre las principales recomendaciones está la demarcación, es decir, el famoso *cordon sanitaire* belga de excluir a la derecha radical como un socio político legítimo para cualquier otro partido, así como fortalecer las instituciones de la democracia liberal de cada país.

A diferencia de la propuesta de Mudde, *La mente reaccionaria* de Robin hasta cierto punto rechaza la heterogeneidad y más

bien abraza la idea de una sola derecha llamada conservadurismo –como suele ser habitual en Estados Unidos– y considera que los diferentes rasgos de la derecha radical moderna siempre han sido parte de dicho conservadurismo. Para él, el conservadurismo es la teoría de tener el poder, ver ese poder amenazado e intentar recuperarlo. Siguiendo una larga primera sección donde expone sus tesis sobre la esencia del conservadurismo a pesar de sus diversas variaciones en el tiempo, Robin ofrece una interesante colección de ensayos sobre algunos de los pensadores más importantes del pensamiento conservador, incluyendo a Thomas Hobbes, Edmund Burke, Adam Smith, Friedrich Nietzsche, Friedrich Hayek, Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises y Ayn Rand. Seguidamente hace un recuento del fortalecimiento del movimiento conservador en los Estados Unidos enfocándose en los políticos que lo han hecho avanzar, como Barry Goldwater, George W. Bush, el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia y finalmente, Donald Trump.

Los diversos ensayos de Robin, en algunos casos usando emparejamiento de temas un poco extraños (Nietzsche y la Escuela Austriaca; Ayn Rand y el chicle; Scalia, el drama televisivo 24 y el golf), buscan demostrar que existe una esencia del conservadurismo. Más específicamente, que esa teoría de tener y defender el poder tiene elementos como los siguientes: el elitismo aristocrático que, sin embargo, usa el populismo; el romanticismo rebelde; la exaltación del conflicto (la destrucción creativa de Schumpeter); copias de estrategias de la izquierda, y una defensa, en

especial en la esfera privada, de la libertad siempre como un medio para mantener el orden natural, jerárquico y desigual del mundo, nunca como un bien en sí mismo.

Tomando en conjunto ambos libros, según mi parecer, hay complementariedades valiosas, así como una cierta incompatibilidad de enfoques. Comenzando por la forma en que se complementan, es sumamente valioso el enfoque histórico centrado en estudiar a las figuras que han tenido importancia en el desarrollo del pensamiento de las corrientes modernas de derecha. No creo que haya error teórico más grande al abordar el tema de las derechas en la actualidad que resumirlas a un simple «son todos fascistas», ignorando la diversidad de pensamiento, creencias, movimientos sociales que ha producido la derecha, así como la rigurosidad, o incluso falta de rigurosidad, de algunos de sus pensadores, como muy bien retrata Robin al hablar del capitalismo de telenovela de Rand.

Otra complementariedad valiosa nace de la diferencia entre la ciencia política empírica de Mudde y la teórica de Robin. Al hablar de opinión pública, características organizacionales, sistemas de partidos, reglas institucionales y casos más allá de Estados Unidos y Europa Occidental, *The Far Right Today* es un libro que habla sobre un campo más amplio y, parece, más urgente. Por su parte, *La mente reaccionaria* se centra primordialmente en ideas: aunque, por supuesto, observa la influencia en temas diversos como la guerra contra el terror, el imperialismo y la lucha por los derechos de las minorías, no deja de ser primordialmente una meditación sobre

qué creen ciertos intelectuales. Como tal, creo que el libro de Robin es sumamente valioso para aquellos que desean acercarse críticamente a esa tradición de pensadores, pero, si lo que se busca es una explicación a las preocupaciones actuales ante los efectos políticos de la derecha extrema, el libro de Mudde es mucho más instructivo. Recalco además la palabra *críticamente* en el párrafo anterior: no tengo dudas de que muchos expertos en varios de los pensadores analizados estarían en fuerte desacuerdo con las conclusiones y similitudes entre pensadores que Robin encuentra.

Por último, la gran incompatibilidad entre los dos libros es la idea de una esencia de la derecha que se mantiene en sus manifestaciones o una clara demarcación entre diferentes subtipos. Creo que esta diferencia es hasta cierta punto producto del enfoque de cada autor: después de todo, ambos reconocen que existe algo llamado «la derecha» y ambos presentan subtipos y tensiones entre ellos. Aun así, mi impresión no deja de ser que Robin habla de la derecha, mientras que Mudde lo hace de unas derechas. Mi inclinación es preferir la segunda opción: a pesar de sus intentos, *La Mente Reaccionaria* no logra realmente convencer de que los debates en la derecha son puramente diferencias contextuales irrelevantes, debates tales como la economía contra la política como el centro de la experiencia humana, entre religión y ateísmo o entre localismo, nacionalismo e internacionalismo. A pesar de esta diferencia, repito, ambos libros son fundamentales para comprender la influencia actual de la derecha fortalecida.

¿Una nueva ola de derecha radical?

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.265

Nerea C. Palma
*Investigadora predoctoral
en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile*

Gonzalo Parra Coray
*Investigador predoctoral
en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile*

Jesirell Turell
*Investigadora predoctoral en
Sociología, Pontificia Universidad
Católica de Chile*

Sánchez Rodríguez, José
**Derecha Radical: auge de una ola
reaccionaria mundial**
Popular, 2019
290 págs.

Romero, José Luis
**El pensamiento político de la derecha
latinoamericana**
Paidós, 1970
177 págs.

Bohoslavsky, Ernesto; Jorge,
David; Lida, Clara (coords.)
**Las derechas Iberoamericanas:
desde el fin de la Primera
Guerra hasta la Gran
Depresión**
El Colegio de México, 2019
355 págs.

En los últimos años algunos países han optado por gobiernos o políticas de derechas radicales. El ascenso de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil y el éxito del Brexit en Europa son claros ejemplos de este fenómeno político. El retorno de discursos y prácticas políticas nacionalistas, populistas y xenófobas han demostrado tener un amplio apoyo en sociedades liberales y con tradiciones democráticas en el mundo occidental. ¿Cómo podemos entender el ascenso de grupos de derechas radicales en las democracias liberales? ¿Qué elementos comparten estos procesos nacionales entre sí? ¿En qué se diferencia esta nueva ola de derechas radicales de las observadas en el siglo xx? Con el propósito de examinar estos interrogantes, en este ensayo analizamos los trabajos de Romero (1970), Bohoslavsky, Jorge y Lida (2019), y Sánchez Rodríguez (2019) a fin de identificar elementos de ruptura y continuidad de las diferentes olas de derecha en la historia.

Estos trabajos ofrecen una mirada fresca y con una perspectiva histórica novedosa sobre la reacción de los grupos de derecha. Poner la atención en los procesos políticos y sociales históricos permite una comprensión contextualizada de los ascensos actuales de gobiernos de derecha y, en particular, de la adaptación de sus prácticas, formas organizacionales e ideologías. Al respecto, en el trabajo de Romero (1970) titulado *El pensamiento político de la derecha latinoamericana* es posible comprender cómo estos grupos buscan perpetuar las estructuras de ordenamiento socioeconómico y político que las dotan de poder en la región. El autor estudia en profundidad los orígenes de la derecha latinoamericana

que se sitúan en los grupos señoriales que tomaron ventaja de la estructura colonial impuesta durante la colonización española, hasta llegar a los movimientos populistas que, para el momento que escribió el autor, dominaban la arena política de varios países latinoamericanos.

La derecha como eje central de este libro no se reduce a un movimiento ideológico o político unitario que persigue una doctrina concreta. Sobre este aspecto, Romero señala que, a diferencia del fascismo, liberalismo o comunismo, la derecha se caracteriza por ser un haz impreciso de ideas que se mezcla con ciertas actitudes básicas, tales como resistir a los problemas de orden y cambio social que naturalmente se manifiestan en las sociedades, entre otras actitudes. Además de la diversidad de posiciones al interior de la derecha, otro punto relevante en el libro es su composición acumulativa en el tiempo. Según el argumento de Romero, la derecha latinoamericana es el resultado de situaciones, tradiciones e intereses de grupos específicos a lo largo de la historia. En este sentido, existen claras fragmentaciones en la constitución de lo que hoy día puede significar la derecha latinoamericana, pero su continuidad con las raíces coloniales subsiste. Esto se debe especialmente a que bajo el dominio español la distribución de la tierra fue desigual; por lo cual, la desigualdad social impulsó la creación de la derecha latinoamericana y es el factor que actualmente la alimenta. Romero sostiene, así, que los grupos de derecha finalmente pugnan por mantener la estructura socioeconómica desigual en la cual está fundada la región por causa de la conquista española; la misma estructura

que hoy está mantenida, a su vez, por las demás derechas que permiten su fortaleza y perpetuación. En última instancia, la derecha latinoamericana está marcada por un tipo de pensamiento político que predomina en la clase política de los países latinoamericanos, manifestada por medio del populismo.

Por otro lado, el libro *Las derechas iberoamericanas: desde el final de la Primera Guerra hasta la Gran Depresión* (2019) coordinado por Bohoslavsky, Jorge y Lida, compila una serie de artículos que analizan los procesos de transformación de las culturas, ideologías y prácticas políticas de las derechas en España, Portugal y América Latina. El argumento transversal presente en los diversos trabajos enfatiza la conducta reaccionaria de los grupos de derechas, quienes transformaron sus prácticas e ideologías políticas en un escenario global y nacional caracterizado por la crisis económica de las democracias liberales, el agotamiento del modelo liberal clásico de los estados europeos y la amenaza revolucionaria tras el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917. Esta primera *ola* reaccionaria de las derechas en Iberoamérica es un antecedente de las formas institucionales y culturales que adoptaron estos grupos para la defensa de sus intereses y será central para comprender el desenlace del conflicto político y social que enfrentan estas sociedades durante las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial.

La virtud de estos trabajos compilados se encuentra en que permiten comprender, a partir de una mirada histórica-política de largo alcance, cómo las derechas

radicales adquirieron rasgos nacionalistas, excluyentes en lo político, antiliberales y anticomunistas en el período entreguerras, las cuales además han definido su identidad política y permanecen vigentes en la actualidad. La capacidad adaptativa de estos grupos a las diferentes amenazas y desafíos se extiende más allá del período histórico que les dio origen. A nuestros objetivos, nos provee de un marco analítico desde el cual es posible analizar las derechas radicales del siglo xx.

A pesar de la vigencia del análisis y argumento central detrás de los diferentes escritos en el libro anterior, es necesario preguntarse si la actual derecha radical tiene elementos en común o rupturistas sobre los observados en el siglo xx. El libro de José Sánchez Rodríguez, *Derecha Radical: auge de una ola reaccionaria mundial* (2019), arroja luz al respecto. El autor se refiere a esta nueva ola como Derecha Radical Populista Xenófoba (DRPX), señalando que dos fenómenos de impacto mundial marcaron un punto de inflexión en el recorrido histórico de esta derecha desde 2002. El primer fenómeno corresponde al Brexit, que, según el autor, provocó el endurecimiento en la entrada de inmigrantes. El segundo fenómeno sería la victoria de Trump, porque con ello la DRPX se instala en el país más poderoso del mundo, a la vez que comienza una serie de políticas que alterará las condiciones nacionales e internacionales.

El autor señala que, a pesar de que la DRPX no es un grupo absolutamente homogéneo, tiene tres elementos constitutivos. El primero es la xenofobia, como

el rechazo de la inmigración, especialmente de las poblaciones islámicas. En Europa esto se combina con el rechazo a otras minorías como los gitanos. En Estados Unidos, en cambio, el rechazo es hacia la inmigración latinoamericana. El segundo componente es el populismo, el cual para el autor se refleja en dos aspectos: discursos y programas llenos de soluciones simplistas a problemas complejos y en su apelación al pueblo, en contraposición a las élites o el grupo de poder. El tercer componente —y reconoce que es un componente disputado— es el constitutivo de la derecha radical. En este sentido, cabe recalcar que la DRPX no cuestiona la modernización económica y social, como anteriores tradiciones de derecha radical, sino que la ve como una prolongación de la propia modernización: la globalización. Adicionalmente, esta nueva derecha, a diferencia de las anteriores, no pretende excluir las clases populares, pero sí continúa el legado de la exclusión de inmigrantes. Respecto a la relación entre el líder y la población, esta derecha también intentaría tener un vínculo directo con el *pueblo*, pero ahora a partir de democracia directa, sin democracia parlamentaria. Así, y en la mayoría de los casos, el punto de partida formal puede situarse en la reacción nacionalista ante una crisis nacional. De esta forma, la *nueva derecha* racionaliza la crisis social de hegemonía como crisis de representación del sistema constitucional parlamentario y no duda en recurrir a labores de agitación política, e incluso a la práctica de la violencia, para perpetuar el vigente esquema de relaciones sociales.

Estos tres libros nos han permitido reflexionar sobre las diferentes olas de partidos de derecha que ha enfrentado la política. Son bastantes los puntos en común que tendría la derecha identificada por Romero, la derecha caracterizada en el libro coordinado por Bohoslavsky, Jorge y Lida, y la nueva ola de derecha descrita por Sánchez Rodríguez. En especial, la exclusión de inmigrantes, crítica al *establishment*, discurso nacionalista y resistencia a cambios naturales de la sociedad en la que se insertan. Aunque también hay cambios relevantes, como el ascenso de un líder de estas características en Estados Unidos –quien incluso ha amenazado con no reconocer el resultado de las próximas elecciones presidenciales en caso de no resultar favorecido–, nuevas estrategias electorales y, en casos europeos, una voluntad de vincularse con la ciudadanía a partir de democracia directa sin injerencia de los parlamentos.

Por lo tanto, si bien hay bastantes elementos constitutivos de esta nueva ola de derechas que representan continuidad respecto de olas anteriores –pero en un contexto diferente como es la globalización– vemos que la derecha actual busca adaptarse a este nuevo escenario global a partir de una ideología reaccionaria al progreso natural de las sociedades, así como del agotamiento de estructuras sociales y políticas liberales de los últimos tiempos. Faltan bastantes temas por reflexionar y analizar, en especial empíricamente, pero sin duda estos tres libros nos permiten tener un panorama general de elementos de continuidad, quiebre y constitutivos de las derechas radicales a lo largo del tiempo.

La derecha latinoamericana contraataca: más allá de los partidos políticos

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.268

Belén Díaz

Investigadora predoctoral en Sociología, Colegio Internacional de Graduados «Temporalidades del Futuro en América Latina», Freie Universität Berlin

Cannon, Barry

The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State

Routledge, 2016

196 págs.

Cuando el libro de Cannon salió a la luz en 2016, la hegemonía de la izquierda menguaba en América Latina, mientras que corrientes contrarias se fortalecían. El autor reconoce, acertadamente, que «la “marea rosa” no se convirtió en un tsunami» (p. 2). Por un lado, una gran parte de la región siguió siendo gobernada por la derecha en el siglo XXI y, por otro, la derecha nunca dejó de intentar disputar el poder en los países liderados por la izquierda. Es por esto por lo que Cannon desarrolla una aproximación innovadora que combina el análisis de los frenos puestos por los gobiernos progresistas al neoliberalismo con la exploración de las estrategias de reacción de las élites de derecha que vieron amenazado su poder. Hoy en día, la producción académica sobre las derechas

ha comenzado a aumentar ante el avance acelerado de estas fuerzas a nivel global y regional. Sin embargo, *The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State* tiene el mérito de haber nutrido dicho panorama de investigación en un momento todavía árido en comparación con la abundante literatura acerca del giro a la izquierda. Este aporte de Barry Cannon mantiene su vigencia y arroja luces para entender la pleamar de derecha que vive el continente años después.

El autor parte de una crítica enfática a cómo las ciencias políticas ortodoxas estudian a la derecha, ya que, desde esta disciplina, las unidades analíticas se buscan en expresiones partidistas y en el ámbito institucional formal concebido como hermetico. Cannon reprueba la falta de visión de este enfoque, pues históricamente las estrategias de las élites latinoamericanas no se han concentrado en construir partidos sólidos, sino en dominar los campos de poder social de distinto cuño: político, económico, ideológico, militar y transnacional. Este pertinente desplazamiento analítico –sustentado en la teoría de las fuentes de poder social de Michael Mann y en el estudio del neoliberalismo de Eduardo Silva– sitúa al autor en el seno de la sociología política, que se empeña en problematizar y ampliar el entendimiento restringido de lo político. En consecuencia, el autor propone entender a la derecha como «diseminada a lo largo de la sociedad civil y política y...[simultáneamente] localizada en múltiples lugares económicos, sociales y políticos en el nivel nacional, regional [e internacional]» (p. 117).

De esta forma, Cannon retoma una pregunta sociológica clásica sobre la naturaleza del poder y la cristaliza en el estudio de una problemática central para entender los conflictos y las transformaciones políticas en la región: ¿Cuáles son los principales recursos de poder?, ¿quiénes, cuándo, cómo y por qué los detentan? Para indagar en la diversificación de dichos recursos de dominación, el autor advierte que las estrategias políticas no deben ser comprendidas meramente como un menú de herramientas subsidiarias de la lucha por el control del Estado, sino como mecanismos que mantienen las condiciones de reproducción de la hegemonía de las élites en varias esferas. En la fase actual del capitalismo, el objetivo de dichas estrategias sería la consolidación y expansión del neoliberalismo, el cual funge como proyecto económico, social y político consistente de las élites latinoamericanas.

Uno de los objetivos del libro es articular la literatura sobre la derecha con la literatura sobre el poder de las élites. Para tales efectos, Cannon retoma el enfoque de Edward Gibson que concibe a las élites como expresión de la derecha y como su electorado nuclear. Este postulado es ejemplificado en el tercer capítulo con base en entrevistas realizadas a actores de partidos y la sociedad civil de derecha en Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, quienes, efectivamente, promulgan discursos neoliberales alrededor del mantra «tanto mercado como sea posible, tan poco Estado como sea necesario» (p. 51). Aquí hubiera sido enriquecedor contar con más detalles acerca del

diseño metodológico de la investigación empírica. A nivel de la práctica política, los casos de Chile, Colombia, México y Perú, expuestos en el cuarto capítulo, ponen de manifiesto el liderazgo de las élites en los procesos acelerados de neoliberalización que devinieron en lo que Cannon denomina «complejos Estado/sociedad de derecha». Si bien es cierto que las élites han dominado las fuentes de poder social, una definición de la derecha que predetermina cuál es su base social no permite aprehender la complejidad de las alianzas multiclasisistas y las contradicciones de las corrientes político-ideológicas en cuanto a discurso y materialidad se refiere. Ciñéndonos al marco teórico ofrecido, ¿cómo conceptualizar, por ejemplo, a los sectores populares que votan por la derecha?, ¿dónde ubicar, analíticamente, a las élites de izquierda que han gestionado el Estado?

En busca de una aproximación teórica a la derecha más minuciosa, el interés primordial de Cannon consiste en no perder de vista la cuestión del poder. Aunque este reconocimiento podría parecer un punto de partida consensuado, el autor señala con preocupación que, en el debate acerca de la dicotomía izquierda-derecha, existen enfoques acrílicos que promueven la tesis de una polarización ideológica entre partes formalmente iguales, en detrimento del antagonismo asimétrico en juego. En este sentido, la conceptualización clásica de Norberto Bobbio –que funge como referencia en dicha obra– resulta provechosa, ya que consiste en caracterizar a la diada izquierda-derecha de forma relacional en torno

al entendimiento contrapuesto de las desigualdades, mismo que se traduce en posturas y políticas con efectos estructurales. En correspondencia con este carácter dialéctico de la lucha política, Cannon sitúa en el centro de su análisis un par conceptual bastante útil para quienes estudiamos a las derechas: las nociones de amenaza y reacción.

Ante la vertiginosa recomposición de la derecha en América Latina, estas categorías nos permiten dilucidar en qué medida las estrategias políticas de dichos actores se configuraron como reacción a las transformaciones puestas en marcha por los gobiernos progresistas, las cuales contrarrestaron parcialmente el neoliberalismo y, por consiguiente, el poder de las élites. En el quinto capítulo, Cannon se aboca a explorar dichos retrocesos del neoliberalismo en las cinco esferas de poder que fungen de hilo conductor a lo largo del libro. Para ello, el autor desarrolla una metodología creativa que asigna un indicador a cada área, el cual es evaluado por medio de un *proxy* procedente de instituciones o *think tanks* de derecha (tabla 5.1, p. 94). Por ejemplo, en el campo económico, mayor control estatal de las actividades del mercado y/o la nacionalización de sectores estratégicos indican un desafío al modelo neoliberal y es medido a través del estatus que el país ocupe en el Índice de la Libertad Económica de la Heritage Foundation. Si el objetivo es determinar hasta qué punto la élite de derecha se sintió amenazada, el uso de categorías e índices endógenos se perfila como un experimento interesante y fructífero para incursionar en nue-

vas metodologías que tomen en cuenta consideraciones émicas. De esta forma, la dialéctica característica de la disputa entre derecha e izquierda puede ser operacionalizada y abrir puertas novedosas para teorizar en clave relacional sobre las percepciones de riesgo inducidas por los gobiernos de la «marea rosa». Cannon destaca que los niveles de amenaza advertidos dependen de la consecución y alcance del proyecto posneoliberal: estos habrían sido más altos en Ecuador, Bolivia y Venezuela que en Brasil y Argentina (tabla 5.4, p. 111).

Viéndose amenazada, la derecha recurre a estrategias diversificadas y entrelazadas para revertir el riesgo o remover sus fuentes. En el sexto capítulo, Cannon nos guía a través de ejemplos categorizados según la división tripartita de estrategias electorales, movilizadoras y extraconstitucionales. El segundo tipo engloba actividades diversas que van desde campañas mediáticas hasta desestabilización económica y diplomática. El caso venezolano resulta el más notorio, si observamos los recurrentes paros de producción y las protestas apoyadas por los medios de comunicación y por instituciones estadounidenses desde comienzos de los años 2000. Por último, cabe resaltar el hecho de que el autor irlandés haya prestado la debida atención a las estrategias extraconstitucionales que intentaron (Venezuela, 2002; Ecuador, 2010) o consiguieron llevar a cabo golpes de Estado (Honduras, 2009; Paraguay, 2012), a diferencia de otros recuentos académicos que relegan dichos acontecimientos a una nota al pie o relativizan

la posibilidad de la opción militar en el marco del regreso a la democracia. El golpe de Estado a Morales en Bolivia en 2019 confirma la incompatibilidad entre las credenciales democráticas de las derechas y su accionar autoritario y violento en aras de restituir su hegemonía neoliberal. Cannon avizoraba en 2016 que un ciclo de repliegue de la izquierda y ascenso de la derecha estaba empezando y no se equivocó. El *impeachment* de Rousseff en Brasil en 2016, así como los triunfos de Moreno en Ecuador en 2017, Duque en Colombia en 2018, Bolsonaro en Brasil en el mismo año y Lacalle Pou en Uruguay en 2019 nos muestran que la derecha se encuentra en una fase de marea alta. Contribuciones analíticas como *The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State* aportan insumos relevantes para revisar y seguir expandiendo el debate sobre el contragolpe de las derechas en la región y el mundo.

América Latina: votos y democracia

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.272

Salvador Martí i Puig
*Catedrático de Ciencia Política
de la Universidad de Girona
e investigador asociado sénior,
CIDOB*

Alcántara Sáez, Manuel (dir.)
América Latina vota, 2017-2019
Tecnos, 2020
590 págs.

Las democracias latinoamericanas están fatigadas y, en algunos países, exhaustas. Esta es la conclusión del libro titulado *América Latina vota, 2017-2019*, dirigido por Manuel Alcántara y que es el séptimo y último de una serie que analiza de forma rigurosa y pormenorizada el devenir electoral de la región. En el caso de la obra reseñada se trata del análisis del trienio 2017-2019 en el que ha habido elecciones en 15 países latinoamericanos.

El libro empieza con una introducción y se cierra con unas conclusiones escritas por el director de la obra, y para cada país hay un capítulo que ha sido escrito por 23 académicos originarios –en su mayoría– de los países en cuestión, si bien todos ellos comparten el hecho de estar vinculados de una forma u otra con el Instituto de América Latina de la Universidad de Salamanca del que Manuel Alcántara fue director.

La obra empieza con un capítulo escrito por Mariana Sendra que trata las elecciones de 2019 en Argentina y en el que se analiza la competición entre la coalición peronista y antiperonista en un clima de polarización social y política. A continuación, en un capítulo sobre las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 en Brasil, Juan Vicente Bachiller y Soraia M. Vieira analizan el ascenso de la derecha radical y la victoria de Bolsonaro. Le sigue un texto de Nicolás Miranda Olivares y Miguel A. López Varas sobre los comicios chilenos de 2017 en los que se estrenó un sistema electoral para la elección de los diputados y en los que Piñera regresó a la Jefatura del Estado. El capítulo cuarto, escrito por Adriana Ramírez-Baracaldo, versa sobre las polarizadas y competidas elecciones de 2018 en Colombia. El siguiente, elaborado por Hugo Picado León, se centra en las elecciones de Costa Rica, también de 2018, en las que se pasó de la apatía a la polarización política al concurrir, por primera vez en la historia, una candidatura reaccionaria apoyada por evangélicos. El capítulo sexto, sobre Ecuador, escrito por David Molina Romo, analiza cómo en las elecciones presidenciales y legislativas de 2017 acontece el declive del socialismo del siglo XXI en el país andino y la quiebra del «correísmo». Le sigue el estudio del caso salvadoreño, donde los investigadores Luis Mario Rodríguez y Luisa María Solano analizan dos contiendas, la legislativa de 2018 y la presidencial de 2019 en la que un *outsider* rompe la dinámica bipolar presente durante más de dos décadas. Rogelio Núñez y

Eduardo Fernández analizan las elecciones de 2019 en Guatemala caracterizadas por el desencanto y la apatía. El noveno capítulo versa sobre las elecciones legislativas y presidenciales «discutidas» que se celebraron en Honduras en 2017. Le sigue el décimo capítulo escrito por Aldo Adrián Martínez-Hernández sobre las elecciones críticas mexicanas de 2018, donde se erige un claro vencedor tanto en la elección a la Presidencia como en las cámaras legislativas y en la mayoría de los estados, hecho que puede, según el autor, conllevar a un cambio de ciclo en la política del país. A continuación, aparece el texto de Harry Brown en el que se estudian las elecciones de Panamá de 2019, y le sigue el capítulo décimo segundo, escrito por Sarah Patricia Cerna Villagra y Juan Mario Solís Degadillo sobre las elecciones paraguayas de 2018 en las que se profundiza la deriva conservadora del país. Los tres últimos capítulos son los de Uruguay, Venezuela y Bolivia. El que analiza las elecciones uruguayas de 2019, escrito por Lucía Selios y Asbel Bohigues, da cuenta de la derrota del candidato del Frente Amplio y la vuelta al poder de los dos partidos tradicionales que concurren coaligados. El capítulo sobre Venezuela, escrito por Juan Manuel Trak, expone la consolidación autoritaria de Maduro a través de las elecciones no competitivas que se celebraron en 2018. Finalmente sigue el capítulo escrito por Franz Flores Castro sobre las contestadas elecciones de 2019 en Bolivia –que aparece al final del libro como un anexo– que suponen el fin de la «era Morales».

Para terminar, después de los casos analizados, aparece un capítulo de carác-

ter sintético, comparado y analítico del trienio electoral en la región escrito por Manuel Alcántara. En este texto de 20 páginas se exponen los elementos en base a los cuales el autor afirma la presencia de una fatiga democrática de la región y el inicio de un nuevo ciclo político, no precisamente luminoso. En este sentido, el director de la obra señala cómo la crisis económica y social está generando un escenario donde el personalismo caudillista y el autoritarismo cotiza al alza. Respecto de la crisis económica cabe señalar que, si bien el siglo *xxi* recibió a América Latina con una larga década de crecimiento gracias al aumento de la demanda y de los precios de los metales y de los combustibles fósiles, ya en 2017 este ciclo estaba finiquitado. Este dato es relevante porque alrededor del 54% de las exportaciones regionales entre el año 2000 hasta 2013 estuvieron vinculadas a los recursos naturales y gracias a ellos se pudo desplegar ambiciosos programas de políticas sociales que en el trienio 2017-2019 desaparecieron.

Respecto de la crisis política, Alcántara señala el inicio de un nuevo ciclo caracterizado, por un lado, por el desgaste de los mecanismos institucionales debido a la preeminencia del Ejecutivo respecto de los poderes Legislativo y Judicial, el deterioro de los partidos políticos frente a las plataformas personalistas y la penetración de la corrupción en el aparato administrativo. Y, por otro lado, por la falta de expectativas, la desconfianza institucional de la población, la polarización ideológica y el progresivo deterioro del capital social fruto de una cultura política individualista y neoliberal.

Como no podía ser de otra forma, fruto de esta doble crisis, los sistemas de partidos han devenido progresivamente más frágiles (debido al incremento de la volatilidad electoral y su consiguiente fragmentación partidaria) y, con ello, han ido apareciendo otros actores que se otorgan autoridad y (a veces) una pretendida legitimidad, como es el caso de las Fuerzas Armadas, corporaciones o iglesias. En cuanto a las Fuerzas Armadas, es preocupante su nuevo rol político en Brasil, Nicaragua, Ecuador, Perú o Bolivia.

A resultas de este paisaje social, económico y político, Alcántara señala la fatiga democrática, aunque también afirma que –en la mayoría de los países– el mecanismo electoral va a continuar y esa misma continuidad es lo que da valor, legitimidad y gravedad a las democracias realmente existentes. En este sentido no se trata de un libro apocalíptico ni distópico, pues Alcántara afirma que las urnas están asentadas y que en la mayoría de los países –a pesar de las turbulencias– se continuarán celebrando procesos electorales libres, justos, iguales, competitivos y periódicos. Eso sí, algunos casos, como Bolivia, Honduras, Nicaragua –que no se aborda en esta obra–, Paraguay o Venezuela, la deriva institucional hacia regímenes híbridos o directamente autoritarios es clara.

A la vez, en este capítulo se señala de forma pormenorizada cómo ha quedado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en todos los países analizados, señalando cuáles son los gobiernos divididos y los «fuertes» en la región; el tipo de liderazgos presentes y su caracteriza-

ción (donde aparecen muchos antiguos empresarios, algunos *outsiders* y ninguna mujer); el nivel de polarización, el ajuste de las victorias y las elecciones que se han visto contestadas, y, finalmente, también se señala la adscripción ideológica de los nuevos gobernantes que, con la excepción de Argentina y México, todos son de derecha o centroderecha. Como resultado de ello, es posible afirmar que en el trienio 2017-2019 se finiquita lo que quedaba de la «marea rosa» que tantas expectativas generó a lo largo de la primera década del siglo *xxi* y también se da por desaparecido el rol contrahegemónico y la voluntad multipolar de la región que pretendieron los países del socialismo del siglo *xxi*, y las iniciativas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

De todo lo expuesto solo resta señalar dos cuestiones referentes al libro *América Latina Vota*. La primera es celebrar la aparición de un libro de esta naturaleza, que junto con los anteriores que el profesor Alcántara ha editado y dirigido sobre la misma temática, dan cuenta de una verdadera enciclopedia de los procesos electorales en América Latina. La segunda es exponer la necesidad de plantear una nueva investigación sobre los efectos de la pandemia de la COVID-19 tanto en los procesos electorales (de hecho, se pospusieron dos convocatorias, las de República Dominicana y Bolivia), como en el desempeño de los gobiernos constituidos en el trienio que analiza el volumen que acabamos de reseñar.

Acotando el fascismo como fenómeno histórico

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.275

Alfredo Crespo Alcázar
Profesor, Universidad Antonio de Nebrija y Universidad Internacional de Valencia

Gentile, Emilio
Quién es fascista

Alianza Editorial, 2019
222 págs.

Finchelstein, Federico
Del fascismo al populismo en la historia

Taurus, 2019
352 págs.

Reflexionar sobre el fascismo implica hacerlo sobre uno de los conceptos que mayor presencia mediática y política ha tenido en la última centuria, si bien aquella no siempre ha sido regular. En efecto, al apogeo y consolidación que adquirió durante el período de entreguerras, le siguieron otras etapas, particularmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en las que su protagonismo resultó marginal tanto en resultados electorales como en lo que atañe a capacidad de movilización.

En la actualidad, cuando menos a nivel de la opinión pública y del punto de vista expresado hacia ciertas formaciones y líderes políticos, parece que el fascismo ha regresado para quedarse una larga temporada. No obstante, en lo relativo a

esta última afirmación conviene ser cautos y formularse la siguiente pregunta: ¿nos encontramos ante la misma ideología fascista que se difundió y consolidó entre 1919 y 1945? Dicho con otras palabras: ¿se emplea el concepto fascismo con precisión? Las dos obras que manejamos ofrecen respuestas rigurosas científicamente hablando, si bien no siempre idénticas, lo que en última instancia enriquece el debate.

El doctor Emilio Gentile, citando las palabras de Benedetto Croce en 1944, nos propone una respuesta inicial al anterior interrogante con la que anticipa su punto de vista sobre esta cuestión: «en las polémicas diarias la calificación de fascista se lanza y se vuelve a lanzar por parte de un adversario contra otro» (p. 45). Para Gentile hemos asistido a una trivialización del fascismo que en última instancia ha desnaturalizado su esencia y su significado: «desde el tiempo en que Croce escribía, el uso de la calificación de “fascista”, en el lenguaje tanto político como académico, se ha dilatado continuamente, según el flujo de la ola léxica, para incluir a personas, a movimientos y regímenes a veces semejantes y afines entre sí, otras veces diferentes e incluso opuestos» (p. 46).

En consecuencia, calificar al adversario de fascista con el fin de estigmatizarlo en ningún caso resulta un hecho novedoso. En este sentido, ya se observó una «metodología» similar durante el apogeo del fascismo en la Italia mussoliniana o posteriormente en los primeros años de la segunda posguerra mundial, cuando los comunistas italianos tildaron de fascistas a los representantes de la democracia cristiana. Gentile analiza este aspecto con la pre-

cisión de un cirujano, ofreciendo nombres y apellidos. En efecto, durante la década de los años veinte y parte de los años treinta del pasado siglo, los comunistas italianos (por ejemplo, Gramsci y Togliatti) utilizaron el adjetivo fascista para referirse a todos sus adversarios políticos, en particular a los socialistas: «para los comunistas cualquier antifascista que no luchaba para derribar también, además de al régimen fascista, a la burguesía y al capitalismo, era objetivamente semifascista o socialfascista» (p. 95), sentencia el aludido autor.

Hoy en día, el uso tan abusivo, como erróneo, del binomio fascismo-fascista lleva a aplicarlo a políticos muy diferentes entre sí (Tump, Salvini, Bolsonaro o Erdogan). Sobre esta cuestión, Federico Finchelstein afirma que: «hoy los expertos y los políticos usan el fascismo para describir a la ligera no solo el populismo sino también los regímenes autoritarios, el terrorismo internacional o las posturas represivas estatales, o incluso protestas callejeras de la oposición» (p. 34). Emilio Gentile se expresa en términos parecidos: «en el origen de los actuales neonacionalistas populistas, que poseen una legitimación democrática, lo que hay es más bien un temor a la modernidad, la adopción de una política de proteccionismo defensivo, para cerrar puertas y ventanas, para salvaguardar inciertas identidades nacionales, amenazadas por la globalización y por las “invasiones de inmigrantes”», (págs. 139-140). Por tanto, en este heterogéneo grupo de dirigentes pueden concurrir algunas o varias características del fascismo, pero ello no les convierte necesariamente en fascistas.

En este punto es donde cobra protagonismo la tesis defendida por Federico Finchelstein: fascismo y populismo comparten ciertas semejanzas, pero en ningún caso se pueden considerar sinónimos. Las diferencias las percibe con nitidez en dos aspectos principales. Por un lado, en la visión de la democracia: el fascismo persigue eliminarla, mientras que el populismo la instrumentaliza y la distorsiona. Esto último genera la irrupción de una democracia autoritaria en la que la participación del pueblo en la vida política se difumina de forma acelerada. Por otro lado, en la diferente concepción de la violencia: para el fascismo significaba un fin, mientras que el populismo la descarta como medio tanto para acceder al poder como para perpetuarse en él, si bien podría recurrir a ella puntualmente.

Por su parte, Emilio Gentile, sin entrar a definir el populismo, efectúa una referencia implícita al mismo a través del concepto de «democracia recitativa». Bajo este sintagma explica que se hacen llamamientos periódicos cada vez más frecuentes para que el pueblo vote, cuando en realidad aquel es un mero comparsa en un escenario político controlado por castas, oligarquías y camarillas.

Con todo ello, ambas obras coinciden en otorgar al fascismo italiano la escarapela de referente o prototipo. Sin embargo, en esta cuestión también vemos ciertas diferencias, en tanto en cuanto Federico Finchelstein considera que el fascismo fue un movimiento global, es decir, no limitado geográficamente solo a Europa o a Italia. El nexo entre los fascismos locales-nacionales lo hallamos en que todos jus-

tificaron el uso de la violencia antes y, sobre todo, tras acceder al poder. Además, Finchelstein reconoce que en cada uno de los países en los que arraigó el fascismo, el contexto nacional resultó fundamental a la hora de conformar sus características: «como en la mayoría de los lugares, muchos hindúes en India reconocían el fascismo como un fenómeno a la vez global y local, mientras que musulmanes como el intelectual fascista Inayatullah Kahn al Mashriqi no solo sostenían que habían inspirado el propio programa de Hitler sino que consideraban que su propio “fascismo musulmán” era la mejor versión del fascismo. Si al Mashriqi sostenía que el fascismo debía seguir la “luminosa guía del Santo Corán”, los fascistas argentinos sostenían que su versión clericofascista era superior a las versiones europeas, más seculares» (p. 81).

Esta globalidad del fascismo de la que nos habla el profesor Finchelstein resulta compatible con la consideración de Benito Mussolini como el «inventor» de aquel, rodeándolo de una serie de atributos fácilmente identificables (antimarxismo y antiliberalismo, primacía de la nación, importancia de la estética, recurso a lo binario...), en los que profundiza en mayor medida Emilio Gentile. Este último considera al fascismo como un régimen totalitario en tanto en cuanto persigue, entre otras finalidades, la creación del hombre nuevo (subordinado en todo momento al Estado) y el establecimiento de una nueva civilización a nivel internacional (para lo cual el expansionismo se convirtió en la herramienta privilegiada). Finchelstein también subraya el rol

del expansionismo, en tanto en cuanto se entendía como el indicador por excelencia de la vitalidad de las naciones.

Finchelstein valora positivamente los rasgos que ofrece Gentile del fascismo, aunque, como hemos indicado con anterioridad, sostiene que nos hallamos ante una ideología transnacional. Para Emilio Gentile el nacimiento del fascismo histórico se produjo en 1921, momento en el cual Mussolini abandonó su retórica antiestatista previa. En cuanto a sus consecuencias, aunque por todos conocidas, Gentile las enumera y desarrolla, pudiendo simplificarlas en dos. Por un lado, destrucción del sistema liberal italiano y establecimiento de un régimen totalitario que se convirtió en el modelo que trataron de imitar los diversos sistemas antidemocráticos que surgieron en Europa durante esa época. Por otro lado, alineamiento con Hitler, lo que provocó que el antisemitismo apareciese en Italia. Como punto de unión, subraya que a mitad de los años treinta el fascismo había sido aceptado como la política oficial del país transalpino, puntualizando que, posteriormente, muchos de sus principales jerarcas, de manera ciertamente desvergonzada, afirmaron que fueron fascistas poco menos que a la fuerza.

No obstante, dejando de lado el cinismo que tal comportamiento encierra, sí que debe ponerse en relación con un argumento al que Finchelstein concede amplio espacio en su obra. El descrédito que rodeó al fascismo a partir de 1945, en particular por su empleo sistemático de la violencia en los años precedentes, hizo que el populismo —que emergió en países como

Argentina de la mano de Juan Domingo Perón— prescindiera de aquella para acceder al poder. Este *modus operandi* populista se mantuvo inalterable durante las décadas siguientes.

En definitiva, dos libros oportunos y mayúsculos en los que sus autores son capaces de trazar relaciones entre pasado y presente cuando abordan una ideología y un concepto tan polisémico y complejo como es el fascismo. En su argumentación, Gentile y Finchelstein se desmarcan de tópicos y lugares comunes, centrándose únicamente en diseccionar la historia de la que extraen valiosas lecciones alejadas del dogmatismo.

Listado de revisores 2020

Los artículos publicados en la Revista CIDOB d'Afers Internacionals pasan por un riguroso proceso de evaluación externa por pares (peer review) de anonimato doble. Durante el año 2020 los revisores fueron los siguientes (por orden alfabético):

1. **Arroyo Vargas, Roxana**
Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN (Ecuador)
2. **Badell, Diego**
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
3. **Barranco, Dora**
Universidad de Buenos Aires
4. **Barrientos, Jaime**
Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado (Chile)
5. **Bauer, Gretchen**
University of Delaware (EEUU)
6. **Benitez-Manaut, Raúl**
Universidad Nacional Autónoma de México
7. **Brown, John**
Maynooth University (Irlanda)
8. **Campos, Alicia**
Universidad Autónoma de Madrid
9. **Cascante, Katty**
Universidad Complutense de Madrid
10. **Chaves, Susana**
PROMSEX, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
11. **Claudin, Carmen**
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Barcelona
12. **Cruz, Fátima**
Universidad de Valladolid
13. **Cunha, Magali**
Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación (INTERCOM)
14. **Del Biondo, Karen**
Ghent University/European Commission
15. **Del Campo, Esther**
Universidad Complutense de Madrid

- 16. Díaz Gorfinkiel, Magdalena**
Universidad Carlos III de Madrid
- 17. Durán Muñoz, Rafael**
Universidad de Málaga
- 18. Espinosa Bejerano, Santiago**
Centro de Investigaciones de Política Internacional. CIPI (La Habana, Cuba)
- 19. Feliu, Laura**
Universitat Autònoma de Barcelona
- 20. Gago, Egoitz**
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia)
- 21. García-Guadilla, Maria Pilar**
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
- 22. Hincapié, Sandra**
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT (Mexico)
- 23. Hume, Mo**
Universidad de Glasgow, Escocia
- 24. Iñiguez de Heredia, Marta**
Universidad Autónoma de Madrid
- 25. Katz-Lavigne, Sarah**
Carleton University and the University of Groningen (Nederland)
- 26. Kienzle, Benjamin**
King's College London (Reino Unido)
- 27. Kruiper, Thomas**
Universidad Europea de Valencia
- 28. Lirola, Isabel**
Universidad de Santiago de Compostela
- 29. Lopez, George A.**
Kroc Institute for International Peace Studies, Keough School, University of Notre Dame (EEUU)
- 30. López Sánchez, Erika**
Universidad de Guanajuato (Mexico)
- 31. Martín Martínez, Magdalena M^a**
Universidad de Málaga
- 32. Martínez Rosón, Mar**
Universidad de Salamanca
- 33. Melendez, Carlos**
Universidad Diego Portales – Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO-UDP)
- 34. Morondo, Dolores**
Universidad de Deusto, Instituto de Derechos Humanos (Bilbao)

- 35. Murias, Celia**
Grupo de estudios Africanos Universidad Autónoma de Madrid
- 36. Oconnell, Christopher**
Dublin City University, Irlanda
- 37. Onderco, Michal**
Erasmus University Rotterdam
- 38. Palestini, Stefano**
Universidad Católica de Chile / Instituto de Ciencia Política
- 39. Pannain, Rafaela**
Brazilian Center for Analysis and Planning
- 40. Park, June**
National Research Foundation of Korea
- 41. Peña, Alejandra**
Universidad de los Andes (ULA, Venezuela) / Universidad Autónoma de Barcelona
- 42. Perea Ozerin, Iratxe**
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
- 43. Pérez, Karlos**
Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional.
Universidad del País Vasco
- 44. Pospieszna, Paulina**
Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
- 45. R. Weidner, Jason**
Universidad de Monterrey (Mexico)
- 46. Ramírez, Hernán**
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil)
- 47. Reis, Guilherme**
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
- 48. Rodríguez, Cecilia**
Universidad de Salamanca
- 49. Rodríguez Modroño, Paula**
Universidad Pablo de Olavide
- 50. Rullán Rosanis, Samantha Rebeca**
Universidad Veracruzana
- 51. Sánchez, Francisco**
Universidad de Salamanca
- 52. Sánchez Ancochea, Diego**
University of Oxford
- 53. Santos, Antonia**
Universidad Arturo Prat. Chile

- 54. Sepúlveda, Bárbara**
Universidad Alberto Hurtado (Chile)
- 55. Serna, Miguel**
Universidad de la República (Uruguay)
- 56. Serra, Francesc**
Universitat Autònoma de Barcelona
- 57. Sianés, Antonio**
Universidad Loyola (Sevilla)
- 58. Soler, Lorena**
CONICET (Argentina)
- 59. Souroujon, Gaston**
CONICET (Argentina)
- 60. Spalding, Rose**
DePaul University (Chicago)
- 61. Surasky, Javier**
Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina
- 62. Szép, Viktor**
Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences (Budapest)
- 63. Tassara, Carlo**
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
- 64. Tokichen Tricot Salomón, Victor**
Worldlearning
- 65. Torres, Amalia**
Organizacion Internacional para las Migraciones(Ginebra)
- 66. Triviño, Juan Carlos**
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
- 67. Vadell, Javier**
Pontifícia Universidad Católica de Minas Gerais (Brasil)
- 68. Valente, Leonardo**
Universidade Federal do Rio de Janeiro
- 69. Vicente Torrado, Trinidad Lourdes**
Universidad de Deusto (Bilbao)
- 70. Welp, Yanina**
Center for Democracy Studies, Universidad de Zurich
- 71. Winter, Franka**
Independent
- 72. Zirion, Iker**
Universidad del País Vasco

REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

CONTENIDO

Con un enfoque académico, el texto debe tratar cuestiones relativas a la realidad internacional –en los ámbitos político, económico, social y/o cultural– destacando a la vez, y a partir de datos actualizados, los principales retos, tendencias, perspectivas, etc., del tema abordado, y combinando información y análisis.

El trabajo enviado tiene que ser un original inédito y debe significar una aportación real al conocimiento científico del área de estudio.

Los textos aceptados pasan a tener el copyright de CIDOB y no pueden ser reproducidos sin su autorización. Se editan en castellano. Una vez sale la copia impresa, los artículos se publican en la versión electrónica de acceso abierto de la revista y bajo la licencia de Creative Commons.

EVALUACIÓN - PEER REVIEW

Después de una primera revisión por parte del Consejo editor, los artículos pasan por un proceso de evaluación externa por pares (*peer review*) de anonimato doble.

Una vez finalizado el proceso de evaluación, el dictamen puede ser de cuatro tipos: negativo (no se puede volver a presentar el artículo); positivo (se publica); condicionado con pequeños cambios; condicionado con cambios importantes (la nueva versión deberá volver a pasar por revisión).

Mientras el manuscrito esté en proceso de evaluación, el autor no lo presentará a otras editoriales y/o revistas.

Se intentará notificar una respuesta antes de **5 o 6 semanas**.

Los autores pueden sugerir un máximo de tres revisores (nombre y apellidos, afiliación institucional, datos de contacto). Deben evitarse propuestas que puedan incurrir en conflictos de intereses. Se desaconseja, pues, proponer a revisores que sean o hayan sido supervisores académicos o laborales del autor, así como a personas a quienes el autor haya supervisado académica o laboralmente. De la misma forma, se desaconseja, en la medida en que el campo de estudio lo permita, proponer a revisores que trabajen en las mismas instituciones académicas que el autor.

TÍTULO

Debe ser una indicación concisa del contenido. Puede ir seguido de un subtítulo que sólo contendrá información complementaria: **máximo 10-12 palabras (90 caracteres con espacios)**, ambos incluidos.

Entregar en **castellano e inglés**.

EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN

8.000 palabras, incluidas notas y referencias bibliográficas ($\pm 10\%$).

El autor/a facilitará un resumen en castellano e inglés del contenido del artículo de máximo 120 palabras en un solo párrafo, así como **4-6 palabras clave**. El cuerpo del manuscrito debe contener una introducción que sitúe el contexto histórico y el marco analítico, un espacio principal en el que se desarrollará y analizará el tema abordado (se recomienda subdividirlo en bloques temáticos separados por un intertítulo), así como unas conclusiones que recojan las ideas principales y el resultado del estudio.

Junto con el trabajo, el autor/a hará llegar un breve curriculum vitae con sus datos básicos: teléfono, dirección postal, filiación institucional o lugar de trabajo, así como la dirección pública de correo electrónico.

Se aceptarán **cuadros y gráficos a una tinta**. Se ruega **limitar su número**. No se admite su inserción en **formato de imagen**. Entregar en **formato Excel**.

Los artículos presentados para su evaluación serán aceptados en castellano, inglés, francés y portugués.

Enviar el texto por e-mail en word o RTF a: publicaciones@cidob.org

CRITERIOS DE EDICIÓN

Antes de ir a imprenta, las pruebas del texto editado serán enviadas en formato electrónico a los autores (y en su defecto, al editor) para su revisión y, en su caso, corrección de posibles errores. Estas pruebas deberán ser devueltas en un plazo no superior a una semana a partir de la fecha de envío. No se permitirán modificaciones o alteraciones sustanciales del contenido del texto editado.

El Consejo Editor se reserva el derecho de modificar el formato de los acrónimos, siglas, referencias bibliográficas, notas, cargos oficiales, etc., en el interés de la coherencia global que requiere una publicación periódica. Los autores deben seguir las pautas generales expuestas a continuación:

1. Acrónimos / siglas

Siempre que se cite por primera vez un acrónimo o una sigla, incluir, entre paréntesis, su significado completo.

2. Notas

No confundir nota a pie de página con referencia bibliográfica. Se utilizarán excepcionalmente. La nota sirve para clarificar o complementar aspectos del contenido del texto. Si la nota necesita *ser referenciada*, se añade entre paréntesis el apellido del autor citado, el año y la página (p.ej., Innerarity, 2009: 26). Presentar las notas agrupadas al final del texto o a pie de página. Se ruega limitar este recurso a un máximo de 25-30 notas.

3. Referencias bibliográficas

Aceptaremos y aplicaremos la norma ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94 que establecen los criterios a seguir para la elaboración de referencias bibliográficas.

Presentarlas ordenadas alfabéticamente y agrupadas al final del texto. Deben tener su correspondencia en el texto, donde se incorporará la referencia entre paréntesis, indicando únicamente el apellido del autor citado, el año y la página: (Barbé, 2006: 32) o (Krastev *et al.*, 2010: 108).

a) Para libros

Krastev, Iván; Leonard, Mark; Wilson, Andrew (eds.) *¿Qué piensa Rusia?* Barcelona: CIDOB, 2010, p. 108.

b) Capítulos de libros

Polyakov, Leónid. "Un autorretrato ideológico del régimen ruso", en: Krastev, Iván; Leonard, Mark; Wilson, Andrew (eds.) *¿Qué piensa Rusia?* Barcelona: CIDOB, 2010, p. 37-42.

c) Artículos de publicación en serie (revistas, periódicos, colecciones)

Kennan, George F. "The Sources of Soviet Conduct". *Foreign Affairs*, vol. 25, n.º 4 (July 1947), p. 566-82.

d) Para publicaciones en serie completas

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n.º 88 (primavera 1983)-. Barcelona: Fundació CIDOB, 2009.

e) Publicación electrónica

Alvarado, David. "Mohamed VI, año X: Mito y realidad de la transición marroquí". *Notes Internacionals CIDOB*, n.º 7 (octubre 2009), p. 6 (en línea) [Fecha de consulta 12.10.2010]
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob

f) Usar "et al." para citar un trabajo firmado por más de dos autores.

Usar las letras (a, b, c, etc.) para distinguir citas de diferentes trabajos de un mismo autor en un mismo año (Barbé, 2001a).

Una vez haya salido la copia impresa, todos los artículos se editarán en la versión electrónica de la revista

CIDOB

BARCELONA
CENTRE FOR
INTERNATIONAL
AFFAIRS

REVISTA
CIDOB
D'AFERS
INTERNACIONALS

126 DICIEMBRE 2020

Nueva época

América Latina ha dado un giro a la derecha. Con la elección de Mauricio Macri como presidente de Argentina en 2015 y, sobre todo, de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, se inició un ciclo electoral en el que América Latina parecía haber dado la espalda a la «marea rosa» liderada por la izquierda que dominó la región desde el comienzo del milenio. El número 126 de Revista CIDOB d'Afers Internacionals busca analizar este fenómeno desde un enfoque integral del poder —que abarca las dimensiones ideológica, económica, militar y política—, así como sus influencias transnacionales, a partir de la siguiente pregunta clave: ¿Qué es nuevo y qué no en la actual generación de actores de la derecha en la región? Los artículos presentados proporcionan una imagen amplia de una derecha regional en transición, en la que muchos de los antiguos centros de poder siguen siendo prominentes (el ejército, por ejemplo, o la religión) pero con roles e identidades transformadas; y donde nuevos actores y medios de comunicación están redefiniendo la derecha latinoamericana del siglo XXI.

